



CeDInC

pensamiento
crítico

pensamiento crítico

Pensamiento Crítico responde a la necesidad de información que sobre el desarrollo del pensamiento político y social del tiempo presente tiene hoy la Cuba revolucionaria. De aquí que los artículos publicados no corresponden necesariamente a la opinión de la revista, que se reserva el derecho de expresarla por medio de notas aclaratorias o artículos cuando lo estime necesario.

Director

Fernando Martínez

Consejo de Dirección

Aurelio Alonso

José Bell Lara

Jesús Díaz

Thalía Fung

Diseño y emplane

Balaguer

suscripción anual \$ 4 80

40 centavos

Redacción / Calle J No. 556, Vedado, Habana, Cuba. Telf. 32-2343

● Precio del ejemplar / 0.40 centavos ● Circulación / Distribuidora

Nacional de Publicaciones, Neptuno 674, Teléfono 7-8966 ●

SUSCRIPCIONES ● En el territorio nacional ● / Distribuidora

Nacional de Publicaciones / Neptuno 674, teléfono 7-8966, La

Habana / precio de la suscripción anual: \$4.80 ● En el extranjero ● /

Departamento internacional del Instituto del Libro / 19

No. 1002 Vedado / La Habana Cuba ● Precio de la suscripción

anual / correo marítimo 5.00 dólares canadienses / Correo

aéreo / para Latinoamérica y Estados Unidos: 10.00 dólares

canadienses / para Europa: 25.00 dólares canadienses.



índice

*Ioan Davies y
S. de Miranda*

6 LA CLASE OBRERA LATINOAMERICANA:
ALGUNOS PROBLEMAS TEORICOS

Carlos Romeo

28 LAS CLASES SOCIALES EN AMERICA
LATINA

Aníbal Quijano

56 NATURALEZA, SITUACION Y TENDENCIA
DE LA SOCIEDAD PERUANA
CONTEMPORANEA

F. Henrique Cardoso

112 LAS ELITES EMPRESARIALES EN
AMERICA LATINA

K. S. Karol

144 CHINA: EL OTRO COMUNISMO

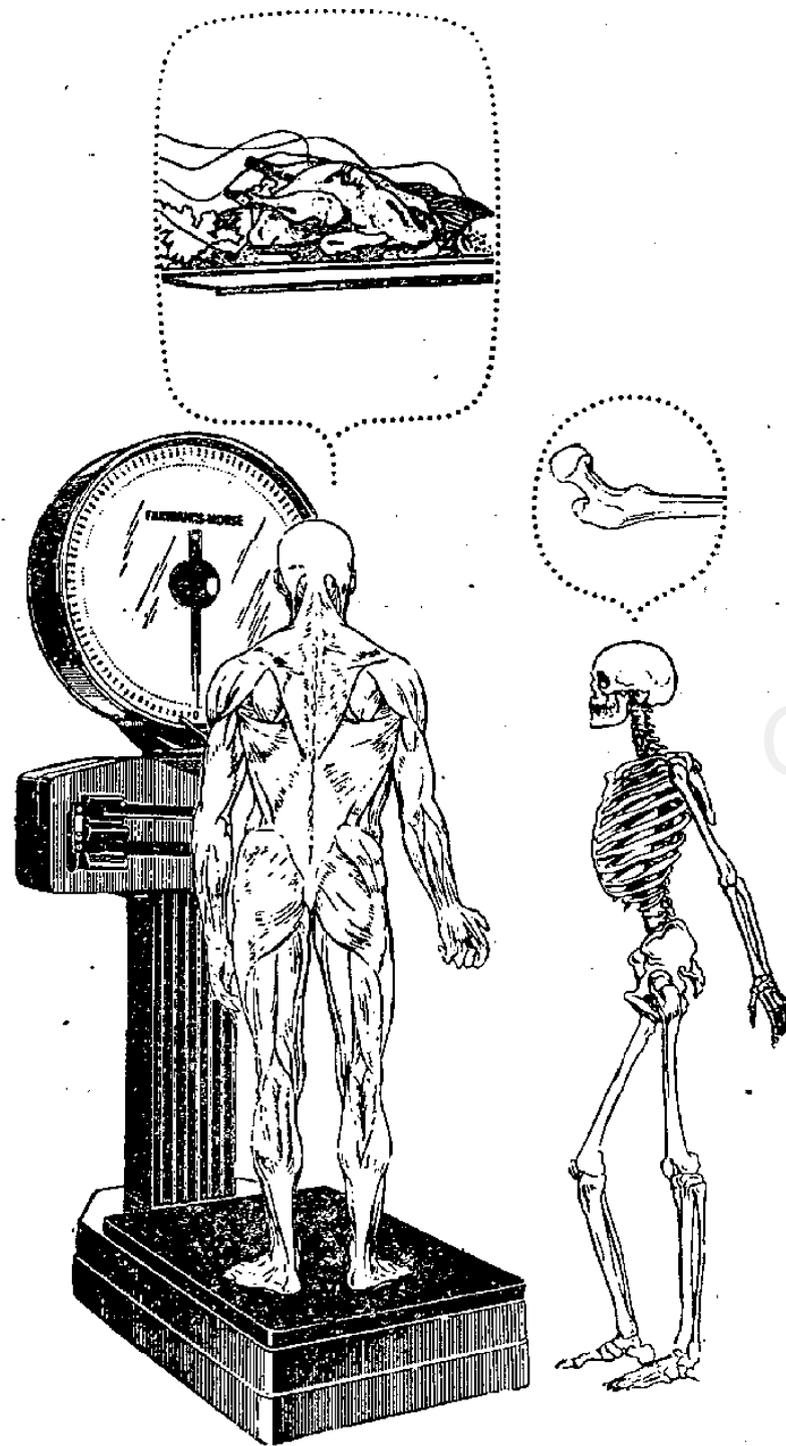
Raúl Roa

181 CUBA, EL TERCER MUNDO Y EL
TRATADO DE NO PROLIFERACION
DE LAS ARMAS NUCLEARES

202 INDEPENDENCIA O MUERTE, LIBERTAD
O MUERTE, PATRIA O MUERTE

221 LOS AUTORES

PRESENTACION



La parte monográfica de este número la dedica Pensamiento Crítico a *las estructuras sociales en América Latina*. El capitalismo ha tenido en esta parte del mundo una historia propia, política y económica, no discernible a partir de los modelos clásicos de los países «desarrollados», no obstante lo cual hemos cargado durante décadas con el lastre de interpretaciones que parten, invariablemente, de la historia del segmento más avanzado de la sociedad capitalista.

Esta tendencia mimética de nuestros pensadores y sociólogos no se ha limitado a una sola corriente del pensamiento, hablando, por supuesto, en función política. Por una parte hemos contado profusamente con autores menores, incapaces de *sentir* nuestra realidad, ya que no de pensarla, que han sido como una caja de resonancia de la ideología *metropolitana*. Son los que se exasperan con la persistencia de la llamada sociedad tradicional y reclaman a «grito pelado» reformas institucionales que copien más y mejor a sus países modelos. Poco se puede esperar en cualquier esfera de estos ideólogos tardíos de la burguesía latinoamericana. Y, sin embargo, ¿quién duda que han cumplido y cumplen un rol? Claro que un rol reaccionario: el de contribuir, mediante deformaciones y falacias de todo tipo, a sostener la creencia en el progreso dentro de los marcos actuales. Pero en definitiva ésta es su función.

La otra parte, es más preocupante. El marxismo latinoamericano también ha sido mimético y en este caso el rol ha sido negativo. Muchos revolucionarios, y otros no tan revolucionarios, han sido víctimas del «encantamiento» (y la frustración) por una *perfecta* explicación del desarrollo social. La teoría marxista, cuyo origen es inexplicable al margen de la historia de las revoluciones, que representan momentos de máxima tensión

social, ha llegado a convertirse, por obra y gracia de una involución posterior, en un soporífero expresado en una serie de tesis, estructurada y acabada, que ignora precisamente lo que se supone sea su objeto: la realidad social y su transformación consciente.

La burguesía latinoamericana no ha realizado la acumulación capitalista. Su dependencia del capital extranjero es tal que las modernas y eficientes unidades industriales son, más que parte integrante de las economías de los países respectivos, prolongaciones de la metrópoli que succionan ilimitadamente los resultados de los esfuerzos del país receptor de capitales. Y ésta no es la desgracia de un momento; es una larga historia de siglos, la historia ignorada por los repetidores y seguidistas que han buscado invariablemente en la casa ajena el remedio a los males de la casa propia. Y para los que siempre tienen una fórmula dispuesta aclaramos: no se trata de particularismos, de regionalismos o de la negación de ciertas universalidades. Martí fue un profundo conocedor de nuestras realidades continentales y un intérprete suyo de valor extraordinario. Una y otra vez insiste en la necesidad de fincarnos en esas realidades, de estudiar nuestra historia, descubrir nuestra personalidad; y nadie tuvo una visión más penetrante de lo universal que él, y podemos hablar del internacionalismo de Martí, y no por cierto de un internacionalismo abstracto y vacío.

Nuestro continente también ha dado revolucionarios marxistas que en su momento intentaron, de manera ejemplar, el verdadero conocimiento de nuestro medio y su transformación a partir de él, el enriquecimiento de la cultura y de las posibilidades revolucionarias propias mediante el difícil ejercicio de modernizar el pensamiento y la acción sin perder la perspectiva histórica. Mella y Mariátegui, por ejemplo, que hace ya cuatro décadas denunciaron todo contubernio clasista, con la pupila alerta, desenmascarando, en una polémica que se continúa hoy pero con los papeles lamentablemente trastocados, a los que con una falsa prédica de autoctonía le velaban a nuestros pueblos el camino de la auténtica emancipación.

Peró la invasión asfixiante a que nos hemos visto sometidos, de uno y otro lado, de todos los lados, ha enredado de tal manera las cosas que nuestros mejores y más brillantes ejemplos se desvanecen. Y el lado malo de la historia (...) parece repetirse una y otra vez para nosotros.

América Latina está urgida de una toma de conciencia que presupone un conocimiento cabal, desprejuiciado de nuestras realidades, de la historia de la economía, de la cultura, la política. Que se sepa verdaderamente qué

somos, a dónde hemos llegado, quiénes son realmente los depositarios de nuestro futuro. La especificidad de las estructuras sociales latinoamericanas, no esclarecida aún teóricamente, exige una conducta consecuente de los revolucionarios, y ya tenemos un ejemplo práctico de inestimable valor y trascendencia: la revolución cubana.

Aquí *ciertos esquemas* jamás hubieran conducido al triunfo, que se obtuvo, precisamente, a pesar de ellos. La comprensión de la endeblez de nuestras formas políticas; del rol que consiguientemente jugaba el ejército profesional; de las insuficiencias del movimiento obrero (entendido en el sentido clásico del concepto); de la existencia de puntos débiles en el sistema, de sectores explotados de nuestra población ubicados geográficamente en lugares que posibilitan una acción militar más o menos prolongada, al principio desventajosa; el partir de lo que había quedado inconcluso y expresado en nuestros ideólogos y revolucionarios del pasado, Martí en primer término; y por supuesto el valor y la firmeza revolucionaria llevaron a nuestros dirigentes a fijar una estrategia original que, cumplida paso a paso, culminó, para sorpresa de muchos, en el triunfo de la primera revolución socialista de América.

Algunos de los trabajos incluidos en este número ya han aparecido en publicaciones periódicas y aquí se reproducen, otros han circulado mimeografiados o en seminarios especiales. No compartimos todos los criterios expuestos, ni el valor atribuido a algunos conceptos, pero consideramos que contribuyen a una comprensión de nuestro medio, cuya necesidad apuntábamos más arriba.

La clase obrera en América Latina: algunos problemas teóricos

Ioan Davies
Shakuntala de Miranda

I. INTRODUCCION: LOS ANTECEDENTES

El hecho de que el obrerismo latinoamericano haya dejado de crear efectivos movimientos radicales (por no decir revolucionarios) se ha comentado con bastante frecuencia,¹ pero al mismo tiempo las discusiones relativas a su posibilidad revolucionaria están a veces acompañadas de cierta euforia. Ahora que los signos optimistas de los últimos diez años han sido seguidos por la reacción, con golpes militares que han sustituido a gobiernos de centro-izquierda en todos los estados a excepción de Chile, Venezuela, Uruguay, Méjico y Cuba,² es conveniente valorar y

¹ H. LANSBERGER, «The Latin American Labor Elite: is it revolutionary?», en S. M. Lipset y A. Solari, *Elites in Latin America*; Oxford, 1966; y STANISLAV ANDRESKI, *Parasitism and Subversion*, Weidengeld & Nicolson, 1966.

² La clasificación convencional de los partidos políticos en derecha, centro e izquierda, pierde en América Latina casi todo el escaso valor que en su sentido tradicional aún puede conservar en el mundo contemporáneo. Las pretensiones izquierdistas de la Democracia cristiana chilena y la breve historia del movimiento liderado por Eduardo Frei nos parecen ejemplos concluyentes. Por otra parte Cuba no es propiamente, junto a otros países del continente, una excepción en la cadena de los golpes de estado porque nuestra historia es ya otra; la hace el pueblo para el que sólo cuenta como pasado remoto lo que todavía constituye el trágico presente de las repúblicas latinoamericanas. (N. de R.)

examinar las dos teorías propuestas para explicar la situación laboral en América Latina y ciertos hechos básicos concernientes a ellas.

Los hechos escuetos, relativos al obrerismo latinoamericano, se determinan con facilidad. En lo que ha transcurrido de este siglo, la población de las áreas urbanas ha aumentado considerablemente.³ Actualmente, en los países meridionales —Argentina, Uruguay y Chile— más del 60 por ciento de la población vive en ciudades y pueblos, en México el promedio es de 48 por ciento y en Venezuela de más de 65 por ciento, mientras que incluso en los países que tienen bajos promedios de población urbana hay grandes multitudes que se aglomeran en centros estratégicos. Entre éstos están las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro que, con sus suburbios y pueblos aledaños, albergan un séptimo de la población de Brasil. En toda la América Latina, el porcentaje de habitantes urbanos aumentó de 39.2 por ciento en 1950 a 47.4 en 1962. El incremento urbano anual de 4.6 por ciento ha sido mucho más rápido que el crecimiento de la población total, de 2.5 por ciento, a pesar de que el índice de natalidad ha sido más elevado en las zonas rurales. En Brasil y Venezuela, el 50 por ciento aproximadamente del aumento de la población urbana entre 1950 y 1960 se debió a la inmigración neta precedente de las áreas rurales; en México y Ecuador un poco más del 40 por ciento, y en Chile el 35 por ciento. La concentración en centros urbanos únicos es igualmente notable. Por el año 1964, el 34 por ciento de la población de Uruguay vivía en Montevideo, el 33.8 por ciento de la población de Argentina en Buenos Aires, el 24 por ciento de los chilenos vivía en Santiago, el 24 por ciento de los panameños en la ciudad de Panamá, el 14 por ciento de los mexicanos en Ciudad México, el 16 por ciento de los paraguayos en Asunción y el 14 por ciento de los peruanos en Lima. El 32 por ciento de la población total de América Latina vivía en poblaciones con más de 20,000 habitantes. Las estadísticas referentes a la urbanización están corroboradas por las cifras de la ocupación laboral. En 1960-61, el porcentaje en Argentina de la población económicamente activa dedicado a la agricultura era solamente el 19.2 por ciento, en Chile era el 27.7, en Venezuela el 32.1, en México el 54.2 y en Brasil el 60.6.⁴ Así tenemos que hasta en Brasil, con sus inmensas áreas rurales, casi el 40 por ciento correspondía al sector urbano. Los

³ Cifras de *Urbanism in Latin America*, Seminario sobre problemas de urbanización en América Latina, Santiago, 1959; UNESCO, 1961 y Unión Panamericana, *Estudio Social de América Latina*, 1963-64, pp. 18-65.

⁴ Fuente: I.L.O.: Yearbook of Labor Statistics. 1965.

motivos de la migración radicaban en algunos casos en los atractivos de la ciudad, pero generalmente se debía a que el campo no podía proporcionar trabajo para una población creciente, aunque la situación rural no es tan mala como sugiere Andreski cuando dice que «el éxodo se debe menos al atractivo de la ciudad que a las desastrosas condiciones de la vida rural, y contribuye grandemente al traslado del desempleo de los campos a las ciudades».⁵

Pese a la explosión urbana, la mayoría de los países latinoamericanos sigue dependiendo para sus exportaciones de uno o dos productos (principalmente agrícolas). En Brasil, el café y el cacao abarcaban en 1959 el 64 por ciento de las exportaciones, en Chile el cobre constituía el 66 por ciento, en Colombia el café solamente el 77 por ciento, en Venezuela el petróleo el 92 por ciento, en Bolivia el estaño el 62 por ciento, y en la Argentina altamente urbanizada la carne y el trigo cubrían el 39 por ciento y en Uruguay la lana y la carne el 68 por ciento.⁶ Como éstos constituyen en casi todos los casos más del 20 por ciento del producto nacional bruto (compárese con el 4.4 por ciento para las exportaciones en Estados Unidos), se hace evidente el predominio de las industrias extractiva y agrícola en la estructura económica. Aunque la necesidad de desarrollo interno en los años posteriores a la depresión ocasionó un dramático ascenso de la actividad industrial en muchos países latinoamericanos, esto no hizo que se industrializara siquiera un solo país, y solamente en sectores meridionales de Brasil se produjo algo que se asemejara a una cultura industrial.⁷ En cambio, los integrantes de la nueva clase media industrial fueron absorbidos por la cultura aristocrática de los terratenientes distinguidos, imitaron sus modales, enviaron sus hijos a sus escuelas, fabricaron casas de acuerdo con su estilo, y generalmente se unieron a ellos en una hegemonía sociopolítica. Los servicios bancarios y comerciales se hicieron sus signos distintivos, y así las ciudades se llenaron de trabajadores de cuello y corbata. En 1960 los trabajadores de cuello y corbata, los dedicados a servicios profesionales y administrativos, constituían en Chile el 56% de la población

⁵ Andreski, op. cit., p. 7.

⁶ Para un resumen, véase de J. Gerassi, *The Great Fear in Latin America*, Collier, 1965, pp. 19-69.

⁷ Véase, de C. Véliz, *Obstacles to Change in Latin America*, Oxford U. P., 1965, especialmente la introducción de C. Véliz y los artículos de Pinto, Urquidí, Furtado y Jaguaribe.

no agrícola; y en 1961 la cifra estaba en Venezuela muy cerca del 90%.⁸ El contorno típico de una ciudad latinoamericana incluye así una clase superior —perfectamente compenetrada con clase superior rural y constitutiva del 0.5 al 2 % de la población; una clase entre media y superior que consta del 25 al 35 % e incluye a los trabajadores profesionales y administrativos y los pequeños comerciantes; una clase de «transición» que incluye a los artesanos, obreros semicalificados de la industria, mineros y trabajadores de los servicios comerciales, y finalmente, una «clase popular» que consiste principalmente en los jornaleros, los no calificados y los parcialmente empleados. Fuera de esto —y las estadísticas latinoamericanas son pocas veces específicas— tenemos a los habitantes de los barrios de casuchas y las áreas marginales de las ciudades, cuyos trabajos están entre los de la agricultura y los de la industria. Este es el contexto en que hay que contemplar el desarrollo de las organizaciones laborales— políticas e industriales.⁹ Son cuatro las formas principales en que se han organizado los sindicatos y partidos laborales: desde arriba, por políticos que han intentado crear una fuerte base para el poder (por ejemplo, Perón, Vargas y Goulart, Cárdenas), por inmigrantes que han imitado los ejemplos europeos (ostensiblemente el anarcosindicalismo a principios de siglo, particularmente en Brasil, Chile y Argentina), y mediante asistencia y asesoramiento externos (principalmente sindicatos comunistas, pero últimamente también mediante la ORIT, el ala latinoamericana de la ICFTU); y por la actividad espontánea de los trabajadores. En muchos casos el propio estado patrocinó el surgimiento de sindicatos aún antes de que existiera una gran proporción de obreros industriales, pero esto no ha producido un número considerablemente grande de sindicalistas.¹⁰ Aunque en Argentina el 45 por ciento de los asalariados eran miembros de sindicatos en 1961. En Chile el promedio era de 19 por ciento, en Brasil 18 por ciento, y en Venezuela 10 por ciento. En México era más elevado, 32 por ciento. Los obreros rurales apenas están organizados. En algunos países (como Brasil y Argentina), los sindicatos tienen una base ampliamente industrial, pero casi todos se fundamentan en plantas artesanales e industriales con fede-

⁸ Calculado según el Cuadro 43(198) de Unión Panamericana, *Estudio Social de América Latina*, Washington 1964, p. 98.

⁹ Cifras de I.L.O. *Curso para sindicalistas latinoamericanos sobre planificación y desarrollo económico y social*, Ginebra, 1965.

¹⁰ Para un breve resumen véase, del International Institute for Labor Studies, *Labour Relations and Economic Development*, Ginebra, 1964, pp. 79-117.

raciones de estructura disuelta que pueden influir poco en las disputas industriales. (En algunos países la legislatura prohíbe la acción colectiva o las huelgas organizadas por las federaciones). A causa de la carencia de sindicatos de amplitud industrial, es difícil organizar a los trabajadores en fábricas y empresas pequeñas, y los dirigentes sindicales de los centros de trabajo tienden a ser pobremente adiestrados. Los fondos sindicales son generalmente escasos y los dirigentes se ven obligados a hacer demandas militantes que son incapaces de respaldar con acción industrial. Aunque los sindicatos expresan con frecuencia ideologías políticas, éstas son muy pocas veces definidas o programáticas, no son sino «actitudes vagas... que nunca pueden traducirse en ideas definidas».¹¹ Como señala di Tella acerca de los obreros de las áreas mineras: «En términos generales, son adictos a apoyar las grandes demandas sindicales o políticas, pero mucho más fácilmente son influidos por dirigentes ajenos a su clase... tienden a preferir la acción repentina y drástica a la organización paciente y a largo plazo».¹² Así, dada la escasez de legislación gubernamental (condición que afecta a la estructura sindical, las finanzas, la dirección, la acción directa e incluso la filiación política), los sindicatos propenden a reaccionar violenta y esporádicamente. El derecho laboral se convierte alternativamente en el tema más importante sobre programas de adiestramiento sindical y las alianzas con los partidos gubernamentales se hacen un objetivo político. La negociación colectiva como tal, ha desempeñado un papel insignificante en las relaciones industriales. O bien el gobierno se ha adueñado de la situación creando tribunales laborales y consejos salariales, o no ha habido más que anarquía industrial bajo la dirección de patronos autoritarios. Apenas existen programas de relaciones laborales en escala nacional. Por consiguiente se ignora hasta la compleja maquinaria para resolver las disputas que existen en muchos países. Son frecuentes las huelgas (aunque normalmente ilegales), y la violencia es un elemento importante para efectuar cambios en la política laboral. Donde los sindicatos, como sucede en Argentina, tienen más fuerza y posibilidades y una función reconocida, su influencia se encamina principalmente al «desarrollo de las presiones inflacionarias causadas por la inflexibilidad del sistema

¹¹ E.C.L.A.: El desarrollo social de América Latina en la postguerra, Mar del Plata, Argentina, 1963 (mimeografiado), p. 10.

¹² T. di Tella: «Tensiones sociales en los países de la periferia», *Revista de la Universidad de Buenos Aires*, Año 6, No. 1 (1961), pp. 49-52.

económico y la continua y creciente transferencia de los ingresos procedentes de la agricultura».¹³

Los esfuerzos de los sindicatos por cambiar el nivel de vida o —más ambiciosamente los programas de los países— han fracasado generalmente para el conjunto de la población trabajadora. De 1945-47 a 1955-57, los salarios reales bajaron en Argentina en un 11.4 por ciento, en Brasil en un 6 por ciento y en Chile en un 12 por ciento. La inflación existente en el continente ha hecho ver que los sindicatos tienen que correr más aprisa para llegar al punto en que no tengan que moverse. Entre 1946 y 1956, el aumento medio anual en el costo de la vida fue de 15.4 por ciento en Brasil, 12.4 por ciento en Perú, 35.7 en Chile, 19.8 en Argentina y 63 en Bolivia.¹⁴ En medio de todo esto están los sufridos jornaleros, obreros agrícolas, subempleados y viejos y niños. Los ajustes anuales de los ingresos y salarios no son para ellos: los únicos trabajadores que en alguna forma tienen garantizado el incremento son los que tienen empleos estables.

Los hechos son claros —y la superestructura económica es igualmente evidente.¹⁵ ¿Pero qué interpretación se les puede dar? ¿Está condenada la clase obrera latinoamericana, como ha observado Andreski, a vivir en una «América Latina dominada por gangsters como los que gobiernan actualmente en la mayoría de esos desdichados países, cuyo único derecho a titularse miembros del 'mundo libre' radica en su determinación a matar y encarcelar a todo el que sea acusado de comunista?».¹⁶ Hay que examinar algunas de las teorías expuestas como explicaciones del estado actual de la clase obrera en América Latina antes de llegar a una conclusión definitiva.

2. TEORIAS Y JEROGLIFICOS

A diferencia de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, América Latina ha tenido poca historia laboral, una condición que comparte con África y Asia. Casi todas las discusiones referentes a la clase obrera han sido conducidas por sociólogos teóricos en general, científicos políticos, economistas, y algún que otro antropólogo. Lo que está ausente en todas partes es el detalle, el ensayo vigoroso de las diversas teorías expuestas y en cierta

¹³ Aldo Ferrer: *La economía Argentina*, Buenos Aires, 1963, p. 254.

¹⁴ S. Andreski, op. cit., p. 122.

¹⁵ Véase especialmente, de Celso Furtado, *The Economy of Brazil*, 1965.

¹⁶ Andreski, op. cit., p. 277.

medida la reexaminación de algunos de los datos que existen. Alain Touraine ha avanzado un poco en este sentido con su equipo de Laboratorio Industrial en la Sorbona, y con la cooperación de sociólogos de Santiago y Buenos Aires, y se hizo algún trabajo útil en la Universidad de Sao Paulo antes del golpe de estado. No obstante, mientras no sean evidentes los resultados de esta investigación habrá un abismo entre la teoría y los hechos, y está claro que este abismo proporciona una de las razones más importantes para la consecuente mala interpretación del escenario laboral latinoamericano.

A grandes rasgos, las teorías sobre el obrerismo en América Latina son de cuatro clases: estructuralistas y de cambio social, que procuran trazar la inclusión de los obreros en el sistema sociopolítico de acuerdo con los indicadores de la «modernización»;¹⁷ teorías «mecanicistas» de relaciones industriales, que tienden a concentrarse en cuestiones legales y económicas y en la interrelación que hay entre los apremios político legales y el funcionamiento de un sistema de contratación salarial;¹⁸ teorías marxistas impresionistas, del desarrollo de una conciencia de clase revolucionaria y las consecuentes organizaciones y sus réplicas *simplistas* y a menudo igualmente impresionistas;¹⁹ y la interpretación hegeliana estructural del profesor Touraine.²⁰ Por añadidura, existen varios estudios sobre instituciones económicas y políticas y condiciones laborales, programas de seguridad social y beneficencia, centros de recreación y cultura, y proyectos de desarrollo de comunidades, que incluyen algunos elementos teóricos, aunque normalmente de poca utilidad y complicación, que se limitan en lo esencial a datos útiles y que pudieran utilizarse en teorías de explicación. Como las diversas «grandes teorías» —estructuralistas, marxistas y de Touraine— proveen el marco más ambicioso para un intento de analizar el obrerismo en América Latina, empezaremos por ellas y señalaremos las mayores lagunas que hay en las teorías actuales.

¹⁷ Muchas fuentes americanas, pero la obra latinoamericana más coherente e influyente es *Política y sociedad en una época de transición*, de G. Germani, Buenos Aires, 1962.

¹⁸ Véase, de R. Payne, *Labor and Politics in Peru*, Yale, 1965, *Industrial Relations in Chile, Argentina, Brazil*, de R. Alexander, y las publicaciones del U. S. Department of Labor.

¹⁹ Para lo primero véase, de I. L. Horowitz, *Revolution in Brazil*, Dutton, 1964; para lo segundo, op. cit. de S. Andreski, y op. cit. de H. Lansberger.

²⁰ Para Touraine, véase después de 31.

Las principales diferencias que existen entre las teorías estructuralistas y las del conflicto sobre el trabajo obrero y el cambio social radican en el concepto del progreso y el mecanismo necesario para lograrlo.²¹ Por lo común, ambas tienen una visión evolucionista general del cambio y ambas utilizan conceptos de «modernización» como parte de una tipología para la comprensión del proceso de desarrollo. En el caso del análisis estructuralista, la idea del desarrollo está encajada en una transición de los sectores tradicionales a los modernos, dando por sentado el ideal de lo «moderno» y considerando tradicionalmente lo tradicional como estático.²² En su caso el análisis del trabajo obrero se hace mayormente en forma de una tipología basada en una serie continua de lo tradicional y lo moderno: su utilidad consiste grandemente en valorar la inclusión en el sector «moderno» y en crear un marco para explicar la estructura del proceso de absorción y «movilización».²³ Este puede tener dos acentos un tanto diferentes: económico y político. En el caso económico, el grado real de «industrialización» constituye el principal criterio de modernidad, y por consiguiente habrá la tendencia a establecer los índices de conducta social de la modernidad de acuerdo con puntos de vista económicos. Las aptitudes de eficiencia y mecanización, el grado de permanencia en el sector industrial, las técnicas y la efectividad en la administración, etc., serán primordiales en todo análisis.²⁴ Por otra parte, casi todo el trabajo que utiliza la tesis del desarrollo ha sido político, y los criterios adoptados para proyectar tipologías se han referido a los grados de participación política y el desarrollo de las instituciones políticas en una serie continua de lo tradicional, autocrático y democrático.²⁵ Esto incluye un uso algo abstracto y parcial de las «varia-

²¹ Para exposiciones estructuralistas generales véase, de W. Moore, *Social Change*, Prentice Hall, 1965.

²² Véase, de James Petras, «The Harmony of interests», *International Socialist Journal*, 16-17 (1966), pp. 481-503, para una crítica de las teorías estructuralistas en las investigaciones de Latin American Social Science.

²³ Para exposiciones generales véase, de K. Deutsh, «Social Mobilization and Political Development», *American Political Science Review*, L. V 3(1931), pp. 493-514, y de K. Deutsh, «Nationalism and Social Communications» (N. Y., 1953); de S. M. Lipset, «The First New Nation», Heineman, 1963; de S. N. Eisenstadt, «Modernization, Protest and change», Prentice Hall, 1967.

²⁴ Para una teoría general clásica en estos términos, *Industrialism and Industrial Man*, de C. Kerr y otros, Heinemann, 1961.

²⁵ Para la exposición clásica véase, de G. Almond y J. S. Coleman, *Politics of the Developing Areas*, Princeton, 1960. Y para una aplicación, aunque con menos énfasis en las comunicaciones, véase, de Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society*, Glencoe III, Free Press, 1958.

bles de patronos» de Talcott Parsons²⁶ y, al igual que el análisis centrado en la economía, una tendencia a ignorar el doble proceso que hay entre los sectores «tradicionales» y «modernos», tanto en el orden cultural como en el estructural.

Evidentemente, es imposible examinar aquí todas las teorías que pudieran catalogarse bajo la etiqueta de «estructuralistas»,²⁷ pero tal vez algunas observaciones sobre la obra de Germani ilustren el dilema básico. Aunque el trabajo de Germani se refiere al tema más amplio del desarrollo, sus diversas publicaciones han tomado en consideración de un modo particular lo que él llama «clase popular». Además, ha tenido la suficiente audacia para bosquejar una teoría sobre la evolución social en América Latina que incluye específicamente a los obreros y campesinos, y es un sociólogo latinoamericano que se interesa especialmente en examinar la teoría a la luz de las condiciones sociales de su propio país.²⁸

El análisis de Germani se basa en un modelo estructuralista en que hay cuatro grupos sociales fundamentales: el tradicional, el disponible, el movilizado y el integrado.²⁹ La transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna integrada es rápida en la actualidad y se manifiesta en casi todas las regiones de América Latina. La sociedad tradicional va desapareciendo a medida que transforma una masa «disponible» y la maquinaria social se encamina hacia la movilización. Cuando una sociedad no está en condiciones de desarrollar con bastante rapidez el mecanismo para la

integración son mayores las probabilidades de que se produzcan trastornos violentos. Por consiguiente, las sociedades latinoamericanas pueden ser clasificadas de acuerdo con los diversos casos de que la movilización e integración sean casi completas, que la movilización sea casi completa y la integración incompleta, que la movilización aumente pero la integración permanezca en estado de equilibrio, y que la movilización sea rápida o extensa pero la integración sea débil.³⁰ Casi siempre se define el cambio social como la desintegración de las viejas estructuras, y la movilización como el sistema normativo de la sociedad global. Esto supone³¹ una transición de la sociedad colonial con sus acentuadas características tradicionales a la democracia representativa mediante seis etapas, incluyendo la guerra civil, la unificación de autocracias, y tres etapas de participación paulatinamente aumentadas. A diferencia de lo sucedido en la mayor parte de Europa, la transformación económica se ha producido en América Latina después de la movilización de los sectores populares: en consecuencia, hay un problema de integración o del lugar en que las normas que rigen a la sociedad se prestan a discusión debido al hecho de que no se ha logrado una tasa elevada de desarrollo económico. En tales casos, cuando el grado de movilización sobrepasa al mecanismo de integración, surgen movimientos populares en escala nacional dirigidos por élites más o menos empeñadas en ideologías de industrialización. Lo que demandan los sectores movilizados es «participación», pero ésta no se logra si no se reforma la estructura social. Aunque los regímenes militares intentan legitimar su poder por medio de llamados a los sectores populares, no pueden hacerlo sin modificar la concentración de la propiedad de la tierra. Aunque ésta no se consiga jamás (si no es mediante una revolución) se amplía el grado de participación y, por ejemplo en Argentina, bajo el régimen de Perón, «entraña espontaneidad y además cierto grado de libertad efectiva que es totalmente desconocida e imposible en la situación precedente al establecimiento del movimiento nacional-popular... para individuos salidos del patrón tradicional de acción prescriptiva representa un verdadero cambio participar en una huelga, elegir un dirigente sindical o discutir con un patrono». Finalmente, a la integración de los obreros en la sociedad contribuye el crecimiento del nacionalismo que acompañado de la movilización de la población disponible y la conversión del sentimiento de

²⁶ Véase *The Social System*, de T. Parsons, Free Press, 1955, cap. 7.

²⁷ Pero véase, de D. I. Davies, «Comparative Sociology and Theoretical Models», *British Journal of Sociology*, junio de 1967.

²⁸ Para trabajos más extensos, véanse *Política y sociedad de una época de transición*, de G. Germani, Buenos Aires, 1962; «Democratic representative et Classes populaires en Amérique Latine», *Sociologie du Travail*, Vol. 3, No. 4 (1961), pp. 96-113; «Social Change and Intergroup Conflicts», en I. L. Horowitz (ed.) *The New Sociology*, O. U. P., 1964, pp. 391-408, y *La integración política de las masas y el totalitarismo*, Buenos Aires, 1956.

²⁹ «El proceso de transición se caracteriza por una desintegración inicial de la estructura tradicional (por lo menos en algunas de sus partes). A nivel de los grupos, esta desintegración se manifiesta por el desplazamiento de los mismos con relación al lugar que les corresponde. Tal desplazamiento se ha llamado a veces "disponibilidad", y los grupos afectados por este proceso se han llamado "grupos disponibles". Cuando esta disponibilidad se traduce en una participación más intensa que la que existía en estructuras anteriores o en esferas previamente excluidas, hablamos de movilización. Cuando se han producido cambios que por una parte hacen posible legalizar y por la otra ofrecen posibilidades efectivas de lograr un grado adicional de participación de los grupos movilizados, hablamos de integración.» (Op. cit. de G. Germani, p. 395.)

³⁰ Véase op. cit. de Germani, 1964, p. 403.

³¹ Op. cit. de Germani, 1961, pp. 405-7.

comunidad nacional, ha ayudado a crear un sentido de derechos de ciudadanía y ha proporcionado a las élites una ideología en sus esfuerzos por crear una sociedad moderna.

Está fuera del alcance de este trabajo explorar detalladamente la teoría de Germani.³² Aquí es importante discutir sus implicaciones para el análisis de los movimientos de clases y laborales a la luz de las teorías adelantadas por Alain Touraine y por la escuela de investigación *marxisante*, y de ciertos hechos básicos presentados por otras investigaciones. Las cuestiones más importantes que plantea Germani son las que se relacionan con las posibilidades que tienen los obreros para la acción coordinada y el marco en que las mismas operan. Al proveer una tipología para el cambio social por medio de índices de modernización que proceden de factores políticos y sociales, Germani, por lo menos, ha creado un punto de partida. En su marco conceptual, Alain Touraine depende en cierta medida de Germani, pero su análisis se funda en un método dialéctico, hegeliano más bien que marxista, que enfatiza el carácter de los movimientos sociales y sus opciones estratégicas. Utiliza los conceptos de defensa, oposición y totalidad para definir un movimiento social y los iguala en diversas etapas del desarrollo con teorías de movilidad, nacionalismo y relaciones de clases.³³ Al igual que Germani, categoriza el desarrollo de acuerdo con tipos ideales, definidos por la magnitud y la índole de la participación popular en el sistema político y económico. Encuentra tres situaciones en América Latina: (1) Donde una *rebelión popular* dirige su oposición contra la «antinación», las fuerzas imperialistas o el dominio colonial como respuesta a una situación de aguda dependencia económica; (2) donde la sociedad ya está movilizada por una burguesía nacional o por el estado y donde los movimientos sociales están sometidos a la importancia de la movilidad social individual y la «movilidad colectiva». Los movimientos se definen

³² Afortunadamente, en otro lugar se ha emprendido la tarea: véase, de Jorge García Bouza, «Factors of Change in Latin America», gestión inédita: *VI Congreso de Sociología*, Evian, septiembre de 1966; y de W. E. Moore, «Social Change and Comparative Studies», *International Social Science Journal*, 1963, No. 4, pp. 522 y siguientes; y de J. Nun, «Los paradigmas de la Ciencia Política, un intento de conceptualización», *Revista Latinoamericana de Sociología*, Vol. I, No. 1, 1966, y de Juan F. Marsal, «Cambio Social en América Latina», Sola Hachette, Buenos Aires, próxima publicación.

³³ Véase, de A. Touraine, «Movilidad Social, relaciones de clase y nacionalismo en América Latina», *América Latina*, Año 8, No. I, enero/marzo de 1965; para la aplicación latinoamericana de una tesis elaborada en términos más generales por A. Touraine, *Sociologie d'Action*, Editions du Seuil, 1965.

en relación con los nuevos habitantes de las ciudades y hasta cierto punto contra la clase media, pero deben su definición de «interés general» al proceso de desarrollo que ya existe en las ciudades. La unidad nacional se hace el tema principal y los movimientos son los que Germani define como *nacionalpopulares*; (3) finalmente, la sociedad ya está dominada por las realidades y los problemas de una economía industrial y afronta la resistencia de estructuras sociales o sectores «arcaicos». Los movimientos políticos apelan a la mayoría de los ciudadanos, no solamente obreros, aunque este *populismo* ha constituido una atmósfera favorable para el progreso del sindicalismo. Los movimientos se dirigen contra los que impiden el progreso —normalmente la burguesía urbana y rural. En estas tres etapas, Touraine ve un progreso de la conciencia de la clase propia a la conciencia de la clase opuesta y finalmente a la conciencia de los conflictos y alianzas de clases. Como ejemplos de los tres tipos de situación menciona la Revolución mejicana (rebelión popular), los regímenes de Kubitschek y Goulart en Brasil (nacional popular) y los socialistas de oposición en Chile (frente popular). Como versiones «deformadas» de estas situaciones, están las revoluciones boliviana (rebelión popular por una parte, y por la otra un sistema institucional que depende parcialmente de la clase media); el peronismo (nacionalismo extremado que sacrifica el desarrollo económico y se hace autoritario); o Uruguay (la carencia de posibilidades económicas condena al frente popular a mantener el estancamiento económico y la inmovilidad social). La clase obrera industrial, aunque siempre es un elemento importante en el desarrollo de nuevas soluciones políticas, apenas tiene la posibilidad de dictar sus propios términos. En una situación de rebelión popular lo que más importa es la movilidad colectiva; esto favorece la militancia y la existencia de activistas dedicados a un movimiento o apparatus. No obstante si volvemos a la distinción que hace Germani entre movilización, participación e integración— puesto que la mayoría de los obreros no disponen todavía de los medios elementales para la participación, esto es lo más importante (una consigna irónica para el obrerismo latinoamericano podría ser por tanto «no hay movilización sin participación»). Pero esto, en países que están sólo parcialmente industrializados, difícilmente resulta bastante revolucionario. La participación radica en las instituciones de la sociedad urbana: como lo demostró la revolución boliviana, ni siquiera una gran revolución llevada a cabo por obreros industriales puede tener éxito contra la ofensiva combinada de la clase media urbana y la capa acomodada rural. En esta segunda etapa, aunque

hay una fuerte participación en los movimientos de masas, no hay más que un tenue inclusión en sus actividades: los sindicatos están estrechamente vinculados a los partidos populares nacionales y dominados por el aparato político. Como dice Touraine en otra parte³⁴ acerca de un país con esta situación, «el sindicalismo brasileño vacila entre la independencia respecto del estado, que implica una orientación reformista, y el mantenimiento de nexos con el estado, que lo condena a no ser un movimiento social activo». Por consiguiente, aquí también la participación política de la clase obrera llega a implicar una alianza con las fuerzas nacionalistas radicales de la burguesía (Goulart, Kubitschek, Perón). En la tercera etapa —la de soluciones de frente popular— como la movilidad social se hace posible y bastante rápida, los sindicatos y movimientos laborales dejan de ser revolucionarios en absoluto y se concentran en propósitos «instrumentales».

Lo que Touraine hace en su análisis es combinar elementos de la teoría de Germani sobre el cambio social y el conflicto de grupos con un intento de desarrollar una teoría de conciencia de clase. En este proceso, ha elaborado una serie de proyectos que amplían la teoría y desarrollan su utilidad en la descripción de situaciones precisas. Tal vez el más coherente es su estudio sobre São Paulo, porque ofrece un importante ejemplo de los grados de transición y además porque existen teorías de orientación marxista sobre Brasil con las cuales se le puede contrastar.³⁵ Después de señalar una distinción entre los obreros industriales tradicionales (sobre todo italianos o portugueses, e incluir una gran proporción de obreros calificados) cuya conducta sindical no es diferente de la europea, y la nueva clase obrera (no calificada y consistente en inmigrantes del interior), Touraine funda su análisis en los inmigrantes no calificados. La migración tiene tres causas principales: el abandono involuntario del campo, la aceptación de nuevas orientaciones hacia áreas urbanas sin confinarse a éstas y un activo sentido de movilidad que implica conciencia de elevación social. Esto a su vez produce tres niveles de actitudes: una búsqueda de ventajas económicas individuales con carencia de solidaridad en el centro de trabajo; una solidaridad concreta con los grupos laborales y familiares, y una «imagen de la sociedad basada no tanto en el conflicto social como en la oposición de los niveles sociales, más agrarios que industriales». Entre los

³⁴ «Industrialisation et conscience ouvrière à São Paulo», *Sociologie du Travail*, Vol. 3., No. 41 (1961), pp. 77-95.

³⁵ Op. cit. de A. Touraine, 1961.

obreros desplazados hay dos tipos de conducta —«conciencia segmentada» (enlace con algunos elementos de conducta industrial pero al mismo tiempo una aceptación general del paternalismo y la personalización de las relaciones sociales en el trabajo); «conciencia dividida» (ausencia de toda integración —inestabilidad, uso de drogas y estimulantes, prostitución, etc.). En cualquiera de estos dos casos, el proceso urbano es más significativo para la orientación de los obreros que la situación industrial. Los obreros se adaptan apáticamente a las demandas laborales o de lo contrario buscan independencia económica por medios desconectados de las características de consumo masivo de las sociedades industriales. Por consiguiente, los movimientos demagógicos son un terreno fértil para la actividad entre estos grupos. En la segunda categoría de obreros (que aceptan deliberadamente las orientaciones de la sociedad urbana), hay cierta conciencia de movilidad con actitudes de integración relativa. Continúa la docilidad tradicional, pero también existe un «inconformismo utópico» —una esperanza de mejoramiento en un futuro más o menos lejano. La sociedad industrial es aceptada, pero más por sus valores de consumo que por sus valores productivos o políticos. Finalmente, hay una completa integración acompañada de una fuerte conciencia de movilidad.

Por consiguiente, en São Paulo el sindicalismo encierra conflicto entre el conjunto de los obreros y los patronos y también entre las diversas categorías de obreros. Los obreros bien integrados constituyen una categoría privilegiada cuyos intereses radican parcialmente en la solidaridad con los capitalistas, pues tanto unos como otros se benefician con el dominio creado por los centros industriales y comerciales y las «colonias» del interior de Brasil. Una alianza que se llevó a cabo entre este grupo y los políticos burgueses en los años treinta creó una forma de estructura sindical que actualmente hace que el recién llegado a la ciudad considere al sindicato como una parte del sistema industrial. Las cuotas sindicales se deducen como impuesto sobre los salarios, el sindicato es un distribuidor de «servicios» y la expresión de una participación indirecta e involuntaria en el poder. En consecuencia, aunque los nuevos obreros ingresan automáticamente en un sistema sindical, pocos son los que se vinculan personalmente a él. Los obreros más antiguos y estables se disgustan con la llegada de grandes masas nuevas y no militantes. Cuando no tratan de radicalizarlas mediante sindicatos de base comunista (aunque los dos grupos tienen intereses sumamente divergentes) trabajan con el estado y procuran apoyar una ideología de intervención nacionalista y política. De todos modos, es

poca la oportunidad que tienen los obreros de ser revolucionarios: el éxito en términos industriales no hace más que contribuir al desequilibrio regional: los campesinos y obreros agrícolas tienen poca probabilidad de participar de los frutos de la acción industrial urbana. Y dentro del sector urbano, la continuación de los nexos familiares y vecinales, al igual que la estructura legalista de las relaciones industriales, actúan como un freno sobre la conciencia de la clase obrera y mantienen actitudes «tradicionales». En muchos sentidos este análisis no difiere del que ofrecen teóricos marxistas como Ottavio Ianni.³⁶ La diferencia está en la importancia que se concede a las causas estructurales y al potencial revolucionario definitivo. Ianni ve las características estructurales del capitalismo brasileño como algo que constituye la única causa determinante de primordial importancia en la conducta de los obreros. «La clase obrera fue insertada en un sistema político destinado a evitar o limitar el surgimiento de tensiones sociales fundamentales». La burguesía industrial es la clave de las relaciones políticas e industriales. Aunque reconoce las mismas diferencias entre los sectores de la clase obrera, Ianni, considera la estructura del desarrollo capitalista como la más decisiva para determinar el resultado. Mientras Brasil permanezca en una situación de semidesarrollo, es probable que continúe la misma situación. Pero esta es «de transición». A medida que la estructura capitalista se aproxima a su máximo desarrollo, va aminorando la modificación de las infraestructuras, disminuye la movilidad vertical, la burguesía industrial agota sus posibilidades de controlar otros grupos, y comienza y a funcionar el mecanismo fundamental del sistema. En los últimos años el proletariado ha empezado a encontrar este rumbo.

Asis Simao,³⁷ y M. Lowy y S. Chucid³⁸ recalcan también las posibilidades revolucionarias de los obreros urbanos en Brasil. Ambas investigaciones sugieren que los recién llegados a las ciudades tienden a mantener una actitud reformista en tanto que los que están más integrados en la vida urbana y económica tienden a ser más radicales y apoyar al partido comunista. Está claro que aunque en esto pueda haber una verdad limitada, no evidencia la radicalización progresiva de los obreros en condiciones urba-

³⁶ Véase por ejemplo, de Ottavio Ianni, «condições institucionais de comportamento político operário», *Revista Brasileira*, No. 36, 1961, pp. 16-39.

³⁷ Asis Simao: «Industrialisme et Syndicalisme en Brasil», *Sociologie du Travail*, Vol. 3, No. 4, 1961.

³⁸ Michael Lowy y Sara Chucid, «Opinões et atitudes de líderes sindicais metalúrgicos», *Revista brasileira de Estudos Políticos*, (Belo Horizonte), No. 13, enero de 1962, pp. 132-169.

nas. Una proporción bastante elevada de estos obreros proceden en principio de Europa y aunque manifiesten cualesquiera tendencias a la acción radical, ello puede deberse más a la educación y experiencia política que han adquirido en Europa que a los factores sociales y culturales existentes en Brasil. (Esto también plantea la cuestión de principio en cuanto a si el partido comunista es «radical» en este contexto). Pero además, como arguye Touraine de un modo convincente, el movimiento laboral ha tomado un camino revolucionario solamente cuando ha tenido que luchar a la vez contra el poder personal de empresas particulares y contra un sistema capitalista incapaz de asegurar el progreso económico. Y éste, a su vez, está determinado por la legislación social del gobierno que, como medida contra la crisis, trata de proporcionar una estructura racional a la industria. Hasta ahora, por lo tanto, el incentivo más poderoso para la actividad sindical —y todo potencial «revolucionario»— es el gobierno, y para el movimiento laboral «las condiciones que rigen en su origen también determinan su línea reformista». Esta, desde luego, no descarta la posibilidad de desarrollo revolucionario (los factores estructurales que sugiere Ianni pudieran empezar a funcionar), pero hace muy dudosas las sugerencias de que el movimiento laboral está haciéndose cada vez más revolucionario. Pero este juicio optimista —y un tanto ingenuo— es característico de muchos obreros orientados en el marxismo (a menos que hayan manifestado simpatías por la China cuando pudiera hacerse un análisis más próximo al de Touraine). No es por tanto muy difícil que digamos destruir esta teoría. Henry Lansberger, en un análisis de los dirigentes sindicales de varios países latinoamericanos, demostró que en general no eran revolucionarios. Encontró que en Chile los dirigentes de Santiago no eran muy radicales, y «sustentaban la idea de que las divisiones ideológicas pierden su incentivo en el curso del desarrollo económico». En su libro sobre Perú, Payne llega a conclusiones generales, mientras los escritos esenciales de Touraine y Alexander apuntan en la misma dirección. No obstante, las simples refutaciones no son adecuadas de por sí. Después de todo, la revolución boliviana fue grandemente respaldada por los mineros del estaño; los sindicatos proporcionaron un punto de coordinación notable para los programas radicales de Brasil en los primeros años de la

³⁹ H. Lansberger, «The Labour Elite: is it Revolutionary?», en Lipset y Solary, op. cit., y H. Lansberger, M. Barrera y A. Toro, «The Chilean Labor Union Leader: a preliminary report on his background and attitudes», *Industrial and Labor Relations Review*, Vol. 17, No. 3, abril de 1964.

década del sesenta; y los comunistas son, como destaca Andreski «extremadamente poderosos en los sindicatos de todo el continente. Con excepción de Argentina (donde tienen que competir con los *peronistas*) constituyen indudablemente el elemento más dinámico del movimiento laboral».⁴⁰

3. LAS POSIBILIDADES

Las teorías funcionalista y hegeliana del trabajo obrero son útiles porque proporcionan una alternativa para el optimismo ingenuo de muchos marxistas y liberales esperanzados que han escrito sobre América Latina. Germani y Touraine exponen las características estructurales que operan contra todo grado de acción radical y la medida en que la segmentación de las sociedades es un factor determinante para modelar las actitudes de clase e influir en la estrategia. Además, si la teoría de Germani sobre el cambio social implica algo que se aproxime a una sociedad global definitiva (podríamos suponer a la Argentina con los Estados Unidos) que dependa solamente de la evidencia parcial, hace falta al menos algún tipo de modelo para que tenga sentido cualquier análisis del desarrollo. La falla de este modelo consiste principalmente en que no toma suficientemente en cuenta ninguno de estos dos factores internos que deforman el posible resultado (después de todo, la sociedad industrial soviética es estructural e ideológicamente distinta de la norteamericana, al igual que lo es la francesa de la japonesa), ni las influencias externas decisivas que modelan la estructura económica y social en los países de América Latina. En cierta forma, Touraine adelanta algo en el camino de hacer frente a estas críticas. Su análisis se fundamenta sólidamente en una situación colonial (Germani parece renuente a considerar el hecho básico de que las sociedades latinoamericanas funcionan política y económicamente como colonias de los Estados Unidos y que el nacionalismo incipiente es una respuesta a esta situación y no simplemente una necesidad de «integración» y «construcción nacional»). Touraine tiene también más que decir acerca de las formas en que la conciencia de clases está plasmada por las ideologías nacionales y los cambios en la estructura social. Tiene un matiz más comparativo en sus conclusiones y es menos optimista.

Pero en última instancia, el análisis de la clase obrera en cualquier país debe tener en cuenta tres factores fundamentales: las alteraciones en la estructura social y económica que proveen las razones para el cambio y la

composición y distribución precisas de la clase obrera que surge; las condiciones de vida y de trabajo que crea esta estructura para los trabajadores, y los procedimientos por los cuales la clase obrera llega a ver su propia situación y articular sus propios intereses en relación con la estructura. Desgraciadamente, el análisis de la clase obrera latinoamericana se ha limitado casi exclusivamente al primer factor —que es casi lo mismo que si el análisis del origen de la clase obrera inglesa dependiera completamente de Neil Smelser para su interpretación e informes. El estudio del obrerismo latinoamericano no sólo carece de un E. P. Thompson, sino que apenas tiene su Engels o un Booth. La obra de Touraine constituye un paso importante hacia el abarcamiento sistemático del área decisiva de la relación entre la cultura y la clase obrera. Pero aquí necesitamos más aún. Es importante documentar los parámetros culturales de acción en que se concentra principalmente Touraine y documentar también la visión real que de sí mismos y de las posibilidades de acción tienen los grupos que constituyen la clase. Si omitimos el detalle, se hace evidente la descripción de lo que el mismo pudiera ser.

Salta a la vista que los obreros de toda la América Latina no tienen conciencia de sí mismos como una clase obrera principalmente *industrial*. Y evidente es también que el surgimiento de los llamados «sectores medios»⁴¹ no ha producido la zona de amortiguamiento entre la oligarquía y las masas que podría actuar como un punto de enfoque para la identificación de la clase obrera industrial. La clase media y la nueva burocracia se identifican con la oligarquía rural dominante y con los niveles de consumo del mundo exterior, principalmente en los Estados Unidos. Esta clase media, como observó en Brasil Charles Wagley «es culturalmente el sector más conservador de la sociedad brasileña... se mezcla con la antigua clase superior tradicional para formar un nuevo segmento dominante de la sociedad brasileña».⁴² Si empiezan a apoyar a los sindicatos, están sólo preparados para apoyar sindicatos segmentados sin ningún poder político que proclame que «el estado tiene que incrementar su control sobre las organizaciones obreras, sobre todo en relación con las peticiones de incremento en los salarios y el derecho a la huelga».⁴³

⁴¹ John J. Johnson, *Political Change in Latin America: The Emergence of the Middle Sectors*, Stanford, 1958. Para una crítica, véase, de James Petras, «The Latin American Middle Class», *New Politics*, IV, I, Invierno de 1965, pp. 78-85.

⁴² C. Wagley, *An Introduction to Brazil*, p. 126.

⁴³ Comisión Económica para América Latina, Mar del Plata, Argentina, 1963, pp. 16-17.

⁴⁰ Op. cit. de S. Andreski, p. 203.

En este contexto, y en el contexto de la migración masiva de las ciudades y la continuación del desarrollo económico desigual, la reacción de los obreros es insegura y comprometedora. En México, tienen que definir sus acciones en relación con el gobierno. Sólo el 32 por ciento de los asalariados está realmente afiliado a sindicatos. El mayor centro sindical, la Confederación de trabajadores de México, está representado oficialmente como el sector laboral del Partido revolucionario institucional, que es del gobierno, y los sindicatos no afiliados a la CTM están también estrechamente vinculados al gobierno. Durante los últimos cuarenta años, la actitud de los sindicatos ha reflejado fielmente las variaciones de la política gubernamental. Las huelgas han aumentado bajo los regímenes de presidentes que han simpatizado con los sindicatos —en gran parte para hacer presión a fin de que los programas del gobierno se hagan más radicales.⁴⁴ En general, los obreros industriales tienen menos de conciencia como «clase» que de conciencia como «sector»: se identifican como un sector urbano privilegiado que se opone a la población «marginal» que amenaza su posición al invadir el mercado laboral. Pero la élite política reconoce que un conflicto entre la población marginal y las clases industriales estables conduciría a una quiebra de la estabilidad. En consecuencia, lucha por mantener la armonía. Los sectores marginales —por la misma naturaleza de su posición— carecen de organización y dirigentes. Su figura típicamente representativa es el Manuel de *Los Hijos de Sánchez*, de Oscar Lewis,⁴⁵ en que el aspirante a empresario se ve obligado a buscarse la comida por los puestos de los mercados de Ciudad México y Guadalajara. El contraste entre su posición y la de los obreros estables es inmensa. Solamente el 22 por ciento de los asalariados están amparados por los programas de seguro del Instituto de seguridad social y sus salarios duplican el sueldo mínimo nacional: algunos trabajadores industriales reciben cuatro veces el mínimo nacional. Estos obreros tienen poca conciencia de clase y se organizan en grupos de presión industrial para mejorar su situación económica en el contexto de una sociedad neocapitalista paternalista. En contraste con ellos, los obreros marginales suelen reaccionar con violencia, indiferencia, mezquino espíritu de empresa o retirada a los campos con los cuales siguen teniendo estrechos vínculos personales.

⁴⁴ Véase, de P. González Casanova, «L'évolution du système des classes en Mexique», *Cahiers Internationaux de Sociologie*, Vol. 12, No. 39, (1965), pp. 113-136.

⁴⁵ O. Lewis, *Los hijos de Sánchez*. Joaquín Mortiz editor, México.

En Perú y Brasil la situación es distinta, el estado es menos liberal, más restrictivo, pero el resultado es prácticamente igual. Los sindicatos apristas van dejando de ser un movimiento popular radical para ser una viva parte integrante de la estructura política, que representa los intereses de los trabajadores establecidos en el centro del poder, acepta el sistema y define sus intereses contra los obreros «marginales», los inmigrantes y los campesinos.⁴⁶ Los sindicatos comunistas y de otros matices radicales pueden extenderse si tienen una comunidad bien integrada en que basar sus actividades —por ejemplo aldeas mineras— pero en definitiva se ven frustrados por la enorme tarea de movilizar a los desarraigados e insensibles, y responden a la presión con una violencia sin sentido y una acción política que no tiene posibilidades estratégicas. Muy parecido es lo que sucede en Brasil. Los obreros estables participan en la lucha por el poder como «masa de maniobra», un peón consciente, manipulado por el Ministerio del trabajo. Así surge lo que Fernando Cardoso llama «sindicalismo de control»,⁴⁷ una lucha por mejorar las condiciones dentro del sistema capitalista y dentro del contexto del aparato político. Los que están fuera se manifiestan apáticos. Son obreros agrícolas desplazados de la tierra e impulsados, no tanto por el deseo de mejoría social e integración en la vida industrial, como por la pobreza. «Esto les hace menos exigentes en cuanto al 'destino' y, en cierta medida, hace que estén más dispuestos a aceptar las condiciones de vida y trabajo del sistema industrial e ingresar en los negocios o en las ocupaciones de servicio». Aunque las constantes exhortaciones que hacen los políticos pidiendo un «esfuerzo nacional», una mayor participación, empiezan a hacerles ver más claramente lo que es posible, y aunque Goulart desató una fuerza potencial para la acción industrial, esto apenas ha cristalizado todavía en una movilización de los sectores marginales para la acción revolucionaria: el nacionalismo y el status se reducen frecuentemente al equipo de balompié brasileño, y el negro Pelé es el símbolo de la movilidad social.

Aunque la clase obrera de casi todos los países latinoamericanos tiene muy poca conciencia de sí misma y de su potencialidad política (la revolución boliviana es en cierto modo un caso especial que merece tratamiento

⁴⁶ Véase op. cit. de R. Payne.

⁴⁷ F. H. Cardoso: «Le prolétariat brésilien, situation et comportement social», *Sociologie du Travail*, Vol. 3, No. 4, (1961), pp. 50-65, (pero originalmente elaborado por A. Touraine en «Contribution a la sociologie du mouvement ouvrier: le syndicalisme de contrôle», *Cahiers Internationaux de Sociologie*, Vol. 28, (1960), pp. 57-88.

aparte),⁴⁸ está constantemente al borde de un dilema revolucionario. En condiciones de estabilidad y bajo gobiernos populares nacionalistas, se define con relación a esos gobiernos, tratando de asegurar la movilidad social y cierto grado de éxito económico dentro del sistema. Pero el ejército de trabajadores emigrantes compromete su posición: la amenaza de inestabilidad está siempre latente.

Esto nos hace volver a las cuestiones teóricas por las cuales empezamos. La mayor parte de las investigaciones sociológicas y económicas sobre el obrerismo en América Latina se lleva a cabo ante una perspectiva evolucionista en que las actitudes de los obreros frente a los programas se relacionan con una tipología que utiliza con continuum tradicional-industrial. Como se ha señalado, ésta se puede emplear particularmente cuando se analizan naciones que están industrializándose. Pero no todas las naciones tienen siquiera la posibilidad de industrializarse. La mayor parte de ellas no tienen durante mucho tiempo otra alternativa que mejorar su agricultura mientras tienen que resolver a la vez el problema social del incremento de la población urbana. La urbanización conlleva la creación de expectativas derivadas de una sociedad industrial sin proporcionar la riqueza básica que pueda satisfacer siquiera remotamente esas expectativas. De esta manera se cree que un lumpemproletariado deriva sus ambiciones de la sociedad urbana mientras conserva muchas de las características familiares y culturales de la sociedad rural. Por supuesto, este fenómeno no es nuevo en los países que están desarrollándose: lo que quizás sucede solamente en casi todas partes de América Latina es que en consecuencia ni la estructura rural ni la urbana cambia de un modo apreciable. No es sorprendente que en los obreros «marginales» no se desarrolle una conciencia de clase «industrial»: no hay más que un mínimo medio ambiente industrial en que esto puede ocurrir.

Tanto el análisis funcionalista como el marxista nos plantea por tanto enormes problemas cuando estamos ante situaciones en que no hay desarrollo evidente y absoluto. Al ofrecernos esquemas que entrañan el análisis de sociedades enteras en el contexto de una perspectiva evolucionista, nos ofrecen una u otra opción que, según sugiere la evidencia latinoamericana, conducen a una deformación de la verdad. La clase obrera industrial es incapaz de desarrollar una afectiva actividad política precisamente a causa de la incertidumbre en el desarrollo económico, y a causa de la persistencia

⁴⁸ Véase, de R. Alexander, *The Bolivian National Revolution*, Rutgers U. P., 1958.

de la influencia «tradicional» tanto en la estructura rural como en la urbana. El dilema está bien ejemplificado en Argentina, que es el país latinoamericano más urbanizado y a la vez más industrial, y con un sector agrícola predominante. Desde julio de 1966, la junta militar se ha enfrascado en una política de «liberalismo económico» —devaluación del peso argentino, restricción de los salarios, énfasis en la agricultura más bien que en la industria, limitación de las importaciones industriales y de servicios y medidas generales contra la inflación. En consecuencia se ha agudizado el conflicto entre el gobierno y los sindicatos. Aunque la facción *vandorista* de la CGT que representa los obreros calificados y otros con trabajos estables trató de cooperar con la junta, una gran huelga portuaria llevada a cabo en octubre deterioró las relaciones entre el gobierno y los obreros, y culminó en una triunfante huelga general el 14 de diciembre. El gobierno respondió nombrando al Dr. Guillermo Borda, que anteriormente había sido un activo peronista y abogado de los obreros, Ministro del Interior (responsable de asuntos laborales).⁴⁹ El origen de este conflicto está en el hecho de que Argentina depende casi totalmente de inversiones extranjeras (particularmente estadounidenses) y en el trastorno que ello produce en la economía al poner énfasis en los bienes de consumo y una forma de servicios industriales que la economía no puede soportar. La opción está entre la resistencia —y una exhortación al desarrollo nacional— o una capitulación total ante las presiones capitalistas externas.

Por consiguiente, casi todos los estudios sobre la conciencia de clase en América Latina parecen erráticos. Aunque podría colectarse material sociológico interesante mediante encuestas entre los obreros establecidos en las minas y las ciudades principales, la clave del futuro latinoamericano radica en los obreros «marginales» y rurales. La cultura de éstos, la Iglesia, que no siempre es una influencia reaccionaria, el sistema de parentescos, el patrón de ocupación y tenencia de tierras, la pequeña empresa y la violencia, es la cultura de la mayor parte de los latinoamericanos, la tierra de nadie que no es tradicional ni moderna, sensible solamente a las posibilidades, no a los empeños industriales. Si apenas están conscientes de sí mismos como clase (aunque el surgimiento de ligas campesinas en Brasil y Perú pudiera sugerir que esto no es tan cierto como era), están no obstante conscientes de su amarga pobreza. Esta pobreza es el hecho más estratégico para el futuro de América Latina.

⁴⁹ Para un resumen de los recientes acontecimientos económicos, véase «Argentina», en *B. O. L. S. A. Review*, Vol. I, No. 1 (1967), pp. 2-8.

LAS CLASES SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

Carlos Romeo

La estructura de clases en América Latina.

La realidad social del Tercer mundo y en particular la de América Latina, difiere de la realidad social de los países desarrollados.

El colonialismo y con posterioridad el neocolonialismo, han marcado a estas sociedades con características propias. Querer interpretarlas a través de modelos desarrollados para otras áreas del mundo y para otras épocas, conduce a errores inevitables.

La complejidad del problema para los países de América Latina proviene de varias características específicas.

En primer lugar, en las sociedades latinoamericanas coexisten diversos tipos de relaciones de producción con lo cual la totalidad social responde a un modelo interpretativo que no puede definirse a través de los modelos históricos generales: sociedad feudal, sociedad capitalista pura, sociedad capitalista monopólica, etc.

En segundo lugar, es claramente perceptible en estas sociedades el desnivel tecnológico entre diferentes actividades productivas. En un mismo territorio político-geográfico se encuentran explotaciones con los niveles técnicos más altos del mundo al lado de otras con niveles pertenecientes a la etapa precolombina, pasando por una serie de niveles de desarrollo técnico intermedio.

Este fenómeno define un tipo de sociedad con estratos técnico-económicos que cortan las relaciones sociales a diferentes niveles.

En tercer lugar, la conjunción de las dos características anteriores determina relaciones de explotación y actitudes políticas de las clases ante el

¹ Selección de los tres epígrafes centrales del ensayo «Revolución o resignación», publicado en la revista «Hora Cero», No. 2-3, 1967. (N. de R.).

sistema social imperante, que difieren apreciablemente en América Latina de los fenómenos correspondientes a países desarrollados o a modelos históricamente condicionados, como es el caso del modelo capitalista desarrollado por Marx en *El Capital* o por Lenin en *El Desarrollo del Capitalismo en Rusia*.

Estas características de la realidad social de América Latina obligan a desarrollar un modelo interpretativo propio.

Aunque específico, un modelo de la estructura social de América Latina debe ser elaborado a partir de conceptos científicos generales y de una teoría de la formación y desarrollo de las sociedades. Esta labor fue desarrollada por Marx y en este sentido nuestra interpretación de la estructura social de Latinoamérica pretende ser marxista.

No se trata simplemente de aclarar una posición teórica e ideológica, sino de aprovechar en lo posible la precisión y el rigor científico del marxismo, comprobados durante un siglo de práctica teórica y de práctica revolucionaria.²

El concepto de clase social proviene de un conocimiento de las relaciones que guardan los hombres en el proceso de su vida social. Pero dentro del sistema de relaciones sociales, son determinantes aquellas que expresan la ubicación de los hombres en la infraestructura social, o sea, las relaciones que éstos establecen en la producción, circulación y consumo de los bienes materiales y de los servicios. En última instancia, la disposición de los hombres en la estructura social está dada por sus relaciones con respecto al dominio de los medios de producción.³

² Ver Gunder Frank, *Capitalism and Under-development in Latin America* —Monthly Review Press— en el cual el autor expone una interesante tesis sobre el fenómeno del subdesarrollo económico, que conlleva una interpretación novedosa de la estructura social en los países de América Latina. Coincidimos con Frank en las conclusiones generales de su libro, aunque en su análisis simplifica excesivamente, a nuestro juicio, el problema de las diferentes relaciones sociales de producción que coexisten bajo una integración específica y el problema de los mecanismos de explotación que rigen en los países subdesarrollados, así como en el sistema capitalista en general.

El Instituto del Libro prepara una edición española del libro de Gunder Frank.

³ El concepto de dominio es a nuestro juicio más amplio que el concepto de propiedad. Es conveniente utilizar el primero toda vez que la propiedad no es una condición suficiente para explicar el control efectivo de los medios de producción, fuente del poder económico y político. Ver al respecto *El Capital*, Tomo II, cap. 27.

A partir de este criterio principal (difícilmente puede ser el único en virtud de la variedad en los tipos de relaciones sociales existentes); del conocimiento de la especificidad de las relaciones de producción, es posible definir en primera instancia, las clases existentes en una sociedad.

Nadie duda que en los países de América Latina existen relaciones de producción capitalistas. No son las únicas, pero caracterizan como capitalistas a estas sociedades. Si nos atenemos solamente a ellas en una primera aproximación, podremos encontrar dos grandes clases generales: la clase que domina los medios de producción y la clase de los que son dominados a través de estos medios por la clase dominante. En efecto, la característica de la relación capitalista de producción es la enajenación de los trabajadores con respecto a los medios de producción y la necesidad de vender su fuerza de trabajo como consecuencia de ello.

Al mismo tiempo, quedan definidas las problemáticas principales de cada clase. Para los que dominan los medios de producción, se trata de mantener la relación capitalista de explotación a través de la cual se apropian del excedente generado por los trabajadores. Para los trabajadores, proletarios en el sentido de desposeídos de medios de producción, se trata de recuperar para sí el excedente del cual son continuamente expropiados, lo que conduce a la eliminación de la relación de explotación como única solución permanente.

La división del trabajo bajo la égida de la relación capitalista de producción, lleva a una división funcional del capital (en el sentido de relación social de producción). De esta manera se acostumbra a dividirlo en capital industrial, capital agrícola, capital comercial, capital financiero, etc. Sin embargo, cómo se trata de la misma relación social pero con una finalidad determinada en el concierto de la división social del trabajo, cada división conlleva un par de grupos sociales opuestos, pertenecientes cada uno de ellos a una de las clases antagónicas.

Así se habla del par capitalistas industriales-trabajadores industriales, del par capitalistas agrícolas-trabajadores agrícolas, capitalistas financieros-trabajadores financieros, etc.

Aparece sin embargo, una clase determinada que no juega con esta polarización relativa. Se trata de la clase de los terratenientes o propietarios de la tierra, que por su situación totalmente privilegiada en virtud de la limitación territorial y de la imposibilidad de multiplicarla, se caracteriza por el monopolio que ejerce sobre ella. En virtud de esta posición privile-

giada dentro del sistema capitalista, usufructa una parte del excedente, en calidad de renta, que necesariamente debe traspasarle la clase capitalista en conjunto.

Pese a la condición general de proletarios, entre los trabajadores hay una diferenciación apreciable. Se trata de los factores de tipo histórico y moral que revisten la distinción entre los que podemos denominar trabajadores manuales u obreros y trabajadores no manuales o empleados. A despecho de su situación común con respecto a la relación capitalista de producción, la incidencia de la tradición (de sumisión ante los capitalistas, entre otras) y de determinados valores ideológicos (distinción entre trabajo manual y no manual, diferencia en la educación, etc.), produce una apreciable distinción entre ambos grupos de trabajadores, lo que ha dado origen a concederle el grado de división de clase. En efecto, resulta insuficiente la simple diferenciación de los hombres en virtud del papel desempeñado en la relación de producción —por trascendente que sea— para definir la problemática de las diferentes clases sociales y de sus grupos constituyentes. Encuentra de esta manera su definición la clase pequeñoburguesa, a partir de los trabajadores no manuales y con la agregación de los empleados del Estado y de los trabajadores no manuales por cuenta propia (profesionales, artesanos, etc.). Clase necesaria en el orden capitalista y profundamente influida por la ideología de los capitalistas, aunque con su propia especificidad (con lo cual deviene una ideología pequeñoburguesa) y con su propia problemática contradictoria.

Contradictoria, porque de una parte es una clase sometida a la explotación capitalista y de otra parte es parcialmente redimida del destino del trabajador explotado, aunque en el fondo no sea más que a través de la concesión de un status social intermedio que le permite concebir su tránsito hacia la clase «superior» de los capitalistas, por la posibilidad que su status le abre para lograr el dominio de la técnica, de la ciencia, de las relaciones sociales y de la cultura.

La división del capital en función del papel que juega en la división del trabajo permite diferenciar los grupos capitalistas que resultan significativos para entender la estructura social, las diferentes problemáticas a que da lugar y las contradicciones que surgen entre los diferentes grupos conjuntamente a las contradicciones de clase.

Es así como en los países latinoamericanos donde el comercio exterior juega un papel decisivo, se han creado los conceptos de «clase comercial importadora» y de «clase comercial exportadora», para reflejar el papel

significativo que tienen estos grupos de capitalistas en la sociedad y las problemáticas específicas a que da lugar ese papel.

Hasta aquí no hemos hecho otra cosa que reflejar el análisis tradicional de la estructura de clases en una sociedad hipotética donde existen *exclusivamente* relaciones capitalistas de producción.

Este no es el caso en América Latina. Además del campesinado, que también existe como clase en los países europeos desarrollados, e inclusive en los propios Estados Unidos (aunque en vías de rápida desaparición), las sociedades latinoamericanas presentan fenómenos tales como los inquilinos, arrendatarios, colonos, etc., en los latifundios, la comunidad indígena, los aparceros y precaristas, etc. Además, a consecuencia del subdesarrollo, la migración del campo hacia la ciudad provoca un fenómeno social que no tiene la misma contrapartida en Europa o en Norte América. Se trata del hacinamiento humano de trabajadores marginales, desocupados permanentes y transitorios, lumpen, etc., en los cinturones habitacionales de las grandes ciudades de América Latina: las «poblaciones callampas» en Santiago de Chile, las «villamiserías» en Buenos Aires, las «favelas» en Río de Janeiro, las «barriadas» en Lima, etc.

Todos estos fenómenos particulares de América Latina se encuentran a su vez situados en el contexto de una distribución económica demográfica típica de los países subdesarrollados: la relativamente alta proporción constituida por la agricultura y la población rural en el contexto de la economía nacional y de su población total. Es precisamente en ese contexto que se sitúa el latifundismo, la aparcería, los precaristas, las poblaciones marginales de las grandes urbes, etc.

El aspecto externo de estos fenómenos han dado lugar a la imagen de la existencia de feudalismo en América Latina, o por lo menos de la coexistencia de una sociedad no capitalista con una sociedad moderna capitalista, integrando de esta manera la sociedad mixta o dual. De aquí ha podido surgir en el plano político la idea de que América Latina requiere una revolución democrático-burguesa con el fin de destruir la sociedad feudal que imposibilita, o traba al menos, el desarrollo de la otra sociedad, la sociedad capitalista moderna.

Las características específicas de estas sociedades han dado lugar a la ilusión de que el problema político adicional que confrontan es precisamente liberarlas de esa rémora del pasado para que pueda darse el desarrollo social y económico que prescriben los modelos concebidos para sociedades capitalistas desarrolladas de Europa o de Norte América, es-

decir, los modelos del capitalismo «puro» o del capitalismo monopólico. Ha venido, aparentemente, a confirmar esta apreciación, la aparición violenta del monopolio en la industria, el comercio y las finanzas de los países latinoamericanos. Tal pareciera que estas sociedades hubieran envejecido prematuramente y que en un cuerpo no desarrollado, se revelaran las características de la vejez capitalista.

Concepciones de este tipo llevan en el plano político a la formulación de estrategias basadas en alianzas de clases para lograr objetivos que pueden no tener significación histórica. Perseguir una revolución democrático-burguesa antifeudal donde no se presenta la necesidad de implantar la democracia burguesa y la destrucción de un orden feudal (aunque sólo, sea en una parte de la sociedad), porque ya existe dicha democracia burguesa (aunque con sus características específicas) y porque no existe un orden feudal (aunque existan relaciones de ese tipo), es errar completamente en política. Es luchar por algo que ya existe, por un orden social existente, y por tanto necesariamente limitado en su objetivo por debajo del que realmente plantea la situación histórica concreta.

En este sentido, aunque correcta desde el punto de vista del significado que apunta, la idea de que América Latina está grávida de dos revoluciones —la democrático-burguesa y la socialista— no pudiendo desencadenar una sin desencadenar la otra, no corresponde exactamente a los hechos. Se trata de una sola revolución destinada a destruir un orden social estructurado en dominante por las relaciones capitalistas de producción, y que por tanto sólo puede ser socialista.⁴

COEXISTENCIA DE DIFERENTES RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION EN PAISES LATINOAMERICANOS

El problema de la coexistencia de relaciones sociales de producción diferentes en América Latina comienza con el campesinado propiamente dicho. Ciertamente, esta clase no es una característica especial de nuestro continente toda vez que es común a sociedades más desarrolladas de Europa o de Norte América, amén de haber sido parte integrante y destacada del capitalismo «desarrollado» de mediados del siglo XIX, estudiado por Marx. Sin embargo, en América Latina, el campesinado presenta aspectos particulares que resultan altamente significativos en el plano político.

⁴ Esta afirmación de Debray aparece en su artículo *América Latina: algunos problemas de estrategia revolucionaria* y apunta hacia el carácter socialista de la revolución en este continente.

En primer lugar, en la agricultura típica de América Latina, el campesinado no tiene una situación dominante ni mucho menos.

El campesino es, desde el punto de vista de las relaciones de producción, un productor individual, propietario de sus medios de producción, entre ellos de la tierra. Precisado de esta manera, el campesino no responde a una relación de producción capitalista sino a una relación distinta que ha coexistido con ella y que es progresivamente eliminada en los países económicamente avanzados en la medida en que se desarrolla el capitalismo como relación principal, tanto en extensión como en profundidad. Al respecto, el desarrollo de la agricultura durante los últimos diez o doce años en los Estados Unidos, Canadá, República Federal Alemana, muestra una reducción paulatina y sistemática del campesinado en favor de la extensión de las explotaciones agrícolas capitalistas.⁵

En su expresión clásica, es decir, referida a los países capitalistas desarrollados, el campesinado fue durante una etapa histórica determinada una relación de producción dominante en la agricultura.

En América Latina su origen y su destino ha sido otro.

El capitalismo llega al continente y se desarrolla «bordeando» una agricultura latifundista, originada en el período colonial español, que puede ser catalogada como de tipo feudal. Las relaciones capitalistas de producción son detenidas en las fronteras de la agricultura por la fuerza de las relaciones no capitalistas asentadas en los latifundios, siendo penetradas marginalmente y dando origen a lo que es la agricultura capitalista propiamente dicha.⁶

⁵ Ver FAO: El desarrollo mundial de la agricultura en el decenio 1955-1965.

⁶ Es sintomático que el desarrollo agrícola capitalista en América Latina haya tenido lugar en zonas de colonización europea, durante el siglo XIX o haya sido consecuencia de la inversión extranjera (en este caso bajo la forma de plantaciones).

Quizás en este aspecto radique una de las dificultades que confrontan muchos observadores marxistas para entender la política económica de la Revolución Cubana. A nuestro entender Fidel Castro nunca creyó que la solución de los problemas de los trabajadores del campo pudiera limitarse a una simple reforma agraria. Desde su inicio, desde la Ley de reforma agraria en mayo de 1959, la política de los revolucionarios cubanos fue llevar a cabo una «revolución agraria» en el sentido de cambiar radicalmente el conjunto de las condiciones de la vida en el interior del país. Debe recordarse a las «tiendas del pueblo», hospitales, escuelas y particularmente el experimento llevado a cabo en la zona PR-2, las «cooperativas» (en verdad granjas estatales) Hermanos Sáinz y El Rosario, en Pinar del Río. El objetivo era, además de elevar la productividad del trabajo y de la tierra mediante el desarrollo técnico, cambiar las condiciones ambientales que determinan las formas de vida. Ello incluía hasta el terreno del arte (los instructores de arte). Hoy en día, la prosecución de esta política se encuentra materializada en proyectos

También el campesinado ve su desarrollo constreñido por el latifundio. O bien tiene que adquirir la tierra del latifundista o bien debe marchar «hacia la frontera» y desmontar nuevas tierras más allá de los grandes dominios, corriendo el riesgo que le sean posteriormente expropiadas por los propios latifundistas o por los nuevos capitalistas del agro. En general fuera de un grupo de campesinos que logran un nivel de vida acomodado —fundamentalmente en virtud de que se transforman en pequeños capitalistas al desenvolver su explotación mediante el trabajo asalariado— la clase campesina se caracteriza por su pobreza tanto relativa como absoluta. En la raíz de su situación se encuentra el desplazamiento de que ha sido objeto hacia las áreas marginales de la agricultura y a veces de la extensión territorial nacional.

Viviendo y trabajando en zonas con malas tierras o si no es el caso, en una topografía adversa y con escasez o sobreabundancia de agua, lejos de los centros de consumo, desprovistos de las ventajas que brinda el capital social (carreteras, vías férreas, obras de riego), prácticamente sin asistencia médica ni escuelas para sus hijos, están condenados al ostracismo social y simultáneamente a un trabajo que la sociedad requiere.

Explotados por los bajos precios a que deben vender y por los altos precios a que deben comprar, sin asistencia financiera bancaria por no disponer de garantías adecuadas, caen en manos de los usureros rurales y se endeudan de por vida.

Poco a poco la tradición inscribe en la ideología burguesa y pequeñoburguesa una subvaloración de la existencia campesina. El nivel subhumano de vida es considerado como natural cuando no explicado «teóricamente» por la baja productividad de su trabajo. ¡Colmo de la mistificación ideológica que se quiere hacer pasar por ciencia!

Para los campesinos propiamente dichos, su problemática no consiste solamente en la carencia de tierra. Para empezar, ya son dueños de la que tienen. Cuando más, se trataría de reclamar tierras mejores. Son muchas más las reivindicaciones decisivas que la conforman: salubridad, educación,

como «San Andrés», en Pinar del Río, «Gran Tierras», en Oriente en la edificación masiva de «internados de montañas» para los hijos de los campesinos, etc.

Pero además de todo esto, la Revolución se dedicó a dignificar al trabajador del campo. Recuérdese la «invasión» de La Habana por campesinos el 26 de julio de 1959 y su contrapartida actual, la invasión del campo por trabajadores y estudiantes de la ciudad, que además de resolver un problema de escasez estacional de fuerza de trabajo, persigue revelarles a los pobladores urbanos de La Habana principalmente, el verdadero rostro de Cuba heredado del capitalismo.

para los hijos, mejores precios para lo que venden y precios más favorables para lo que compran, ayuda financiera y técnica para poder producir más con los brazos de que dispone la familia, una casa mejor, etc. ¡Y eso que no conocen las formas de la vida moderna de la gran ciudad! Su problemática reclama un conjunto tal de reivindicaciones que sólo pueden ser logradas mediante un cambio de régimen social que aporte, además, una nueva ideología que rechace el abuso de poder al cual son tan sensibles, la humillación constante, etc.

En dos palabras: que los saque del olvido y de la postergación permanente a que están condenados, al concederles un status social con los mismos derechos que las clases más afortunadas. Limitar, por tanto, la problemática campesina fundamentalmente a la cuestión de la tierra es ignorar el resto de los problemas vitales a que están condenados y presuponer una especie de determinismo mecánico por el cual, resuelta la cuestión de la tierra —que dicho sea de paso está ya resuelta en el caso del campesinado propiamente dicho— estaría cimentada la base de un sistema de vida que provocaría un mejoramiento continuo del nivel de ingreso de esta clase social.

Un ejemplo histórico reciente en América Latina es la Reforma agraria boliviana, llevada a cabo a raíz de la revolución de 1952. No hay ninguna duda de que en ese proceso hubo una efectiva expropiación y reparto de la tierra en beneficio de las masas indígenas que pueblan el interior del país. Sin embargo, 15 años después, los niveles de miseria que acusa el campo boliviano no tienen parangón en el continente y precisamente sobre esta base económica y social se está desarrollando un proceso revolucionario armado que ha venido a conmover a América Latina.

Con razón un comandante guerrillero venezolano decía, que no era por la tierra que el campesino se incorporaba a la guerrilla, porque lo primero que hacía al dar ese paso era precisamente abandonar su «conuco» con todas sus pertenencias. Se incorporaba en busca de otra forma de existencia social a través de la vía insurreccional armada.

En la agricultura latinoamericana, aun donde existen relaciones capitalistas de producción, se presenta un fenómeno general típico de este continente. Se trata del desempleo estacional cuya duración es hasta varias veces la del período de empleo durante las cosechas y el cultivo de los campos.

Desposeídos de la tierra, estos verdaderos proletarios dependen fundamentalmente del salario para sobrevivir junto con su familia. Sin embargo, durante la mayor parte del año no encuentran trabajo asalariado y deben

apoyarse en los ingresos que perciben durante el corto período de cosecha y las fases del cultivo manual para enfrentar la vida durante los doce meses del año.

Se comprende que estos obreros agrícolas tiendan a asegurar el sustento mediante trabajos complementarios y de ahí que exista una presión sobre la tierra que posibilitara el mantenimiento de relaciones de tipo feudal como la aparcería, el mejorero, y relaciones (de desesperación) como el precarista.

Para estos proletarios del campo la cuestión fundamental es encontrar trabajo durante todo el año, la seguridad de poder obtener continuamente un ingreso monetario. Por ello, la proletarización los lleva a exigir en primer lugar el trabajo estable y no la posesión de la tierra que cultivan para otros. De esta manera escapan al endeudamiento con los comerciantes del interior y hasta con los comercios de la propia explotación donde trabajan circunstancialmente en donde, además de cobrarles precios de usura y un desmesurado interés por los préstamos, los atan obligándoles a volver para la siguiente cosecha a fin de saldar sus deudas.

Trabajo estable, salario adecuado a sus necesidades —por demás modestas— precios razonables por los productos que deben comprar para vivir, he aquí las reivindicaciones principales que exigen en el terreno material, además de las consabidas exigencias referentes a las condiciones socioambientales que no son otras que las mismas de los campesinos: escuelas, salubridad a su alcance, etc. Y junto a ellas, el respeto a su persona, la igualdad ante la ley, el justo reconocimiento social, es decir, reconocimiento a su dignidad humana.

Hasta aquí, incluyendo al campesino propiamente dicho, coexistirían tres relaciones de producción diferentes en la agricultura y en la sociedad latinoamericana.

En primer lugar, las relaciones de producción latifundistas no capitalistas entre, de una parte, el dueño de la tierra y, de la otra parte, los trabajadores de esa tierra a la cual se encuentran atados de una manera que recuerda al siervo feudal, mediante la concesión de una parcela de tierra para su usufructo, una vivienda o el derecho de construir su vivienda en el latifundio y la obligación de trabajar un cierto número de días para el latifundista. En segundo lugar, las relaciones de producción capitalistas, típicas de la industria, donde encontramos en el caso de la agricultura, de un lado al empresario (que puede también ser dueño de la tierra) y de otro lado a los trabajadores que venden su fuerza de trabajo por un salario, dando

origen a un proletariado agrícola. Esta relación adquiere una importancia decisiva en aquellos países que desarrollaron una agricultura latifundista de plantación, a partir de relaciones esclavistas (caña de azúcar, café, algodón, etc.), para después dar paso a relaciones capitalistas. Con ello, el panorama político se altera sustancialmente pudiendo dar origen a fenómenos revolucionarios propios, antes y después de la toma del poder (caso de Cuba, por ejemplo, y su Reforma agraria radical sin pasar por la fase cooperativa).

En tercer lugar; los campesinos propiamente dichos, en general muy pobres y ocupando la periferia de la agricultura y de la sociedad.

Sin embargo, estas relaciones no son las únicas. Todavía hay que incluir a los aparceros y a los precaristas.

La aparcería consiste en el arrendamiento de la tierra de un latifundista a un trabajador agrícola, a cambio de una parte de la cosecha que logra con sus propios recursos.⁷ Se trata de una forma de renta y de una especie de campesino. Dado el alto nivel que tradicionalmente tiene esta renta, la situación del aparcerero está por debajo del campesino, inclusive, por debajo de un obrero agrícola, sobre todo en zonas donde domina la plantación. Por ello, no es raro que un aparcerero sea también obrero agrícola estacional (particularmente en tiempos de cosecha, cuando la demanda de trabajo es máxima).

El precarista constituye el fondo de la pirámide social. Desprovisto de la tierra, sencillamente se apropia transitoriamente de un área marginal, cualquiera, donde siembra, vive y cosecha (si puede) bajo el permanente riesgo de ser expulsado de ella sin ninguna posibilidad de resistencia.

El precarista se agarra con las uñas a la tierra para poder aferrarse a la vida que para él decursa en la ilegalidad burguesa.

Conjuntamente con los campesinos propiamente dichos, los aparceros y precaristas constituyen el estrato más bajo de la sociedad, tanto desde el punto de vista de su capacidad productiva, como del status social al que los condena su marginalidad. Lo que puede decirse con respecto a la problemática de la clase campesina puede sustentarse para estos últimos. Cuando más, es posible diferenciarlos por una reivindicación inmediata que ambos exigen. En el caso del aparcerero, la eliminación de la renta

⁷ Incluimos en esta relación general a los campesinos que arriendan la tierra que trabajan, mediante el pago de una renta en dinero al propietario, que resulta ser en muchos casos un latifundista.

que paga por la tierra que trabaja. En el caso del precarista, la seguridad de poder contar con una tierra propia para trabajar. Pero adicionalmente a ellas, y sobrepasándolas en mucho, están todas las reivindicaciones restantes que conducen en última instancia a un cambio radical de status social y material como única posibilidad de solución definitiva.

Sin embargo, esto aún no es todo. En ciertos países de América Latina encontramos las comunidades indígenas con sus propias relaciones de producción, su propio idioma y hasta con su propia cultura. Tocamos de lleno el problema de las nacionalidades oprimidas.

Aunque anacrónicas, particularmente si se las considera desde el punto de vista de un observador de país desarrollado, estas relaciones de producción tienen una extraordinaria importancia social y por ende política y revolucionaria en los países donde la población indígena es significativa. A pesar de constituir un segmento de la población tanto o más explotado que los campesinos, precaristas y aparceros, en la problemática de esos grupos nacionales pesan factores adicionales importantes que tienen que ver con hechos ocurridos durante siglos. La persistencia de la cultura autóctona o por lo menos de algunos de sus elementos, permitió conservar una historia propia en la cual han sido recogidos los episodios de la conquista y esclavización española. Recordemos que fueron derrotados, explotados, masacrados y humillados, desposeídos de sus tierras y empujados continuamente hacia las zonas menos fértiles y adecuadas para la agricultura.

Además, en la ideología burguesa y pequeñoburguesa e, inclusive, en la ideología de las clases trabajadoras blancas, toma forma la expresión del status social a que fueron condenados por vía de la tradición y apareció la discriminación racial. En ella se encuentran las justificaciones y racionalizaciones que forjan las clases que directa o indirectamente se aprovechan o creen aprovecharse de la discriminación.

Así, en el caso de las comunidades indígenas, a todas las causas de explotación y abandono social que comparten con los campesinos, precaristas y aparceros, viene a sumarse este conjunto de reivindicaciones históricas y morales propias de su status en la estructura de la sociedad. Y de la misma manera que para los casos anteriores, el problema no puede limitarse a una simple cuestión de tierras sino que por su complejidad y profundidad, exige para ser solucionado un cambio radical en el régimen social imperante. Mientras ello no suceda seguirá habiendo en las comunidades

indígenas así como en el campesinado, precaristas y aparceros, una bomba social en espera de alguien que la haga detonar.

De la misma manera que existen relaciones específicas en la agricultura de los países latinoamericanos, también adquieren rasgos particulares y característicos las relaciones sociales de la zona urbana y en particular de la gran urbe moderna.

Las poblaciones marginales de la gran ciudad (poblaciones callampas, villamiserías, favelas, etc.), encierran un conjunto de relaciones diferentes.

Su principal origen es el exceso de población rural que se vuelca en la ciudad y que deviene en exceso de población urbana por la incapacidad de la economía citadina para absorberla. Con ella queda reflejada la dinámica insuficiente de la industria para darle trabajo al crecimiento demográfico excedente del interior del país y de la propia ciudad.

No encontrando ocupación en la actividad industrial, el remanente desocupado se precipita sobre los servicios como última posibilidad para encontrar trabajo. Así, las estadísticas económicas de los países latinoamericanos revelan una exagerada desproporción en estas actividades con relación al peso de las actividades productivas en la economía nacional.

Sin embargo, aún queda un importante remanente de la población urbana sin trabajo. Esta pende como espada de Damocles sobre el mercado de trabajo y constituye el factor más desfavorable al movimiento sindical para luchar por sus reivindicaciones económicas. Su presencia objetiva no deja de hacerse sentir y con mayor fuerza donde la proporción de obreros sindicalizados es relativamente baja.⁸

Es sobre esta base social y económica que se constituyen las «áreas marginales» típicas de las grandes ciudades de América Latina, en donde conviven trabajadores industriales pobremente pagados, familiares desempleados, desempleados encubiertos por miserables actividades comerciales o de servicio tales como vendedores ambulantes, lustrabotas, vendedores de periódicos, etc. y *lumpen*.

Es difícil precisar una problemática para estos grupos sociales pertenecientes a distintas clases sociales. Sin embargo, un rasgo común a todos es el conocimiento de las formas más desarrolladas de la vida moderna que pueden observar en la gran ciudad. Para ellos no hay ignorancia con respecto a lo que el hombre del siglo xx puede esperar de la ciencia y de

⁸ En Chile, país tradicionalmente considerado como con una fuerte organización sindical, el porcentaje de obreros sindicalizados no pasa del 10% del total.

la técnica. Aunque en una mínima parte, participan de las ventajas que representa la concentración del capital social en las grandes ciudades de América Latina.

Han reemplazado la lámpara primitiva de aceite o kerosena por la electricidad; el acarreo del agua desde sitios más o menos distantes a lomo de mujer y de niño, por el agua corriente y purificada que sale en el peor de los casos de la pluma común; las horas de marcha a pie a través de lomas y campos, por el viaje de minutos en ómnibus; la ausencia total de hospital, policlínico y farmacia en horas y a veces días de marcha desde la choza, por la atención médica en el área de la ciudad.

Aunque el «solar», la «callampa», la «favela», etcétera, representan límites máximos de la pobreza en la ciudad, no alcanzan todavía la miseria de la choza, del bohío, del conuco, etc. en que vive el hombre del campo.

Si llegan y siguen llegando a la ciudad y se quedan en ella, es porque han encontrado ambiente y una forma de vida superior a la que acaban de dejar en el interior del país.

Si bien es cierto que su integración a la ciudad los une y posibilita la organización política, representan una base social que se disputan los partidos de la izquierda y las fuerzas del reformismo burgués.

La revelación del grado de diferencia abismante que existe entre su suerte y la que tenían anteriormente como habitantes del interior y las capas privilegiadas de la ciudad, la discriminación de que son objeto con relación a participar en el bienestar que proporciona el capitalismo para algunos, representa tanto una base para la toma de conciencia política progresista, como una base para devenir instrumentos del reformismo.

Perón encontró en los «cabezas negras» una de sus más importantes bases sociales de sustentación y de despliegue en los actos de masas con los que asombraba al continente, posando de antimperialista.

Frei, en la actualidad, basa su política de división obrera y sindical en la utilización de las «poblaciones marginales»; como las llama, predicándoles la necesidad de reivindicaciones contra los «aristócratas de la clase obrera» sindicalizados, al mismo tiempo que regala máquinas de coser, paquetes de alimentos (proporcionados por Caritas), etc.

Sin embargo, fueron los «ranchitos» de Caracas la base del movimiento revolucionario armado urbano que estremeció al régimen de Betancourt hasta que fue prácticamente liquidado después de las elecciones de 1963.

En los países donde la población marginal de las grandes urbes actuó en favor del reformismo burgués, fracasaron los partidos de la izquierda para

movilizarla unida en la prosecución de objetivos políticos revolucionarios. No fue solamente culpa de estos grupos sino en muy importante medida, de la incapacidad política revolucionaria de los partidos. Así y todo, queda de manifiesto una actitud contradictoria con respecto a la lucha política por parte de estos grupos marginales. Muy bien pudiera ser que ello reflejara la situación contradictoria en que se encuentran dentro de la estructura social.

Por una parte, marginados del bienestar que genera la sociedad para una minoría —discriminación palpable en la gran ciudad, de la cual adquieren conciencia— y, por otra parte, redimidos de una discriminación y de una miseria aún más espantosa que reinan en el interior del país subdesarrollado.

Sin embargo, la generalización oculta problemáticas y comportamientos políticos diferentes. Algunos, mal remunerados pero obreros al fin, han logrado sindicalizarse e inclusive incorporarse a partidos políticos. A través de estos vínculos, están bajo la influencia directa de las dirigencias políticas de los partidos en los cuales militan o indirectamente, a través de los sindicatos controlados por los partidos. Su suerte está más o menos vinculada a la acción colectiva en el plano económico que, con preferencia manifiesta, ocupa la preocupación de los partidos de izquierda en América Latina, salvo en los momentos «definitorios» de las grandes campañas electorales. Pero pasados estos momentos, la vida rutinaria sigue su camino, conduciendo a la frustración y al oportunismo político.

Así, se gesta lentamente el caldo de cultivo para que el reformismo burgués reemplace entre ellos al reformismo de izquierda.

Decir marginal es decir necesario al orden y al funcionamiento social, pero circunscrito a la periferia del centro alrededor del cual gravitan.

Las poblaciones marginales de las grandes ciudades latinoamericanas cumplen la función de ser explotadas y coadyuvar el mantenimiento del status social imperante. Brindan mano de obra barata, servicios baratos y un nivel social inferior en el mando urbano. Son, por tanto, prisioneros del orden social y deben aceptarlo si es que quieren mantener la reivindicación lograda al escapar de la miseria reinante en el interior del país.

La tradición les da también a ellos una ubicación precisa en la ideología dominante. En Chile, se ha gestado un término «folklórico» para designarla. Es el «roto», sustancial a la sociedad chilena y glorificado hasta en monumentos públicos; ¡se habla de los «valores» del roto!

Individualmente tienen posibilidad de escapar a su suerte y trepar hacia estratos sociales más altos y a niveles de vida más cómodos. Pero como grupo, están condenados a mantenerse en el lugar que les asigna el sistema capitalista «subdesarrollado». Son la víctima más evidente de la incapacidad del neocolonialismo en el plano económico.

A diferencia de los campesinos, aparceros, precaristas, comunidades indígenas, participan más de las ventajas de la sociedad capitalista subdesarrollada por estar orgánicamente vinculados a los centros de concentración del capital social. Tienen algo que perder, además de sus vidas, en una revolución.

Así todo, como conjunto, únicamente escaparán de su suerte escapando de la estructura social que los aprisiona.

Lo que es común a todas estas relaciones de producción que coexisten en la agricultura y en general, en todo el país, es la dominación incontrastable que ejercen las formas mercantiles y los mecanismos de funcionamiento propio de las relaciones capitalistas de producción. Es así como la mercancía va dominando paulatinamente sobre la producción y con ello el uso del dinero, lo que posibilita y desarrolla el intercambio, no sólo de la industria nacional con todas las regiones del agro, sino que también de la gran producción foránea importada desde las zonas desarrolladas del mundo.

De esta manera, se ha ido extendiendo y ampliando una corriente de intercambio que va de las grandes metrópolis, primero coloniales y hoy en día neocolonialistas, hasta las comunidades indígenas de América Latina, pasando por aparceros, precaristas, campesinos, capitalistas y obreros de la agricultura, latifundistas y peones, capitalistas industriales y obreros industriales, etc.

De la misma manera, formas típicas del capitalismo —capital (en el sentido del activo contable), ganancia, salario, interés— van dominando en la práctica económica, aunque sobre el andamiaje de relaciones de producción capitalistas y no capitalistas. El peón de la hacienda sigue siendo esencialmente un peón, pero ahora percibe un salario miserable por cuya apariencia puede lucir obrero, aunque en verdad sigue preso de una relación de tipo feudal con el latifundista. Este último mide su haber en la contabilidad a través del concepto de capital, paga intereses al banco por los préstamos que percibe y que gratamente le conceden en vista de su inmejorable garantía inmueble, calcula una cuota de «ganancia» con res-

pecto a su «capital» pero se comporta como latifundista y no como capitalista en cuanto a sus decisiones de producir e invertir en la agricultura.⁹

No obstante, pese a la utilización práctica de estas «categorías» del capitalismo, no se observa la clásica disolución de las relaciones precapitalistas que su vigencia aparentemente debería ocasionar: la realidad indica lo contrario.

El dominio de las relaciones de producción capitalistas en zonas donde existen relaciones de producción precapitalistas y no capitalistas, como en el caso de América Latina, no implica la desaparición de estas últimas. Por el contrario, adecúa las relaciones precapitalistas y no capitalistas a las formas de funcionamiento del capitalismo, integrándose éstas orgánicamente a lo que puede denominarse la esfera de acción capitalista propiamente dicha. De esta manera, se formaron estructuras nacionales caracterizadas por el dominio de las relaciones de producción capitalistas y por la adecuación de las relaciones precapitalistas y no capitalistas a las primeras, *constituyendo un todo social estructurado «en dominante»* en donde imperan las leyes del funcionamiento capitalista.¹⁰

La realidad económica y social de los países de América Latina constituye, pues, una estructura específica que no es ni la estructura capitalista «pura», ni la estructura feudal «pura», ni tampoco la estructura del capitalismo monopolítico. Pero tampoco es una estructura «dual» o mixta.

De esta última confusión surge toda una escolástica de la cual están pla-

⁹ Sin embargo, puede comportarse simultáneamente como el capitalista más avisado y emprendedor en la industria, el comercio, las finanzas o en las especulaciones con bienes raíces.

¹⁰ En los análisis marxistas, suele asociarse rígidamente una relación social de producción determinada con un determinado modo social de producción, históricamente dado, lo que a nuestro juicio es un error. No es contradictorio, por ejemplo, que una relación de producción de tipo feudal sea desarrollada por la dinámica mercantil e incluso por la dinámica mercantil capitalista. Tal habría sido el caso en Chile durante el siglo XVIII, cuando la demanda de trigo desde el Perú habría ocasionado una escasez de tierras y de mano de obra. La solución fue una relación de producción de tipo feudal basada en el monopolio de la tierra, es decir el inquilinaje. Dadas las variantes técnicas susceptibles de utilizarse y las condiciones existentes para la producción agropecuaria (tierra, agua, mano de obra, etc.), así como la superestructura institucional, la mejor solución habría sido el inquilino, que recuerda enormemente al siervo feudal. (Ver *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, de Gunder Frank). Las relaciones sociales de producción son el producto de condiciones específicas y no categorías metafísicas; históricamente situadas en el tiempo.

No se explicaría de otra forma, por ejemplo, la existencia de relaciones de producción del tipo esclavista en el Sur de los EE.UU. hasta mediados del siglo XIX, desarrolladas sin lugar a dudas por una dinámica mercantil capitalista.

gados los análisis políticos «marxistas» de los países latinoamericanos. Por ejemplo, se discute si en los latifundios existen relaciones feudales o capitalistas y para ello, se argumenta en pro o en contra, apelando a la existencia de «categorías» como salario en contraposición al pago en especie, ganancias versus renta, etc. La realidad es más compleja, porque coexisten relaciones de producción y formas de propiedad de tipo feudal —inquilino o peón, latifundio o gran hacienda— con formas típicas del capitalismo en utilización práctica —capital, ganancia, salario, obrero, interés, etc.— en un mismo país, en una misma región y en una misma explotación agrícola.

Así, en el caso de la agricultura, por ejemplo, lo que da la pauta a la coexistencia e integración de distintas relaciones de producción, aparentemente antagónicas según la «ortodoxia», es la unión de agricultores capitalistas y latifundistas en una misma asociación destinada a la defensa de los intereses de los grandes agricultores: Sociedad nacional de agricultores, en Chile; Asociación de hacendados de Cuba, antes de la Revolución, etc.

La teoría de la «dualidad» de las sociedades «atrasadas» latinoamericanas —existencia simultánea de un sector capitalista moderno y de un sector feudal atrasado— surge por tanto como una solución de emergencia destinada a mantener a flote una concepción determinista y mecánica del desarrollo histórico de las sociedades, por la cual el capital debe necesariamente desplazar a las relaciones precapitalistas, disolverlas y mediante este proceso crear las condiciones para su propio desarrollo. Como obviamente en América Latina coexisten relaciones de producción no capitalistas, en un importante dominio de la economía, con relaciones de producción capitalista, no queda otro remedio que reconocer esta dualidad y explicarla por la acción externa, es decir, por el apoyo del imperialismo a la oligarquía latifundista a cambio de su incondicional lealtad a la existencia de las inversiones extranjeras y, al dominio político y económico de la metrópoli extranjera.

Así, queda constituido un modelo, evidentemente ideológico, que explica el retraso de las sociedades latinoamericanas en virtud de su pasado colonial y de la penetración imperialista.

Pero además, como en estos países los niveles de productividad del trabajo y de ingreso per cápita son relativamente muy bajos, se concluye que son economías *históricamente subdesarrolladas* en virtud precisamente del retraso que presentan en su «desarrollo histórico».

Suele compararse la situación de los países subdesarrollados del Tercer mundo con la situación de los países desarrollados del centro capitalista mundial en función de un mismo tiempo y concluimos que los primeros están «retrasados» con respecto a los segundos. Por tanto, partiendo de este enfoque, tratamos de concebir la manera de «adelantar» la evolución de los países subdesarrollados, de «quemar etapas», sobrentendiendo que deberán recorrer más rápidamente el camino ya logrado por los países desarrollados.

De esta manera se plantea el problema de los países «nuevos» con relación a los países «viejos». La falacia involucrada en este razonamiento parte de lo que Althusser denomina una concepción «ideológica» del tiempo histórico. Situamos los fenómenos históricos sobre un tiempo físico y medimos a partir de un instante temporal (una fecha) la distancia que separa *hacia adelante* o *hacia atrás* un determinado fenómeno con respecto a otro. Así, podemos hablar del «retraso» de los países subdesarrollados con respecto a la situación de los desarrollados.

El problema es más complejo porque lo aparentemente percibido como una cuestión de retraso o de avance en el tiempo, no es otra cosa que la expresión de una determinada estructura de conjunto que se ha desarrollado englobando a países subdesarrollados y desarrollados al *mismo tiempo* (histórico).

No hay discusión acerca de que los países subdesarrollados —como realidad económica, social y política— *han sido moldeados por fuerzas que emanan desde los centros desarrollados del capitalismo mundial*. No es otra cosa lo que describe la historia del colonialismo y del neocolonialismo. Primeramente utilizando cañones y después la fuerza que proporciona la ventaja técnicoeconómica, los países donde se desarrollaron más rápidamente las relaciones de producción capitalista fueron extendiéndolas hacia la periferia del nuevo sistema.

De esta manera la formación de un sistema mundial capitalista vinculó desde un principio la suerte de los países, hoy en día llamados subdesarrollados, a la suerte de los países «pioneros» del capitalismo.

Si el desarrollo económico desigual ha sido una característica no sólo del capitalismo en el plano internacional de los países ricos sino aun en el interior de estos mismos países, no es más que una expresión de la misma característica del capitalismo el que haya habido desigualdad en el desarrollo de los países que conformaron el centro pionero del sistema y los países que constituyeron su periferia.

Así, el desarrollo de las relaciones capitalistas, como sistema mundial, condicionó el avance de los países pioneros a la adecuación económicosocial de los países periféricos a los primeros, integrándolos de una manera específica a la estructura del conjunto del capitalismo mundial.

De esta manera, en la periferia, en la zona marginal del sistema capitalista, la fuerza de las relaciones de nuevo tipo que emanaban del centro dominó sin contrapeso las realidades económicas y sociales regionales, adecuándolas a las características del funcionamiento y de desarrollo del sistema.

Se explica entonces que, en el margen o la periferia del capitalismo mundial, encontremos sociedades donde coexisten relaciones sociales de producción capitalistas, precapitalistas y no capitalistas, conformando estructuras específicas, construidas sobre la base de la dominación de las relaciones sociales de producción capitalistas.

Desde este punto de vista, la descolonización que se suele presentar como una gran victoria de las fuerzas progresistas del mundo, o sea la transformación de las colonias en neocolonias, obedecería esencialmente a un cambio de las superestructuras políticas, institucionales e ideológicas, con el objeto de adecuarlas al desarrollo económicosocial. Respondería, en última instancia, a la gestación de una clase social, producto de un desarrollo dominado por las relaciones capitalistas e identificadas con él, en la cual la metrópoli colonial puede confiar el poder político con un mínimo de garantía de que podrá conservarlo con su ayuda.

Por cierto, la historia de la «descolonización» está presidida por el signo de la «discusión» entre metrópolis y los personeros de la clase a la cual se le entregó el poder. Salvo casos especiales caracterizados por la presencia en el país colonial de una importante minoría colonialista, firmemente establecida en la economía colonial (Argelia, Rhodesia del Sur, etc.) o por la ausencia de una burguesía nacional capaz de conservar el poder político (Guinea, denominada portuguesa; Mozambique, Angola, Aden, etc.) las metrópolis han entregado el poder voluntariamente a la clase (o a la coalición de clases) nativa capaz de conservarlo y de usarlo en concordancia con sus intereses. No es casual que el proceso de descolonización —salvo los casos mencionados— se haya caracterizado por la ausencia de revoluciones populares anticolonialistas y particularmente, por la ausencia de lucha armada entre colonialistas y colonizados.

Un siglo y medio antes, los colonos blancos, más avanzados, de América Latina, inician la lucha anticolonial en contra de la metrópoli española.

Con la independencia política integran abierta y plenamente sus países al sistema capitalista mundial y moldeadas por su influencia surgen las sociedades actuales del continente. Ciento cincuenta años tuvieron para adecuarse económica y socialmente a los patronos del capitalismo desarrollado. Sin embargo, esto no sucedió —lo sabemos— debido a la manera específica como se estructuraron estas sociedades bajo el dominio capitalista y de vinculación al sistema mundial capitalista, a través de Inglaterra primero y los Estados Unidos después.

Así y todo, hoy en día hay quienes pretenden zanjar este largo intervalo de siglo y medio mediante la realización desfasada en la historia de una revolución antifeudal como si estuviéramos en 1789 y no en 1967. Pretenden retomar el curso de la historia sin darse cuenta que ya discurrió, aunque de una manera particular que no corresponde al esquema interpretativo que a toda costa quieren imponer.

Bajo la consigna de revolución «antifeudal y antimperialista» las masas trabajadoras, alineadas conjuntamente con la burguesía nacional, se precipitarían a la lucha electoral para despejar el camino cerrado durante 150 años al «verdadero desarrollo capitalista». De esta manera, liberados de una barrera histórica, lograda la «segunda independencia» por la posición independiente de los elementos más dignos de la burguesía, el desarrollo capitalista consiguiente crearía inevitablemente las condiciones objetivas para la revolución proletaria que entonces, gracias a la evolución de la correlación de fuerzas en el plano internacional, podría llevarse a cabo por las vías electorales del régimen burgués.

Reconozcamos de una vez que en América Latina estamos en presencia de una estructura social específica, pero capitalista. Aceptemos que no por ser característica de países subdesarrollados no es una *sociedad capitalista tan vieja* como la sociedad de los países «avanzados».

Se trata de sociedades capitalistas subdesarrolladas, en el sentido de la eficiencia lograda por el trabajo y de su bajo nivel de vida, pero históricamente tan desarrolladas como las sociedades capitalistas ricas. Lo que las distingue es la especificidad de su desarrollo en virtud de sus características estructurales también específicas, en el contexto del sistema capitalista mundial.

Por ello, confrontan históricamente no la necesidad de una revolución democrática burguesa y antimperialista, sino que la necesidad de una revolución socialista que debe ser necesariamente, al mismo tiempo, antimperialista.

Estratificación tecnicoeconómica de las sociedades latinoamericanas

No es característica del capitalismo desarrollado la diferenciación abismal en los niveles tecnológicos de los diversos sectores de la economía. Por el contrario, estas diferencias tienden a disminuir. Tal es el caso de la «científica» de la economía, la agricultura, que en los últimos veinte años ha reducido e incluso sobrepasado en algunos casos, la cuantía del capital por trabajador de la industria.

En cambio, en las sociedades latinoamericanas es posible observar una clara estratificación tecnológica.

A la cabeza, sin discusión, las plantas extranjeras dedicadas a la explotación de los recursos naturales. Nada envidian a la tecnología correspondiente utilizada en la metrópoli. Por ello, tecnológicamente hablando, pertenecen a la economía del país de origen del capital.

En lo económico, constituyen ramificaciones de la economía foránea, que si bien están físicamente instaladas en los países dependientes, orgánicamente forman parte de la economía originaria. En otras palabras, no forman parte del sistema económico del país en el cual están situados los capitales extranjeros.

Los obreros que trabajan en estas explotaciones, si es cierto que son originarios del país dependiente, pertenecen de hecho a la clase obrera explotada por el capital del país del cual es oriunda la inversión. Constituyen el estrato más bajo de esa clase por el nivel de su remuneración, que si está influido por el mercado de trabajo del país dependiente.

De todas maneras, el nivel de la remuneración media es superior al que se paga en la economía nacional para calificaciones iguales. Además, perciben determinadas ventajas materiales en el terreno de la vivienda, de los servicios, del abastecimiento, con relación a los trabajadores que laboran para capitalistas criollos en las mismas ramas económicas o en la misma región geográfica.

Desde el punto de vista económico, estos obreros han sido desnacionalizados y constituyen ahora el estrato social marginal de la economía extranjera, con lo cual están involucrados en una relación social de producción también extranjera.¹¹

¹¹ Evidentemente este análisis no puede aplicársele a las explotaciones extranjeras que utilizan tecnólogos semejantes a las explotaciones criollas del mismo tipo. (Caso de los ingenios americanos y nacionales en Cuba antes de la Revolución, en general, los casos de economía de plantación).

Las relaciones económicas que mantienen estos enclaves extranjeros de alta tecnología con la economía criolla son, en última instancia, relaciones de «comercio exterior», provengan tanto de la empresa foránea como de los propios obreros cuando hacen compras en la «economía criolla».

En la «economía criolla» propiamente dicha, también se aprecian grandes diferencias tecnológicas. En primer lugar está la industria.

Es característico de los países latinoamericanos que sus industrias sean marcadamente monopólicas. Ya sea porque hay una sola empresa que domina el mercado de sus productos, ya sea porque se ha constituido un cartel entre unos pocos competidores importantes que fijan los precios a los cuales deben ajustarse los pequeños competidores, la realidad es que en América Latina la estructura monopólica de la industria es una ley general.

La estructura monopólica permite que las grandes empresas industriales obtengan altísimas cuotas de ganancia y que paguen salarios y sueldos sustancialmente por encima del promedio nacional. Pero además, copiando las técnicas de las grandes empresas norteamericanas, brindan una serie de ventajas materiales y asistenciales a sus trabajadores y empleados. Es así como construyen poblaciones que entregan en usufructo a su personal mientras trabajan en la empresa, dispensarios con servicios médicos y dentales gratuitos, comedores populares subvencionados, campos de recreo y deportivos, etc. La empresa ata a sus trabajadores y al mismo tiempo, los separa de sus hermanos de clase a través de la diferenciación en el nivel de vida y en la seguridad del trabajo.

En Chile, en Venezuela, en Perú como anteriormente en Cuba, basta con visitar una empresa industrial importante para darse cuenta del fenómeno. Sin hablar de los trabajadores no manuales de los bancos, compañías de seguros importantes, etc., puede decirse que el capitalismo es «generoso» para con una parte de la clase trabajadora y de la pequeña burguesía. Con razón puede utilizarse el término de «aristocracia obrera» para definir a los beneficiados de las clases obreras de América Latina.

Muy por debajo de estos últimos, el resto de los obreros y empleados que laboran en la industria nacional no monopólica —pequeñas fábricas, talleres, artesanos prósperos, construcción en general, así como las empresas de comercio minoristas, agencias pequeñas de todo tipo, etc.— pertenecen a niveles económicos que desde el punto de vista tecnológico están considerablemente por encima de los que reinan en la agricultura y en la

minería nacional. Aunque formando el grueso de la población urbana y por tanto, los que definen los bajos niveles de los salarios y de los sueldos en los países de América Latina, sus niveles de vida se encuentran muy por encima de los correspondientes a los peones de latifundio, obreros agrícolas, campesinos, aparceros, precaristas y comunidades indígenas.

El estrato economicotécnico al cual pertenecen no es ni con mucho el más bajo de la sociedad. Aún quedan varios más en el interior del país. Todos ellos, junto con los «aristócratas» entre los obreros y empleados, gozan en mayor o menor medida de las ventajas de la civilización que se concentra en las grandes ciudades.

En la agricultura también es posible percibir estratos economicotécnicos diferentes.

De una parte, la agricultura que utiliza técnicas modernas o relativamente modernas y que incluye principalmente a los capitalistas agrícolas y a parte de la agricultura latifundista o más bien a segmentos de latifundios.

En esas condiciones técnicas de producción impera un régimen salarial y un sistema de vida superior al que impera entre los campesinos, aparceros, precaristas, etc., e inclusive por encima del nivel de los peones e inquilinos de los latifundios latinoamericanos. Es el producto de la maquinaria agrícola, de los sistemas de irrigación y drenaje, de la fumigación y fertilización química, de las vaquerías modernas, etc. Puede hablarse así de un estrato tecnicoeconómico surgido de las relaciones de producción capitalistas y que define a su vez un determinado estrato de los trabajadores del campo, tanto en el plano de su nivel de vida como de su pericia técnica y en virtud de ambos, de su integración a las ventajas de la civilización.

Por debajo de ellos, se encuentran los peones de latifundio, obreros estacionales, los campesinos, apareceros y precaristas (también fuente del trabajo estacional que exigen las plantaciones y en general las cosechas), y las comunidades indígenas.

Aquí topamos con la periferia de la sociedad. Formas rudimentarias de trabajo, tecnologías pretéritas, ínfima valoración del trabajo humano ya sea a través de bajísimos salarios o de precios de acopio de las cosechas, que implican remuneraciones netas por debajo del salario agrícola normal. Periferia tanto física por el lugar de asentamiento de la población, como económica por su rol en el contexto social.

En estas condiciones, los hombres aceptan por el producto de su trabajo lo que les dan por ello, sin ninguna posibilidad de evadir estas condiciones que los aprisionan y que no les permiten escapar a ninguna parte, salvo

hacia la periferia de la gran ciudad, donde también existen límites de recepción constituidos por familiares dispuestos a mantenerlos hasta que eventualmente encuentren trabajo.

La sociedad de los países de América Latina presenta, pues, la imagen de círculos concéntricos definidos por estratos tecnicoeconómicos, dependientes los unos de los otros y diferenciados por sus niveles a partir del centro donde están los superiores hasta el borde donde se ubican los inferiores.

En estas condiciones, la dominación de los mecanismos de funcionamiento y de las formas del capitalismo ocasiona efectos muy peculiares, aunque inherentes al capitalismo, que son de trascendencia precisamente por la estructura estratificada de las economías de América Latina.

En los países latinoamericanos domina sin contrapeso la forma mercantil para intercambiar los productos del trabajo.

Desde el centro, de los estratos más altos de la economía nacional (y del estrato aún más alto constituido por la economía foránea desarrollada) fluyen productos (mercancías) hacia los estratos más bajos, hacia la periferia de la misma economía. En sus precios están incluidos la reposición y la ganancia monopólica del gran capital que demanda la técnica moderna, el salario relativamente alto y las demás ventajas que obtienen los obreros de las grandes empresas (además de las ganancias y remuneraciones de los aparatos de distribución mayoristas y minoristas). En esos precios están sancionados e impuestos los niveles más altos de vida no solamente de los burgueses sino que también de los trabajadores manuales y no manuales que pertenecen a los estratos tecnicoeconómicos superiores.

De la misma manera, en virtud de la adecuación de las recaudaciones fiscales a esos patrones, también los precios conllevan el financiamiento público del capital social y de su mantenimiento (mantenimiento y mejoría de las ciudades, carreteras, ferrocarriles, alcantarillados, etc.), del cual disfrutaban los estratos tecnicoeconómicos más altos de la sociedad.

Quien los paga, quien adquiere esos productos, reafirma el estado de cosas marcadamente desigual propio de ese tipo de sociedad y entrega su «voto» para que prosiga funcionando. Por lo demás, no queda ningún otro recurso en el plano económico. El dilema es categórico: comprar lo que hace falta o no comprarlo y privarse de ello.

De otra parte, de los últimos estratos de la economía nacional, fluyen los productos hacia el centro (y hacia el estrato aún más alto de la economía desarrollada extranjera) también en calidad de mercancías.

En sus precios están incluidos la ganancia del capital que los produjo, la renta del dueño de la tierra, los ingresos de los latifundistas. Pero también están incluidos los bajísimos salarios de los trabajadores, la miseria en que viven los trabajadores que los producen.

Si se trata de los productos de los campesinos, precaristas, apareceros, indígenas, en los precios por ellos recibidos, está implícito el sancionamiento de sus condiciones de vida, de la subvaloración de su trabajo (además de los beneficios, salarios y costos de los aparatos de distribución).

Al venderlos, es decir, al encontrar quien compre esos productos, están siendo confirmados y nuevamente sancionados en su situación periférica respecto de la sociedad, en sus condiciones de miseria. Y quienes los adquieren *objetivamente se aprovechan de lo «barato» que resultan.*

De esta manera, el nivel de vida de los que pertenecen a los estratos tecnicoeconómicos más altos está condicionado a los niveles de quienes pertenecen a los estratos más bajos. En el proceso de existencia social capitalista, el mantenimiento de las condiciones de vida de los estratos más elevados de la sociedad exige el *mantenimiento de las condiciones de los estratos más bajos.*

La polarización de riquezas es por tanto una condición *sine qua non* de estas sociedades.

Este fenómeno no es nuevo. Marx, hace un siglo, explicó cómo la concentración de riquezas por parte de los capitalistas conlleva necesariamente la concentración de la pobreza entre los obreros. En las condiciones en que planteó el problema, la polarización actuaba en el sentido de la explotación de clases. Pero he aquí un tipo de sociedad que a la existencia de clases sociales antagónicas une la marcada estratificación tecnicoeconómica. En cada uno de los estratos existen determinadas relaciones sociales de producción, de explotación algunas (capitalistas, latifundarias, rentistas), de no explotación otras (campesinos, comunidad indígena, es decir, de productores individuales o comunitarios, dueños de la tierra y de sus medios de producción). Pero por la dominación de los mecanismos de funcionamiento del capitalismo existe un proceso de transferencia de valores entre los diversos estratos, que va desde la periferia hacia el centro en donde están los estratos más altos y más allá aún, hacia el estrato tecnicoeconómico de la economía desarrollada extranjera.

El intercambio mercantil desigual, propio del capitalismo, tiene plena e importantísima vigencia en las economías subdesarrolladas de América

Latina. Es una relación de explotación entre productores con status técnico-económico desigual que intercambian sus productos a base de un principio de equivalencia que entraña el reconocimiento mutuo de su desigualdad.¹² Poco trabajo incorporado altamente remunerado es cambiado por mucho trabajo incorporado pobremente remunerado. Tal es, en síntesis y de manera descriptiva, lo que está subyacente en el intercambio desigual.

Resultado de la estructura social en la cual las relaciones capitalistas son dominantes, el intercambio desigual preside con carácter de ley objetiva (derivada de la misma estructura social) la redistribución del excedente económico entre las clases sociales.

Sobre esta base se plasma en la ideología el status económico social que sanciona la desigualdad con que se valora el trabajo humano y justifica la polarización de riquezas. Así, un trabajador de empresa americana gana más y vive mejor porque su trabajo «vale» más. En cambio, un campesino o un aparcerero gana una miseria por un trabajo animal y vive en condiciones subhumanas ajeno a la civilización del siglo XX porque su trabajo «vale» muy poco.

Y sobre la base de la ideología imperante, se construyen las interpretaciones «científicas» de la clase dominante, incluso aceptadas por las clases dominadas, que explican la diferenciación en los niveles de vida de los trabajadores por obra y gracia de la productividad del trabajo. A mayor productividad mayor remuneración y, por ende, mayor nivel de vida.

Estas no son otras que las condiciones bajo las cuales intercambian sus productos los países desarrollados y los países subdesarrollados. En el siglo XIX, productos manufacturados por materias primas, hoy en día, materias primas y productos manufacturados de alto nivel tecnológico por materias primas y productos manufacturados de bajo nivel tecnológico. Los productos han cambiado pero la diferencia en los niveles de desarrollo técnico no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado.

Nadie discute que los países desarrollados han experimentado un avance considerablemente más rápido que los países atrasados, con lo cual estos últimos son hoy en día más subdesarrollados que, digamos, a principio de siglo. Con razón se habla del «desarrollo del subdesarrollo» pese a los

¹² Ver al respecto *El intercambio desigual* de M. A. Emmanuel e *Intercambio internacional y desarrollo regional*, de Charles Bettelheim en *Problemas de planificación* No. 2 del Centre D'Etude de Planificación Socialiste-Sorbona. También fueron publicados en Cuba, en los números 5 y 6 de la revista *Económica del Ministerio de Industrias*.

modestos incrementos logrados por estos países en sus niveles de vida desde un punto de vista absoluto.

La desigualdad, y por tanto, la explotación inherente al intercambio capitalista, también opera en el terreno internacional y será inevitable en la medida en que se mantenga la dependencia orgánica de los países subdesarrollados con respecto a los países desarrollados y la diferencia en el nivel técnico de sus economías. No sólo la economía desarrollada extranjera explota la economía nacional, sino que de la misma manera, la industria nacional explota a la agricultura nacional. No solamente la población de las zonas desarrolladas del mundo usufructa de lo «barato» que son los productos de las economías atrasadas. Capitalistas y obreros por igual, disfrutan de lo barato que es el sudor del hombre del Tercer mundo. Asimismo capitalistas y obreros de las ciudades del mundo subdesarrollado usufructan lo barato que resulta el producto proveniente de la agricultura o de las minas.

Resulta, pues, que sobre la base de la explotación del trabajo por los dueños del capital y de la tierra, existe otro proceso de explotación de los estratos económicos inferiores por los estratos superiores, a todo lo largo del sistema capitalista mundial. Si bien es cierto que en la economía desarrollada, los obreros son explotados por los dueños del capital y por los grupos sociales parasitarios inherentes al funcionamiento del capitalismo, el grado de explotación se ve mitigado por la participación de los obreros en la explotación conjunta de las economías del Tercer mundo. Y de la misma manera resulta para los trabajadores de un estrato de la economía subdesarrollada con relación a los estratos inferiores.

Naturaleza, situación y tendencias de la sociedad peruana contemporánea

Aníbal Quijano

La imagen que acerca del Perú es predominante y que comparten prácticamente todas las tendencias ideológicas del país, desde los técnicos y políticos oficiales hasta los grupos de la extrema izquierda insurreccional, presenta a la sociedad peruana actual como proveniente de la sociedad feudal que habría sido establecida por la dominación colonial hispana y que, por la penetración imperialista postcolonial, habría comenzado a ser modificada en un sentido capitalista, de modo sectorial y fragmentario. Como consecuencia, esta sociedad se habría escindido en un sector de tendencia capitalista, radicado en la Costa, y otro de carácter feudal, radicado principalmente en la Sierra.¹

¹. Obsérvese la línea recta que cruza los siguientes textos:

I. «Es por eso que si, según la tesis neo-marxista, 'el imperialismo es la última etapa del capitalismo', esta afirmación no puede aplicarse a todas las regiones de la tierra. En efecto, es la última etapa, pero sólo para los países industrializados que han cumplido todo el proceso de la negación y sucesión de las etapas anteriores. Mas para los países de economía primitiva o retrasada a los que el capitalismo llega bajo la forma imperialista, esta es su primera etapa». Haya de la Torre, V. R. «El antimperialismo y el Apra», Ed. Ercilla, Santiago de Chile 1936, 2ª edición, pág. 21.

II. «Pero esta 'crisis pléyrica' —para usar la certera y avizora calificación del viejo Fourier— nos deja claras enseñanzas confirmatorias de las tesis apristas: el carácter dual de nuestra economía que el imperialismo escinde en dos intensidades, en dos ritmos, dos modos de producción —la nacional retrasada y la imperialista acelerada— y la fundamental diferencia entre nuestra 'primera etapa' capitalista importada por el imperialismo y la 'última etapa' que comienza a confrontar los países de más avanzada economía» *Op. cit.* pág. 26 (el subrayado es mío).

III. «A una economía capitalista, en rápida expansión, asentada principalmente en Lima Metropolitana, se contraponen una economía feudal que abarca a casi todo el resto del país» Instituto nacional de planificación. *Plan de desarrollo económico y social, 1967-1970*, Lima, 1966, vol. II, pág. 13.

IV. Sobre la base de un sistema colectivista agrario se trasplantó el feudalismo a través de la conquista durante el siglo XVI (sic.) El régimen feudal se consolida

De ese modo, en el país coexistirían hoy dos sociedades de naturaleza histórica diferente, cada una con sus propias estructurales, que se integran a través de un común aparato político-administrativo. El sector capitalista directamente dependiente del imperialismo y el sector feudal sólo tangencial y precariamente dependiente del sector capitalista y, a través de él, del imperialismo, y cada uno con estructuras de dominación y conflicto económico-social distintas y superpuestas sólo en parte a través del sistema político-administrativo.

Ni las finalidades ni el espacio destinados a este trabajo, permitirán discutir la corrección de este enfoque tradicional sobre el desarrollo histórico anterior de la sociedad peruana, que fue elaborada, en lo fundamental, por la generación político-intelectual de 1919 y fundada en un horizonte de ideas y conocimientos ya largamente obsoleto. Bastará indicar aquí que este enfoque sobre la naturaleza de la sociedad colonial y postcolonial anterior al período actual, como lo han demostrado Bagú y Frank, principalmente, para Latinoamérica,² y como espero hacerlo también para el caso peruano en particular en un estudio en curso sobre su desarrollo histórico, es definitivamente insostenible en sus líneas matrices y los elementos de verdad que contiene fueron interpretados aislada y ahistóricamente.

Cualesquiera que pudieran ser, no obstante, los márgenes de error o corrección del enfoque tradicional sobre el desarrollo histórico anterior de la sociedad peruana, no puede haber ninguna vacilación para sostener su carácter radicalmente inadecuado respecto de la situación actual. En verdad, la continuidad de su vigencia se debe, en unos a la falta de información y, en otros, al hecho de que la diferenciación ideológica sigue

² Sergio Bagú, *Economía de la sociedad colonial*. Ed. Ateneo, Buenos Aires 1949; y André Gunder Frank, «El desarrollo y el subdesarrollo», en *Desarrollo*, Año 1, Nro. 2, Colombia, marzo 1966, págs. 13-16, y *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Monthly Review Press, New York, 1967.

con la Independencia en las primeras décadas del siglo XIX al romper los yugos coloniales de la metrópoli hispana. Un capitalismo incipiente comienza a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y la penetración imperialista comienza en las primeras décadas del presente siglo y continúa hasta nuestros días.

«Así encontramos al Perú actual con sistemas híbridos que podrían haber dentro de la denominación genérica de régimen feudal-burgués imperialista, sin contar las minorías nacionales que atraviesan por estados de salvajismo o de barbarie en la Amazonía Peruana». Luis De la Puente Uceda, «La Revolución en el Perú: Concepciones y Perspectivas». En Folleto editado con ese título por la Comisión de prensa del MIR, febrero de 1966, pág. 25.

teniendo hasta ahora mucho más la función de proveer un juego de metas y aspiraciones, que de proporcionar instrumentos conceptuales y metodológicos para el examen constante de la realidad históricosocial, de sus procesos y tendencias de cambio, de sus patrones efectivos de dominación y de conflicto en cada momento. O, en otros términos, que permita identificar al enemigo contra el cual se trata de organizar la lucha.

La sociedad peruana actual no es, de ninguna manera, una sociedad semi-feudal con una estructura dual. Bien al contrario, acusa todos los rasgos de una sociedad capitalista subdesarrollada y dependiente, con todas las mediaciones que resultan de las singularidades de su desarrollo histórico anterior.

A tratar de poner en evidencia estos rasgos, se destina explícitamente este trabajo, cuyo carácter de ensayo no necesita ser subrayado. El Perú es, entre los países latinoamericanos, acaso el más complejo y el más contradictorio, y su situación actual combina al mismo tiempo los elementos y los problemas de los niveles más desarrollados y los que provienen de los más tradicionales y retrasados. Moviéndose entre tendencias históricas extremadamente conflictivas, aparece como un mundo convulso y paradójico como pocos. Las cifras oficiales dan cuenta de tasas impresionantes de crecimiento económico, la estabilidad monetaria parece segura, la expansión industrial es creciente y el régimen político actual se pacta de apoyo popular organizado que las cifras electorales parecen confirmar. Sin embargo, en el mismo período, se levanta un vigoroso movimiento campesino contra los terratenientes tradicionales, y en algunos de sus sectores alcanza niveles de politización revolucionaria sorprendentes para una población en buena parte indígena y analfabeta. Un año de guerras de guerrillas obliga al Estado a poner en juego toda su capacidad represiva con el auxilio del Pentágono. En las ciudades, algunos sectores obreros conducen huelgas violentas usando métodos semiinsurreccionales, ocupando las fábricas, tomando a los patronos como rehenes, denunciando en la calle, bajo la represión policial más violenta, el carácter de clase del Estado, la pauperización creciente, la reducción incesante de los niveles de vida de la población urbana. Los estudiantes universitarios y secundarios parecen ingresar en un período de radicalización generalizada.

Organizar sobre esta situación un enfoque suficientemente válido y coherente, es una tarea extremadamente difícil cuando faltan los estudios de base y el material empírico de información es escaso y fragmentario, y eso explica las cautelas y los límites del trabajo, tanto como el propósito de

alejarse los habituales extremos del optimismo revolucionario y la desesperanza. Postura ardua, para quien no es un observador imparcial. Pero necesaria.

EL SISTEMA DE DEPENDENCIA Y SUS NUEVAS TENDENCIAS DE ORIENTACION

Como para todos los países latinoamericanos, el principal factor determinante de la historia y de la situación actual de la sociedad peruana, es su posición dependiente en el mercado internacional capitalista. Desde este punto de vista, todo el desarrollo histórico de esta sociedad podría ser, en gran parte, considerada como la historia de las sucesivas modificaciones de sus relaciones de dependencia.

Destruída la dependencia colonial, el Perú se incorporó inmediatamente al nuevo sistema de dependencia imperialista, como parte de cuya emergencia se desintegró el propio sistema de dependencia colonial. Pero cuando se habla de imperialismo, uno de los obstáculos más difíciles de erradicar, es una inveterada habituación a concebirlo solamente en su nivel más general y abstracto, usando el concepto casi como un membrete y sin intentar ver las formas específicas que va tomando para cada sociedad dependiente, en cada momento histórico concreto, como consecuencia de las modificaciones sucesivas en la estructura concreta del sistema capitalista internacional, de los desplazamientos de poder entre los países metropolitanos y dentro de cada uno de éstos.

Por eso, para poder esclarecer las implicaciones de la dependencia imperialista sobre el destino de la sociedad peruana, será necesario tratar en primer término, de precisar las formas básicas de las relaciones concretas de dependencia de nuestra historia postcolonial. Del mismo modo como a lo largo de la dependencia colonial, el país sufrió los efectos de las modificaciones del mercado mundial capitalista en expansión y consolidación, y de los desplazamientos de poder entre los países metropolitanos de esa época, en el período postcolonial cada una de las etapas de la historia peruana, puede ser enfocada en relación a cada una de las tendencias de orientación del imperialismo.

En el Perú se han sucedido tres formas concretas de dependencia imperialista, superponiéndose y combinándose de muchas maneras, desde los primeros años del siglo XIX hasta hoy: a) el imperialismo financieromercantil durante el siglo XIX, bajo la dominación británica; b) el imperialismo

agrariominerofinanciero, desde aproximadamente la Primera guerra mundial y c) el imperialismo industrial-financiero, relativamente reciente, ambos bajo la dominación norteamericana.

El cambio de metrópolis dominante impuso formas nuevas, pero no la cancelación de las anteriores, de modo que las diversas formas se han combinado con énfasis diversos sobre uno u otro sector de la explotación en cada período. Cada una de esas combinaciones determinó las mayores tendencias de cada período importante de nuestra historia postcolonial, pero sus implicaciones no serán examinadas ahora.

Para lo que aquí interesa, el problema consiste en mostrar los mecanismos por los cuales la dependencia imperialista actual tiende a desplazar el eje de su dominación sobre el país, de los tradicionales «enclaves» minero-petroleros bajo su control directo, y de los «enclaves» agropecuarios cuyo control compartía con la burguesía terrateniente, hacia la producción industrial urbana cuyos beneficios comparte con la burguesía industrial urbana. Y sin que eso signifique, desde luego, que abandone los sectores tradicionales de su penetración, mientras por otra parte refuerza su control financieromercantil para los nuevos efectos.

Esta, en realidad, es una tendencia relativamente reciente del imperialismo y que, con diversos niveles de desarrollo para cada país, generaliza sobre toda la región latinoamericana, como resulta con bastante claridad en el cuadro siguiente:

Como la inversión en petróleo se destina principalmente a Venezuela, mientras en el Perú, en cambio, las presiones populares por la nacionalización del petróleo, han determinado allí una progresiva desinversión,⁸ para los demás países latinoamericanos, la tendencia del imperialismo de orientar su inversión y su control a la producción industrial urbana y al comercio, queda fuera de duda.

Es decir, mientras que en el período anterior, el imperialismo radicaba fundamentalmente en la propiedad y el control de la producción extractiva mineroagropecuaria, en «enclaves» que sólo geográficamente pueden ser considerados parte de la economía nacional, en la actualidad tiende a desplazar el énfasis de su penetración y de su control en los sectores manufactureros urbanos y en el comercio, sin que ello signifique el abandono de sus sectores tradicionales de control.

⁸ El ex-diputado Carlos Malpica, denunció en *El Comercio* de Lima, que entre 1953 y 1964 la inversión de la International Petroleum Co. había sido reducida en 42 millones de dólares. Véase *Oiga*, semanario limeño, julio 1966, N° 184, pág. 7.

CUADRO 1

CORRIENTES NETAS DE CAPITAL PRIVADO ESTADOUNIDENSE DE INVERSION DIRECTA HACIA AMERICA LATINA, POR SECTORES PRINCIPALES, 1951-1962

(En millones de dólares y en porcentajes)

SECTOR INDUSTRIAL	1951-55		1956-60		1961-62		1951-62	
	MILLONES DE DOLARES	%						
Total	1,751	100	3,398	100	616	100	5,765	100
Petróleo	348	20	1,571	46	7	1	1,912	33
Minería y fundición	339	19	301	9	46	7	686	12
Manufactura	613	35	791	23	370	60	1,774	31
Comercio y varios	451	26	735	22	207	34	1,393	24

Fuente: Departamento de comercio de E.E.UU., Balance of Payments, Statistical Supplement to Survey of Current Business (1963) y Survey of Current Business (diversos números de 1963-1964).
(Tomado de: *El financiamiento externo de América Latina*, cuadro 179)

De esa manera, la dependencia imperialista asume una forma concreta nueva, a través de la cual su penetración y su grado de control de la economía nacional se expande y se fortalece. Lo que esta nueva orientación de las relaciones de dependencia con el imperialismo implica sobre el conjunto de la sociedad peruana, podrá ser visto en el examen de las modificaciones que tienden a desarrollarse en cada uno de los aspectos estructurales, analíticamente discernibles.

EL SISTEMA DE DOMINACION INTERNO Y SUS TENDENCIAS DE CAMBIO. LA ESTRUCTURA ECONOMICA

En el marco de estas nuevas tendencias del sistema de dependencia, va emergiendo un sistema interno de dominación que, sin ser diferente en su naturaleza genérica de la que ya estaba en vigencia, sí es largamente diferente en sus modos concretos de expresión y de desarrollo.

Desde el punto de vista de la estructura económica, el Perú podría ser caracterizado como una estructura de transición entre una economía capitalista predominantemente agrariominera, y una economía capitalista industrial urbana incipiente.

La anterior consistía en una economía agrariominera, básicamente, con reducidos sectores de industria ligera y sectores financieromercantiles igualmente reducidos. Con un sector relativamente modernizado en las plantaciones de monocultivo agrario de la Costa, cuya propiedad compartían empresas norteamericanas y nacionales, y en las industrias extractivas de minas y petróleo bajo el control total del imperialismo, en enclaves. Con un sector estancado, en el resto del país y sobre todo en la Sierra, con fuertes impregnaciones señoriales en las relaciones de trabajo, sin vinculación directa muy importante con el mercado imperialista externo.

La que se desarrolla en la actualidad, tiende a consistir en una economía urbanoindustrial, en primer término, por el desarrollo de la industria manufacturera urbana dentro de la cual las industrias básicas intermedias comienzan a desplazar a las tradicionales, por el desarrollo del comercio y otras actividades terciarias, y el desplazamiento lento pero irreversible de las actividades primarias, la agricultura en particular, a un segundo plano.

El cuadro anterior, revela sin equívocos la línea fundamental de la tendencia de emergencia de las actividades secundarias y terciarias como dominantes

CUADRO 2

COMPOSICION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES ECONOMICOS
(1950-1964)

SECTORES ECONOMICOS	PBI EN MILLONES DE SOLES (a precios constantes de 1960)						COMPOSICION PORCENTUAL					
	1950	1955	1960	1964	50	55	60	64				
Agropecuaria	8,860	9,786	11,317	13,998	25.7	22.2	20.4	19.6				
Pesquería	167	238	785	1,266	0.5	0.5	1.4	1.8				
Minas y Petróleo	1,831	5,793	4,908	5,448	5.3	6.3	8.8	7.6				
Industria	5,348	7,777	10,467	13,952	15.6	17.6	18.8	19.6				
Construcción	1,179	1,955	1,768	2,921	3.4	4.4	3.2	4.1				
Energía	a/	a/	214	314	a/	a/	0.4	0.4				
Transportes	1,586	2,393	3,009	3,816	4.6	5.4	5.4	5.3				
Comercio	5,512	7,452	9,280	12,528	16.0	16.9	16.7	17.6				
Banca, seguros	1,050	1,635	2,062	2,639	3.1	3.7	3.7	3.7				
Vivienda	3,201	3,661	4,470	5,261	9.3	8.3	8.0	7.4				
Gobierno	3,489	3,767	4,291	5,227	10.1	8.5	7.7	7.8				
Servicios	2,187 ^{b/}	2,704 ^{b/}	3,079	3,602	6.4 ^{b/}	6.2 ^{b/}	5.5	5.1				
Total	34,411	44,162	55,650	71,272	100.0	100.0	100.0	100.0				

6) Fuente: Instituto nacional de planificación. a/ Está incluida en Servicios; b/ Incluye energía.

en la estructura de la producción peruana, y el lugar destacado por la industria manufacturera en este proceso. Ello es tanto más evidente, cuando se tiene en cuenta que dentro de los sectores primarios, las ramas de actividad más industrializadas como la pesquería (producción de harina de pescado) y la minería, son los únicos que han continuado creciendo, mientras el sector agrícola ha ido reduciendo notablemente su participación en la formación del producto nacional bruto.

Es decir, al mismo tiempo que se produce el desplazamiento desde los sectores primarios hacia los sectores secundarios y terciarios, el mismo fenómeno ocurre también dentro del propio sector primario global en favor de las actividades más industriales, en tanto que las actividades agrícolas que antes dominaban sin contrapeso, no solamente en el conjunto de la economía, sino dentro del sector primario, tienden a mermar y a ocupar una posición muy secundaria en la estructura nacional de producción.

Dentro de la agricultura, para 1964, el 70 por ciento de la producción proviene de los cultivos de exportación principalmente, mientras la agricultura destinada al mercado interno, asentada en la Sierra sobre todo, tiende a estancarse y deteriorarse cada vez más. Por esa razón, la importación de productos agrícolas alimenticios ha tenido un crecimiento «relativamente explosivo», pasando de cerca de 40 millones de dólares en 1960 a más de 134 millones de dólares en 1965 y sólo en este último año el aumento fue de 27.3 por ciento⁴ demostrando cómo, en cada uno de los sectores de la economía del país, solamente aquellos sectores ligados de manera directa a la inversión y al control imperialista, continúan desarrollándose, cualquiera que sea el plano de su participación en la producción en su conjunto.

El crecimiento de las industrias manufactureras urbanas, y su tendencia a ocupar el lugar predominante en la estructura productiva del país, puede ser explicado en relación directa a las nuevas orientaciones de la dependencia imperialista. Si se examina el cuadro 3, podrá tenerse una idea clara de la veracidad del hecho.

El cuadro 3 permite poner de relieve dos hechos: el desplazamiento de la inversión en el país hacia la industria, y el predominio abrumador de la inversión imperialista en este sector. No puede, pues, caber, frente a las cifras oficiales, ninguna duda acerca del cambio profundo del carácter concreto

⁴ Instituto nacional de planificación del Perú (INP), Plan de desarrollo económico y social 1967-1970, Vol. I, pág. 126-128.

CUADRO 3

INVERSION BRUTA INTERNA POR SECTORES DE ORIGEN

SECTORES	ESTRUCTURA PORCENTUAL		COMPOSICION PROMEDIO		TOTAL
	1960	1963	NAC.	EXTRANJ.	
Agropecuaria	1.8	3.0	100.0	—	100.0
Minería	0.2	0.1	100.0	—	100.0
Industria	33.6	32.5	19.7	80.3	100.0
Construcción	40.4	37.3	100.0	—	100.0
Energía	—	—	—	—	—
Comercio	24.0	27.1	80.6	19.4	100.0

Fuente: Instituto nacional de planificación.

de la penetración imperialista y de las relaciones de dependencia que de allí se derivan.

Como consecuencia, dentro de las actividades industriales manufactureras, se produce también un claro desplazamiento desde los sectores tradicionales de la industria ligera (alimentación, vestidos, bebidas, etc.), destinados al consumo inmediato, hacia los nuevos sectores de industrias básicas intermedias (metalúrgicas, químicas, cemento, papel, madera, etc.), porque mientras los sectores tradicionales tienden a disminuir su participación en la producción industrial manufacturera, los últimos muestran una clara tendencia de expansión y tienden a ocupar en la actualidad el lugar de predominio dentro del sector. Así, la participación del primer grupo dentro del producto industrial total, ha pasado de 69 por ciento en 1955, al 62.8% en 1960 y al 59.7% en 1963, mientras el grupo de las industrias «dinámicas», ha pasado del 31 por ciento al 37.2 por ciento y al 40.2 por ciento en los mismos años.⁵ De otro lado, mientras en 1955 CEPAL calculaba que la producción fabril contribuía con 3397 millones de soles y la producción artesanal con 2154 millones de soles, el Censo Económico de 1963, informaba que la produc-

⁵ José Palomino Roedel, «El desarrollo industrial en el Perú», pág. 9. Documento presentado por la Oficina sectorial de planificación de industrias, del INP, al Primer seminario de población y desarrollo. Perú, 1965.

ción fabril en ese año era de 12,900 millones de soles y la producción artesanal de 270 millones de soles. De ese modo el grado de industrialización para 1955 se estimaba en 17.7, dato corregido posteriormente por otros analistas situándolo en 14.2, mientras el grado de industrialización para 1963, podría estimarse entre 19.5 y 21.3 por ciento, lo que supondría que el proceso de industrialización en el Perú ha sido en esos años uno de los más fuertes del continente.⁶

Este proceso de modificación dentro de la estructura de la producción industrial se ha consolidado definitivamente, en la medida en que la producción fabril de productos de consumo duradero, se asienta necesariamente en las localidades urbanas de mayor importancia. Y, en tanto que la transición general de la economía se produce desde los sectores primarios hacia los secundarios y terciarios en general, aquella implica, igualmente, la transición hacia una economía industrialurbana.

El crecimiento notable de los sectores terciarios de la economía, que los cuadros muestran, robustece sin duda esta tendencia de urbanización de la producción y de la economía en su conjunto. Pero, al mismo tiempo, en una menor medida, no precisable por la ausencia de información estadística, robustece también la penetración del mercado de productos de la industria ligera urbana hacia las zonas rurales, y la penetración de las actividades terciarias, especialmente el pequeño comercio y las actividades de servicios, en esas zonas. La expansión del sistema de transportes y de comunicaciones en los últimos años, está en estrecha conexión con este proceso.

De eso se desprende, por lo tanto, la cancelación del relativo aislamiento de las zonas rurales del país respecto de las localidades urbanas, observado por la generalidad de los investigadores en los últimos años, la difusión de elementos socioculturales de procedencia urbana aun en las localidades rurales más apartadas, y la intensa transformación de la estructura económico-social de las zonas rurales tradicionales que trataremos de mostrar en su lugar.

LA ESTRUCTURA DE LA OCUPACION

Necesariamente, las intensas modificaciones en la estructura de la producción, se expresan en las tendencias de cambio de la estructura de la ocupa-

⁶ Véase *El desarrollo industrial del Perú*, CEPAL 1959, pp. 54-69 y Palomino Roedel, *op. cit.*, pp. 8-9.

ción del país, y, a través de ellas, también repercuten sobre la estructura de poder y de dominación social.

El desplazamiento de la mano de obra entre los diversos sectores económicos, puede ser examinado en el cuadro 4.

CUADRO 4

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES ECONOMICOS, 1940-1961
(En miles de habitantes y en porcentajes)

SECTORES ECONOMICOS *	1940		1961		DIFERENCIA PORCENTUAL	
		%				
Total	2,475.4	100.0	3,124.6	100.0	—	—
Primarios ^{a/}	1,590.9	64.3	1,622.0	51.9	-12.4	
Secundarios ^{b/}	426.0	17.2	524.3	16.8	-0.4	
Terciarios ^{c/}	417.3	16.8	825.5	27.3	+10.5	
Otros no especificados	41.2	1.6	125.8	4.0	2.4	

Fuente: Censo nacional de población y ocupación 1940, vol. I. Sexto censo de población, 1961.

a/ Agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, minería y cantería.

b/ Manufactura, construcción, electricidad, gas, agua.

c/ Comercio, transportes, comunicaciones, servicios.

El cuadro muestra dos hechos muy significativos. De un lado, el esperado desplazamiento de la población económicamente activa hacia los sectores secundarios y terciarios, mientras se reduce la que corresponde a los sectores primarios. De otro lado, que al mismo tiempo que las cifras de los cuadros anteriores revelaban la expansión de la industria y de la construcción, tanto en la inversión que canalizan como en su participación en la producción económica global, el aumento de la población incorporada a estas actividades, aunque en términos absolutos ha sido importante, porcentualmente no se produjo. En cambio la absorción de las actividades terciarias dio un salto considerable.

Las cifras del cuadro anterior han sido corregidas después, en base a estimaciones sobre los errores del Censo de 1940, y las nuevas cifras muestran un aumento relativo apreciable de la ocupación en los sectores secundarios. Sin embargo, este aumento no fue compatible con la expansión de la inversión y la producción en tales sectores.

CUADRO 5

POBLACION ECONOMIGAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 1940-1961

RAMAS DE ACTIVIDAD	1940 ^{a/}		1961		DIF. %
	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA	
<i>Total</i>	2,010.1	100.0	3,254.0	100.0	
Agricultura, silvicultura, caza y pesca	1,230.7	61.2	1,613.2	49.6	-11.6
Minas	44.7	2.2	68.9	2.1	- 0.1
Manufacturas	230.6	11.5	437.0	13.4	1.9
Construcción	45.7	2.3	108.8	3.3	1.0
Comercio	112.1	5.6	292.4	9.0	3.4
Transportes	51.0	2.5	97.1	3.0	0.5
Servicios	254.1	12.7	505.2	15.5	2.8
No especificados	41.2	2.0	132.3	4.1	2.1

^{a/} Cifras corregidas. Boletín de análisis demográfico No. 2. Las correcciones corresponden a la PEA femenina.

El cuadro anterior, cuyas cifras son las más confiables hasta el momento, muestra la intensa pérdida de las actividades agropecuarias en el período intercensal. Pero, en cambio, el aumento relativo de la población dedicada a la manufactura no fue igualmente intenso, mientras el comercio y los servicios fueron las principales actividades que absorbían la población ocupada.

Estos datos permiten poner de relieve un hecho ya comprobado para varios otros países latinoamericanos. Aparte el normal crecimiento de las actividades terciarias, como parte del desplazamiento de la economía hacia los sectores urbanos y el intenso proceso de crecimiento urbano, la expansión industrial no tiende a absorber la población activa en el mismo grado que la expansión de las inversiones y de la producción.

La explicación que se ofrece corrientemente a este fenómeno, es que la industrialización en estos países es todavía muy débil y limitada, de manera que su capacidad de proporcionar empleo a las poblaciones que invaden las ciudades con mayor desarrollo industrial, queda muy por debajo de su

capacidad de estimular el crecimiento urbano y la oferta de trabajo implicada. Sin duda, eso es verdad y forma parte de la explicación de la escasa expansión de la población dedicada a la manufactura.

No obstante, si se tienen en cuenta las cifras de aumento de la inversión y de la producción manufacturera, la explicación más importante debe ser buscada en otros factores. El hecho es que las tendencias recientes de expansión industrial en estos países, no siguen los pasos que caracterizaron el desarrollo industrial de las sociedades hoy día altamente industrializadas. Como es normal en el desarrollo de las sociedades dependientes, sobre todo, éstas toman inevitablemente los últimos o, por lo menos, los penúltimos adelantos e innovaciones tecnológicas, no solamente en el plano de los procesos de producción, sino también, con una intensidad paralela, las innovaciones en el modo de organización de las empresas en la organización del trabajo y en la distribución del mercado de materias primas y de la producción elaborada. Estos fenómenos son tanto más agudos, cuando el desarrollo industrial se produce no como consecuencia de una planificación racional de la producción, bajo un poder político autónomo, sino como resultado de las nuevas tendencias de orientación de la penetración imperialista, de la expansión de su control sobre la economía del país, y de la acentuación resultante de las relaciones de dependencia.

Por esta razón, como ha sido mostrado para otros países de la región,¹ el crecimiento de la inversión y de la producción en la industria manufacturera en el Perú ocurre en el mismo momento en que la innovación tecnológica importada de las metrópolis imperialistas es creciente, de manera que la necesidad de una mano de obra numerosa se reduce constantemente y requiere además una calificación cada vez más alta, contrariamente a como sucedía en el período anterior, en que las características semifabriles de la producción manufacturera permitían una compatibilidad con las características de baja calificación de mano de obra.

Al mismo tiempo, es posible observar que la transición entre el tipo de organización casi familiar de las empresas tradicionales, con sus rasgos de paternalismo y de deficiente organización tecnológica de la producción y del trabajo, y el tipo de empresa moderna, con una mayor eficiencia de organización empresarial, de la producción y del trabajo, es relativamente rápida. Esta innovación en el sistema de organización empresarial, es el resultado,

¹ Glauco Ary Dillon Soares, *The New Industrialization and the Brazilian Political System*, Santiago, 1966 (Mimeo).

en primer término, de la organización monopolística de las empresas industriales más productivas y que canalizan la mayor inversión, en la medida en que corresponden a organizaciones financieras e industriales internacionales muy poderosas.

A nivel latinoamericano, la estructuración de la economía capitalista subdesarrollada y dependiente, ocurre como parte del proceso de cambio entre la dominación de las pequeñas o medianas empresas de producción, y su sustitución rápida por empresas monopolísticas internacionales que se redistribuyen en el mercado latinoamericano. Es decir, la concentración de la producción industrial en manos de grandes empresas, la racionalización capitalista de la organización empresarial, de la organización de la producción y del trabajo y la innovación tecnológica que todo ello requiere en el proceso productivo, son los factores más importantes, para explicar el reducido crecimiento de la población ocupada en las industrias manufactureras en el país, o su efectiva reducción relativa en otros países de la región.⁸

Sin embargo, el reducido crecimiento de la población ocupada en la manufactura en términos relativos, no debe hacer perder de vista que dentro de ese sector de la población han ocurrido modificaciones sumamente importantes y de gran significación para el proceso de desarrollo de las nuevas tendencias de la estructura de dominación y conflicto económicosocial.

De un lado, si bien es verdad que más del 50 por ciento de la población ocupada en la manufactura sigue concentrada en las industrias ligeras tradicionales, el peso económico social de la que está empleada en las industrias básicas intermedias es hoy día mucho mayor, tanto por las diferencias de productividad entre ambos sectores, como por la tendencia de expansión de las nuevas industrias. La más alta productividad en las industrias tradicionales correspondía a la de tabaco con 282,000 millones de soles en 1963; entre las nuevas industrias, las de maquinarias eléctricas y no eléctricas suman 1 330,000 millones de soles en 1963.⁹

Ello implica, al mismo tiempo, que el desplazamiento desde los sectores no calificados a los más calificados es sumamente intenso, para cada uno de los grupos de ocupación. Así, mientras en las industrias tradicionales los grupos profesionales eran el 1.15 por ciento, en las industrias nuevas sumaban el 4.96 por ciento. En el nivel obrero, el grupo calificado y semicalifica-

⁸ Véase el examen de Baran y Sweezy sobre la Standard Oil, en Paul Baran y Paul Sweezy, «Notas sobre la teoría del imperialismo», *Monthly Review*, en español, No. 31, Santiago.

⁹ Palomino Roedel, op. cit., pág. 23.

do de las industrias tradicionales era el 24 por ciento y el 95.85 por ciento, mientras el grupo no calificado sumaba el 57.15 por ciento. En las nuevas industrias, los grupos obreros calificados, semicalificados y no calificados, eran el 21.17 por ciento, 90.58 por ciento, y 32.90 por ciento, respectivamente. Todas las cifras son resultado del Censo de 1961.

En cuanto al notable crecimiento de los sectores terciarios, que los cuadros anteriores revelan, se debe sin duda en lo fundamental al crecimiento urbano de los últimos años que se deriva de la migración hacia las ciudades. Conviene, sin embargo, tener cuidado en el empleo de esas cifras que podrían hacer pensar que las clases medias urbanas han crecido de modo muy significativo, en tanto que éstas aparecen normalmente vinculadas a actividades de este sector. La realidad que esas cifras no muestran con claridad suficiente, es que la mayor parte de la población que las cifras acumulan en las actividades terciarias, es una población sin empleo estable y sin ingresos, que engrosa la masa «marginal» de las ciudades principales. Como revelan los primeros resultados publicados de la última encuesta sobre la migración a Lima,¹⁰ el 76 por ciento de las mujeres migrantes fue al servicio doméstico y el 48 por ciento de los varones «trabaja por cuenta propia», es decir, es subempleado, como lo hacen notar los redactores del informe.

Sin embargo, es claro también que la expansión de las actividades terciarias en las ciudades principalmente, pero también en el campo en menor medida, son la base de la expansión de los sectores económicosociales medios de la población, fenómeno característico de los últimos años del país. Así, las modificaciones en la estructura de la producción que aparejan las nuevas tendencias de la expansión imperialista, permiten mostrar, al mismo tiempo, las modificaciones en las relaciones de trabajo y en el desarrollo de una estructura de dominación y de conflicto económicosocial, bien distinto del que puede presentar la imagen tradicional de la sociedad peruana, como se verá más adelante.

LA ESTRUCTURA ECOLOGICODEMOGRAFICA

Hasta 1965, la población total del país se estima en 11 649,600 habitantes, lo que representa un aumento del 74 por ciento respecto de la población censada en 1940, y una tasa de crecimiento anual promedio de 2.2 por

¹⁰ Encuesta de migración. Lima Metropolitana, pág. 58, cuadro 27. Publicado por la Dirección de estadística del Ministerio de hacienda. Lima, 1966.

ciento. Pero esta tasa promedio de crecimiento representa una variación desde el 1.72 por ciento en 1940, al 3.06 por ciento en 1961.¹¹ Esto es, el Perú es uno de los países de más elevado crecimiento demográfico de la región.

La transición de la estructura económica hacia una economía urbana principalmente, el deterioro de la producción agrícola destinada al consumo interno, la cual provenía de las zonas rurales del interior del país, asociados a la expansión de los medios de transporte y de comunicación, a través de los cuales se difunde la influencia del mercado de productos urbanos y de la cultura urbana sobre las localidades rurales, la estructura ecológicodemográfica del país se ha modificado drásticamente en los últimos decenios, y tiende a modificarse más profundamente en las nuevas direcciones.

Aparte de la reducción de la mortalidad y mantenimiento de altos índices de natalidad, la juventud de la población, cuyo 44.98 por ciento está concentrada en las edades menores de 15 años, el proceso más destacado y más directamente ligado a las nuevas tendencias de la estructura de la producción y de la penetración imperialista, es la rápida expansión de la urbanización:

El crecimiento de la población urbana, consecuencia inmediata del gigantesco proceso migratorio, alcanzó en el período intercensal 1940-61 una tasa que se calcula entre 3.5 por ciento y 3.9 por ciento, mientras la población rural sólo creció en el mismo tiempo en 1.5 por ciento anual, a pesar de que las tasas de natalidad rural siguen siendo superiores a las urbanas.

Como resultado, la población urbana del país pasó, según los criterios censales, del 35.4 por ciento al 47.4 por ciento entre 1940-61, lo que permite estimar que para 1966, la población urbana constituye el 50.4 por ciento sobre un total de 12'011,500 habitantes, cifra que podría reducirse a 43.1 por ciento si se consideran solamente las localidades de dos mil y más habitantes. No obstante ello, con este último criterio, la tasa anual media de crecimiento urbano habría sido aún más alta, alcanzando al 4.6 por ciento.¹²

La relación demográfica urbano-rural tiende a favorecer al primer término de ella; sin embargo, en la actualidad alrededor de la mitad de la población

¹¹ *Población del Perú*, pág. 4. Documentos de trabajo No. R. H. 2-1, del Servicio del empleo y recursos humanos. Ministerio de trabajo, Lima, 1965.

¹² John Grauman, *Population Re-Distribution in Peru*. Centro latinoamericano de demografía, Santiago 1962, pp. 20-25 (Mimeo).

del país vive en localidades rurales. De esta situación, muchos observadores extraen la conclusión de que las relaciones tradicionales urbano-rurales, en el nivel económicosocial no se han modificado de manera muy apreciable, implicando con eso el mantenimiento de la estructura económicosocial de las zonas rurales.

En realidad, la estructura económicosocial tradicional de las zonas rurales, tiende a modificarse en la misma dirección que las tendencias que mueven a la sociedad peruana en su conjunto, aunque sin duda a un ritmo mucho más lento y de modo más irregular, al paso de la completa transformación de las relaciones ecológicas urbano-rurales, y dentro del nivel urbano entre las ciudades de diverso tamaño.

De una parte, los datos acerca de las tendencias actuales de la estructura económica, permiten afirmar que el crecimiento económico tiende a concentrarse en las localidades urbanas, otorgando de ese modo a ellas un completo predominio económico sobre las localidades rurales. Pero, al mismo tiempo, el estancamiento y el deterioro franco de la producción agrícola de las últimas, las convierte en totalmente dependientes de las localidades urbanas. De esa manera, la relación demográfica actual entre lo urbano y lo rural, no significa por modo alguno la vigencia aun de las tradicionales relaciones económicas entre ambos términos, y que otorgaban al campo una relativa autonomía económicosocial y cultural, en tanto que no estaba vinculado de manera directa al mercado imperialista, y un predominio económico marcado de las zonas rurales en su conjunto, sobre las zonas urbanas, en tanto que la estructura productiva tradicional estaba radicada ante todo en la producción agropecuaria.

El proceso de crecimiento urbano sigue en el Perú, como en todo el mundo subdesarrollado, un ritmo discontinuo entre las diversas regiones y entre las diversas ciudades y localidades urbanas. De 37 ciudades consignadas en el Censo de 1961, 21 se ubican en la Costa, 13 en la Sierra y 3 en la Selva. Y entre las ciudades de la Costa, las de mayor crecimiento corresponden a las zonas de más rápida expansión industrial, Lima-Callao y Chimbote.

Pero, lo que es tremendamente significativo, es la discontinuidad del crecimiento urbano de Lima-Callao respecto de las otras ciudades. Siendo la tasa media de crecimiento urbano total de 4.6 por ciento, para las localidades de dos mil y más habitantes, el crecimiento de Lima-Callao alcanzó en el período intercensal la tasa de 5.7 por ciento. Las otras ciudades de la Costa crecieron a 4.1 por ciento de tasa anual promedio y las de la Sierra a 2.5 por ciento.

La discontinuidad entre el ritmo de crecimiento y el tamaño de las ciudades, no es privativa del Perú. Pero aquí alcanza uno de sus máximos extremos. El índice de concentración metropolitana de la población urbana del Perú es el más alto entre los países de la región, para algunos autores,¹³ y uno de los dos mayores en todo el mundo subdesarrollado, para otros.¹⁴

Si se considera que casi el 80 por ciento del PNB proviene de la Costa, la concentración urbana de la Costa no puede llamar a extrañeza, y si se considera que el 67 por ciento de la inversión y de la producción industrial se concentra en Lima, no es tampoco extraño que Lima-Callao concentre ahora el 63 por ciento de la población urbana del país.

Pero, el desarrollo económico de la Costa, como su concentración reciente en Lima-Callao, corresponde precisamente a la vinculación de la Costa con la dependencia imperialista, así como al hecho de que Lima-Callao concentra el grueso de la inversión total de origen imperialista. Esto es, la urbanización en el país y sus tendencias de concentración regional de una parte y metropolitana de la otra, tienen que explicarse, en última instancia, por la forma concreta de las relaciones de dependencia del país con el imperialismo, a través de la mediación de las nuevas tendencias de la estructura productiva del país.

Todo ello revela, sin equívoco posible, hasta qué grado la dependencia del imperialismo se constituye como el más importante factor determinante de los procesos fundamentales de cambio de nuestra sociedad, y cómo la urbanización en su conjunto, y las discontinuidades en el crecimiento y el tamaño de las ciudades, en particular, siguen paso a paso expresando las modalidades recientes de la penetración del imperialismo y de sus efectos sobre la economía del país.

TENDENCIA DE CAMBIO EN LA SOCIEDAD RURAL TRADICIONAL

Como se vio anteriormente, la producción agrícola en su conjunto, creció solamente a una tasa anual promedio de 2.6 por ciento, inferior a la tasa media de la economía global en el mismo período de 1950-64, reduciendo su participación en el PNB del 25 por ciento al 17 por ciento.

¹³ Bruce Herrick: *Urban Migration and Economic Development in Chile*, The M.I.T. Press, y Mass. 1965, pág. 28.

¹⁴ Bert Hoselitz, *Generative and Parasitic Cities*, Economic Development and Cultural Change, 3, (abril 1955).

de exportación, en su gran parte típicos de la Costa. Es decir, la principal responsabilidad por el relativo estancamiento de la agricultura, corresponde a la producción de las zonas de agricultura para el consumo interno, que en su mayor proporción radican en las localidades de la Sierra del país.

De esta producción agrícola total, el 70 por ciento proviene de los cultivos. Como consecuencia, las cifras sobre la importación de productos agrícolas alimenticios, subieron de modo «explosivo», según el Instituto nacional de planificación.¹⁵

Estos antecedentes, permiten percibir el progresivo deterioro de la agricultura tradicional, y la desintegración de la estructura económica tradicional de las zonas rurales no radicadas en la Costa.

A ese proceso corresponde el desplazamiento mostrado por los cuadros respectivos, de la población ocupada en la agricultura hacia las otras ramas de actividad, que forma parte del proceso migratorio hacia las ciudades principales, en tanto que esa mano de obra que se moviliza pertenece básicamente a la agricultura tradicional, destinada al mercado interno y a la agricultura de subsistencia, en las zonas rurales de la Sierra. La reducción de la fuerza de trabajo, afecta, pues, sobre todo a este estrato de la producción agrícola.

Es decir, la estructura económica de las regiones que la imagen tradicional suele presentar como «feudales» o «semifeudales», sufre un claro y rápido proceso de desintegración.

Frente a esa situación, la población rural no tiene sino tres alternativas importantes: a) la migración hacia las localidades urbanas y semiurbanas; b) la desocupación y subocupación permanente, si no migra; c) el desplazamiento hacia otras formas de actividad económica, no agrícolas.

De hecho, las tres alternativas son efectivas para diversos sectores de esta población. La migración hacia las localidades urbanas y semiurbanas sigue en aumento, la desocupación y subocupación rural es cada vez mayor y se estima en alrededor del 40 por ciento,¹⁶ y la movilidad de la población hacia otras actividades económicas, principalmente terciarias, puede constatarse por todo observador que recorra las zonas rurales de la Sierra.

En la medida en que se expande el sistema de transportes y comunicaciones, la penetración del mercado de productos urbanos y de importación de pro-

¹⁵ INP. *op. cit.* 125-128.

¹⁶ *Diagnóstico de la situación de los recursos humanos* pág. 39. Servicio de recursos humanos y del empleo, Ministerio de trabajo, Lima, 1966.

ductos agrícolas alimenticios hacia las localidades rurales se expande también. El relativo aislamiento de las localidades rurales de gran parte del país, respecto de los centros urbanos, tiende a ser cancelado, al paso que aumenta la dependencia rural de lo urbano, dentro de las nuevas tendencias económicas y ecológicodemográficas descritas.

Por esta razón, no solamente la agricultura de subsistencia y la destinada al mercado interno local y regional, tiende a estancarse. Junto a eso, se difunde por las zonas rurales una estructura nueva de roles y de actividades económicas, principalmente del sector terciario y del pequeño comercio predominantemente. La formación de una vasta red de mercados locales en las zonas rurales, que individualmente son muy reducidas, pero cuyo conjunto forma un vasto tejido, es uno de los fenómenos más claramente observados por numerosos investigadores en los últimos años.¹⁷ La estructura económica tradicional de las zonas rurales tiende a ser desplazada y desintegrada de una parte, y modificada profundamente en su carácter concreto, de la otra.

En primer término, la difusión de elementos socioculturales urbanos hacia las localidades rurales, sigue mecanismos económicos bastante precisos, como la difusión de los productos de cierto nivel de la industria ligera urbana: vestidos, bebidas, productos alimenticios, utensilios de trabajo y objetos de diversos tipos como la radio portátil, etc.

Necesariamente, en ese proceso está implicada la progresiva modificación de los patrones de consumo y del nivel y la orientación de las motivaciones y aspiraciones de la población rural, fenómeno que permite explicar parte de la intensa atracción de las ciudades. Pero, al mismo tiempo, la modificación del carácter concreto de los roles tradicionales y la aparición y desarrollo de nuevos roles.

Así, por ejemplo, el rol tradicional de agricultor involucraba no solamente el trabajo agrícola, sino la producción doméstica del vestido, de los instrumentos de trabajo, etc. La penetración de los productos correspondientes de procedencia urbana, tiende a especificar el rol de agricultor, ciñéndolo cada vez más a la actividad agrícola específicamente.

De otro lado, en tanto que la producción agrícola de subsistencia es cada vez menor, para la población no migrante es inevitable comenzar a tomar como permanentes las actividades que antes eran secundarias y ocasionales,

¹⁷ Véase, por ejemplo, de W. Mangin, *Classification of Highland Communities in Latin America*, presentado al Cornell Latin American Year, marzo de 1966.

y otras que antes o no existían por completo en esas áreas o no eran atractivas en las condiciones anteriores. El pequeño comercio y las actividades artesanales en las localidades semiurbanas que proliferan y se desarrollan en el proceso de crecimiento urbano y de «urbanización» del campo, son probablemente las actividades más importantes.

Todo ello permite sostener que se asiste a un claro proceso de modificación profunda, a un ritmo lento en general y desigual por regiones, de la estructura económica tradicional de las zonas rurales no costeñas del país, y que estas tendencias de cambio son por completo correspondientes a las que guían a la sociedad en su conjunto y a las zonas urbanas en particular.

Es necesario destacar dentro de este proceso, el lugar que le cabe a la organización de la producción y del trabajo, en las «haciendas tradicionales», que la imagen tradicional ha presentado hasta hoy como fundamentos del carácter feudal de la sociedad rural no costeña del país.

Ciertamente, las relaciones de trabajo en las grandes y medianas propiedades «hacendarias» contenían y contienen una intensa impregnación de elementos de tipo señorial, agudizados por las diferenciaciones étnicoculturales entre la población de trabajadores y los dueños de las haciendas. Sin embargo, como unidades de producción estas propiedades, cuya consolidación y generalización proviene del estancamiento y de la completa agrarización de la economía desde la emancipación hasta la primera mitad del siglo XIX, fueron siempre capitalistas, tan primitivas y tradicionales como se quiera. Su producción no estaba destinada, sino en parte, al consumo familiar de los propietarios, sino a proveer el mercado local y regional. Por lo tanto, su caracterización como estructuras feudales de producción, resulta del hecho de tomar aisladamente los elementos que caracterizan las relaciones de trabajo, cuya función y contenido concreto no puede dejar de ligarse totalmente con el destino capitalista de la producción.

En la actualidad, junto al proceso de desintegración y reducción de estas unidades tradicionales de capitalismo agrario estancado, que responde al franco deterioro de la producción agrícola de esas zonas, el fenómeno más importante es la modificación del carácter concreto de la organización de la producción en estas haciendas. No solamente sus propietarios, en sus niveles más altos, están ya totalmente ligados a la economía urbana de la Costa y al mercado financiero y crediticio de Lima-Callao, sino también un sector importante de esas grandes propiedades se convierten rápidamente en unidades «empresariales» de producción, con todas las características de las

plantaciones de la Costa respecto de la organización de la producción y del trabajo, o combinando el trabajo salarial con el trabajo no salarial con énfasis en el primer grupo.

LA ESTRUCTURA DE DOMINACION Y DE CONFLICTO. SUS TENDENCIAS DE DESARROLLO

Sobre la base de las tendencias mostradas en la modificación de la estructura de la economía y en la estructura ecológicodemográfica, se desarrolla una estructura interna de dominación y de conflicto económicosocial nacional, cuya composición y tendencias no son menos claras por no ser susceptibles de medición estadística.

De un lado, en el nivel urbano, principalmente en las ciudades más importantes y sobre todo en el área metropolitana, tiende a consolidarse una nueva sociedad urbana fundada en el proceso de urbanización de la estructura productiva. En el nivel rural, emerge una estructura económicosocial igualmente nueva, correspondiente a la urbana, pero a un ritmo más lento y más irregular.

LA DIFERENCIACION SOCIAL RURAL EMERGENTE

1. REDUCCION DEL ESTADO TERRATENIENTE TRADICIONAL Y CAMBIO DE SU CARACTER CONCRETO.

Si nos atenemos a los datos sobre la desintegración de la producción agrícola en las zonas rurales tradicionales, no es incorrecto desprender de ellos, que las bases económicas del estrato terrateniente tradicional están en proceso de desintegración.

En realidad este proceso tiene ya una larga duración en el país. Pero su aceleración corresponde sobre todo a los últimos veinte años. Los principales factores que lo alimentan, son la deteriorización de la producción agrícola, la constante parcelación de las grandes propiedades latifundiaras por la herencia, la migración de los miembros del estrato hacia las ciudades desde los primeros años de este siglo y su desplazamiento hacia actividades no agrícolas, y la sustitución de los sectores más tradicionales por una capa de propietarios de orientación más «empresarial». En la última década, a estos factores han venido a sumarse los efectos de un vigoroso movimiento campesino; dirigido a la recuperación de las tierras de las haciendas y que, no obstante la represión y las masacres, ha logrado retener parte de la tierra

conquistada y reducir el poder económico y la autoridad de amplios sectores de la capa terrateniente tradicional. Recientemente, las limitadas redistribuciones de tierras de las haciendas, emprendidas por el Estado precisamente en las zonas de más alta tensión social campesina, prolongan también este proceso de reducción del poder de este estrato terrateniente tradicional.

Nada de eso significa que el estrato haya ya desaparecido totalmente, porque subsisten precisamente sus grupos más poderosos. No obstante, la tendencia de su reducción no puede ser puesta en duda. Los grupos que subsisten, en su mayor parte, se mantienen en realidad no en tanto que terratenientes tradicionales, sino en tanto que están ligados a la economía urbana de la Costa, participan en las empresas financieras e industriales, y modifican la organización de la producción y del trabajo en sus propiedades agrarias. Esto es, modifican su carácter concreto de clase y no pueden, por lo mismo, ser considerados como «terratenientes tradicionales», «señores feudales», etc., etc.

CUADRO 6

POBLACION OCUPADA EN LA AGRICULTURA POR CATEGORIAS DE OCUPACION

(Cifras relativas)

CATEGORIAS DE OCUPACION	EN PORCIENTOS	
	1949	1961
Patronos	39.5	2.2
Empleados	0.3	1.1
Obreros	26.3 ^{a/}	30.0
Familiar no remunerado	21.1	16.9
Independientes	12.5	49.8
No especificados	0.5	0.0
<i>Total</i>	100.0	100.0

Fuente: Censos de 1940 y 1961.

a/ La categoría en 1940 incluye «obreros y campesinos».

Como puede observarse, las cifras de ambos censos no son comparables estrictamente. Para que haya habido una reducción tan drástica de la categoría «Patronos», en las condiciones en que se realiza el proceso, habría sido necesaria una profunda revolución, la que, infortunadamente, no ha ocurrido. Las cifras de 1940 fueron sin duda infladas en exceso.

A pesar de estas consideraciones, al margen del valor real de las cifras, lo que de ellas aparece claro es la existencia real y la dirección de la tendencia de reducción de la categoría patronal, o sea, de la capa terrateniente. En tanto que este proceso no ha ocurrido en la Costa, son las zonas rurales tradicionales de la Sierra las que han sido afectadas por esta tendencia. En otras palabras, es la capa terrateniente tradicional que se reduce.

2. LA FORMACION DE LA PEQUEÑA BURGUESÍA RURAL.

Al paso en que se desintegra el estrato terrateniente tradicional y sus sectores remanentes modifican su carácter concreto de clase, los mismos factores que afectan a este estrato permiten también la formación y desarrollo de una amplia capa de pequeña burguesía rural.

Las cifras del cuadro anterior, indican el tremendo salto de los «agricultores independientes» en el período intercensal, y las últimas Cuentas nacionales del Banco central de reserva, señalan que este grupo creció en un 15 por ciento a partir de 1950 hasta 1965.

Indudablemente, dentro de estas cifras están incluidos en un gran porcentaje los pequeños minifundarios, cuya propiedad llega a ser tan exigua en muchas partes, que no es legítimo incluirlos en el estrato medio de la sociedad rural; no obstante su carácter en parte pequeñoburgués, la mayoría de estos minifundarios tiende a encontrar sus fuentes de ingresos en otras actividades no agrícolas o en éstas en calidad de asalariados de los grandes y medianos propietarios, y, por lo tanto, su carácter real es el de asalariados, o tiende a definirse en esta dirección.

Sin embargo, como consecuencia de la parcelación hereditaria de gran parte de las antiguas propiedades latifundarias, y por el acceso a la propiedad mediana de nuevos grupos provenientes de actividades comerciales a través de la compra, un porcentaje importante de los llamados «agricultores independientes» en los censos, puede ser situado correctamente en los rangos medios de la sociedad rural, y esta capa tiende a expandirse constantemente. Por otro lado, la penetración de una gama relativamente amplia de nuevas actividades económicas semiurbanas en el campo, dentro de las cuales el comercio pequeño y medio cubre el renglón predominante, contribuye en los últimos años como uno de los más importantes factores de expansión de las capas medias de la sociedad rural.

En su mayor parte, este proceso de expansión y de consolidación de la pequeña burguesía rural, explica el proceso de desintegración de las llamadas

«comunidades indígenas» en todo el país, y principalmente en las áreas más penetradas por la influencia económica urbana. Estas instituciones en la actualidad, son en realidad asociaciones de pequeños y medianos agricultores, comerciantes, artesanos, y en los últimos años la estratificación social en ellas se funda mucho menos en la dimensión de la propiedad agrícola que en la riqueza monetaria.

3. LA PROLETARIZACION DE COLONOS Y MINIFUNDIARIOS.

Paralelamente a las tendencias anteriores, emerge de modo creciente la de proletarización de la mayor parte de la población campesina.

Los minifundarios ingresaron en este proceso hace ya bastante tiempo, por obvias razones: la dominación terrateniente y la subdivisión de la tierra junto al progresivo deterioro de su producción. Sin embargo, en períodos anteriores el trabajo asalariado fue más bien una actividad eventual y secundaria que permanente y principal. En las actuales circunstancias, la presión demográfica, la subdivisión de la tierra y la práctica destrucción de la producción de subsistencia ante las sequías, el primitivismo de la tecnología, el trabajo asalariado tiene que pasar a ser, de modo necesario, una condición permanente, sea en la agricultura al servicio de grandes y medianos propietarios, o en actividades no agrícolas en las localidades semiurbanas enclavadas en áreas rurales.

Por otro lado, la población campesina incorporada a las «haciendas tradicionales» en el trabajo no asalariado y sujeta a condiciones de trabajo no solamente de origen feudal sino aún prefeudal en ciertas áreas, como resultado de la desintegración de la economía latifundista tradicional, de la sustitución de la agricultura alimenticia por la ganadería y el cultivo de forrajes y la consiguiente reducción de las necesidades de mano de obra, como resultado de la política de redistribución de las tierras de las haciendas en algunas zonas, comienza ahora a engrosar las filas de los asalariados rurales, si no migra inmediatamente a las ciudades o a las localidades semiurbanas a formar parte de la masa subempleada en ellas.

Como ya quedó señalado en otro trabajo,¹⁸ los intentos oficiales de «reforma agraria» no tienen ninguna otra finalidad que la eliminación de algunos de los más tradicionales e improductivos sectores de la capa terrateniente tradicional, la expansión de una capa relativamente vasta de pequeños y

¹⁸ Aníbal Quijano, *Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina*, Santiago 1966 (Mimeo).

medianos propietarios agrícolas, y la proletarianización del resto, de la mayor parte, de la población campesina. Esto es, en el fondo no constituye sino un limitado y astuto recurso para moderar las fuentes de tensión social y para intensificar un proceso de cambio ya bastante avanzado, que implica la homogenización en sus propios términos de la estructura de la economía capitalista subdesarrollada y dependiente.

De todos modos, la tradicional estructura cuasibiclasista de la sociedad rural tradicional tiende a desaparecer y en su lugar emerge una estructura policlasista, correspondiente a las tendencias que el imperialismo impone al conjunto de la sociedad, y, además, de clases nuevas.

Nada de ello entrafía olvidar que estas tendencias están aún en curso de desarrollo y la nueva estructura de dominación social no está ya definitivamente cristalizada. Bien lejos de eso, la condición subdesarrollada y dependiente de la sociedad global, hace de este proceso algo lento, sobre todo en las zonas más aisladas, de modo que la sociedad rural se mueve aun fluctuadamente entre los antiguos patronos estructurales y los nuevos, dando lugar a una notable ambivalencia y conflictividad de los estándares y normas que rigen las relaciones entre los diversos grupos que surgen y con los que desaparecen: El proceso se hace aún más complejo y contradictorio, por la conjugación de nuevas tendencias de diferenciación social y las de diferenciación cultural. Como se sabe bien, una proporción importante de la población campesina forma parte de la subcultura campesina indígena. Los múltiples factores que alimentan el proceso global de cambio de la sociedad, se han combinado para acelerar la aculturación de parte de la población indígena, la modificación de la propia subcultura, y la creciente búsqueda de una nueva identidad cultural, distinta tanto de la cultura occidental criolla dominante como de la subcultura indígena dominada, por algunos sectores. Los grupos cholos parecen expresar claramente estas tendencias.¹⁹

En la medida en que la diferenciación étnicocultural constituye desde la colonia, una de las más importantes fuentes de criterios de evaluación social, en el proceso de emergencia de una nueva estructura de diferenciación social, en el campo, no puede dejar de impregnarse de todos los factores actuales de diferenciación cultural y de sus modalidades y hacerse, así, todavía más complejo y conflictivo.

¹⁹ Aníbal Quijano, *La emergencia del grupo cholos y sus implicaciones en la sociedad peruana*, Lima 1964 (Mimeo).

LA NUEVA SOCIEDAD URBANA DE CONSOLIDACION

La transición de la penetración imperialista hacia los sectores urbanos de la economía, el intenso proceso de urbanización ecológicodemográfico, y la directa vinculación del desarrollo urbano con la influencia imperialista, en la totalidad de sus aspectos, hacen que las tendencias de cambio en este nivel ocurran a un ritmo mucho mayor que en el nivel rural, y, por lo mismo, sean mucho más perceptibles para todos.

En tanto que en las áreas rurales, especialmente en las tradicionales, un nuevo sistema de diferenciación y de conflictos sociales está aún en emergencia, en las áreas urbanas y particularmente en las ciudades más importantes, el proceso equivalente está ya en lo fundamental consolidado y tiende ahora a institucionalizarse y expandirse.

Sumariamente, los principales elementos que deben destacarse son los siguientes:

- a) La consolidación de los sectores industriales y terciarios de la burguesía como los núcleos dominantes de la burguesía nacional, en lo cual está implicada también la acelerada cancelación de la subcultura y de la psicología social de resabios aristocratizantes, de tradición hispanofrancesa, de esta clase.
- b) La expansión numérica de la «nueva clase media» urbana, resultante de la expansión de la burocratización y de la profesionalización, y de la «pequeña burguesía» urbana, sobre la base de la expansión de los sectores mercantiles y de pequeña industria de las actividades terciarias.
- c) La expansión de la población obrera, fabril y no fabril, sobre todo en las ciudades de mayor tamaño y de manera sobresaliente en el área metropolitana de Lima-Callao.
- d) El crecimiento de una inmensa masa de población desempleada y subempleada, sin lugar establemente estructurado en la nueva estructura económico-social en desarrollo, salvo de modo marginal y dominado.

Junto a estos fenómenos, es necesario señalar también los efectos de la superposición y combinación de la influencia imperialista y de la migración en la formación de la cultura urbana.

De un lado, la dependencia ha sobrepasado largamente la vida económica, para anexar bajo su dominio el desarrollo de las instituciones económico-sociales y culturales de la nueva sociedad urbana, modificando con una intensidad y una velocidad notables, los elementos que caracterizaban lá

subcultura y la psicología social de los habitantes de las ciudades principales. Se desarrolla de ese modo una «cultura urbana dependiente», que es el resultado de la importación y reproducción mimética, dentro de los límites dados por la condición subdesarrollada de las bases económicas correspondientes, de los modelos de vida de las poblaciones urbanas de las metrópolis imperialistas, y, naturalmente, del imperialismo norteamericano por encima de todas. El corazón de estos nuevos modelos de vida, cuya penetración e impactos son incontrastables en las actuales circunstancias, lo constituyen los patrones de consumo y la orientación y el nivel de las aspiraciones y de las metas de grupos o individuos, especialmente entre la burguesía y las clases medias.

Al mismo tiempo, sin embargo, las sucesivas oleadas migratorias que son responsables del crecimiento urbano, y que provienen de la subcultura campesina y semiurbana del resto del país, con fuertes impregnaciones indígenas y derivadas de ellas, se han constituido por su parte en factores de desarrollo de una subcultura urbana popular, que afecta sobre todo a las poblaciones de las capas dominadas de las ciudades, y que están caracterizadas por instituciones y valores de procedencia indígena y chola.

Superpuestas en una relación de dominación, ambas vertientes del desarrollo de la cultura urbana en las ciudades más importantes, expresan con bastante fidelidad los procesos de conflicto cultural que toman parte en el proceso global de cambio de esta sociedad, y sus consecuencias en el proceso de formación de las clases sociales son, sin duda, importantes. Algunas de éstas podrán ser mostradas más adelante.

LA ESTRUCTURA ACTUAL DE DOMINACION Y DE CONFLICTO

Sobre la base del apretado recuento de las principales tendencias de cambio, tanto urbanas como rurales, será posible ahora intentar diseñar un cuadro aproximativo que permita captar la naturaleza fundamental, y las expresiones concretas de la estructura nacional del poder.

En general, puede decirse que esta estructura nacional de dominación y de conflicto, corresponde de modo bastante ajustado al carácter de transición de la estructura de la producción. No obstante, es necesario subrayar, también, que las formas concretas de expresión del sistema proceden no solamente de las bases económicas nacionales inmediatas, sino también de la

dependencia imperialista en los aspectos superestructurales, así como de los conflictos culturales heredados de la dominación colonial lejana. O, en otros términos, que es probable que estas mediaciones concretas, impliquen un margen de autonomía relativa, cuyos límites y cuyos rasgos la investigación debiera tratar de precisar, para los fenómenos y problemas actuales de la dominación social, y de manera especial para todos los problemas implicados en la formación y organización concreta de los intereses de clase de los grupos dominados.

1. LA BURGUESIA DEPENDIENTE.

La clase dominante de esta sociedad puede ser caracterizada correctamente como una burguesía dependiente.

En el período anterior, con su estructura productiva asentada básicamente en los sectores agrariomineros y en tanto que la minería está bajo el control directo del imperialismo en su parte decisiva, la burguesía peruana era fundamentalmente una burguesía terrateniente, con reducidos sectores financieromercantiles y aún más reducidos sectores de incipiente industria ligera. Esto es, el núcleo dominante de la burguesía peruana, era la burguesía terrateniente.

El desplazamiento de la producción agropecuaria y minera a un segundo plano decreciente en la actual estructura productiva de transición, en favor de la producción industrial manufacturera y de las actividades terciarias, significa el desplazamiento también de la burguesía terrateniente de su lugar tradicionalmente dominante en el conjunto de la clase, al mismo tiempo que el ascenso de la burguesía industrialmercantil urbana como el sector dominante de la clase.

Por eso, la actual clase burguesa dominante en nuestra sociedad, cuyo carácter dependiente no requiere ser enfatizado, aparece compuesta por los siguientes sectores:

- 1) La burguesía industrial.
- 2) La burguesía mercantilfinanciera.
- 3) La burguesía terrateniente de producción para la exportación.
- 4) La burguesía terrateniente de producción para el mercado local y regional.

Esta descomposición sectorial de la burguesía nacional dependiente, tiene un valor analítico principalmente. En la realidad, los miembros de cada uno de los grupos participan en cada uno de los otros, en diversos niveles,

como lo revelan investigaciones en curso. Sin embargo, algunos de los grupos de la burguesía industrialmercantil, tienen origen relativamente reciente y provienen de la movilidad ascensional de miembros de las capas altas de la clase media urbana, en buena parte a través del uso de los canales políticos y el uso en beneficio propio de los recursos del Estado. Aunque estos grupos se vinculan inmediatamente a cada uno de los otros, directa o indirectamente, su vinculación principal reside en las actividades industriales y mercantiles.

2. LAS CLASES MEDIAS.

La expansión del aparato administrativo del Estado, el ensanchamiento de los medios de profesionalización y tecnificación, la expansión de las actividades terciarias en las localidades urbanas y su penetración creciente en las localidades rurales, han permitido el desarrollo de capas de población situadas en una posición intermedia económicosocialmente, a un ritmo muy desigual entre la ciudad y el campo.

Los principales sectores de esta población intermedia, podrán ser definidos como:

- 1) La «nueva clase media» urbana.
- 2) La «pequeña burguesía» urbana y semiurbana.
- 3) La «pequeña burguesía» agrícola rural.
- 4) La «pequeña burguesía» comercial rural.

La «nueva clase media» constituida por los grupos asalariados en las actividades «no manuales», se recluta principalmente a través de la burocratización pública y privada, de la profesionalización y la tecnificación de algunas ocupaciones. Todos esos canales se superponen en gran medida. En el período anterior, provenía sobre todo de los rasgos de las capas terratenientes provincianas en proceso de declinación, y de los reducidos núcleos de clase media urbana que produjo el renacimiento de la economía de exportación desde la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente, junto a esos dos sectores, la «nueva clase media» urbana proviene también de los rangos de la pequeña burguesía rural y semiurbana, de las capas más altas de la población obrera y, sin duda alguna, la propia clase media urbana anteriormente formada contribuye en la parte más numerosa.

La tremenda presión actual por el ensanchamiento de la educación superior, universitaria y equivalente, ha producido la proliferación de estas

instituciones de educación en una escala sorprendente, pasando en menos de diez años de 5 universidades a casi 40. Parte de este proceso se deriva directamente de la tendencia de la burguesía a crear sus propios centros de entrenamiento profesional y técnico, para escapar a los riesgos de la politización del estudiantado de las universidades oficiales. Pero, cualquiera que sea el efecto académico de esta proliferación, ella revela mejor que otros índices estadísticos, la magnitud de la tendencia y la presión de las clases populares por la movilidad ascensional.

La «pequeña burguesía» urbana y semiurbana, es principalmente el resultado de la expansión de las actividades mercantiles y de servicios, y de la pequeña producción industrial, en los últimos años. En el Perú no llegó a establecerse nunca la pequeña burguesía, en tanto que dueña de pequeños medios de producción, como un estrato definido e importante ni durante la colonia ni durante el período postcolonial anterior a este medio siglo. Los reducidos núcleos coloniales que emergieron a lo largo de los siglos XVII y XVIII, se estancaron y se redujeron como consecuencia del estancamiento de la economía de exportación y la completa agrarización de la economía desde fines del siglo XVIII y comenzaron a formarse de nuevo, lentamente, a favor del renacimiento de la economía de exportación a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En los años posteriores a la Segunda guerra mundial, el brusco proceso de crecimiento urbano y las nuevas tendencias de la estructura de la producción y de la penetración imperialista, han dado lugar a una relativa expansión de la pequeña industria manufacturera, y sobre todo de las actividades mercantiles y de promoción y venta de servicios de diverso tipo.

La «pequeña burguesía» rural es, en parte, el resultado de la desintegración de la propiedad latifundiaría en algunos de sus sectores, y en otra, de la creciente penetración del comercio especialmente en las localidades rurales. Por ello, la pequeña burguesía rural, podría ser subdividida, analíticamente, en dos sectores: la pequeña burguesía rural agrícola y la pequeña burguesía rural comercial. En el fondo, sin duda alguna, ambos sectores aparecen superpuestos en muy gran parte.

3. LA POBLACION OBRERA.

Esta denominación recubre a la población asalariada en las actividades «manuales», es decir en aquellas directa e inmediatamente vinculadas al proceso de la producción de bienes y servicios del país.

En la actualidad, sus principales sectores constituyentes podrían ser caracterizados como:

- 1) El proletariado urbano fabril y no fabril.
- 2) El proletariado semiurbano de las minas y de las plantaciones de la Costa.
- 3) El proletariado rural agrícola y no agrícola.

Anteriormente, por las características propias de la estructura de la producción, los sectores de mayor importancia económicosocial eran los que correspondían a la producción agrariominera. Pero, dentro de las nuevas tendencias descritas, el proletariado urbano pasa a ser el núcleo de mayor peso económicosocial y, dentro de él, el proletariado fabril urbano.

A medida también, que la producción industrial manufacturera urbana se desarrolla más enfáticamente en los sectores de industrias básicas intermedias que en los rubros tradicionales de industrias para el consumo inmediato, el proletariado urbano vinculado a los nuevos sectores manufactureros comienza a constituirse como el núcleo más poderoso de la clase en formación, no obstante que en términos numéricos más del 50 por ciento sigue concentrado en las industrias tradicionales.

Si se consideran las cifras del cuadro siguiente, puede apreciarse que la población obrera del país en su conjunto, ha pasado a ser la más numerosa individualmente.

CUADRO 7

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR CATEGORIAS DE OCUPACION, 1961

CATEGORIAS DE OCUPACION	ABSOLUTAS	RELATIVAS POR CIENTO
<i>Total:</i>	3,661.6	100.0
Patronos	69.6	1.9
Trabajadores independientes	1,409.7	38.5
Empleados	402.8	11.0
Obreros	1,193.4	31.5
Trabajador doméstico	205.0	5.6
Trabajadores familiares no remunerados	333.2	9.1
No especificados	87.9	2.4

Fuente: Censo de población de 1961.

En el cuadro anterior, el sector de mayor porcentaje corresponde a los «trabajadores independientes». Esta categoría funciona como un cajón de sastre, para incluir tanto a los profesionales independientes, a los pequeños y medianos agricultores, a los pequeños comerciantes y artesanos, como a los grupos que carecen de trabajo estable y definido tanto en la ciudad como en el campo y que forman la inmensa masa «marginal» de la población.

Dentro de la población obrera, los grupos ocupados en la agricultura siguen siendo los más numerosos y su mayor parte se concentra en el proletariado semiurbano de las plantaciones mecanizadas de la Costa. Por debajo de ellos, el proletariado industrial manufacturero urbano y no manufacturero y el proletariado minero. La población asalariada de las zonas rurales de la Sierra sin duda tiende a incrementarse numéricamente, pero para su mayor parte, su condición puramente asalariada no parece estar aún totalmente definida, en tanto que la agricultura de subsistencia en los minifundios sigue siendo aún parte de su rol económico y su fuente de ingresos.

4. EL CAMPESINADO NO ASALARIADO.

En la medida en que la desintegración de las «haciendas tradicionales» no es tan acelerada como sería necesario y las relaciones tradicionales de trabajo de tendencias señoriales en estas haciendas no se ha destruido en muchas regiones, subsiste una capa relativamente extensa de campesinos no asalariados, que probablemente forma parte de la subcultura campesina indígena en una alta proporción.

La imagen tradicional vigente, presenta a esta población de trabajadores campesinos como el estrato «servil» de la sociedad, en tanto que en las relaciones de trabajo en que está incorporados, subsisten numerosas características de origen señorial.

En efecto, si se consideran aisladamente estos elementos, podría ser posible admitir la condición de «siervos» de estos trabajadores y el carácter feudal del modo de producción de las «haciendas tradicionales». Sin embargo, estas haciendas destinan su producción no solamente al consumo familiar de los terratenientes, sino al mercado local y regional y, en pocos sectores, también al mercado internacional, como era el caso de las plantaciones de té y de café de los valles de La Convención y de Lares, en el Cuzco. Es decir, en tanto que unidades de producción las haciendas son empresas

capitalistas, tan primitivas como se quiera en muchas de las zonas más aisladas hasta hace poco, que utilizan para finalidades capitalistas formas señoriales en las relaciones de trabajo.

La naturaleza básica de la estructura productiva de estas haciendas tradicionales, corresponde sin duda a la de una economía agraria capitalista, estancada y combinada con instituciones de origen feudal y aun prefeudal en las relaciones de trabajo. De ese modo, aunque desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, los trabajadores campesinos de estas haciendas podrían ser vistos como siervos, desde el punto de vista de su rol real en el proceso de producción eso no es más posible. En tanto que producen para el mercado, son productores de mercancías y parte integrante del sistema capitalista en su conjunto. Es, pues, mucho más adecuada la denominación de «campesinos no asalariados».

Por lo demás, históricamente, este sector de población en tanto que estrato social, es una sobrevivencia derivada del estancamiento del capitalismo en esas zonas del país, que ahora comienza a desintegrarse para pasar a formar parte de la población de asalariados, minifundarios o ambos a la vez, y, a través de la migración, en parte de la población obrera o «marginal» de las ciudades.

5. LA POBLACION URBANA «MARGINAL»

Las características anotadas anteriormente, sobre el modo de desarrollo de la industria manufacturera urbana, de importación de las penúltimas tecnologías de producción, de estructura empresarial monopolística y organización del trabajo de tendencia «moderna» o «racional», permiten explicar mucho más que la debilidad de la industrialización, la reducida capacidad de absorción de mano de obra de la actividad económica urbana. Esos factores están presentes, precisamente en el momento en que los aluviones migratorios han llevado a un crecimiento demográfico creciente a las ciudades, y la oferta de mano de obra ha aumentado de manera desproporcionada a las posibilidades del mercado capitalista subdesarrollado y dependiente de las ciudades.

La falta de empleo y de ingresos, ha creado la tendencia de «marginalización» creciente de la mayor parte de población migrante en las ciudades; su carencia de calificación para las actividades económicas urbanas, su condición analfabeta o semianalfabeta en el mejor de los casos, y las

tendencias restrictivas del mercado de trabajo urbano, refuerzan mutuamente la «marginalización».²⁰

Este fenómeno no es privativo del Perú, ni probablemente de Latinoamérica. Pero, como quiera que sea, la presencia de esta capa de la población urbana, principalmente, revela la naturaleza de las tendencias del crecimiento económico del capitalismo subdesarrollado y dependiente de nuestros días en el Perú. Al mismo tiempo que la economía urbana y dentro de ella la producción manufacturera se expande, se ensancha paralelamente una población que no puede ni podrá encontrar lugar en la estructura económico-social que se desarrolla bajo estos signos.

Su «marginalidad» se deriva de su precaria e inestructurada posición dentro de la sociedad, su participación dentro del sistema de dominación emergente sólo de manera tangencial y negativa, su carencia de roles generales y específicos definidos en el proceso productivo, y, por lo tanto, su posición social marginal y dominada.²¹

El proceso de migración a las ciudades no puede dejar de crecer en las actuales circunstancias y la «marginalización» de la mayor parte de las poblaciones migrantes no puede dejar de desarrollarse paralelamente, alimentando la formación creciente de todo un estrato social que, por las características restrictivas del mercado de trabajo no constituyen sino en pequeña parte un «ejército industrial de reserva» a la manera clásica, donde el desarrollo industrial iba incorporando esta población; en la actualidad, más que ese «ejército», esta población tiende a formarse directamente como «marginal».

LAS TENDENCIAS DE CLASES. LIMITES Y PERSPECTIVAS

De modo general, no sería incorrecto interpretar la actual estructura de dominación y de conflicto social en el Perú, como conducida por una tendencia definida de estratificación social policlasista, de naturaleza capitalista, pero con múltiples elementos de procedencia precapitalista y de los

²⁰ Véase de Fernando Henrique Cardoso y José Reyna, *Industrialización, estructura ocupacional y estratificación social en América Latina*, Instituto latinoamericano de planificación económica y social, Santiago, 1966.

²¹ Sobre una discusión del concepto de «marginalidad», véase de Aníbal Quijano, *Notas sobre el concepto de marginalidad*, CEPAL, División de asuntos sociales, 1966.

períodos históricos anteriores del capitalismo, en algunos de sus sectores. Los cambios económicos y sociales que han hecho surgir primero una nueva sociedad urbana, han inducido posteriormente cambios correspondientes en la sociedad rural. Las discontinuidades de ritmo y las singularidades en cada uno de estos niveles, no pueden ocultar la naturaleza básica común y la orientación general común en ellos.

El problema es, sin embargo, que dentro de esta nueva estructura de dominación y de conflicto, no todos los sectores de interés con tendencias de clase, parecen haber alcanzado ya un grado suficiente de diferenciación y de organización en términos de clase. Desde este punto de vista, es indispensable dejar anotadas aquí algunas observaciones, cuyo valor debe ser explícitamente condicionado por su carácter principalmente impresionístico, pero que pueden servir como puntos de partida para nuestra reflexión y para investigaciones concretas posteriores.

En primer lugar, el desarrollo de una estructura policlasista y de clases modernas correspondientes al desarrollo actual del capitalismo subdesarrollado y dependiente del país, es un proceso relativamente reciente en su nivel actual, y las bases económicas en que se apoya son aún precarias y vacilantes, aunque las tendencias que las mueven puedan ser relativamente claras.

En consecuencia, no pueden dejar de existir superposiciones, ambivalencias y conflictos entre los patrones y elementos que provienen de los períodos anteriores y los de las tendencias actuales. La sociedad en su conjunto, se mueve así constantemente entre estos diversos y contradictorios polos de orientación concreta, presentando situaciones de difusa e incongruente estructuración o lisamente inestructuradas, particularmente en las relaciones concretas entre los diversos grupos básicos de interés social y en la orientación del compartimiento de sus miembros.

Sabemos desde Marx que los sectores componentes de una estructura social global, no guardan entre sí relaciones totalmente sistemáticas, y que cada uno de ellos existe y cambia con una relativa autonomía de ritmo y de características específicas, como resultado de la actuación de ciertos factores de carácter histórico concreto, en muchos de sus aspectos.

La clase burguesa dominante en lo interno y dependiente del imperialismo, presenta por lo menos dos rasgos de importante repercusión sobre su propia constitución y sobre las relaciones con los demás grupos. De una parte, si bien es cierto que dentro de ella emerge como sector dominante

la burguesía industrial urbana, ello no implica que este dominio esté ya plenamente consolidado, en la medida en que el desarrollo de las actividades económicas que fundan su poder social y político, no está tampoco ya consolidado como el sector plenamente dominante de la producción nacional, y en la medida en que la ligazón del imperialismo con la burguesía terrateniente sigue siendo poderosa, no obstante la clara tendencia a enfatizar su penetración en los nuevos sectores productivos.

En segundo lugar, y en relación estrecha con lo anterior, la subcultura de la clase dominante parece moverse constantemente entre los patrones y normas de la subcultura aristocratizante de la vieja burguesía terrateniente, de procedencia hispano-francesa, y los patrones y normas de los nuevos grupos de la burguesía industrialmercantil urbana, derivados de la dominación norteamericana. A pesar de ello, parece igualmente claro que son estos últimos elementos que tienden a predominar en la subcultura de la clase dominante del Perú, aceleradamente, y la recurrencia de los elementos tradicionales aparece principalmente en las relaciones concretas con los trabajadores de las plantaciones y las haciendas y en el sistema de clientela bajo el cual se forman las «nuevas clases medias» urbanas en menor medida.

Todo ello no obstante, no es posible vacilar para sostener que de todas las clases sociales peruanas, la burguesía dependiente es la única plenamente constituida como clase para la totalidad de los aspectos, desde el punto de vista de la diferenciación y la conciencia de sus intereses generales, de su organización en instituciones políticas y jurídicas, y en el uso del Estado para la dominación.

La imagen tradicional de la sociedad peruana, todavía sigue presentando a los terratenientes y a los sectores industriales y mercantiles de la burguesía, como dos clases sociales distintas y cuyos intereses generales son conflictivo en esa medida. Los sectores terratenientes aparecen como una «oligarquía feudalburguesa», vinculada al imperialismo, y los otros como «burguesía nacional», que por tener intereses sociales de clase contrapuestos a los anteriores, asumiría un «papel progresista» en la sociedad, y una postura «nacionalista» frente al imperialismo.

Frente a esta imagen, es indispensable poner de relieve que los sectores de la burguesía ligados a la agricultura de exportación y de mercado interno, como los vinculados a la producción manufacturera urbana y a la actividad mercantilfinanciera, participan plenamente de los mismos intereses de clase, y que están indisolublemente ligados entre sí a través de

múltiples lazos económicos, en las mismas empresas, y de lazos familiares y sociales muy consistentes. Pero, sobre todo, que la dependencia del imperialismo afecta ahora mucho más a los nuevos sectores industriales, mercantiles y financieros, que a los de la producción agropecuaria y minera, y que, en consecuencia, son aquéllos en primer lugar y éstos en segundo, que representan hoy día los intereses del imperialismo en el país, y que sobre esa base que emergen como el núcleo dominante de la clase burguesa nacional en su conjunto.

Ciertamente, existen y no pueden no existir, fricciones y conflictos sectoriales en el seno de esta clase, sobre todo entre los más recientes sectores de la burguesía industrial y los más tradicionales de la burguesía terrateniente. Pero la naturaleza de estos conflictos no puede ser asimilada a conflictos de clase. Los intereses generales de la clase y su defensa sólo aparecen frente a otros intereses y fenómenos que ponen en riesgo su dominación conjunta, y en el Perú se expresaron con la mayor violencia y claridad en el enfrentamiento con los movimientos campesinos y con las guerrillas.

Los conflictos sectoriales corresponden al esfuerzo de expansión de los sectores de producción a los que cada grupo está *principalmente* ligado, en la esfera económica, y al esfuerzo por imponer a la clase en su conjunto la defensa de estos intereses sectoriales y los intereses conjuntos según fórmulas propias a través del aparato del Estado, y para imponer por ese medio sobre el resto de la sociedad la dominación de sus intereses y de las orientaciones valóricas que permiten su institucionalización.

El proletariado peruano, como se vio antes, aparece dividido en varios sectores que corresponden a la naturaleza de transición de la estructura productiva del país. Esta división sectorial, a diferencia de lo que sucede con la burguesía, no es meramente o principalmente analítica; porque mientras que los miembros de cada uno de los sectores burgueses participan plenamente en cada uno de los otros, los del proletariado están ligados únicamente a un sector específico de la estructura de producción. Pero, además, entre ellos existen cortes derivados de la diferenciación cultural y de sus implicaciones, lo que en el caso de la burguesía no existe en términos prácticos.

El proletariado industrial urbano está en su mayor parte concentrado en las industrias ligeras tradicionales, y sólo menos del 50 por ciento en los nuevos sectores industriales de productos básicos intermedios. Pero, lo que es

mucho más importante, la mayor parte de esta población es de procedencia migrante relativamente reciente y participa en una subcultura aún muy impregnada de elementos de procedencia rural o semiurbana no industrial, parte de la subcultura popular urbana actual. De la misma manera, el proletariado agrícola de las plantaciones modernas de la Costa y el proletariado minero, tienen una subcultura semiurbana y, aunque el último tiene un carácter más definitivamente obrero, en su conjunto están demasiado ligados a las orientaciones valóricas campesinas. Por su parte, los asalariados rurales del resto del país, son un estrato en plena formación, cuya posición en la estructura productiva aún no está totalmente diferenciada, y que sólo lentamente va diferenciándose.

Esto es, no obstante la situación objetivamente diferenciada de la mayor parte de la población obrera del país, sobre todo en sus sectores urbanos y mineros, en la estructura de la producción y en las relaciones sociales dentro y fuera del mercado, el proceso de diferenciación de una subcultura de clase, de la cual la conciencia de clase es uno de los elementos básicos, y el proceso de organización institucionalizada de los intereses de clase, son todavía poco avanzados y sólo han cristalizado en un nivel tradicional en ciertos sectores y en un nivel moderno, políticamente expresable, en sectores reducidos.

Las manifestaciones de este proceso de formación de una conciencia diferenciada de clase y de organización de los intereses de clase, pueden ser mostrados a través de dos fenómenos decisivos.

En primer lugar, la debilidad del desarrollo de la sindicalización, que se expresa en la inexistencia de organizaciones sindicales para la mayor parte de la población obrera del país, la inexistencia de organizaciones sindicales por ramas industriales para los sectores ya sindicalizados, y la práctica ausencia de organizaciones centralizadoras y coordinadoras a nivel nacional. Notablemente, después de períodos de extraordinaria combatividad del proletariado urbano, en las jornadas por las ocho horas, en la lucha por la sindicalización y la creación de centrales sindicales nacionales, en los años recientes las luchas obreras tienden a darse de manera aislada, por sindicato de fábrica, y los organismos sindicales centrales regionales y nacionales se han reducido a aparatos formales, sin conexión real con el resto de la clase.

Una de las explicaciones de este fenómeno, puede encontrarse en el hecho de que por un largo período, la movilización sindical urbana y semiurbana

fue conducida bajo el predominio de movimientos políticoideológicos reformistas, y la formación de la conciencia de clase de los sectores tradicionales de la población obrera fue marcada por esta influencia. A medida que estos movimientos políticos reformistas se fueron identificando con las nuevas tendencias de dominación social, la sindicalización devino un instrumento de los intereses políticos inmediatos de esos partidos, y el desarrollo de las luchas de clases tendió a distorsionarse y a enlentecerse hasta producir la situación actual.

Es cierto también que la responsabilidad de estos hechos, corresponde en gran parte a la orientación reformista y alienada de la realidad nacional, de los propios partidos que se reclaman de los intereses de la clase obrera del país, y cuyo liderazgo sindical en numerosas ocasiones frustró la cristalización de movimientos de reorientación y revitalización de la lucha sindical del proletariado urbano principalmente. Sin embargo, todo ello no habría sido tan fácil, si dentro de las propias circunstancias de la clase obrera no concurrieran elementos que favorecieran esas tendencias reformistas.

En los países subdesarrollados del mundo capitalista, la población obrera ocupa un lugar dentro del sistema interno más beneficiado que la población campesina y que los sectores urbanos marginalizados y —salvando niveles y distancias— tiende a cumplir un rol político semejante al que desempeñan las poblaciones obreras de los países imperialistas, como parte de las formas de colonización interna dentro de las propias sociedades subdesarrolladas de condiciones equivalentes a las del Perú, donde en los sectores tradicionales de la producción vive una vasta masa de población campesina sobre la cual recae el peso mayor de las formas de desarrollo capitalista, desigual y regionalmente concentrado; es decir, dentro del país, tienden a reproducirse en ciertos aspectos y en sus líneas generales, las divisiones entre los países imperialistas y los dependientes.

Otro rasgo significativo, es la persistencia de ciertos elementos de «paternalismo» en las relaciones obrero-patronales y en las relaciones obrero-estatales. Como han observado ciertos analistas extranjeros,²² una de las características notorias de las luchas sindicales en el Perú, es que éstas se convierten inmediatamente en políticas, en el sentido en que la presión sindical se ejerce sobre las autoridades del gobierno, para obligarlo a inter-

²² James L. Payne, *Labor and Politics in Peru*, Yale University Press, New Haven and London, 1965.

venir como árbitro componedor de la situación, por temor a las consecuencias políticas de la agitación sindical.

El antecedente explicativo de este hecho, es que la legislación social actual del país, fue el resultado de la iniciativa estatal como un instrumento en la lucha política contra el Apra, tan temprano como entre 1936-39, mas bien que el resultado de la directa presión de la lucha obrera. Si bien es cierto que esta legislación favoreció a los trabajadores urbanos, que no las habrían podido obtener en esa época, dadas las características represivas permanentemente de los regímenes políticos, y del carácter concreto de la clase dominante de entonces (burguesía terrateniente, con valores autoritarios), también es cierto que este hecho contribuyó al desarrollo de una relación paternalista entre la clase obrera y el Estado y, a través de éste, con la burguesía dominante, y a la perduración de la influencia ideológica «populista» (expresión ajustada de los intereses burgueses y de las aspiraciones pequeñoburguesas en ascenso), sobre el proceso de formación de la clase obrera peruana.

A pesar de todas estas circunstancias y dificultades, no debe olvidarse que en la última década se ha venido desarrollando bastante rápida y consistentemente una nueva conciencia de clase, entre algunos de los sectores del proletariado ligado a las nuevas actividades industriales, como la metalurgia, mientras los sectores tradicionales (textilería) se han mantenido en sus posiciones reformistas anteriores. Los nuevos sectores, desarrollan un estilo de lucha sindical nueva, adoptan medidas semiinsurreccionales como la ocupación de las fábricas y la retención de los patronos como rehenes, y utilizan los mecanismos de la agitación y la presión política para fines radicalmente distintos del «paternalismo», denunciando en la calle el carácter de clase del Estado más que reclamando su intervención como árbitro por encima de las clases.

Lo que indica bien claramente, no sólo la presencia de elementos nuevos de orientación políticoideológica que van constituyendo las bases de una nueva conciencia de clase en el proletariado urbano nuevo, sino también el *doble filo* del arma que la legislación social y la política reformista entregó a la burguesía nacional y a los movimientos reformistas que predominan aún en el seno de la clase obrera.

No obstante, los sectores que participan y comienza a participar en estos nuevos caminos de orientación de la clase obrera, son todavía bastante reducidos. Pero junto a eso, las reivindicaciones incluidas en los pliegos

de reclamos sindicales, son inevitablemente restringidos al propio sector sindicalizado de la rama industrial y no a la rama en su conjunto y no digamos ya al resto de la clase. De ese modo, los pocos sectores sindicalizados logran con frecuencia elevar algo su nivel salarial y tener acceso a una participación mayor en el mercado, mientras los sectores no sindicalizados o con sindicatos totalmente dependientes de las manipulaciones partidarias de los partidos políticos reformistas, ven reducirse sin pausa sus salarios reales. Esta situación ha proporcionado, con reiterada frecuencia, un instrumento de propaganda distorsionada a la clase dominante, para enfatizar el carácter «privilegiado» de tal o cual sector de obreros y empleados, sobre el resto de la población y para influir en la población popular urbana neutralizando su solidaridad con los sectores en huelga, mientras el gobierno desmontaba y paralizaba las organizaciones sindicales de estos grupos.

De otro lado, el sistema de reclutamiento de la población obrera, está también impregnado de «paternalismo» y de cierto carácter excluyente, derivado de ello. Diversos autores,²³ han observado la forma en que el sistema de reclutamiento se vincula a un circuito dentro del cual las «recomendaciones» personales de los miembros de la burguesía o las «peticiones» de los propios obreros por sus parientes y amigos, establecen una «clientela» obrera y un «mercado de servicios» entre la burocracia sindical y los patronos y que refuerzan la «marginalización» de los más amplios sectores de la oferta de trabajo y el carácter «privilegiado» de los sectores obreros sindicalizados, todo lo cual corresponde estrechamente a las características del proceso actual de industrialización descrito antes, y su tendencia a reducir la absorción de la mano de obra barata.

Por esos mecanismos, la diferenciación de la conciencia de clase en el proletariado urbano, se tiñe de elementos de exclusivismo y de mantenimiento de su posición beneficiada frente a los demás estratos de trabajadores, en un contexto en el cual toda posibilidad de ampliación de sus reclamaciones al resto de la población dominada, pone en riesgo la propia sobrevivencia, y dificulta al mismo tiempo la emergencia de un movimiento de coordinación y de centralización de las propias organizaciones sindicales de clase.

²³ Véase de David Chaplin, *A Discussion of major issues arising in the recruitment of Industrial Labor in Peru*, Land Tenure Center, University of Wisconsin, Madison 1966 (Mimeo) y de Francois Bourricaud, *Sindicalisme, et Politique: le cas peruvien*. Sociologie du Travail No. 4, 1961, pp. 48 y ss.

Estos elementos de «paternalismo patrimonialista» cobran toda su nitidez, sobre todo en el proceso de formación y expansión de las «clases medias», particularmente de lo que aquí se ha caracterizado como la «nueva clase media» urbana. En la medida en que este sector de las clases medias, se forma básicamente a través de los canales de la burocratización y de la profesionalización, los cuales están en gran parte superpuestos, la expansión de los miembros de estos grupos está sujeta a los mecanismos de reclutamiento de que dispone el sistema.

Como en todos los países con economías de transición, la burocracia se desarrolla siguiendo, al mismo tiempo, los mecanismos de reclutamiento que caracterizaban el patrimonialismo tradicional, heredado en la dominación colonial, y los que están implicados en los vacilantes esfuerzos de «modernización» y «tecnificación» del aparato burocrático público y privado. Las consecuencias de la superposición de ambos sistemas de reclutamiento están todavía por investigar. Sin embargo, aún estas tendencias recientes de modernización de los mecanismos de reclutamiento y de organización de la burocracia, están ellas mismas profundamente impregnadas de «patrimonialismo», desde que si bien es cierto que se tiende a reclutar cuadros técnicos y profesionales en lugar de cuadros sin especialización, no es menos cierto que se los recluta por su vinculación política y/o social, antes que por sus conocimientos especializados, y solamente en algunos reducidos sectores.

De ese modo, la burocracia forma una vasta clientela de los grupos de poder y de presión dominantes, y funciona como un «mercado de servicios» entre estos grupos y entre los que se forman en el propio seno de la burocracia. Constituyen, por eso, un sector casi completamente dependiente de los grupos de poder económico-político, y que asume la defensa del sistema de dominación vigente frente a los demás grupos de la sociedad.

La cultura urbana dependiente que se desarrolla simultáneamente con las clases medias urbanas, marcada por la influencia imperialista en los patrones de consumo, los modelos de vida y en la orientación valórica general, está conduciendo a los miembros de estas capas a un grado de perversión pragmatista sin paralelo en otros países de la región, con la probable excepción de México y de Venezuela. En otros países (Uruguay, Argentina, Chile), si bien el mismo fenómeno es observable en cierta medida, se puede tener la impresión de que parte de la tradición hispano-europea, con su peculiar énfasis «humanístico» en la orientación valórica, todavía alienta debilitadamente. Eso se debe, posiblemente, a que estas

capas se formaron en circunstancias históricas bien distintas, bajo la orientación dominante de las burguesías tradicionales de valores formales aristocratizantes, y la influencia intelectual y moral de la Europa tradicional. Por el contrario, las clases medias peruanas son bastante recientes como estrato social diferenciado, y su proceso de formación y de socialización transcurre bajo el crudo signo del «cash nexus», como núcleo del sistema de valores, bajo la orientación dominante de las nuevas capas de la burguesía nacional y la característica influencia intelectual y moral del capitalismo norteamericano en nuestras sociedades.

Sin duda alguna, este carácter reciente de estas capas, y la creciente contribución de las capas populares a la expansión de las clases medias urbanas afecta de manera notable el estilo y la orientación de sus miembros. La búsqueda de status y su consolidación se convierte en la principal empresa vital, el arribismo pasa a ser la orientación dominante y el arribista el tipo social por excelencia.²⁴

Sin embargo los miembros de estas clases parecen al mismo tiempo atrapados entre el pragmatismo social más estridente y la frustración cotidiana. De un lado, la presión de los nuevos patrones de consumo que el imperialismo impone con tremenda fuerza, y de otro lado, los recursos para lograrlos y para mantenerlos no pueden ser suficientes. Ciertamente los canales de movilidad para acceder a la clase media se han ensanchado y continuarán ensanchándose decrecientemente por algún tiempo, y ciertos reducidos canales para el ascenso de sus capas altas a la burguesía se han formado a favor de la expansión económica reciente y de la utilización de los mecanismos políticos y de los recursos del Estado. Pero los canales no pueden ser lo bastante anchos para dar cabida a todos los buscadores de status, así como para que los que ya lo obtuvieron puedan mantener los patrones de consumo que se imponen.

Estos factores podrían explicar por qué los miembros de la clase media urbana, especialmente los más jóvenes, parecen fluctuar constantemente entre el pragmatismo social y el radicalismo político. Quizás el medio más apto para verificar este fenómeno es el universitario y la comparación entre la conducta real de los miembros de los varios grupos ideológicos. Curiosa, pero significativamente, mientras antes había numerosos estudiantes apristas, había igualmente numerosos profesionales apristas. En

²⁴ Es interesante observar cómo en los años recientes, los grupos extranjeros han pasado a servir como modelos de estilo de vida y de cultura, para las clases medias urbanas de Lima-Callao.

la actualidad, existen numerosos estudiantes de ideologías revolucionarias, pero parecen ser bastante menos los profesionales que las mantienen. Los estudiantes apristas eran ya clase media y su profesionalización no significaba una movilidad ascensional muy importante; los estudiantes con ideologías revolucionarias o provienen de las más bajas capas de la clase media en su mayoría o están en camino de ingresar en ella. Su profesionalización es un cambio relativamente importante de status social.

Todas estas circunstancias son, sin embargo, insertas en la naturaleza contradictoria de la sociedad en su conjunto, que probablemente tenderán a agudizarse más aún en el futuro próximo. Es, pues, en los mismos factores que alimentan la fluctuación entre el estridente pragmatismo social y el radicalismo político para las generaciones jóvenes de las capas medias urbanas, donde habrá que encontrar los resortes para enfatizar y hacer consistentes los elementos de orientación revolucionaria de estos sectores. No es, sin duda, casual el hecho de que la radicalización política estudiantil sigue alimentando el desarrollo de los movimientos políticos más avanzados de nuestro tiempo en todos los países latinoamericanos con características equivalentes al Perú.

La población de trabajadores campesinos asalariados, en las zonas rurales tradicionales del interior del país, no parece haber logrado aún un grado suficiente de diferenciación y de definición económicosocial, no solamente porque su proceso de formación es relativamente reciente y lento, sino principalmente porque su condición asalariada aparece supuesta y combinada con su condición de propietario minifundario o trabajador colono, para la mayor parte de ellos.

Como se ha señalado en estudios sobre el movimiento campesino peruano y sobre los de otros países latinoamericanos,²⁵ en la lucha contra los terratenientes tradicionales los trabajadores campesinos han aprendido a identificar un común enemigo, y en esos movimientos participan lo mismo asalariados sin tierra, minifundarios, colonos, pequeños comerciantes, artesanos semiurbanos, que en su conjunto y frente a los terratenientes parecen ingresar en un proceso de conjunción de intereses. Pero en el mismo proceso, y a medida que algunos de los sectores de esta heterogénea población van consiguiendo limitadamente sus objetivos inmediatos, los diversos sectores de interés social específico se van diferenciando y dejando de participar en el frente común contra los terratenientes tradicionales.

²⁵ Sobre este problema, véase de Anibal Quijano, *El movimiento campesino peruano y sus líderes*, en *América Latina*, No. 4, Año 8, oct.-dic. 1965.

Es muy significativo hacer notar, a este respecto, cómo después de los períodos más vigorosos del movimiento campesino peruano, tras la represión y las masacres, pero también tras las invasiones directas de las tierras de las haciendas y las limitadas redistribuciones de tierras en algunas zonas, los sindicatos rurales —ciertamente bajo liderazgos más moderados— tienden a desplazar su lucha y sus gestiones al plano legal y se incorporan por este mecanismo al sistema vigente de la legalidad burguesa. Si bien es cierto que la moderación y el reformismo de algunos sectores del liderazgo actual, pueden explicar en parte esta situación, es cierto también que eso no habría sido posible sino a favor de los procesos de acentuación de las diferenciaciones de interés específico en el seno de la población agrupada bajo esos sindicatos.

De esta población, el incipiente asalariado agrícola y no agrícola de estas zonas, es sin duda el sector más débil y menos definido, y carece de toda forma de organización propia de sus intereses.

LA EXPANSION Y LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA

Según las cifras oficiales, la expansión de la economía peruana en los últimos años, se produce a un ritmo impresionante. Con algunas fluctuaciones antes de 1958, y de manera sostenida desde entonces, la tasa anual de crecimiento entre 1950-65 alcanza, como promedio, a 5.6 por ciento y desde 1958 sobrepasa el 8 por ciento anual. El promedio regional latinoamericano oscila alrededor del 2 por ciento anual.²⁶

Como consecuencia, el PNB real per cápita creció en 3 por ciento anual y el ingreso personal promedio en 3.3 por ciento, en el mismo período, mientras en el crecimiento demográfico nacional se estima entre 2.5 y 2.9 por ciento de tasa anual promedio.²⁷ Podría, pues, pensarse que la sociedad peruana tiene un efectivo desarrollo y que estamos en el mejor de los mundos. No obstante, los propios datos oficiales permiten mostrar que por debajo de estas cifras espectaculares en el contexto latinoamericano, existe una realidad económicosocial también espectacularmente dura.

²⁶ INP, *op. cit.*, vol. II, pp. 12-14, y Cuentas nacionales del Perú 1950-65, Banco central de reserva, Lima, 1966, pág. 7.

²⁷ Banco central de reserva, Cuentas nacionales 1950-1965, pág. 7.

1. LA ACENTUACION DE LA DEPENDENCIA.

En primer término, la responsabilidad por estos índices de crecimiento económico, reside en tres factores: el incremento de la exportación, la creciente participación del Estado en la economía nacional, y el crecimiento industrial urbano.

La expansión de la exportación corresponde básicamente a la harina de pescado y a los productos minerales. Durante el período, las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 8.5 por ciento, permitiendo que el flujo de divisas aumentara en 8.9 por ciento de tasa anual promedio.²⁸ La producción minera está en su práctica totalidad, bajo el control directo del imperialismo norteamericano y a partir de la legislación minera vigente desde la dictadura del general Odría, goza de franquicias y exoneraciones de todo tipo. Sólo geográficamente, estos «enclaves» mineros podrían formar parte de la economía nacional. Pero, aparte de eso, el crecimiento de la exportación minera que beneficia directamente al capital imperialista, se debe a una coyuntura derivada de las necesidades bélicas del imperialismo, en la salvaje intervención en Viet Nam. La producción de harina de pescado, que se inició con capitales nacionales gracias a las necesidades de fertilizantes en el mercado europeo, ha terminado bajo el control principal del capital imperialista (norteamericano, alemán, japonés), por la compra de acciones directas, por el control financiero y crediticio, aunque este control es compartido con la burguesía nacional y está más íntimamente vinculada a la economía nacional. Pero a medida que otros países comienzan a incrementar su propia producción de harina de pescado, la bonanza que deriva de este rubro para el Perú tenderá a disminuir.

Esto es, no solamente el crecimiento de las exportaciones se deriva de circunstancias en gran parte coyunturales, sino de la creciente dependencia del imperialismo.

El Estado canaliza el 13 por ciento de la inversión total en el país,²⁹ y su participación en la demanda global de bienes y servicios creció en 9.8 por ciento de tasa anual promedio entre 1950-65 y en 1954 alcanzó el 16.5 por ciento.³⁰ Parte de las rentas del Estado provienen de la tributación

²⁸ *Op. cit.*, pág. 10.

²⁹ *Op. Cit.*, pág. 11.

³⁰ INP, vol. II, pág. 12.

interna, pero sobre todo de la política de obtención de préstamos y créditos en el exterior. Solamente entre 1951-62, la deuda pública sobrepasaba los 500 millones de dólares.³¹ Es decir, de nuevo, la expansión de la participación estatal de la economía, debe cargarse a cuenta del fortalecimiento de la deuda externa y así de las nuevas orientaciones de la penetración imperialista.

La industria manufacturera creció en el período a una tasa anual promedio de 7.5 por ciento, llegando a formar el 20 por ciento del PNB y destinando el 80 por ciento de su producción al mercado interno.³² El informe que el gobierno peruano presentó al Seminario de industrialización de mayo de 1966, en Santiago, sostiene que la mayor parte de la inversión industrial en el Perú proviene de la reinversión de capitales nacionales y de los créditos del Banco industrial. Pero, por una parte, en el cuadro 3 se revela que el 80 por ciento de la inversión industrial proviene del capital imperialista, y de otro lado el mismo informe citado señala que los créditos del Banco industrial se hacen en estrecha conexión con organizaciones financieras y crediticias extranjeras.³³

Todos los datos conducen a poner al descubierto que el crecimiento de la economía peruana en los 15 recientes años, son el resultado de las nuevas orientaciones de la penetración imperialista, su transición de los sectores mineroagropecuarios a los sectores industriales privados y a la actividad estatal, por una parte. Por la otra, que todo eso configura un cuadro vivo de la expansión creciente de la dependencia nacional del imperialismo: O, en otros términos, el espectacular crecimiento de la economía peruana, descubre el espectacular crecimiento de nuestra dependencia del imperialismo, norteamericano en particular.

Al mismo tiempo, estos hechos desocultan la debilidad congénita de la economía peruana, fundada en parte en el carácter coyuntural de las circunstancias de su crecimiento, y en su dependencia del control y de los intereses imperialistas, así como la debilidad y la dependencia congénita de los nuevos grupos de la burguesía nacional, a los que el reformismo de parte de la izquierda tradicional peruana, otorgó graciosamente un carácter «progresista» y «nacionalista».

³¹ Naciones Unidas, *El Financiamiento externo en Latinoamérica*, NU, 1966.

³² INP, vol. II, pág. 12.

³³ CEPAL, *El desarrollo industrial del Perú*, informe presentado por el gobierno peruano al Simposio latinoamericano de industrialización, en Santiago, marzo de 1966, pp. 36-39 (Mimeo).

2. LA ACENTUACION DEL COLONIALISMO INTERNO.

En períodos anteriores, dominados por el carácter agrariominero básico de la economía, la dependencia de las otras regiones del país respecto de la Costa y del área metropolitana de Lima-Callao, no llegó nunca al grado actual. La Costa utilizaba la mano de obra barata de la Sierra, sus productos alimenticios y sus recursos naturales en general para la expansión y la «modernización» de la economía de la Costa. Sin embargo, las regiones serranas, sobre todo las localidades rurales, mantuvieron un margen bastante amplio de autonomía, de donde se derivaba el secular estancamiento de su capitalismo agrario y la lentitud del ritmo de cambio, la predominancia del caciquismo político, del «gamonalismo» terrateniente.

En la actualidad, esta relativa autonomía tiende a ser destruida de manera brutal y completa, por la desintegración de la economía rural tradicional, la penetración del mercado de productos urbanos de la Costa, la expansión del sistema de transportes y comunicaciones, que forman parte del proceso de transición de la economía peruana y de su urbanización.

De ese modo, lo rural es hoy día totalmente dependiente de lo urbano, éste de lo urbano costero y todo el país, respecto de Lima-Callao. Según los resultados del Censo de 1961, en la Costa estaban 21 de 37 ciudades de más de 10 mil habitantes en el país, y sólo 13 en la Sierra y 3 en la Selva. Lima-Callao concentraba el 63 por ciento de la población urbana del país.

Estas cifras no pueden sorprender, si se tiene en cuenta que más del 60 por ciento del PNB proviene de la Costa, con el 47 por ciento de la población total del país. Lima-Callao, por su parte, concentra el 67 por ciento de la producción industrial del país, y de ese porcentaje, la producción específicamente fabril que en 1960 concentraba el 54.4 por ciento del valor total de la producción nacional, acumuló en 1965 el 59.1 por ciento, ganando una diferencia de 4.7 por ciento que para las otras regiones del país representó una pérdida de 10.3 por ciento en el porcentaje del conjunto de la producción que representaban en 1960.³⁴

Estas cifras son suficientes para mostrar la tendencia de acentuación del colonialismo interno entre la Costa y las demás zonas geográficas del país, y el carácter de metrópoli interna dominante y solitaria de Lima-Callao sobre todo el resto del país.

³⁴ Palomino Roedel, *op. cit.*, pág. 9.

Si Lima-Callao ha logrado esta posición, no se debe sino en parte, a la tradición de centralismo administrativo de herencia colonial, y a su ubicación en la Costa. Se debe, ante todo, a que sirve hoy como cabecera de puente de la expansión de la dependencia imperialista del país, en la medida en que el grueso de la inversión de esta procedencia se concentra allí, y en la medida en que sirve como foco reproductor de todas las formas de la influencia sociocultural imperialista.

3. LA CONCENTRACION DEL INGRESO.

Según las cifras oficiales, entre 1950-65 el ingreso personal per cápita creció a una tasa anual promedio de 3.3 por ciento, mientras la población creció por debajo del 3 por ciento anual. En 1965 el ingreso promedio por persona fue de 9,763 soles (364 dólares).³⁵

Si frente a esta información se examinan los datos del cuadro 8, resulta que ya en 1961, el 64.8 por ciento de la población económicamente activa percibía ingresos por debajo de los 10,000 soles, recibiendo en conjunto el 18.9 por ciento del total de los ingresos. En el otro extremo, el 1.9 por ciento de la población percibía ingresos por más de 100,000 soles, anuales, equivalentes en conjunto al 41.4 por ciento del total de los ingresos. Estas cifras muestran la magnitud de la concentración del ingreso recordando, además que estas cifras corresponden solamente a la distribución del ingreso por persona ocupada y no al ingreso personal disponible sobre el cual se carece de toda información.

Por otro lado, si se trata de comparar la distribución del ingreso entre los sectores principales de ocupación, las cifras son igualmente reveladoras. En el cuadro 9, se puede verificar que mientras la población asalariada de obreros y empleados que agrupa el 86.7 por ciento de la población ocupada, percibe el 47.2 por ciento de los ingresos nacionales, mientras los ingresos de los empresarios y propietarios, que forman el 1.9 por ciento de la población ocupada, recibe el 45 por ciento del total de los ingresos. Pero lo que es todavía más significativo, y revelador del proceso de «marginación» y de pauperización de la gran masa de la población ocupada, es que el grupo de «obrero eventuales», esto es, subempleados, que forma el 32.3 por ciento de la población asalariada recibía solamente el 5.6 por ciento del total de los ingresos.

³⁵ Banco central, *op. cit.*, pág. 8.

CUADRO 8

PERU: ESTIMACIONES DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO POR TRAMOS, 1961

TRAMOS DE INGRESO (ingresos anuales en soles)	INGRESOS MEDIOS (en miles de soles)	INGRESO TOTAL (en millo- nes de soles)	POBLACION OCUPADA (en miles de personas)	INGRESO TOTAL		POBLACION		Porcentajes acumulativos
				INGRESO	POBLACION	OCUPADA	POBLACION	
				En porcentajes del total				
Menos de 3,000	2.6	697.8	275.9	1.4	9.2	1.4	9.2	1.4
3,000 a 5,000	4.1	3,948.1	983.9	7.8	32.7	9.2	41.9	9.2
5,000 a 10,000	7.1	4,889.1	688.4	9.7	22.9	13.9	64.8	13.9
10,000 a 20,000	15.3	10,479.5	737.7	20.8	24.5	39.7	89.3	39.7
20,000 a 30,000	27.2	1,453.5	53.5	2.9	1.8	42.6	91.1	42.6
30,000 a 50,000	34.7	6,313.4	182.2	12.5	6.0	55.1	97.1	55.1
50,000 a 100,000	57.5	1,784.6	31.1	3.5	1.0	58.6	98.1	58.6
100,000 y más	339.0	20,910.0	57.4	41.4	1.9	100.0	100.0	100.0
Total		50,479.0 ^{a/}	3,010.1	100.0	100.0			

Fuente: Instituto nacional de planificación.

^{a/} Excluido alquileres.

Esto es, que al mismo tiempo que la economía nacional tiende a expandirse vigorosamente, sus beneficios permiten a los ricos hacerse mucho más ricos y a los pobres hacerse mucho más pobres y, lo que es peor aumentar su número incesantemente. Chaplin³⁶ ha señalado que en el Perú, conforme se va pasando de las zonas menos desarrolladas a las de mayor desarrollo, la concentración de la riqueza va en aumento, y que el proceso de industrialización aquí lleva en su entraña la tendencia a una creciente concentración de la riqueza.

El crecimiento económico del país, no ha servido, pues, para otra cosa que para acentuar nuestra dependencia del imperialismo, para acentuar el colonialismo interno y la dominación metropolitana, y para generar un proceso de creciente pauperización de la mayoría de la población del país.

4. INFLACION LENTA Y SUBALIMENTACION POPULAR.

Uno de los problemas que más intrigan a técnicos y economistas de dentro y de fuera del país, es el hecho de la lentitud de la inflación monetaria en el Perú, a diferencia de otros países cuya política monetaria es también controlada por el Fondo monetario internacional.

El argumento más generalizado, es que la exportación peruana es notablemente diversificada y permite balancear los desequilibrios del mercado internacional, manteniendo una tasa suficiente de divisas en el país, mientras los otros países son en su mayoría monoexportadores.

El problema es aún más complicado, si se recuerda que la producción agrícola alimenticia se redujo de manera drástica en los 15 últimos años y obligó a un «crecimiento explosivo» de las importaciones, con su consiguiente influencia sobre los precios y el costo de vida en el país. Entre 1951-65, el aumento de precios nunca fue menor de 3.4 por ciento anual y sólo en 1965 fue de 15 por ciento, si se consideran las cifras oficiales.³⁷ Es indudable que la diversificación de la exportación peruana, y la coyuntura particular de la expansión de la harina de pescado para la exportación, explican una parte del problema. Sin embargo, la parte más importante parece ser mejor explicada por la debilidad de las clases populares para impedir la reducción constante de sus salarios reales y de sus niveles

³⁶ David Chaplin, *Industrialization and the distribution of wealth in Perú*, Land Tenure Center, University of Wisconsin, Madison 1966 (Mimeo).

³⁷ Banco central de reserva, *op. cit.*, pág. 8.

CUADRO 9

PERU: INGRESO NACIONAL A COSTO DE LOS FACTORES, 1961

Categorías funcionales

(Millones de soles)

SECTOR	POBLACION		INGRESO	
	OCUPADA (miles)	PORCENTAJES	(millones)	PORCENTAJES
1. Remuneraciones				
de asalariados	2,487.8	86.7	25,395.1	47.2
Obreros:				
Permanentes	1,145.9	29.8	11,286.8	21.0
Eventuales	721.9	32.3	2,986.0	5.6
Empleados	334.2	11.1	10,354.8	19.2
Trabajo familiar no remunerado	285.8	9.5	767.5	1.4
2. Ingresos obtenidos por las unidades familiares, profesio- nales liberales y demás empresas no constituidas en sociedades de ca- pital	522.3	17.3	28,413.9	52.8
Ingresos empresariales y de la propiedad	57.4	1.9	24,240.0	45.0
Trabajadores independientes	464.9	15.4	4,173.9	7.8
Total	3,010.1	100.0	53,809.0	100.0

Fuente: Instituto nacional de planificación.

de vida, por los factores que fueron examinados en torno de la formación de las clases populares del país, y la debilidad de sus organizaciones.

Recientemente, una investigación en curso,³⁸ reveló que la incidencia de las clases populares, urbanas en especial, sobre el consumo de productos alimenticios en 1966 se había mantenido en el mismo nivel de diez años antes. La fragmentación y la debilidad de las organizaciones sindicales, la falta de organización en la mayoría de la población popular desempleada o subempleada, impidieron que las clases populares peruana pudieran ejercer una presión lo bastante fuerte como para obtener una mayor situación en el mercado y en la distribución de los ingresos, al contrario de otros países como Chile o Argentina, donde a pesar de las fluctuaciones de la economía, la población obrera sindicalizada puede mantener de alguna manera un nivel de ingresos y un lugar en el mercado, que obliga a la burguesía a contestar con la devaluación de la moneda, además, del aumento de precios.

Nada puede, con más vigor, poner al desnudo la vinculación entre las cifras de distribución de los ingresos y el ritmo lento de la inflación monetaria, y mostrar cómo la subalimentación popular, para una masa de población que crece sobre el 3 por ciento en los años recientes, la pauperización constante, pagan los costos de las tasas de crecimiento económico y de lenta y reducida inflación monetaria.

5. CRECIMIENTO ECONOMICO Y CRECIMIENTO DE LA «MARGINALIZACION».

Finalmente, no puede quedar fuera de este recuento de las contradicciones y de las debilidades del sistema, la tendencia paralela de «marginalización», es decir, de reducción del mercado de trabajo, de fuentes de ingresos, al mismo tiempo que el aumento de precios y la presión por el consumo, y de expansión de la producción industrial.

Las estimaciones oficiales sobre la magnitud de la población desocupada y de la que está en estado de desocupación disfrazada o subempleada, sin duda son burdas y poco fidedignas. Pero pueden mostrar algo de la tendencia. En el Censo de 1961 la desocupación abarcaba al 1.6 por ciento de la población activa y al 3.7 por ciento de la población asalariada de obreros y empleados. Pero estimaciones posteriores sobre el subempleo,

revelan que alrededor del 40 por ciento de la población agrícola es subempleada, el 21 por ciento en el comercio y el 30 por ciento en el sector servicios, para 1966. Cualesquiera que sea el valor real de las cifras, no dejan lugar a la duda sobre la magnitud efectiva del proceso de desempleo y de subempleo en el país, en el mismo momento en que las tasas de crecimiento económico y de expansión industrial en particular, alcanzan cifras impresionantes.³⁹

En una sociedad como la peruana, este estrato no puede dejar de crecer mientras la condición de capitalismo dependiente y subdesarrollado sea el destino del país. Si la economía se estanca, la marginalidad aumenta seguramente la dureza de su situación; pero si se expande dentro de las mismas tendencias, el volumen del estrato debe probablemente aumentar. Es decir, la «marginalización» o pauperización de la mayoría de la población, constituye la condición misma del crecimiento capitalista en el Perú, y de los demás países latinoamericanos. La «modernización» del sistema en estas sociedades, por espectaculares que sean sus índices, sólo puede hacer más agudas y más abiertas sus contradicciones y sus limitaciones y empeorar la condición, de la masas populares, hasta tanto no haya sido cambiada la *naturaleza* misma de la organización de la producción y del trabajo.

Santiago, verano 1967.

³⁸ Rosemarie Thorp, «La inflación monetaria en el Perú» (mcc.): 1966.

³⁹ *Diagnóstico de la situación de recursos humanos*, Servicio del empleo y de recursos humanos, Ministerio de trabajo, pp. 38-39, Lima.

Las élites empresariales en América Latina

Fernando Henrique Cardoso

Fernando Henrique Cardoso hace en este trabajo un interesante estudio de la constitución histórica de los grupos económicos más característicos de los países latinoamericanos y que han tenido un mayor peso en la formación de las estructuras actuales: los «empresarios», de aparición relativamente reciente, que han actuado, fundamentalmente, en la creación y expansión de los mercados nacionales (débiles mercados nacionales), y los grupos de «desarrollo hacia el exterior», cuya actividad conformadora de las economías latinoamericanas tiene un origen más remoto. No pocas dificultades presenta al análisis los conceptos metodológicos utilizados, como reconoce el autor en las primeras páginas, y aún más, los objetivos perseguidos en la investigación. Los países latinoamericanos no están en vías de convertirse en «sociedades elitarias» en el sentido en que corrientemente se entiende este concepto para los países de alto desarrollo. Esto es parte integrante del gran dilema del subdesarrollo, cuya única solución es la revolución. (N. de R.)

I. INTRODUCCION

Para dar mayor precisión a este tema se necesitan aclaraciones preliminares y una delimitación. En efecto, los hombres de empresa y sus hazañas, tomados en amplio sentido, constituyeron la base de la colonización misma, y es posible que el espíritu de aventura y el riesgo hayan destacado en América la historia ibérica más que la anglosajona. No cabe decir en contrario que la empresa intentada carecía de objetivo económico, pues estaba enmarcada dentro del movimiento general de expansión del capitalismo europeo. Por otra parte, si el concepto de élite se refiere a «pequeños grupos selectos», reclutados no en virtud de su linaje sino de sus aptitudes, también en tal caso sería difícil eliminar de la problemática general de las

élites empresariales de América Latina, el análisis de los orígenes, de las funciones, y de los tipos de integración social que orientaban en su acción a los hacendados, los señores de los esclavos o los comerciantes de la Colonia.

Sin embargo, es evidente que éstos no constituyen el tema del presente Congreso.

Frente a los aspectos históricos ya señalados de los conceptos de «élite» y «empresa», el corte teórico de su problemática puede señalar el sentido especial que adquieren dentro de otra perspectiva. Considerada bajo una inspiración weberiana, la empresa económica indicaría la adopción de prácticas sistemáticas y racionales para la acumulación ordenada de utilidades y la consiguiente expansión de las actividades. Elite significaría, más bien que una manera de caracterizar a cualquier pequeño grupo selecto, un concepto básico que corresponde a un tipo especial de estratificación social global: las sociedades «elitarias». En tales sociedades, la existencia de las «masas», que por definición son amorfas e incapaces de expresar por sí mismas sus intereses, se complementaría con otras formas de estructuración, basadas en las relaciones entre los que son «pocos pero idóneos». Como apoyo teórico más general, se aceptaría que el control, la dominación que ejerce la élite se independizaría en diversos grados del sistema de distribución de la propiedad. La superposición de «clases» sería sustituida por una forma nueva de estratificación, basada en la dimensión política de la relación entre los grupos, más bien que en la economía.

Por consiguiente, las «élites empresariales» serían los grupos de control, estructurados o semiestructurados, que se forman dentro del conjunto de personas que dirigen las organizaciones económicas modernas. Tales formaciones tendrían especial trascendencia en las sociedades de masas (o «elitarias»: los conceptos serían homólogos) que se estarían formando en América Latina, pues constituirían parte importante del nuevo sistema de adopción de decisiones.

Los avances teóricos en esta dirección y la constitución efectiva de formaciones sociales regidas por este patrón estructural, no permiten, sin embargo, la adopción sin reservas de este enfoque. Entre los especialistas no hay unidad sobre la naturaleza teórica del concepto de élite;¹ mucho menos es

¹ Sobre este punto ver Bottomore, T. B., *Elites and Society*, Basic Books, New York, 1964.

posible encontrar en América Latina los rasgos acarakterísticos de las sociedades «elitarias» de masas.

Las élites en esa región no constituirían la expresión organizada de sectores masivos de la sociedad, sino más bien corresponderían a pequeños grupos aristocratizantes —las oligarquías— que controlan la propiedad y el poder en un contexto donde la participación de las masas es extremadamente reducida.

También sería difícil sostener que del proceso de transformación social generalizado en América Latina haya surgido una élite empresarial moderna, en el sentido señalado, que esté imponiendo su sello a las sociedades latinoamericanas en oposición a las élites tradicionales, o a despecho de tales grupos, los cuales expresarían el liderazgo de las clases sociales del «antiguo régimen» (latifundistas, exportadores, comerciantes, industriales rutinarios, etc.). Al contrario, parece ser que la modernización del sistema productivo y la reorganización de las sociedades latinoamericanas alcanzan un nuevo punto de equilibrio a raíz de presiones iniciales, a veces exteriores a la «sociedad tradicional», mediante un sistema de alianzas entre grupos que tienen como eje las élites que constituían la sociedad tradicional.²

Por otra parte, no se ha conseguido establecer de manera concluyente en el plano teórico la trascendencia del enfoque «elitario», o sea, hasta qué puntos las funciones de las minorías en las sociedades industriales expresan una redefinición de las formas de liderazgo de clase más bien que un nuevo tipo de estructuración social. Tras la manifestación abierta de un comportamiento político y social en términos de dirigentes y dirigidos, ¿no subsistirían las estructuras clasistas como principios reguladores de la estratificación social y del comportamiento de las masas y de las élites?

Estas advertencias indican las precauciones preliminares con que se ha de abordar el tema. En vista de ellas, salta a la vista la delimitación que se impone. El examen de las élites empresariales de América Latina se hará dando al concepto una acepción un tanto ambigua: a veces expresará la formación de nuevos grupos dentro de las clases llamadas productoras,

² Cf. José Medina E., *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico*, Solar — Hachette, Buenos Aires, 1964; y también P. H. Cardoso, *El proceso de desarrollo en América Latina*, Instituto latinoamericano de planificación económica y social (ILPES), Santiago, 1965.

a veces se refiere a la cuestión fundamental de la transformación del propio patrón estructural de las sociedades latinoamericanas. En este caso, la existencia de «élites empresariales» en la acepción moderna, será un indicador del tipo de transformación social por el que pasan dichas sociedades. En el otro, indicará más bien la heterogeneidad del sistema de clases y el liderazgo que pueden ejercer determinados subgrupos, para la definición de objetivos y políticas dentro de una misma clase.

Para determinar históricamente la problemática, conviene aclarar que las élites empresariales serán consideradas en relación con la formación de mercados nacionales. Por lo tanto, quedan excluidas del análisis las élites del período colonial, pero sí se incluyen las que están ligadas a lo que los economistas denominan el «desarrollo hacia el exterior», en la medida en que, en este proceso, consolidaron las bases de una «organización nacional».

Ambos tipos de élites empresariales tienen cabida en el análisis del origen, formación, funciones y objetivos de las que se constituyeron durante el período de desarrollo del mercado interior (hacia adentro), en la medida en que representan condición, estímulo y obstáculo de este proceso. El presente trabajo se limitará a las últimas, y a las que las sigan, sólo porque se hallan más directamente vinculadas con la industrialización.

En consecuencia, las élites empresariales se considerarán aquí a partir de la formación de un mercado interno para la producción nacional, o sea, desde que la industrialización incipiente complementaria de la economía exportadora comienza a lograr autonomía en el sistema productivo nacional. Sociológicamente hablando, se podría decir con mayor precisión que las élites empresariales se examinarán en este trabajo a partir del momento en que la acepción tradicional de élite, en cuanto grupo aristocratizante que supone la exclusión de la plebe del proceso político, comienza a ser desplazada por la nueva acepción debido a que el proceso mismo de creación de mercados internos, aunque sea en función de una economía exportadora, genera una masa de consumidores. En la medida en que, en América Latina, este proceso está en relativa dependencia de las transformaciones de las economías centrales, ocasiona necesariamente la existencia, en la superficie de la vida social y política, de rasgos característicos de las formaciones «elitarias» que son típicas de las sociedades de masas; sin embargo, en la medida en que las condiciones sociales locales son distintas y han sido fuertemente moldeadas dentro del marco agrarioexportador,

parecen mantenerse las pautas estructurales y normativas de las «sociedades excluyentes». En realidad, como objeto de la investigación, en ambos casos se mantiene la duda sobre la significación de las élites como expresión de uno u otro de los tipos de estratificación señalados en páginas anteriores.

Sin embargo, frente a tales argumentos se supone como punto de partida, a lo menos en el caso latinoamericano, que por formación de élites empresariales se entenderá la aparición, dentro del ámbito de las clases productoras, de algunos subgrupos con suficiente capacidad de liderazgo para imponer una reorientación de la actividad económica, con todas las consecuencias que esto entraña en el plano del reclutamiento social de nuevos empresarios, en el de sus nuevas funciones y en el de la formación de nuevos principios orientadores de la acción. Quedan excluidos, por consiguiente, las conjeturas sobre la aparición de sistemas de control político que no responden a algún tipo de ordenación económica.

II. LAS ELITES EMPRESARIALES EN EL PERIODO DE LA FORMACION DE LOS ESTADOS NACIONALES

En forma característica, la constitución de las entidades nacionales en América Latina se produjo manteniendo la vinculación de las economías locales con el mercado mundial. Se procuró que la ruptura del pacto colonial no ocasionara una solución de continuidad en el sistema productivo nacional y una desorganización casi completa de la economía interna, ni disminuyera las posibilidades de ejercicio del poder por la élite económica que asumía las funciones políticas en los distintos países; para ello se imponía garantizar la continuidad de las exportaciones. Sin embargo, la formación de los Estados nacionales trajo cambios significativos en la selección, en la orientación y en las funciones de las élites nacionales. Estos cambios se dieron en dos aspectos principales:

a) las vinculaciones comerciales dentro del mercado mundial pasaron a orientarse directamente en función de la economía rectora del sistema capitalista, que era evidentemente la inglesa; con lo cual se aceleró un proceso ya en marcha, expresado en los reglamentos coloniales que a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX aseguraban aranceles preferenciales a Inglaterra. Esta potencia, como garante de la independencia de las colonias ibéricas, dio un primer «impulso de modernización» al comporta-

miento de los agricultores y comerciantes latinoamericanos. El impulso encontró una expresión más visible en la presión para que se adoptara la mano de obra libre en las economías de América Latina;³ sin embargo, su significación más verdadera está en la reorganización del sistema de comercialización en América Latina, a partir de la introducción de agentes comerciales británicos y de la formación, en las clases productoras locales, de un sector comercial estrechamente ligado con aquéllos. Este sector sirvió de embrión para la formación de un sistema financiador vinculado a las casas matrices de Londres;

b) las funciones propiamente políticas de las élites nacionales, como la elaboración del sistema de alianza de los países recién formados, quedó controlada enteramente por los nuevos gobernantes. Estos eran la expresión política de los intereses económicos establecidos durante la Colonia, que ahora cortaban el vínculo metropolitano; en otras palabras, estaban constituidos por los agricultores, por los ganaderos o, en proporción más modesta, por los mineros.

Sin embargo, el problema fundamental de asegurar la continuidad de las exportaciones se traducía políticamente en la reorganización del poder, tanto interna como externamente, a fin de erigir una estructura que hiciera viable trasladar de los países ibéricos a Inglaterra el polo principal de la economía nacional. Este objetivo fue conseguido por las nuevas naciones con mayor o menor dificultad, y con la participación o exclusión de los diversos sectores de las clases productoras conforme a dos variables fundamentales: la importancia del sector agrario, derivada del grado de penetración que el producto esencial de la economía local hubiera ganado en el mercado mundial durante la Colonia; y la capacidad de renovación del sector de comercialización.

Estas dos condiciones permiten una primera apreciación de la forma como las nuevas naciones se engranaron en el sistema económico mundial y, por consiguiente, de los límites de las funciones que las élites nacionales podían cumplir.

Por un lado están los países que heredaron de la Colonia una actividad exportadora organizada y estable; por otro, los que no habían llegado a constituirse como explotaciones típicamente coloniales sino que eran fac-

³ Véase en Eric Williams el significado real de esta posición desde el punto de vista de la hegemonía del grupo industrialista inglés, en contraposición al grupo agrario esclavócrata basado en las posesiones de las Antillas inglesas.

torías comerciales y puntos de tránsito, y aquellos cuyas actividades habían decaído apreciablemente, como ocurrió con los países mineros. En los países en que no fue posible mantener un fuerte sector exportador y el predominio del sector comercial sobre el sector agrario-minero se deja sentir intensamente, en proporción inversa a la importancia que asumía el mercado externo para los productos agrícolas. En los otros, que también presuponian un fuerte sector comercial, la historia de las élites económicas durante el siglo XIX expresa la lucha y las alianzas que se establecen entre el sector agrario y el sector comercial, el cual, como suele decirse, se diversificaba financieramente, haciéndose también prestamista.

En general, los grupos agrarios y ganaderos estaban controlados localmente por los criollos que realizaron la independencia, mientras que los sectores comerciales estaban bajo el control de las metrópolis, en primer lugar, y en segundo de los criollos y los representantes de empresas europeas. Por tal motivo, en estos países la lucha de independencia contra los «portugueses» o los «españoles» se desdobló en luchas internas contra los comerciantes, hasta que el sistema agrario-exportador se rearticuló mediante alguna forma de pacto entre los que controlaban los puertos, las líneas de comercialización, el financiamiento y la producción.

La consolidación de este sistema de alianza hizo viable el esquema de «desarrollo hacia afuera» que sirvió de condición, estímulo y obstáculo para el periodo posterior de formación de un mercado interno para las mercaderías de producción local.

III. LAS ELITES EMPRESARIALES Y EL MERCADO INTERNO EN EL PERIODO DE DESARROLLO HACIA AFUERA

Sin embargo, las dimensiones de la innovación económica y el fortalecimiento político se presentan en forma distinta para las élites empresariales en los dos tipos de países señalados. Y también asumen características distintas tanto el reclutamiento social como las funciones y las orientaciones que en cada caso manifiestan las élites empresariales que, a fines del siglo pasado y en el curso del presente, se encaran con el problema de la formación del mercado nacional.

1. ELITES EMPRESARIALES DE BASE RURAL Y GRUPOS INDUSTRIALES NO «ELITARIOS»

En las economías exportadoras agropecuarias, como eran típicamente los países del Atlántico, la ordenación del sistema económico y del sistema político se efectúa mediante el control del sistema productivo y de los mecanismos de decisión política por los grupos latifundistas.

Las condiciones económicas para este proceso estaban dadas por la existencia de una abundante oferta de tierra. Básicamente, la función empresarial consistía en la creación de mecanismos que asegurasen el suministro satisfactorio de mano de obra y la consolidación de un sistema jurídico de la propiedad. Ambos procesos exigían de manera inmediata el control del Estado por los grupos latifundistas, sea, en el caso de Brasil, para garantizar el derecho de propiedad sobre los esclavos y asegurar el comercio de negros, sea, en el de la Argentina y el Uruguay, para ensanchar la tierra susceptible de dominio (mediante las guerras contra los indios en el primero de estos países) y facilitar la inmigración. Con la persecución del tráfico de esclavos por los ingleses (a partir de 1850) y la abolición de la esclavitud en el Brasil (1888), la inmigración también se convirtió para este país en la gran cuestión empresarial.

La capitalización en el caso de estas economías no dependía tanto de las «decisiones de ahorro» de la clase capitalista, como de la apropiación de los excedentes del trabajo agrícola. Mientras hubiera tierra, la capitalización era función directa de la disponibilidad de mano de obra, de ahí que la economía en esos países se caracteriza por la «producción extensiva», por ser, como se dice en inglés, «labour extensive, not capital intensive».

Asegurado el control político por los grupos propietarios, el «espíritu de empresa» de los dueños de la tierra fue puesto a prueba en otro terreno, la formación de un sistema propio de comercialización (y transportes) y de un sistema bancario, y ahí justamente se abrieron oportunidades para que surgieran las primeras élites dinámicas en el periodo de consolidación de las economías nacionales. La vitalidad empresarial de las «clases tradicionales» tuvo que medirse en esos sectores con el dominio de los grupos comerciales vinculados con el exterior; y ahí se produjo la primera división «moderna» del trabajo, y de fuerzas, entre el sector nacional de la econo-

* Ver Celso Furtado, *«Desenvolvimento u estagnação na América Latina: un enfoque estructuralista»*, mimeografiado, Yale, 1965.

mía y el sector interno que expresaba las vinculaciones externas. En general, el grado de control nacional de los sistemas bancarios —incluso el éxito o fracaso en la constitución de bancos centrales o bancos comerciales del Estado— y la extensión de la red ferroviaria bajo control nacional, son los indicadores de la fuerza de los grupos latifundistas. Por estos medios se conseguía delimitar la zona de dependencia económica con respecto al mercado internacional; en efecto, tratar de influir en la política de precios del producto de exportación era la tarea fundamental del Estado nacional, considerado a este respecto, conforme a su función de expresar el interés corporativo de los productos locales.

En el caso del Brasil y la Argentina, la élite empresarial que se orientó en esta dirección estaba compuesta por «hombres nuevos», reclutados de preferencia entre los comerciantes que se enriquecieron en la segunda mitad del siglo XIX y que abrían las fronteras agrícolas.⁵ En cierto modo, ellos fueron los creadores tanto de las empresas nacionales en el sistema bancario, en el sistema de transportes, etc., como de las ideologías de «desarrollo hacia adentro». En el Brasil fueron republicanos federalistas, como recurso para disputar el poder imperial centralizador que se hallaba en manos de la antigua oligarquía burocrático-esclavócrata. En la Argentina fueron federalistas por motivos distintos: para organizar la economía nacional bajo la égida de Buenos Aires, si bien dando cabida a las presiones de las oligarquías regionales. Sin embargo, en ambos casos el rasgo distintivo de la orientación política de estas élites estaba en su empeño en favor de la inmigración pues ésta, como queda señalado, era la condición básica para la formación de capitales. En el Uruguay, de la misma manera y con rasgos semejantes que en la Argentina, la economía del país se reconstituyó alrededor de 1870 a base de las exportaciones de productos pecuarios. Bajo el impulso de este proceso se encuentran, es verdad, personas y familias de las «clases altas tradicionales», pero el grueso de la élite ganadera estaba compuesta por elementos nuevos, salidos más directamente de la masa inmigrante. En el país no existía ni el peso de la estructura burocrático-esclavista, como en el Brasil, ni la fuerza de las oligarquías regionales,

⁵ Sobre el caso del Brasil véase Pierre Mombeig, *Pionniers et planteurs de Sao Paulo*, Librairie Armand Collin, París, 1952. Sobre el caso de la Argentina, Dorfman, *Historia de la industria argentina*, Escuela de estudios argentinos, Buenos Aires, 1942 y Cornblitt, Gallo O'Connell, «La generación del 80 y su proyecto. Antecedentes y consecuencias», *Desarrollo económico*, Vol. I, enero-marzo de 1962.

como en la Argentina,⁶ lo que facilitó el ascenso de los nuevos grupos sociales.

La reorganización del sistema productivo y del control político en las sociedades de este tipo suponía, pues, la ordenación de las decisiones en torno a intereses distintos de los que motivaron el comportamiento de los «grupos de transición» que hicieron la independencia. Se había organizado una estructura productiva más moderna, más subordinada a las reglas del capitalismo internacional, la cual exigía modificaciones así en el modo de producción como en las relaciones productivas internas. Las primeras, en esa época, se manifestaban básicamente a través del sistema financiero; en efecto, algún banquero londinense siempre estaba dispuesto a financiar la construcción de ferrocarriles, el mejoramiento de los puertos, alguna especulación con las mercaderías de exportación, sobre todo si el Estado otorgaba su garantía a las operaciones, o aseguraba rendimientos y reembolsos «cautivos» mediante porcentajes de los derechos de aduana o de otros ingresos semejantes. Las segundas se traducían en la generalización del empleo de mano de obra libre y asalariada, en la transformación de la hacienda en una empresa relativamente sujeta a las reglas de contabilidad y con una gerencia de inspiración más racional, y en la aparición de las primeras innovaciones tecnológicas en el campo: alambradas para cerrar los potreros, preocupación por la selección de reproductores ganaderos, utilización de maquinaria para la elaboración del café, etc.

Estas pautas suponen en forma característica la formación de ciudades y la concentración urbana; y de ellas resultó, en el plano económico, una primera posibilidad de industrialización y, en el político, la formación de sistemas más o menos estables de dominación «oligárquica».

Efectivamente, la diferenciación del sistema económico exigida por la nueva fase exportadora y por el empleo de mano de obra sobre bases más racionales, suponía una división social del trabajo más intensa, una separación más clara entre la producción de subsistencia y la producción para la exportación y, en consecuencia, una comercialización intensa de los productos de consumo, una ramificación adecuada del sistema de transporte y en una palabra, una división del trabajo entre el *campo* y la *ciudad*.

⁶ Sobre este período de la vida del Uruguay, véase Aldo Solari, «Situación de la sociedad uruguaya» (dactilografiado), donde se muestra la significación de la «nueva élite», su origen social y las funciones que cumplía (págs. 28-30 y siguientes).

La penetración pionera en una nueva economía exportadora dejó en pos de sí una red de ciudades pequeñas y siempre fortaleció a algún centro de dominación urbana, como Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, Río o Santos, que ejercían funciones comerciales o portuarias directamente relacionadas con la actividad exportadora agrícola o ganadera.

En estas ciudades —y en menor proporción, en las que les estaban subordinadas en el ejercicio de las funciones de distribución mercantil hacia el interior; se formó un primer mercado interno de consumo de proporciones razonables. En torno a esa demanda, y a la demanda directamente ligada a la modernización de la actividad exportadora (frigoríficos, equipos agrícolas, etc.), se organizó en estos países una función industrial, a partir del último cuarto del siglo XIX.

La función productiva experimentó, pues, una diferencia, dando lugar a que dentro de las capas empresariales surgiera un nuevo tipo de actividad vinculada a la industria. Como queda señalado, ésta fue de dos tipos: «de consumo local», para atender la demanda de alimentos y de bienes perecederos de uso diario, sobre todo en el campo textil; y de «equipos agrícolas». En ambos casos se constituyó mediante el crecimiento del sistema artesanal y de pequeños talleres que paulatinamente se convertían en fábricas. En una u otra hipótesis, el dinamismo del sistema industrial era una función de la economía exportadora, de la cual venía a constituir un apéndice, sea porque ella constituía la base del mercado interno, sea porque los capitales que sostenían a la industria provenían de las actividades agropecuarias.

Sin embargo, la procedencia de los capitales que aflúan para formar el sistema industrial en el siglo XIX y primer cuarto del XX, o bien, dicho en término de los agentes sociales, la selección de los empresarios industriales, era de dos tipos distintos. Por un lado, estaban las fábricas organizadas por los productores agrícolas con los excedentes de sus negocios, sea directamente o asociándose con grupos extranjeros (entrando en este grupo las de mayor tamaño, como los frigoríficos y los talleres de reparación de ferrocarriles); por otro, los talleres montados por inmigrantes que se habían enriquecido, sobre todo con el comercio en las zonas rurales, talleres que en muchos casos se convertían en verdaderas fábricas.

¿Hasta qué punto está diferenciación en la actividad productora, con todas las posibilidades de innovación que trajo consigo, representó la formación de una nueva élite empresarial? La significación de los grupos industrializadores, como se ha indicado, quedó limitada a los mercados del

«desarrollo hacia afuera» en la medida en que la función productiva que ejercían estaba subordinada, directa o indirectamente, a la expansión agroexportadora. La dicotomía existente dentro de esa capa industrial, en razón de su reclutamiento social doble, permitió desde un comienzo que, en general, las actividades corporativas se realizaran dentro de los límites de una misma asociación de clase, como la Asociación rural uruguaya o Unión industrial argentina, lo que suponía la exclusión de la mayoría de los industriales del conjunto de lo que se denominan las «clases dirigentes». Estas sólo absorbían de la actividad industrial aquellos sectores que habían surgido de su seno o se confundían con ellas, como ocurría con los propietarios y administradores de frigoríficos, de «armazens gerais», de los grandes molinos, exclusión hecha de los sectores más ligados a la industria para el consumo local.

La alianza entre los grupos dominantes en los países de América Latina cuya evolución obedeció a esta pauta, se expresó políticamente por lo que se denomina la «oligarquía». En este caso, la oligarquía no significa la dominación de los «señores de esclavos» o de los potentados del interior, sino el acuerdo político básico de los grupos exportadores con las nuevas funciones urbanas, así comerciales como financieras, articulados con el «sector externo», que utiliza a los «coroneles» o «gamonales» del interior más bien en términos políticos que económicos. Durante cincuenta años, entre 1870 y 1930, el «desarrollo hacia afuera» estuvo garantizado internamente por esta alianza oligárquica, cuya vitalidad —condicionada por el éxito de los productos primarios en el comercio exterior— fue capaz de absorber en algunos países las primeras presiones de la clase media urbana y de las clases populares⁷ manifestada por la formación de los partidos radicales. En la medida en que el esquema exportador permitió a las oligarquías aceptar una política de redistribución a las clases medias, las élites empresariales retrocedieron en el plano político, ampliándose la participación de los grupos no oligárquicos; si bien mantuvieron sus posiciones de control del aparato financiero exportador, esto es, los ministerios de hacienda, las direcciones de cambio y las juntas de exportación.⁸

En suma, en estos países durante el período de constitución de los mercados internos a base de las actividades de exportación, la expresión «élite empresarial» sólo traduce con propiedad el predominio políticoeconómico

⁷ Welfort, *Clases populares y desarrollo social*, Instituto, Santiago, 1965.

⁸ Es interesante que la oposición política de la clase media en América Latina no definía una política económica distinta a la de la oligarquía.

de los grupos agroexportadores, agroindustriales, comerciales y financieros que conseguían articularse políticamente en términos de la clase dirigente, con exclusión de todos los demás, y que económicamente fueron capaces de subordinar la organización económica de sus respectivos países al éxito del sistema exportador. Los grupos sociales basados en actividades económicas distintas de las señaladas, sobre todo las industriales, con asiento en los centros urbanos, continuaron siendo «no elitarios» pues las líneas de control de las decisiones pasaban lejos de su campo de actividades.

Este tipo de dominación «elitaria» por grupos empresariales restringidos, cuyos rasgos típicos se manifiestan con claridad en los países del Atlántico, se repitió en condiciones variables y en épocas distintas en aquellos países latinoamericanos cuyo desarrollo se basó en la producción extensiva para el mercado exterior. Colombia constituyó un ejemplo de una de las dos posibilidades de adaptación de este modelo; en efecto, el equilibrio entre los grupos latifundistas y comerciales se modificó en 1850 en favor de estos últimos, acentuándose su predominio cuando dominan el sistema financiero local. La estructura más repartida de la propiedad agrícola destinada al cultivo del café, producto básico del sistema exportador, permitió la consolidación de la hegemonía del grupo comercial exportador, organizado más tarde en una asociación que recibió el significativo nombre de Federación nacional de cafeteros de Colombia. Sin embargo, hasta 1930 los grupos industriales incipientes sólo penetran en la estructura de prestigio y de poder en la medida en que están vinculados, por origen o por alianza familiar, con los grupos comerciantes o latifundistas. Las clases industriales encuentran expresión política a través del partido tradicionalmente vinculado al esquema comercial exportador, el partido liberal. Se repite pues, adaptado a las diferencias de la estructura productiva local, el esquema seguido antes por los países del Atlántico de tipo semejante, en cuanto a la formación del sistema exportador y a la integración en el mercado mundial.⁹

2. ELITES EMPRESARIALES DE BASE COMERCIAL Y MINERA

Las tentativas de organización de un esquema de desarrollo y de un sistema de poder que lo hiciera posible, constituyeron un problema más com-

⁹ Cf. Jorge Veros, «Algunos aspectos sobre la élite colombiana», presentada al Instituto de ciencias políticas y sociales de la Universidad católica de Lovaina, Lovaina, 1965.

plejo para las élites de los países que no heredaron de la Colonia más que una base comercial minera, o en los cuales la agricultura de exportación no llegó a sobreponerse a los demás rubros de la pauta comercial. Al problema básico de toda la región, esto es, la organización del Estado, en estos países se sumaron otros de carácter más directamente empresarial. No bastaba con asegurar la importación de mano de obra y vincular la producción a un comercio ligado al exterior; la búsqueda misma de un sector nuevo de actividad económica y al enfrentamiento con los problemas tecnológicos se presentaban, si no como obstáculos, a lo menos como desafíos.

La respuesta más bien lograda a esta situación durante el siglo XIX en América Latina fue la de Chile; su análisis ilustra los límites que impone el modelo de crecimiento inherente a este tipo de país, y el papel decisivo que en estas circunstancias pueden desempeñar las élites empresariales. Este caso tiene en común con los anteriormente descritos el que tampoco fueron los «encomenderos» los que definieron las perspectivas de ensamble nacional en el mercado mundial. A ellos ciertamente se vincularon, como a los grupos aristocratizantes en general, los nuevos grupos rectores de la economía nacional; pero en este caso eran más urbanos, y por lo tanto más comerciantes, más preocupados de las aduanas como medio de financiación del Estado y como instrumento de «políticas proteccionistas». Esta orientación ya denotaba una novedad frente al comportamiento de los grupos señoriales. En el caso de Chile, con Portales y hasta el período de Montt, la nueva élite empresarial demostraba, a través de algunos de sus portavoces, una modernidad sorprendente. No contando con una base agrícola que pudiera compararse a la de los países del Atlántico, la clase dirigente se consagró a la construcción de una alianza política, surgida del núcleo reaccionario de la clase agraria —los «pelucones»— la cual englobaría el sector comercial, siempre con su desdoblamiento financiero, y un sector industrial nuevo ligado a éste y concentrado en la producción marítima. Al mismo tiempo, la empresa nacional, con rasgos típicamente pioneros, se lanzaba a la producción de plata y cobre, lo que aseguró un auge económico excepcional del país.

De todos modos, se trataba de una orientación encuadrada básicamente en el esquema exportador; sólo se diferenciaba de la que fue típica de los países exclusivamente agrícolas en que la explotación emprendida requería tal vez más capitales y más técnica. De ese modo, por una parte las arremetidas más audaces de mediados del siglo en el sentido del proteccionismo

a la actividad industrial quedaron amortiguadas por un impulso más acorde con el sentido general de la actividad económica del país (que iba en la dirección del libre cambio y la desvalorización monetaria como recurso para aumentar en moneda nacional los ingresos producidos por la exportación);¹⁰ por otra parte, la competencia en el mercado internacional de una producción de base técnica más avanzada restaba posibilidades al control nacional de la explotación cuprera. La producción chilena, que en 1880-81 suministraba el 45 por ciento del cobre que pasaba por el mercado de Londres, llegó sólo al siete por ciento en 1901; este descenso indica el agotamiento de los yacimientos fácilmente explotables. Los yacimientos nuevos exigían tecnología moderna y capitales cuantiosos. Alrededor de 1910, los capitales norteamericanos tomaron el control de los minerales más importantes del país, como antes habían hecho los ingleses con el salitre.

Los límites de la dependencia del exterior alcanzan en este caso al centro mismo del sistema productivo del país, constituyendo dentro de él enclaves que representan la presencia de las economías centrales. A las élites empresariales nacionales les queda el recurso de reaccionar en la fase de desarrollo hacia afuera, tratando de organizar la producción agrícola. Los límites de esta opción están dados por dos órdenes de factores: la iniciativa empresarial de los grupos dominantes nacionales, y la disponibilidad de tierras accesibles sin gran esfuerzo de capitalización. La primera condición era tanto más difícil de cumplir, cuanto más arraigados estaban en las clases dominantes las ideologías y valores de tipo rentistaconsumidor, la transformación del Estado, bajo el control de las élites locales, en un aparato para succionar impuestos de las explotaciones extranjeras o economía enclave, pudo satisfacer los objetivos de las clases dominantes sin obligarlas a una actitud empresarial.¹¹ La segunda condición, que en el caso de

¹⁰ Ejemplo de ello, y demostración evidente de la falta de espíritu de empresa de la clase económica chilena de fines del siglo, fue la entrega de los yacimientos salitreros conquistados en la Guerra del Pacífico a la explotación extranjera. En este caso, no faltaba la técnica ni los capitales, sino que los representantes políticos de la clase económicamente dirigente carecían de la visión adecuada respecto al papel del Estado como su instrumento para la creación de ingresos. C. F. Aníbal Pinto, *Chile, un caso de desarrollo frustrado*, Editorial Universitaria, Santiago, 1962.

¹¹ El caso del salitre chileno después de la Guerra del Pacífico es típico. En efecto, algunos empresarios formadores de la economía salitrera reaccionaron, proponiendo que el Gobierno se hiciera cargo de la explotación para remediar la falta de disposición empresarial de las nuevas generaciones, pero el Gobierno se negó a asumirla en nombre de la no intervención económica y, acaso, cediendo a las maniobras de especuladores europeos. Véase en Aníbal Pinto, *op. cit.*, pág. 57.

América Latina es rara, supone, para ser superada con éxito, cierto grado de madurez del sistema capitalista. No siendo así, resulta un factor negativo bastante adverso a la formación de una élite empresarial nacional capaz de responder a las exigencias de una situación de este tipo.

Menos ardua es la dificultad de lograr un nivel apreciable de racionalización en el empleo de mano de obra para la explotación agrícola. Tal cosa se realiza por la importación de inmigrantes, lo que supone una política bien definida y capitales para ejecutarla, o echando mano de la mano de obra local (indígenas, esclavos o sus descendientes). En este caso —que caracterizó en general a la agricultura complementaria de los países mineros, con excepción de Chile— la explotación agrícola tendió a basarse en el latifundio con sus «patrones» y «caciques» de manera claramente precapitalista y diferente, por lo tanto, de la «plantación» exportadora. No se puede calificar de empresarios a los latifundistas de este tipo, que constituían la base del poder político local y que en este nivel servía de apoyo a la dominación nacional de los empresarios exportadores, tanto en los países mineros como en los agropecuarios.¹²

El modelo de economía enclave, que en Chile tardó 80 años en constituirse, y que de todos modos, al alcanzar vigencia en este país, no pudo suprimir el resultado económico y político de la acción anterior de las élites nacionales, muestra efectos bastante más generalizados en los países donde las clases dirigentes no consiguieron definir un sistema económico nacional estable. Hubo desde casos extremos de países que en el siglo XIX simplemente no pudieron llegar a tener una clase económica capaz de expresarse políticamente con cierta autonomía, y que en la práctica continuaron como colonias de potencias no ibéricas, hasta aquellos casos en que el esfuerzo de organización nacional se hizo a través de pactos con las nuevas potencias hegemónicas, pactos que se tradujeron en concesiones económicas desproporcionadas a las ventajas políticas logradas. La clase dominante no conseguía para sí más que «utilidades marginales», mediante los impuestos, la corrupción y la venta a los extranjeros de las concesiones obtenidas políticamente.

En este último caso, parecería que el México de Juárez y Porfirio Díaz ilustra bien las dificultades de formar una élite económica nacional capaz de ensamblar este tipo de países en el mercado mundial, asegurándose el

¹² En los países de este último tipo, los «coroneles» asumieron el control de las regiones marginales, y en muchos casos, lo mantienen hasta ahora.

control por lo menos de una parte del proceso productivo. Una vez dominado el «período de anarquía», fase característica de la América Latina en la etapa anterior a la formación de un esquema sólido de economía exportadora, sólo a fines del siglo fue posible organizar el Banco nacional; pero con capitales franceses. La redistribución de la tierra para mantener las alianzas políticas en que se apoyaba el porfirismo condujo a la especulación en yacimientos mineros para venderlos a los extranjeros, pues la ley decía que la posesión de la tierra aseguraba la del subsuelo. La economía del país, productora de plata, oro, cobre y petróleo, quedó en este período bajo el control de capitales extranjeros, sobre todo norteamericano. Tan sólo en la esfera regional, como en Monterrey o en Puebla, y naturalmente en la ciudad de México, si bien en este caso más bien con el carácter de industria para el consumo local, se hizo sentir la presencia de una élite empresarial activa, cuyo significado nacional sólo se manifestaría en la fase posterior a la revolución.

Aún en situaciones intermedias, en que los países pudieron beneficiarse del mercado internacional tanto para productos agrícolas como para productos mineros, la falta de una base colonial agropastoril sólida, la única capaz de formar localmente una élite empresarial en el sentido económico y político de la expresión, se dejó sentir en forma persistente durante el período de desarrollo hacia afuera.

Acaso sea el Perú el que ilustre este caso mejor que cualquier otro país. El auge de las exportaciones de guano y de salitre ocasionó una reducción de la actividad agrícola en el país. El nuevo sector productivo permitió la creación dentro de las clases dirigentes de un grupo —la plutocracia— de orientación típicamente especulativa. Para controlar esa actividad de acuerdo a los intereses especuladores se constituyó un aparato gubernamental corrupto y se formó una alianza política entre los «gamonales» que controlaban el latifundio del interior (la Sierra), los militares, que se vieron llevados a ejercer un papel cada vez más amplio en la represión de la «anarquía», y los propietarios de la costa, estrictamente vinculados a la especulación. La dificultad que tuvo la capa dirigente para establecerse como élite dominante se expresa por la dimensión, desproporcionada del «militarismo» y por el hecho de que el partido civilista, que la representaba, tuvo que luchar contra ese «militarismo».

Perdida la Guerra del Pacífico, la plutocracia casi no dejó otro saldo para la nación que una deuda considerable con los financistas europeos y no le quedó otro remedio que acomodarse a la situación de economía

enclave, que reorganizó en el Perú tanto la actividad minera como la agrícola, tomando como base el azúcar y el algodón. No llega a constituirse, pues, en el Perú una verdadera élite empresarial, sino que se forma una «oligarquía», en el auténtico sentido de la palabra, o sea, que la capacidad de ese grupo para controlar las decisiones depende casi exclusivamente de su fuerza política, en tanto que sus ingresos provienen del acaparamiento de las oportunidades especulativas —aseguradas por su control de las informaciones y de los mecanismos financieros del Estado— más que de una actividad productora organizada. Este tipo de oligarquía, a todas luces distinto de lo que impropriadamente se designa como tal en los países del grupo mencionado anteriormente, tiene una autonomía de límites estrechos. Por una parte, la conservación del poder político obliga a mantener alianzas con los «gamonales», mediante las concesiones usuales. Por otra parte, la oligarquía ejerce en el plano económico funciones secundarias y subordinadas al centro verdaderamente dinámico de la expansión hacia afuera, que consiste en los enclaves agrícolas y mineros controlados por las empresas extranjeras.¹³

Por lo tanto, en cualquiera de las hipótesis presentadas, la formación de una élite empresarial nacional se vio cohibida en los países de base mercantil minera por las dificultades que tiene esa actividad para integrarse realmente en el sistema capitalista mundial. Los vínculos financieros y el volumen cuantioso de capitales que exige su explotación intensa, así como las «utilidades de especulación» que proporciona la actividad mercantilminera, terminan por supeditar a las élites empresariales nacionales al control externo *dentro del propio país*. Al parecer, la orientación especulativa que este esquema favorece, quita al espíritu de empresa el componente que permitió la evolución desde la aventura a la rutina capitalista, esto es, el espíritu de sistema.

Tal como ocurrió en el caso de las élites empresariales agropecuarias las que estamos tratando también fueron formadas en América Latina por «hombres nuevos», aliados pero no confundidos con las élites aristocratizantes urbanas de la colonia y la independencia y con los latifundistas semif feudales. Sin embargo, para la formación de una verdadera élite

¹³ El mejor análisis sobre la oligarquía peruana, y uno de los más ricos en sugerencias para comprender la formación de las clases dominantes en este tipo de países, es el de Francois Borricaud, «Remarques sur l'oligarchie peruvienne». *Revue Française de Science Politique*, 1964. De ahí sacamos la materia para la elaboración de los párrafos anteriores.

empresarial, no basta que haya mecanismos más flexibles para la selección y movilidad social de los nuevos grupos económicos; ni es suficiente que se orienten en función de un proyecto de nación, ya que en cualquiera de los dos casos básicos mencionados, el proyecto existía en función del desarrollo hacia afuera. La base económica en razón de la cual se organizan las clases productoras, a las cuales, a su vez, corresponde explotarla creativamente, también impone sus normas y limitaciones a la constitución de los grupos económicos capaces de controlar la nación. Lo mismo cabe decir de las reglas del capitalismo tanto en su aspecto de sistema de acumulación como en el de producción de base técnica. Así se explican las diversas formas como las economías nacionales quedan engranadas con el mercado mundial.

IV. LAS ELITES EMPRESARIALES EN EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION: FASE DE TRANSICION

Son conocidos los factores propiamente económicos que estimulan la transformación del esquema de desarrollo hacia afuera de un modelo de desarrollo hacia adentro, o sea, de aprovechamiento del mercado interno creado en el período anterior para servir de base a la industrialización y al desarrollo. El elemento constitutivo que las diversas economías latino-americanas tuvieron en común fue la «defensa del mercado». Esta obedeció en parte a la política de sustentación del empleo, en los períodos de crisis de los productos de exportación (principalmente después de 1929-30), por medio de desvalorizaciones que hacían poco competitivos los precios de los productos importados; pero obedeció sobre todo a la defensa natural del mercado impulsada por la contracción del comercio exterior en la época de depresión, y a las consecuencias económicas de la Segunda guerra mundial, que interrumpió la corriente de importaciones.

A las élites empresariales nacionales correspondió reaccionar frente a las oportunidades que aparecían para formular o estimular una política de industrialización. La reacción asumió características diversas en los distintos países de la región; y sobre esta diferenciación influyó mucho el grado de constitución efectiva de una élite empresarial en la etapa anterior. Sin embargo, para analizar la formación, las funciones y las orientaciones de las élites industriales, no basta dividir las en dos grupos, según se hayan formado dentro de las clases productoras de base agropecuaria o de las de base comercialminera. Tampoco cabe inferir de las páginas anteriores

que las posibilidades de actuación de una élite industrial dinámica eran lógicamente mayores en el primer caso.

El proceso de industrialización trajo consigo, como es natural, transformaciones acentuadas en la estructura del empleo, y supuso la existencia y la expansión del mercado interno, esto es, de una masa de consumidores. Estos factores modificaron el sistema de estratificación social, así como el equilibrio político entre los grupos. Por eso mismo, la industrialización significó una reorganización de las funciones del Estado, ocasionó la incorporación de nuevos grupos al proceso político, y dio margen a una redefinición de las ideologías nacionales sobre el desarrollo económico.

Las élites industriales se consolidan dentro de este marco, el cual define el contenido concreto de sus funciones y orientaciones, al mismo tiempo que limita los conductos de reclutamiento y ascensión social, en la medida en que influye sobre los pactos que los nuevos grupos establecen entre sí y con las antiguas élites empresariales. Por otra parte, en función de ese marco se establecen los límites de participación, y la permeabilidad o resistencia de las élites económicas anteriores a la nueva etapa de desarrollo.

1. INDUSTRIALIZACION PROGRESIVA Y ELITES INDUSTRIALES.

El crecimiento más o menos lento, aunque continuo, de las actividades industriales vueltas hacia el mercado interno prosiguió hasta 1930 en los países cuyo desarrollo obedeció al modelo agrario exportador. Tampoco dejó de estar presente en los países de economía enclave, cuyas élites lograron reorganizar segmentos de la producción minera e hicieron reinversiones internas en la agricultura y la industria. Incluso conoció momentos de expansión, como durante la Primera guerra mundial, llegando a diversificarse acentuadamente.¹⁴ Sin embargo, fue a partir de la crisis mundial cuando el sistema industrial se expandió con más ímpetu y comenzó a pesar en la formación del producto nacional.

Como ya se dijo, el control de estas actividades estaba, en parte, en manos de grupos «no elitarios» de origen inmigrante en los países como Colombia,¹⁵ donde la inmigración tuvo escasa importancia, y en parte, en manos

¹⁴ Véase: CEPAL, *El proceso de industrialización en América Latina*, 1965.

¹⁵ En el caso de Colombia, fue fundamental en el proceso de industrialización la participación de los empresarios antioqueños, los cuales no participaban, como los bogotanos, en el sistema políticoeconómico que imperaba en la nación. Cf. E. Hagen, «The Transition in Colombia», en *On the Theory of Social Change*, The Dorsey Press, Illinois, 1962, principalmente pág. 364 y siguientes.

de grupos cuya actividad principal seguía siendo agrarioexportadora. Esta pauta se modificó durante el decenio de 1930 en dos sentidos:

- a) por una parte, la crisis de la economía exportadora hizo que muchas industrias controladas por la élite agroexportadora pasaran a manos de comerciantes, en general de origen inmigrante;
- b) por otra parte, se deja sentir la acción del Estado en la creación de la «industria pesada».

Reforzando la tesis de que en este período se constituyó un nuevo grupo productor, cabe señalar que la expansión del parque industrial se efectúa a partir de esta época con dos tipos de capital: capitales especulativos, favorecidos por la inflación que se inicia entonces y se acentúa en los decenios posteriores, y capitales mercantiles, o bien acumulados como fruto del trabajo de dos generaciones de inmigrantes radicados en el país, o traídos por nuevos inmigrantes. En resumen, el crecimiento industrial se realiza en este período por la acción emprendedora de los grupos no «elitarios».

Las condiciones y las consecuencias de este proceso fueron significativas para la formación de la «élite industrial».

Se acentuó la antigua división del grupo industrial en dos categorías de empresarios, aquellos vinculados a los grupos agroexportadores y los hombres surgidos por el propio esfuerzo. Por otra parte, la marginalización de los «nuevos industriales» pasó a tener mayor trascendencia política. En el período anterior la función industrial era subordinada y dependía de la economía exportadora; por consiguiente, no era tan necesario formular políticas industriales propias. Las que hacían falta se movían por los conductos ya constituidos, en los cuales actuaban los «gestores» de los grupos industriales ligados a los grupos agroexportadores.¹⁶

Al intensificarse el papel del mercado interno, las decisiones económicas de importancia tuvieron que ser tomadas en función del nuevo polo de crecimiento; desde ese momento empezó a hacerse notar la falta de una élite industrial, y su constitución se hizo necesaria para la continuidad de la industrialización.

No se puede afirmar, que en el período de industrialización sustitutiva de las importaciones de bienes de consumo duradero, se haya creado la élite industrial mediante la paulatina adquisición de funciones políticas por los industriales que se formaron a sí mismos en el período exportador precedente.

Al contrario, los pocos estudios disponibles sobre este asunto indican que la mayor parte de los industriales de esta categoría se mantuvieron al margen del proceso político durante el decenio de 1930 e incluso, en algunos países, en el decenio siguiente. Se orientaban en términos de la *empresa* como preocupación central, sin prestar atención a la *sociedad* en el plano político. A la exclusión social que les habían impuesto, reaccionaban mediante la valorización del *trabajo* como actividad que excluía la *participación política*. No se puede negar, por otra parte, que la definición de la actividad industrial como «función económica» contribuyó a la formación de una capa empresarial dinámica, aunque no «elitaria», esto es, incapaz aun de reordenar el conjunto del proceso económico nacional en función de los objetivos «de grupo» que los industriales tenían dentro de las clases productoras. La transformación de los antiguos «patrones» que dirigían sus industrias como si todavía fuesen talleres familiares, en «capitanes de industria»¹⁷ preocupados de la rentabilidad y productividad de los negocios y de su expansión continua, o sea, en industriales capitalistas, se hizo mediante valores, objetivos y funciones que no se organizaban bajo el aspecto político que más tarde se incorporó al comportamiento empresarial.

El tránsito desde el capitán de industria hasta el «hombre de empresa», esto es, el moderno dirigente industrial, se efectúa por la intervención de otros tipos de empresarios, distintos analíticamente de los hombres surgidos por el esfuerzo propio. En efecto, el rasgo distintivo del «hombre de empresa», como ocurría con las élites empresariales del período de expansión hacia afuera, es, una vez más, su politización. La política de desarrollo nacional, el control de los instrumentos monetarios y cambiarios, la política crediticia, todo esto vuelve a ser función normal en la actividad del «hombre de empresa» latinoamericano. La reorientación de estos instrumentos de política económica fue fruto, no de la acción exclusiva y directa

¹⁷ Puede verse un análisis de la transformación de las funciones empresariales en: F. H. Cardoso, *Empresario industrial e desenvolvimento econômico*, Difusao Europeia do Livro, Sao Paulo, 1964, esp. Cap. IV, y también Imaz, José Luis, *Los que mandan*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1964.

¹⁶ Es verdad que desde el siglo XIX, en ciertas circunstancias, la posición se divide en políticas «proteccionistas» o «no proteccionistas». En este caso ya aparecen divergencias más o menos acentuadas en el seno de las «clases productoras», y estas discrepancias se hacían sentir en el plano de las cámaras y congresos.

de los empresarios industriales del mencionado tipo, sino de un conjunto mucho más amplio de dirigentes, en que entraban tanto conductores políticos, más preocupados de la industrialización en función de «los intereses nacionales» que de los intereses de las empresas, como segmentos de las antiguas élites empresariales que seguían controlando parte del parque industrial y, en todo caso, una fracción considerable de la actividad productora nacional.

Los impulsos extraempresariales para la industrialización serán examinados más adelante. En cuanto al papel de las élites anteriores en la composición de las nuevas élites de base industrial, basta mencionar que, como reacción a la crisis de 1930, hubo una transformación acentuada en las funciones del Estado. En algunos países, como sobre todo la Argentina, la «modernización» del Estado, esto es, su reorientación en el sentido de ser más estrictamente un Estado regulador del proceso económico y de efectuar inversiones, se hizo bajo el control de lo que se llamaba la «oligarquía». Del mismo modo en otros países, como Colombia o el Brasil, donde ese proceso no fue tan claro, el nuevo esquema de dominación —el cual, conviene recalcar— sentó las bases de la industrialización, contó con la participación activa de los antiguos grupos agroexportadores.

La coexistencia de los grupos de la etapa anterior con los de la etapa de sustitución de importaciones no se produjo sólo en el plano político de reorganización «elitaria». Tanto en el plano corporativo, esto es, en las organizaciones de clase, como en el de la producción industrial, se hallan presentes los representantes de los dos grupos —los «industriales puros» y los oligarcas —industriales— sin que falten, incluso en las etapas iniciales, representantes de las nuevas plutocracias, formadas por obra de la inflación del proteccionismo y del favor político oficial. Las investigaciones disponibles son concluyentes a este respecto, por más fragmentarias que sean las transformaciones.

La incorporación de los «industriales puros» a los grupos «elitarios» fue lenta y se realizó a través de la «segunda generación» más bien que por los empresarios fundadores. En el aspecto social, el esquema de alianzas de familia funcionó en este caso, como suele suceder, para permitir la asimilación de los grupos enriquecidos a los grupos tradicionales. La selección «elitaria», controlada por las clases de mayor prestigio, operó en esta fase de la industrialización como un mecanismo regulador de la ascensión social. En el aspecto económico, el propio crecimiento de las

actividades empresariales obligó a las alianzas entre empresas, rompiendo la tradición de la «empresa familiar» o, a lo menos, ampliándola. Este proceso produjo una mayor homogeneidad entre grupos industriales de origen histórico distinto, preparando el advenimiento de una nueva élite empresarial de base industrial.

2. ACCION ESTATAL Y DESENVOLVIMIENTO NACIONAL.

La reorganización de las élites dirigentes durante el período de formación del sistema industrial siguió caminos distintos en aquellos países, cuyas economías se vincularon al mercado mundial sin que el sector exportador estuviera controlado por los empresarios nacionales. Antes de la formación de los enclaves, las posibles reacciones de las élites dirigentes locales variaban desde una política de repliegue hacia el control de sectores marginales a la economía de enclave —sectores de carácter agrario o minero— hasta el extremo de una acomodación a la situación de grupo político parasitario de la actividad productiva. Las consecuencias de estas distintas orientaciones, que se fueron perfilando desde el siglo pasado, se dejaron de sentir en la etapa en que la dirección principal del sistema económico se desvía del sector externo hacia el sector interno.

En efecto, la creación de una élite de orientación industrial constituyó en este caso una empresa más complicada que en la situación anterior. Por una parte, era menester que el grupo industrial se sobrepusiera a los intereses extranjeros radicados en el sistema productivo local. Estos se articulan en un esquema puramente exportador, sin grandes relaciones funcionales con el sector semindustrial local. Por otra parte, mientras que en los casos anteriores la élite dirigente local disponía de una base social estable, y de alguna manera tenía una tradición en el manejo del Estado y del sistema productivo exportador, en este caso había que emprender la industrialización en condiciones sociales que se caracterizaban por una falta de jefatura de parte de los grupos económicos nacionales.

Sin embargo, el alcance de esta falta de jefatura fue distinto según el tipo de reacción que las clases propietarias pudieron alcanzar durante el proceso de formación de los enclaves económicos. Por ejemplo, en los países en que, a pesar de los enclaves, de algún modo fue posible mantener una élite empresarial activa, como en Chile, el tránsito desde el desarrollo basado en la exportación hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva, se puede realizar, con alteraciones más o

menos profundas en el esquema de poder, pero sin una exclusión de las antiguas clases empresariales. En cambio, no se podría decir lo mismo de los países donde la economía de enclave se constituyó como principio ordenador exclusivo de la vida económica; o aquellos donde las clases dominantes tendieron a ajustarse a los moldes de una clientela que controlaba el Estado y por su intermedio se beneficiaba de la producción enclave.

En este caso, la ausencia de una capa dirigente de tipo empresarial impuso, como requisito para el éxito de la industrialización, la formación de élites empresariales cuyo origen social estuviera en grupos distintos de los que constituían la antigua clase dominante. En los países de este tipo, cuando realmente hubo industrialización, este proceso dependió en general de una revolución previa. Tal revolución asumió el carácter y matices distintos en el plano social e ideológico, desde la revolución mexicana, que ocasionó la extinción de las bases de poder de las antiguas élites dirigentes mediante la expropiación, hasta las revoluciones de alcance social más restringido y de tipo democratizante, como la de Venezuela. En todo caso, sin embargo, las élites industriales nacientes se constituyeron a partir de clases sociales que estaban en ascenso político, desligadas de los antiguos esquemas de poder.

Incluso en el caso de los países que presentan una dualidad de patrones, desde el punto de vista de las dos formas básicas de incorporación al mercado internacional aquí propuestas, parecería que en el modelo «economía de enclave» el tránsito hacia la industrialización se efectúa mediante el surgimiento de nuevos grupos sociales nacionales, con capacidad para controlar el Estado y, a través de él, para promover la industrialización.

Sin agotar con ejemplos la multiplicidad de situaciones empíricas, tanto el PRI mexicano como el Frente popular chileno de 1939-41, y más recientemente la Acción democrática venezolana, son expresiones políticas de la presión de grupos sociales nuevos, desvinculados del esquema agrario-exportador-empresarial. En cualquiera de estos casos, la industrialización fue promovida mediante el Estado, que pasó a ejercer parcialmente funciones empresariales, en las industrias básicas, y que fomentó la creación de nuevos grupos empresariales, capaces de llevar adelante el desarrollo económico del país. En el caso de los países como Chile, es evidente que la élite industrial local que se formó como consecuencia de la política de industrialización de los decenios de 1930 y 1940, se reclutó en gran

parte en las antiguas clases empresariales agrarias, comerciantes y mineras.¹⁸ En el caso de México se creó realmente una «nueva burguesía». Sin embargo, en ambos casos, la élite industrial expresa la permeabilidad de esta capa a los nuevos integrantes, sean productos de la ascensión social de los grupos inmigrantes dedicados en un principio al pequeño comercio urbano, sean individuos de la burocracia estatal emprendedora que, de diversos modos, se transformaron en empresarios particulares.

Formando contraste con los países de base agrarioexportadora bajo control nacional, donde se dio el mencionado proceso de crecimiento lento de una «burguesía industrial» a la cual se superpone un sistema de empresas estatales, parecería que en los países cuya producción fue inicialmente de tipo enclave, la industrialización nació en forma directa bajo el influjo del Estado, gracias a la acción de una «burguesía ilustrada», que posteriormente se transformó en parte en una «burguesía progresista». Las diferencias extremas entre los dos patrones, por lo que respecta a los rumbos del proceso de industrialización, van desde el caso argentino, en que el vigor del grupo agrario exportador en cierto modo impuso un patrón «liberal» de desarrollo económico, con pequeña participación del Estado, hasta el caso mexicano, de industrialización orientada y fomentada por el Estado hasta la etapa de formación de un mercado interno capaz de sustentar el sector privado de la economía.

Sin embargo, el dinamismo del sistema económico se dio en gran parte en el caso de los países que obedecieron al patrón aquí descrito, gracias a la acción económica de los grupos sociales no propietarios que lograron controlar parcialmente el Estado. La clave para comprender la formación, las funciones, los conductos de ascensión social y la orientación de los grupos empresariales industriales, estriba, dentro de esa hipótesis, en el alcance de la reorganización del sistema político y en el empuje social de las masas y de los grupos de clase media donde se reclutan los intelectuales y la burocracia favorables al desarrollo.¹⁹

Las ideologías industriales reflejan, en estos casos, las orientaciones básicas de los grupos sociales preocupados por la formación de la «nación», esto es, de un cuerpo político capaz de imponerse como ente autónomo y de pactar con los sectores externos, bien sea definiendo los límites de las

¹⁸ Cf. Carlos Filgueira, *El empresario industrial en Chile*, ILPES, Santiago, 1966.

¹⁹ Cf. Weffort, F., *op. cit.*

concesiones, cuando no logran eliminarlas, bien sea asegurando mercados y capitales para la formación del sistema productivo nacional. La élite industrial formada en estas condiciones, en cierto modo se salta de la etapa en que los empresarios se comportan como «capitanes de industria» absorbidos por las actividades de las empresas, pues se constituye como un conjunto de dirigentes industriales, conscientes desde un principio de las dimensiones políticas del comportamiento empresarial.

V. LOS DIRIGENTES ECONÓMICOS Y LA "GRAN INDUSTRIA"

A partir de 1950, el problema que se planteó a las élites empresariales de los países que habían entrado por la vía de la industrialización fue, en grados diversos, el de la consolidación del sistema productivo mediante la creación de un sector de bienes de capital. Los países más industrializados de la región habían conseguido formar de diversos modos un sector empresarial privado, y habían organizado, sobre todo mediante inversiones públicas, el mínimo indispensable de infraestructura económica y de industrias de base a fin de asegurar la continuidad del crecimiento económico. La formación de un sector de bienes de capital y de bienes de consumo duradero era el complemento indispensable para esas economías «en vías de desarrollo».

La decisión básica que de ahí en adelante definiría la orientación de las élites empresariales, pasó a ser la elección de un camino para proseguir la industrialización. Las nuevas iniciativas industriales, por su naturaleza, requerían grandes concentraciones de capitales así como conocimientos técnicos avanzados, factores ambos que son relativamente escasos en los países subdesarrollados. Era como si se plantearan una vez más, en nuevas condiciones, los problemas a que anteriormente habían hecho frente las economías mineras. Ante esa dificultad había dos posibilidades extremas: la estatización creciente de la economía o la inversión cuantiosa de capitales extranjeros. Entre estos dos extremos, las economías latinoamericanas encontraron en la práctica soluciones intermedias variables. Estas, por una parte, se tradujeron en la limitación del papel del Estado al ejercicio de funciones reguladoras importantes y al control de las inversiones fundamentales (petróleo, siderurgia); y por otra parte, buscaron la asociación de las empresas nacionales con empresas extranjeras, por lo general en condiciones que daban un papel minoritario a los grupos nacionales.

La reorganización de la economía impuesta por el avance de la industrialización significó —como causa y como consecuencia— modificaciones apreciables de la élite empresarial. Por un lado, aparecieron nuevos integrantes de los grupos dirigentes de la economía: los empresarios estatales y los administradores profesionales de las empresas extranjeras; por otro lado, los hombres de empresa del sector privado se transformaron en «dirigentes económicos», preocupados por igual de la economía de la empresa y de la política nacional de desarrollo.

Es fácil comprender que, desde el punto de vista del origen y de la movilidad social de los empresarios, la industrialización en su etapa de bienes de producción y de bienes de consumo duradero trajo consigo, dadas las condiciones apuntadas, una «apertura» de la élite económica de los países. Junto a los representantes de los sectores agro-comerciales-exportadores y de las industrias «de tradición» (esto es, de segunda generación), en las decisiones relativas a la política de desarrollo entraron a participar tanto funcionarios de las entidades estatales de promoción económica²⁰ como administradores profesionales, representantes de empresas extranjeras e incluso de algunas nacionales. De esta manera se acentuó, dentro de las élites dirigentes de la vida empresarial, la presencia de profesionales salidos de las clases medias. Además, dentro de la élite económica se intensificó la diferenciación de funciones, en la medida en que el fortalecimiento de la vida corporativa se convirtió en un requisito para la ejecución de la política empresarial. A través de las cámaras y sindicatos patronales entraron a participar en las élites empresariales, como representantes de las clases productoras, personas que no poseían propiedad industrial ni siquiera controlaban administrativamente alguna empresa. La vía de acceso a estas posiciones fue la capacidad de servir de punto de contacto entre las cámaras industriales, los gobiernos y los otros sectores de la economía, sobre todo el bancario. En muchos casos, esos papeles quedaron a cargo de individuos pertenecientes, por lazos de familia, a las antiguas élites preindustriales. En la medida en que éstas siguieron ejerciendo el control de posiciones importantes en la estructura del poder político y financiero, fue útil para las empresas mantener vinculaciones con ellas. La designación de un abogado de familia tradicional para que actuara en los directorios de las empresas

²⁰ Sobre la formación de las nuevas élites empresariales, véase los trabajos ya mencionados de Imaz, Filgueiras y Cardoso. En cuanto al significado de «entidad estatal», la expresión está usada en el sentido más amplio, abrazando desde las empresas del Estado hasta los bancos de fomento y los consejos de desarrollo, etc.

o de las cámaras empresariales, se convirtió en un expediente común y útil en la vida de las empresas.

Por estos motivos sería difícil sostener la hipótesis de que, en los países más industrializados de América Latina, las élites empresariales presentan un grado de homogeneidad y cohesión equivalente al que existía en la etapa de desarrollo hacia afuera, e incluso en la primera fase de la expansión industrial. Ni el peso ponderado de los grupos que la constituyen es igual en las decisiones, ni los intereses de estos grupos se identifican en el apoyo a una política común de desarrollo. Tampoco cabe afirmar que las prácticas de organización y gestión de las empresas sean semejantes en las empresas del Estado, en las extranjeras y en las industrias locales, pese a los factores de uniformidad que el tamaño de la empresa y la tecnología moderna imponen en la actual etapa de la industrialización.²¹ Habría que distinguir analíticamente varios planos en el comportamiento de la nueva élite económica para dar sentido a la diversidad de las orientaciones existentes, a pesar del marco común de intereses que la caracteriza como élite empresarial. Asimismo, sería necesario precisar cuáles son los supuestos económicos y sociales de la organización interna de la élite empresarial en esta fase del desarrollo. Son escasas las investigaciones para explicar su comportamiento y sus orientaciones,²² de modo que las líneas que siguen tienen naturalmente carácter conjetural.

Podría decirse que en la América Latina las élites industriales entraron a participar en los grupos dirigentes nacionales mediante un complicado sistema de alianza con las élites financieras y con las élites agroexportadoras. Los pocos estudios sobre la formación de «grupos económicos»²³ muestran que es ilusorio suponer que la participación de la «gran industria» en el control de la vida económica se verificó en desmedro del sector financiero y del sector agrícola, o aparte de ellos. Es verdad que, en la

²¹ Esta cuestión no será examinada en detalle. La afirmación se basa en los estudios de Cardoso, *op. cit.* Fillol, I. R., *Social Factors in Economic Development, The Argentina Case*, The M. I. T. Press, Cambridge 1961 y Lauterbach, Albert, *Enterprise in Latin America, Business Attitudes in Developing Economy*, Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1966.

²² Actualmente se hace un estudio sobre los empresarios de Argentina con esa preocupación. Dirigen la investigación Juan Carlos Marín y este autor.

²³ Sobre los «grupos económicos» en América Latina, véase Calcagno, Eric, *Nacionalización de servicios públicos y empresas*, Edit. Raigal, Bs. As., 1957. Vinhas de Quiroz, Mauricio. Lago E., Ricardo, *La concentración de poder económico*, Editorial del Pacífico, Santiago, 1961. Czeñea, José Luis, *El capital monopolista y la economía de México*. Cuadernos Americanos, México, 1963.

medida en que el mercado interno se ha convertido en una condición de la prosperidad, se acentúa en el ámbito de la élite dirigente e incluso en cada grupo económico el peso relativo del sector industrial sobre la orientación de la política económica. En la práctica, sin embargo, las decisiones de la política de desarrollo dependen de una ponderación compleja, en que aún hay que tener en cuenta las presiones de los grupos agroexportadores y la diversidad de los intereses industriales, esto es, sector estatal, sector extranjero y sector nacional. Por otra parte, los distintos sectores industriales que componen la élite empresarial (sector nacional, sector externo y sector estatal) dependen del sistema estatal para consustanciar sus intereses. La extensión del sistema estatal de crédito y el grado de control del sistema financiero privado por las entidades estatales encargadas de la economía financiera, indican los límites de la autonomía relativa de la empresa privada en la definición de su política de expansión. En cambio, el control de instrumentos propios de crédito por las empresas extranjeras, y también por las empresas nacionales, expresan la autonomía de cada uno de estos sectores dentro del sistema económico de los países. Sería igualmente ilusorio suponer que los distintos grupos que componen la élite empresarial se oponen entre sí en forma radical. Por el contrario, en la fase de constitución de la «gran industria» el desarrollo se realiza mediante alianzas entre los diversos sectores de la economía interesados en la industrialización. Estas alianzas se traslucen si se analiza la composición de los directorios de las sociedades anónimas, en que, en muchos casos, las mismas personas pertenecen a empresas bancarias, industriales, comerciales y agrícolas. ¿Cómo puede afirmarse entonces que en este caso haya diversidad de intereses?

Las únicas investigaciones que ofrecen elementos concretos para formar este juicio indican que, en el plano ideológico, la «élite empresarial» aparece homogénea: ella defiende el predominio de la empresa privada en la industrialización; quiere limitar el papel del Estado al de una entidad reguladora de las actividades económicas o de un promotor económico en los campos demasiado arriesgados; defiende la colaboración del capital extranjero, etc. En el plano económico, la élite empresarial reacciona objetivamente conforme a los intereses del grupo económico al que está ligado cada dirigente. Por ejemplo, las opiniones varían sobre la intervención del Estado para garantizar precios mínimos de importación de materias primas, para asegurar la protección del mercado, etc. Y en el plano político, los grupos dirigentes se fragmentan según la manera como creen que

podrán ejercer mayor control del proceso global de crecimiento, o sea, del país.

A pesar de la insuficiencia de las informaciones disponibles, parece que en este caso la diversidad de orientaciones en el plano político se da en función de la posición de los distintos grupos en la estructura económica y de la concepción que sus dirigentes sustentan sobre el papel que les podría caber en la hegemonía de un nuevo sistema de alianzas. Este será más o menos abierto según que los dirigentes de los grupos industriales-financieros crean factible ejercer su liderato sobre los demás componentes de la sociedad industrial: los sectores obreros, las clases medias profesionales, los grupos agrícolas de orientación moderna e incluso los grupos agrariolatifundistas tradicionales.

Como corte fundamental en las relaciones de los grupos dentro de la propia élite empresarial, parece que el grado en que los grupos nacionales se comprometen con las políticas estatizantes (sustentadas por los sectores populares y por grupos de las clases medias) y las ventajas sacadas de ellas, así como la tolerancia demostrada para con los «movimientos de masa», señalan dos orientaciones posibles para las élites industriales: el apoyo al «nacionalismo» como política de desarrollo basada en la protección estatal, o la defensa de una política «de pura promoción del desarrollo», en que la empresa privada, en forma independiente del problema del control interno o externo de los capitales, se convierte en el valor básico para orientar la industrialización.

Es evidente que estas dos posiciones extremas se manejan tácitamente en la práctica según que los antagonistas sean, en un momento dado, la marea creciente de las presiones estatales populares o la penetración externa. En todo caso, en ellas se marcan los límites de las concesiones que se pueden hacer a los grupos internos o externos, tanto en el aspecto de asociaciones económicas, en el plano de la empresa, como en el aspecto de alianzas políticas, en el plano de la sociedad.²⁴

²⁴ Para complementar los análisis presentados, conviene tener presente otros trabajos que se preocupan más bien con las dimensiones de tradicionalismo o modernismo del comportamiento y de los objetivos de los empresarios. En ese sentido, ver Strassmann, W. Paul, «The Industrialist», in Johnson, J. J. (ed.), *Continuity and Change in Latin America*, Stanford University Press, Stanford, 1964; y aun Lejnet, S. M.



CHINA: el otro comunismo*

Kewek S. Sarol

Desde hace dos años China padece de una fiebre política sin precedentes. Millones de jóvenes, de obreros, de campesinos, hasta en las regiones más remotas, se manifiestan con pasión y se enfrentan duramente. Sin embargo, los grupos rivales de quienes se nos había dicho que se desgarraban mutuamente, siguen jurando fidelidad a un mismo hombre, Mao Tse-tung, y a un mismo partido, el Partido comunista de China.

La gran prensa no nos ayudó en nada a descifrar el enigma de esta batalla. Su gusto por lo sensacional y su aversión por el comunismo chino, sobre todo en los Estados Unidos, la han llevado a destacar informaciones «ruidosas», aún cuando éstas eran inverosímiles o manifiestamente erróneas y a llegar a la conclusión de la inminencia de una guerra civil en China. Los móviles de los dirigentes chinos eran evidentes: celos, rencor, ambición; en cuanto a las masas de manifestantes, no eran más que dóciles instrumentos en las manos de los nuevos «señores de la guerra», resurgidos del propio seno del Partido comunista chino.

Pero un análisis fundado en noticias dudosas, interpretadas tendenciosamente, tiene pocas probabilidades de ser confirmado por los acontecimientos. La guerra civil china no se ha producido. Los «ejércitos» maoístas y antimaoístas se evaporaban siempre

en el momento en que se anunciaba su confrontamiento decisivo. Los famosos generales antimaoístas, «dueños de las dos terceras partes de las provincias de China», jamás aprovecharon su poderío para explicar al mundo su desacuerdo con Mao Tse-tung. Y poco a poco, los periódicos más ávidos de lo sensacional, se cansaron. Dedicaron menos espacio a los asuntos chinos y explican sus errores de análisis por el carácter «irracional» e impenetrable de la mentalidad oriental: «No tratemos de entender a estas gentes; no son como nosotros». En efecto, los chinos no se comportan como nosotros porque viven en un universo profundamente diferente del nuestro. Su sociedad no tiene nada en común con las «sociedades de consumo» y está incluso muy alejada de las sociedades llamadas «socialistas» de los países del este europeo. La ambición de este libro es hacer comprender, partiendo de las observaciones que pude recoger en el curso de un largo viaje por China, la fuerza de los valores preconizados por Mao Tse Tung y que gobiernan, desde hace muchos años ya, la vida de los chinos. Algunas de las concepciones maoístas es derivan de las tradiciones de la civilización china, que ha sido siempre extremadamente moralizadora; otras provienen de las tendencias igualitarias propias del movimiento comunista de este país. La conjunción de estos dos factores modeló una

sociedad colectivista que se funda esencialmente en la ideología.

Todo ello caracterizó profundamente a los chinos y hace de su país una «sociedad de impugnación», con una dinámica propia, con sus métodos específicos de lucha política que descansan sobre un enjuiciamiento de todos los demás sistemas de valores. Este desafío no puede ser pasado por alto, ya que ha sido lanzado por 700 millones de hombres, o sea, una cuarta parte de la humanidad. No resolvemos nada comprobando que «sus razones» no son las nuestras, y sería ilusorio creer que el tiempo allanará las dificultades de comunicación.

La China del mañana no entrará dócilmente en la gran familia de naciones que aceptan los «valores occidentales». Por el contrario: cuanto más se desarrolle la revolución cultural, tanto más consolida China su propio sistema de valores. Los que no tratan de comprenderlo hoy, lo comprenderán aún menos mañana.

No es ésta la única razón que tenemos para sacudir nuestra indiferencia y para rechazar las explicaciones fáciles de los periódicos sensacionalistas. Es imposible hablar de los acontecimientos de China olvidando el contexto internacional en el que se desarrollan. Ya desde hace muchos años, los Estados Unidos asolan Viet Nam, pequeño país vecino de China. En Washington, durante la primavera

* Prólogo a la segunda edición del libro del mismo título.

ra pasada oí a algunos funcionarios norteamericanos confesar fríamente que cada grado de la escalada aumentaba los «riesgos de una confrontación total» con China. Unos me lo decían con aprensión, otros con la esperanza de que esta nueva cruzada permita destruir, de una vez por todas, el comunismo en Asia. Todos admitían que en caso de conflicto con China se utilizarían las «armas más extremas». Sabiendo lo que son estas armas, podemos decir que ninguna nación vivió jamás bajo una amenaza tan terrible como la que pesa hoy sobre China. Me temo que algunos expertos norteamericanos propalan a la ligera noticias acerca del derrumbamiento interno de China con la idea de reforzar los argumentos de aquellos dirigentes de Washington que desean esta «confrontación total» y tratan, por consiguiente, de minimizar «los riesgos» que ofrecería para los Estados Unidos una guerra con China. Aunque no existieran otras razones, esta sola bastaría para hacer escandalosa la histeria antichina que se desarrolla, desde hace algún tiempo, en la prensa occidental.

Mi intención no es la de ponderar la «gran revolución cultural proletaria». Las tesis oficiales de Pekín sobre sus orígenes y su desarrollo me parecen con frecuencia poco convincentes y me propongo someterlas aquí a un examen crítico. Creo, también, que ciertas exigencias no son ni burguesas, ni

revisionistas, sino bastante universales. Ninguna «necesidad revolucionaria» puede justificar, por ejemplo, falsificaciones de la historia o acusaciones retrospectivas contra dirigentes puestos en la imposibilidad de restablecer la verdad. La versión china del conflicto que se desarrolló en el seno del grupo dirigente de Pekín me parece tendenciosa y contribuyó ciertamente a hundir en la perplejidad a los europeos que, sin prejuicios, se esfuerzan por comprender la lucha política que se desarrolla en China.

No trataré aquí de analizar todos los acontecimientos que han ocurrido en China desde hace dos años, sino de poner en evidencia uno de los aspectos; a mi entender primordiales, de la revolución cultural.

Durante mi estancia allí, pude comprobar la importancia que los chinos atribuían al problema de las relaciones entre los que gobiernan —el Partido y sus cuadros— y aquellos en cuyo nombre gobiernan — las masas obreras y campesinas. Estoy convencido de que este problema está en el centro de la revolución cultural y que, para nosotros, es a la vez el más importante y el más interesante.

Se nos dice en Pekín que es Mao Tse Tung quien dirige personalmente la revolución cultural. Sin embargo, él ya no habla en público, ni escribe textos teóricos. La prensa china cita, a veces, las observaciones resonantes

hechas por él en reuniones a puerta cerrada, o le atribuye tal o cual disposición de la resolución del Comité central. Pero ninguna de estas intervenciones pasa de algunos renglones. Por lo demás, los periódicos de Pekín se conforman con reproducir, con un máximo de brillantez, antiguos textos o discursos del Presidente que, según comentaristas oficiales, conservan su profundo significado y deben, más que nunca, servir de brújula en la acción cotidiana.

A los que se asombran de ello, los chinos responden que esta exhumación es perfectamente lógica; en efecto, la revolución cultural tiende a restaurar en el Partido y en el país, normas de conducta revolucionarias preconizadas desde siempre por el presidente Mao y violadas sólo desde hace algunos años, por un «puñado de dirigentes que, aunque miembros del Partido, seguían la vía capitalista». Mao hizo un llamamiento a las masas para que éstas desenmascaras a estos malos dirigentes y les arrancasen el poder. No se trata, pues, más que de un regreso a la estricta aplicación de la «línea de masas» que permite al pueblo expresar sus sentimientos igualitarios y proletarios.

Esta tesis es discutible, lo veremos más adelante, pero contiene elementos de verdad. Hoy, al releer los antiguos textos de Mao, que fueron ampliamente difundidos durante la re-

volución cultural, quedamos asombrados por la preocupación, que ya se notaba en ellos, por imponer al Partido —y al ejército que se originó del mismo— ciertas normas de conducta democráticas e igualitarias. Mao ha dicho siempre, con pesar, que los comunistas no pueden hacer la felicidad del pueblo. «Recoger las ideas de las masas —escribía en 1943—¹ concentrarlas y llevarlas nuevamente a las masas, para que éstas las apliquen firmemente, llegar así a la elaboración de ideas justas para el trabajo de dirección: tal es el método fundamental de dirección». Un año más tarde, precisaba nuevamente: «Dos principios deben guiarnos: en primer lugar, responder a las necesidades reales de las masas y no a las necesidades nacidas en nuestra imaginación; en segundo lugar, aplicar la voluntad libremente expresada por las masas, las resoluciones que ellas mismas adopten, y no aquellas que adoptaríamos en su lugar».²

El respeto por estas directivas chocó, desde el inicio, con dificultades, puesto que el Partido, dada su seguridad doctrinal y su estructura monolítica, siempre estuvo inclinado a dirigir en un modo autoritario las regiones que

¹ *A propósito de los métodos de dirección*, 1, junio, 1943, Obras Escogidas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín.

² *El frente unido en el trabajo cultural*, 30 de octubre de 1944, Obras Escogidas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín.

controlaba. Fue necesario realizar «campañas de rectificación» para incitar a cuadros y militantes a la modestia y para inculcarles un espíritu igualitario. En la parte histórica de este libro, refiero testimonios sobre la organización política de las «regiones rojas» de China durante la guerra antijaponesa y éstos me parecen confirmar que los maoístas practicaban entonces una especie de «línea de masas». Pero la praxis revolucionaria es siempre más fácil durante la fase de los grandes alzamientos revolucionarios contra el enemigo exterior o contra el antiguo régimen. Las masas campesinas querían librarse de los japoneses y reclamaban una reforma agraria radical: el Partido no tenía inconveniente en doblegarse a estas ideas y necesidades del pueblo», que, por otra parte, había contribuido a suscitar.

Después de la victoria ya no fue lo mismo: entonces hubo que dirigir una sociedad postrevolucionaria que no vivía en la exaltación del combate, y responder a las aspiraciones múltiples y con frecuencia contradictorias de estas diversas clases y capas sociales.

Al desatar la revolución cultural, diecisiete años después de la fundación de la República popular, Mao Tse Tung admite implícitamente que su Partido no supo aplicar la «línea de masas» en estas nuevas condiciones.

Pero señala también que no se da por vencido y que se cree capaz de volver a enderezar la situación.

Ningún dirigente comunista en el poder ha dado jamás semejante prueba de obstinación y de una fidelidad tan absoluta a sus ideas del «período heroico». Por regla general, los comunistas predicaban siempre la democracia proletaria antes de la revolución y se resignan, rápidamente, a no poder practicarla después, hasta el punto que sus promesas a este respecto forman parte de una liturgia que ya nadie toma en serio. La determinación de Mao de reconsiderarlo todo nuevamente para cumplir con sus compromisos democráticos, constituyó, por lo tanto, una primera sorpresa «inexplicable» de la revolución cultural.

Pero los antiguos textos de Mao, testigos de su fidelidad a sí mismo, no explican, evidentemente, por qué la famosa «línea de masas» no fue aplicada —o no lo fue suficientemente después de la fundación de la República popular China en 1949. El que esta responsabilidad incumba únicamente a algunos «malos dirigentes», parece tanto menos creíble, cuanto los dirigentes en cuestión, —no importa lo que de ellos digan hoy los comentaristas de Pekín— se comportaron casi todos en una forma muy notable en el pasado. Por consiguiente, deben existir razones más profun-

das y menos subjetivas, pero para comprenderlas debemos echar una rápida ojeada sobre lo que sucedió en China durante los años anteriores a la revolución cultural.

Gracias a su combatividad durante la guerra antijaponesa y a su gestión ejemplar de las «regiones rojas», el P.C. adquirió en toda China un renombre de «justiciero incorruptible». Sin embargo, como fuerza política, sólo se encontraba sólidamente implantado en el noroeste y en el norte, donde había establecido sus principales «bases liberadas». En las grandes ciudades costeras y en la inmensa extensión al oeste del Yangtse, los comunistas eran poco numerosos. Por otra parte, los militantes de estas regiones habían tomado el camino de Yenan, capital de Mao desde 1936, durante los años de la guerra antijaponesa.

La victoria de los comunistas en China había sido más rápida de lo que había previsto el propio Mao. Casi de un día para otro, resultó necesario hacerse cargo de un país de dimensiones continentales y encuadrarlo con apenas un millón de militantes. En estas condiciones, el P.C. no podía sino tender la mano a todos los que deseaban trabajar bajo su égida. Ahora bien, se beneficiaba de un prejuicio muy favorable: la mayoría de los chinos había lanzado un suspiro de alivio al ver terminarse las guerras

que asolaban su país desde hacía varios decenios y estaban listos a colaborar con la «nueva democracia». Pero los comunistas no contemplaban, en realidad, compartir el poder con cualquiera que fuese. A pesar de su debilidad numérica, se atribuyeron todos los cargos de responsabilidad importantes.

La reordenación del país duró cuatro años y se realizó sin muchos tropiezos, a pesar de la guerra de Corea que drenó numerosos cuadros comunistas hacia el ejército. Luego, en 1953, estando el país finalmente encauzado, el P.C. decidió impulsarlo energicamente hacia el socialismo. Reforzó aún más la centralización administrativa y el Partido debió estrechar aún más sus filas. Mao repetía siempre que los comunistas no debían ser autoritarios, pero su nueva política no permitía una flexibilidad dialéctica muy grande en la práctica.

Un año más tarde, la República popular china se dio un cuadro institucional definitivo y adoptó su constitución. Esta no era una copia servil del modelo soviético, pero se inspiraba grandemente en él: el mismo sistema electoral, el mismo Parlamento (llamado, es verdad, Congreso del pueblo y no Soviet supremo), idéntico principio de subdivisión administrativa. Los chinos pusieron entonces en práctica el primer plan quinquenal, elaborado con ayuda de los

soviéticos y basado en métodos ya probados en la URSS durante el período de industrialización. Era normal que la vida política del país se alinease también a las normas tradicionales de los demás países comunistas. En cambio, las rígidas instituciones chinas dejaban un margen muy reducido a cualquier expresión de «ideas y necesidades» fundamentales.

Además, en 1957, al terminarse el primer plan quinquenal —considerado por todos como un gran éxito— Mao cambió bruscamente de rumbo. Se dice hoy en Pekín que adoptó esta decisión después de su viaje a la URSS, donde al parecer descubrió, para consternación suya, el nivel ideológico de los líderes comunistas extranjeros y se dio cuenta de los estragos causados por la burocracia en la élite comunista de los países socialistas europeos. Fue probablemente entonces que decidió, como cuestión de honor, no dirigir su país del mismo modo que ellos.

Esta anécdota es, sin duda, apócrifa, ya que Mao, muy bien recibido en la URSS, fue la principal vedette del encuentro comunista internacional en Moscú. No es menos cierto que en 1957, todo el mundo comunista tomaba un giro crucial. Después de la muerte de Stalin, ya no era posible mantener un sistema de poder basado en el monopolio ilimitado del Partido

como estructura estatal, política y económica y representado por funcionarios que el grupo dirigente designaba a su gusto. Bajo el empuje del crecimiento económico de la sociedad, este sistema llegó a ser impracticable en la URSS, pero, a pesar del inicio de un examen de conciencia en el XX Congreso del P.C. de la URSS en 1956, los soviéticos no se atrevieron a tomar el camino de la desburocratización. Decidieron mantener el monolitismo y la potencia política del Partido, haciendo al mismo tiempo, concesiones a los economistas, a los tecnócratas, para que resucitasen las leyes económicas y aportasen un nuevo equilibrio a la sociedad. Los soviéticos no contaban ya con la eficacia de sus llamados revolucionarios a la población y se fiaban aún más que antes en los estímulos materiales para alentar a los trabajadores en la producción. Dejaban para más tarde la realización de la utopía comunista y aceptaban para un período aún bastante largo, una gran diferencia en los ingresos, en las funciones y en los poderes dentro de su país.

La apertura hacia Occidente era una de las consecuencias de estas opciones.

Para Mao, esta nueva política era contraria a sus creencias igualitarias, a su profunda confianza en la aspiración revolucionaria de las masas, en resumen, negaba toda su historia per-

sonal y sus convicciones. Veía en ella el signo de un alineamiento de la URSS al modelo de las sociedades de consumo y del debilitamiento de su voluntad antimperialista. Por todas estas razones, si no podía impedir que los soviéticos siguieran su vía, no estaba menos determinado a adoptar un camino opuesto en China.

De ahí que, desde su regreso de Moscú, comenzó a elaborar una «nueva línea general», la del Gran salto hacia adelante y de las comunas populares. Proclamaba la necesidad de conceder una prioridad absoluta a los estímulos políticos y morales para los trabajadores.

Este propósito de encontrar un «atajo hacia el comunismo», afirmado en el mismo momento en que los otros partidos en el poder se inclinaban ante la necesidad de aplazar la construcción de la sociedad ideal, constituía un desafío, apenas velado, a la URSS. Pero no parece haber encontrado resistencia en los grupos dirigentes chinos. No sabemos casi nada sobre los debates internos que se produjeron en esa época, pero podemos encontrar, paradójicamente, una confirmación indirecta de esta ausencia de oposición en las singulares prácticas actuales de la revolución cultural.

En efecto, la prensa china, para demostrar la culpabilidad de los dirigentes en desgracia como Liu Shao Chi, se dedica a interpretaciones re-

trospectivas de sus antiguos escritos o discursos. Este procedimiento recuerda, tristemente, los métodos stalinianos, pero los chinos, al contrario de los antiguos procuradores soviéticos, no parecen llegar hasta el límite de fabricar falsas piezas de acusación. Los textos que «reinterpretan» han sido efectivamente escritos por los dirigentes incriminados, en un contexto muy diferente por supuesto. Es cierto que si Liu Shao Chi o cualquier otro futuro «revisiónista» hubiese manifestado en 1958 su oposición a la «línea general» de Mao, su intervención de entonces estaría hoy pegada en todos los muros de China como prueba abrumadora de su traición.

Si esto no sucede, es que no ha sido posible encontrar en los archivos del Partido el menor discurso verdaderamente comprometedor. Por otra parte, Liu Shao Chi ha comparecido dos veces ante «guardias rojos» estudiantes, en Pekín, para hacer su autocrítica y, aunque los textos de sus discursos no hayan sido jamás publicados, la prensa ha revelado que «tuvo la imprudencia de sostener que, aún durante los tres años difíciles jamás atacó las comunas populares».

Sin embargo, el año 1958 fue el del viraje decisivo para el comunismo chino. Con diez años de perspectiva se comprende mejor que la herejía maoísta en el seno del mundo comu-

nista comenzó con el Gran salto hacia adelante. También fue entonces cuando fueron sembradas las primeras simientes de la futura revolución cultural.

Los chinos afirman que la «línea general» de 1958, nació bajo el impulso espontáneo de las masas populares y, más particularmente, de aquéllos que ellos llaman los «campesinos pobres y medios de la capa inferior».

No precisan cómo esta voluntad de la base pudo expresarse e imponerse al Partido, pero parece cierto que Mao y su equipo creyeron, sinceramente, que la inmensa mayoría de los «chinos pobres» aspiraba a un cambio rápido de su modo de vida. Lejos de pensar que imponía brutalmente su solución a una masa amorfa, si no reticente, creían expresar, en términos de relaciones socialistas lo que los campesinos confusamente deseaban. Es un hecho que le concedieron a las comunas una autonomía administrativa considerable, que las invitaron a formar y dirigir su propia milicia y les distribuyeron millones de fusiles. Stalin no habría jamás soñado en proporcionarle armas a los campesinos durante el período de la colectivización forzada en la URSS, pues no se hacía ninguna ilusión sobre la popularidad de su política.

En cambio, Mao, tenía la certidumbre de que las comunas correspondían a las necesidades y a los deseos de las

masas y expresó esta convicción en unas pocas palabras célebres: «Entre las características de la China de 600 millones de habitantes, lo que llama la atención es la pobreza y la indigencia. Cosas malas en apariencia, buenas en realidad. La pobreza empuja al cambio, a la acción, a la revolución. Sobre un papel en blanco, todo es posible: se puede escribir y dibujar todo lo más bello y lo más nuevo».³

A partir de ese momento la formación del hombre nuevo y la introducción de las costumbres comunistas en toda la sociedad adquirieron la prioridad absoluta. Mao confiaba también en la capacidad productiva de las masas entusiasmadas por las comunas y eso explica su sorprendente optimismo en lo que se refiere a los milagros del Gran Salto hacia adelante. Sus esperanzas no se cumplieron pero los sinsabores económicos de los años siguientes no conmovieron jamás su certidumbre de haber escogido la línea justa.

Para él, el aumento de la producción no era el objetivo principal: era solamente el «beneficio suplementario» de su política.

Las tres divisas del Partido: ¡Viva la «línea general»! ¡Vivan las comunas populares! ¡Viva el Gran salto adelante! sobrevivieron, pues, aún

³ *Presentación de una cooperativa*, 15 de abril, 1958.

después del suavizamiento de los métodos de gestión económica y el abandono de los objetivos de producción fijados en 1958. Estas tres consignas vueltas a pintar todos los años en letras rojas adornan todavía los muros de las ciudades y de los pueblos chinos. La «línea general» maoísta, no ra variado oficialmente desde 1958. La «irracionalidad» de los chinos está contenida —si nos fiamos de los criterios occidentales de eficiencia económica— en esta creencia de Mao en la posibilidad de modelar inmediatamente al hombre socialista y de establecer proyectos económicos en función de esta prioridad. Pero Mao no escogió esta línea, como algunos lo pretenden hoy, en contra de la opinión de sus «camaradas administradores y tecnócratas». Fue adoptada sin dificultad, al principio, por un grupo dirigente formado en la misma escuela que Mao e impregnado de sus mismas ideas. Estos hombres estaban habituados a expresarse libremente ante él y no habían sido aterrorizados por purgas sangrientas al estilo staliniano. La ausencia de desacuerdo profundo respecto a la línea de 1958 prueba, por sí misma, que los dirigentes chinos se habían forjado, en el transcurso de la larga lucha que habían llevado a cabo juntos, una visión común del mundo y, sobre todo, de su sociedad. Había sido Mao quien mejor lo había expresado porque era él quien tenía los mayores dones de

teórico y las mayores cualidades de conductor de hombres, pero nadie discutía sus análisis que eran producto de una herencia ideológica común. Liu Shao Chi había sido, por otra parte, el primero en proclamar en el VII Congreso del P.C. de China, en Yenan, en 1945, que el «pensamiento del Presidente Mao debe guiar a nuestro Partido». Al decidir, en 1958, encaminar a China por una vía inexplorada y llena de riesgos, los dirigentes chinos reforzaban aún más los lazos que los unían, en una misma fidelidad, a la doctrina de Mao. De etapa en etapa, para superar las dificultades y responder al reto soviético, estaban obligados a buscar soluciones para una multitud de problemas prácticos, pero cualesquiera que fuesen sus divergencias de puntos de vista sobre las medidas a tomar, su opción fundamental y sus instrumentos de análisis les eran comunes. Para ninguno de ellos fue cuestión jamás preconizar un retroceso radical para conformarse a la línea soviética, que se volvía cada vez más ajena a sus convicciones ideológicas esenciales.

La revolución cultural provocó una ruptura en el seno del grupo dirigente chino por razones que no tienen nada que ver con el debate que desgarraba el movimiento comunista internacional. Los soviéticos jamás encontraron un sólo responsable chino para

hablar de Moscú, en contra de «Mao y su grupo», aunque su propaganda trate de hacer creer que la mayoría de los comunistas chinos es antimaoísta. Tampoco ha habido ningún comunista chino que haya buscado refugio en Occidente para testimoniar en favor de sus amigos separados de los cargos. Ningún grupo de guardias rojos o de «rebeldes revolucionarios» se ha aprovechado de la libertad de expresión durante la revolución cultural para pegar afiches contra Mao. Por fuerza debemos constatar pues, que un comunista chino consideraría una ruptura con «el pensamiento de Mao» como la negación de toda su vida pasada y de todas sus convicciones. Para él, no ser ya maoísta, sería no ser ya comunista, no ser ya revolucionario, no ser ya un buen chino. El hecho de que nadie haya renegado a Mao con motivo de la revolución cultural prueba, mal que le plazca a gran prensa, que todos los comunistas chinos son maoístas.

La pertenencia a una misma familia espiritual no es una garantía de unanimidad en todas las circunstancias. Los comunistas chinos han sabido de dramas y de conflictos internos mucho antes de la revolución cultural. Después del primer año del Gran salto hacia adelante, por ejemplo, ciertas dificultades provocaron un debate agitado en el transcurso de la sesión del Comité central que se ce-

lebró en Lushan en el mes de agosto de 1959. Actualmente la prensa china habla mucho de esto, con ocho años de retraso, para estigmatizar la actitud del mariscal Peng Teh Huai, quien se ha convertido en el símbolo de la «línea revisionista».

Peng Teh Huai, uno de los veteranos del Partido, prestigioso comandante del ejército y ministro de Defensa, le había dirigido una carta a Mao Tse Tung el 14 de julio de 1959, en la cual describía la situación en China «bajo los colores más sombríos». No conocemos el contenido de esta carta, pero una cita publicada recientemente da una idea del pesimismo del mariscal: «Si los obreros y los campesinos chinos no fuesen lo bueno que son, hace tiempo que hechos comparables a los que ocurrieron en Hungría hubiesen estallado y que nos hubiésemos visto obligados a apelar a las tropas soviéticas». Si creemos las revelaciones actuales, publicadas u orales, Peng Teh Huai consideraba peligroso distribuirle armas a las milicias y confiarle a cada comuna popular la responsabilidad de su pequeña «fuerza militar». Según él, había que darse prisa en formar un ejército bien estructurado y muy móvil, capaz de intervenir a tiempo para reprimir eventuales revueltas. Requería igualmente que el ejército chino fuese dotado de equipos estratégicos y que se fortificasen las fronteras

para impedirle a los enemigos de China aprovecharse de sus dificultades interiores.

Peng Teh Huai no presentaba su candidatura a la presidencia del Partido ni tampoco aspiraba a suplantar a Mao. Sus reivindicaciones se limitaban, en principio, al sector militar y nada prueba que en su carta haya puesto en tela de juicio el conjunto de la política del Partido. No obstante, es evidente que las soluciones preconizadas por Peng Teh Huai eran incompatibles con la estrategia social del maoísmo. Para Mao, el ejército ha sido siempre un instrumento político esencial, una encarnación ejemplar del espíritu proletario, destinado en gran parte a desempeñar el papel que los teóricos del marxismo asignan a la clase obrera. Encerrar a los militares en los cuarteles en lugar de hacerlos trabajar entre las masas y propagar el nuevo modo de vida, hubiese sido despedirse de la mayoría de las grandes aspiraciones formuladas en «línea general».

Por tanto, el Comité central rechazó categóricamente el postulado de Peng Teh Huai y le retiró su cargo de ministro de Defensa para confiárselo a Lin Piao, partidario convencido de la idea maoísta del ejército popular. La resolución final con respecto a Peng Teh Huai fue muy dura, injuriosa, tratándolo de oportunista de derecha, de representante de la bur-

guesía y acusándolo de haber luchado antaño con valor con la esperanza egoísta de sacar dividendos después de la victoria. Pero terminaba con un pasaje inesperado: «el Comité central estima que el Partido debe continuar adoptando hacia Peng Teh Huai una actitud benevolente con el fin de ayudarlo a reconocer y corregir sus errores... Podrá conservar su título de miembro del Buró político». Actualmente, se hace creer que esta mansedumbre fue debida a las maniobras entre bastidores de Liu Shao Chi. Real o ficticia, esta intervención no pudo salvar por mucho tiempo al infortunado mariscal: prácticamente no desempeñó ningún otro papel en la vida política o militar de China y, tres años más tarde, fue privado —siempre en secreto— de su título de miembro del Buró político.

Si nos hemos detenido en este episodio es porque, desde la sesión de Lushan, la politización del ejército chino se ha ido acentuando. Aunque desempeñó un papel, aparentemente insignificante, en la arena política, Lin Piao preparó cuidadosamente este instrumento eficaz que ha resultado el Ejército popular en el curso de la revolución cultural. Es este Ejército quien tuvo el honor de recibir el primer librito rojo de citas del Presidente Mao, ya en 1964, cuando aún era ignorado del público en general. Fue en su seno donde los co-

munistas chinos hicieron, primero, una especie de experiencia de laboratorio para darse cuenta de cuáles eran las posibilidades de establecer un amplio debate en la base. Es a éste a quien, desde el comienzo de la revolución cultural, los maoístas confiaron la gestión de sectores de la economía muy importantes, gracias a lo cual los remolinos de los dos últimos años no han tenido repercusiones muy graves para la producción.

Otro episodio significativo tuvo lugar en 1960 cuando Jruschov les dirigió un verdadero ultimátum a los maoístas, amenazando con retirar sus expertos y suspender su ayuda a China si ésta no se alineaba a la estrategia política internacional de la URSS. Se sabe que los chinos no cedieron y que las represalias soviéticas causaron daños incalculables a su economía. La prensa aporta pocas revelaciones sobre los debates suscitados por este tema en la cumbre del Partido, y no acusa a nadie de haber aconsejado la capitulación. No obstante, en el mes de setiembre se publicó una breve directiva que Mao Tse Tung había dirigido en ese momento a los líderes del Partido:⁴

«El Presidente Mao, personalmente, ha pasado balance a las experiencias obtenidas en el transcurso del Gran salto hacia adelante y ha formulado la célebre Carta del combinado siderúrgico de Anchan opuesta a la Carta

del combinado siderúrgico de Magnitogorsk hecha por los revisionistas soviéticos. Estableció así cinco principios fundamentales: Persistir en situar la política en el puesto de mando; reforzar la dirección del Partido; desatar un gran movimiento de masas; instituir el sistema según el cual los cuadros principales participen en el trabajo productivo y los obreros en la gestión; revisar las reglas y reglamentos obsoletos y establecer una estrecha colaboración entre los cuadros, los obreros y los técnicos para llevar a cabo vigorosamente la revolución técnica».

Esta directiva reflejaba, sin duda, el mal humor de Mao que, habiendo comprobado en su balance, el regreso a ciertos métodos tradicionales de aliento material para estimular a los trabajadores, reafirmaba el principio que le era más caro: «Persistir en situar la política en el puesto de mando». A pesar de las enormes dificultades económicas, no estaba dispuesto a renunciar a las prioridades del Gran salto y aconsejaba soluciones izquierdistas: recurrir a los movimientos de masas y a una más amplia participación obrera en la gestión. Esas consignas no eran fácilmente aplicables en períodos de crisis y todo lleva a creer que en el curso de la discusión sus camaradas lograron con-

⁴ Ver *Pekín Informa*, No. 37, 11 de setiembre de 1967.

vencerlo de que había que esperar una hora más propicia para desatar el movimiento que él deseaba.

Hoy se nos revela simplemente que los dirigentes «revisionistas» se aprovecharon de los «tres años difíciles» para hacer concesiones a las tendencias capitalistas en todos los sectores de la vida económica. Por ejemplo, autorizaron a los campesinos para que cultivasen parcelas individuales y restableciesen los mercados libres para productos agrícolas no racionados. Su obsesión por la producción fue tal que Teng Hsiao Ping, secretario general del Partido y en estos momentos principal acusado con Liu Shao Chi, dijo con todas sus letras: «Mientras se pueda aumentar la producción se puede emprender hasta la explotación individual; que un gato sea blanco o negro, poco importa, mientras cace ratones, es un buen gato».

Estas palabras son citadas, evidentemente, como prueba de su preferencia por «la vía capitalista» y de su despreocupación, si no de su hostilidad, hacia la política social en el campo. Pero si recordamos la situación trágica del país, que estaba casi al borde del hambre se puede ver en las concesiones «revisionistas» de Liu Shao Chi y de Teng Hsiao Ping, simples medidas de urgencia justificadas por la persistencia del instinto de pequeño propietario en una parte del campesinado chino. Los discursos

incriminados hoy no son suficientes para probar que los «desviacionistas» se resignaban de una vez y para siempre ante este estado de cosas y que no contemplaban luchar por transformar la mentalidad campesina.

Evidentemente, tan pronto se estabilizó la situación, la X sesión del Comité central del P.C. de China decidió, en 1962, lanzar un «movimiento de educación socialista» a escala nacional, con el fin de situar, más que nunca, «la política en el puesto de mando». En la resolución adoptada en esta sesión, se preconiza «una réplica, de la misma medida, contra las fuerzas capitalistas y feudales que lanzaron ofensivas violentas contra nosotros». En otras palabras, el Partido manifestaba que no se resignaba, de ningún modo, a tolerar las manifestaciones del «antiguo espíritu individualista y egoísta» en ningún caso.

Los comunistas chinos no reconocen la imagen de su futuro en el espejo de la sociedad soviética. Siempre aspiraron, a seguir una vía original, aunque sólo fuese para evitar los errores del período staliniano, que atribuían a las condiciones históricas particulares de la sociedad rusa. Pero no ignoraban, por eso, las similitudes entre su experiencia y la de los soviéticos. La evolución de la URSS después de la muerte de Stalin era, para ellos, un drama, y no sólo porque compli-

case singularmente las relaciones entre los dos estados. Viendo el comportamiento, a sus ojos escandaloso, de los herederos de Stalin, y la despolitización de la nueva generación rusa, estaban aterrizados por la idea de que los mismos fenómenos pudiesen producirse un día entre ellos bajo una forma u otra.

Los maoístas han tenido siempre dificultad para analizar el fenómeno burocrático dentro de las sociedades postrevolucionarias. Fue sólo durante la revolución cultural cuando desarrollaron la tesis según la cual Jruschov había podido usurpar el poder en la URSS porque el Partido otorgaba demasiado poder a sus dirigentes supremos y les permitía obligar a los militantes a ejecutar dócilmente cualquier política. Pero en 1962 no se hablaba todavía del peligro mortal que representaría para la revolución un «Jruschov chino», y se preocupaban sobre todo de la situación en la base del Partido.

Los dirigentes del P.C. chino sabían muy bien que el número de sus afiliados había aumentado en proporciones fantásticas: de 1 200 000 al finalizar la guerra antijaponesa, pasó a 17 millones en 1957 y probablemente a 20 millones en 1962. La mayoría de los militantes había sido reclutada, por lo tanto, en la época en que ya no había riesgos pero sí muchas ventajas en el hecho de ser comunista.

Tenían pues, buenas razones para sospechar de la sinceridad y la calidad de esos nuevos afiliados y no vacilaban en afirmar, en la resolución del Comité central en 1962, que «ciertos elementos antisociales han logrado infiltrarse en los órganos de dirección de las comunas, de los municipios, de los distritos, de los departamentos, e incluso a nivel provincial o central». Ahora bien, para los comunistas chinos, en su sociedad nada puede ser realizado si sus militantes no dan ejemplo de conducta desinteresada. El verdadero comunista —había dicho siempre Mao— es el que pone siempre sobre sus hombros el fardo más pesado, el que está desprovisto de todo egoísmo y consagra su vida entera al servicio del pueblo. Porque supo crear un Partido animado en ese espíritu, fue capaz de movilizar a las masas campesinas en la guerra antijaponesa y sacarlas de su resignación secular. Esta victoria probaba, en su opinión, cuánta razón tenían los fundadores de la civilización china al afirmar que «el hombre nace bueno» y que siempre es posible enseñarle a conducirse virtuosamente, a condición de que la élite gobernante sea un ejemplo vivo de esas virtudes. Pero para Mao la fundación de la República popular china no era un fin en sí mismo: era, simplemente, el comienzo de una «larga marcha» hacia el socialismo, y se empeñaba más que nunca en el mantenimiento

de un alto valor moral en los miembros del Partido.

Lo que, según él, debía caracterizar a la nueva élite comunista, era ante todo la ausencia de espíritu de élite. Los comunistas debían demostrar cada día que eran incorruptibles, y que no trataban de aprovechar su poder para lograr ventajas materiales. El «movimiento de educación socialista» implicaba exigencias extremadamente severas respecto a los cuadros, invitados a participar en los trabajos productivos y a vivir al mismo nivel de las masas. En toda China, los dirigentes locales o provinciales que encontré se jactaban ante mí de su trabajo periódico en las comunas o en las empresas industriales. Los directores de fábricas no dejaban jamás de llevarme a los talleres en los que, un día y medio cada semana, trabajaban como simples obreros. E incluso los intelectuales hablaban con orgullo de sus largas permanencias en las comunas populares.

Todo esto estaba acompañado, evidentemente, de una intensa propaganda en pro de una conducta colectivistas y contra las viejas costumbres originadas en la cultura antigua. La necesidad de ser «rojo y experto» —rojo con prioridad a experto— se subrayaba con tanto énfasis que tuve la impresión de que ningún estudiante egresado de una facultad tecnológica china podría encarar con tran-

quilidad la perspectiva de una carrera puramente tecnocrática. La política dominada toda la vida, en cualquier sector que fuese.

Pero en todo eso había, hay que decirlo, un cierto olor a paternalismo. Porque todos esos cuadros y directores, luego de haber hecho sus ejercicios manuales entre las masas, regresaban solos a su oficina para tomar decisiones de las que no rendían cuenta más que a sus superiores, y no a la base; estaba claro, para mí, que los funcionarios chinos vivían más modestamente que los de otros países comunistas, pero era igualmente evidente que los comités de trabajadores en las fábricas, o las asambleas de campesinos en las comunas, desempeñaban un papel puramente figurativo. De acuerdo al espíritu de sus instituciones, los miembros del Partido seguían detentando solos el poder en China, y los métodos igualitarios preconizados por el «movimiento de educación socialista» les garantizaban, simplemente, una conciencia tranquila en el ejercicio de sus funciones.

Es cierto que la intensa campaña por una conducta igualitaria no dejaba de surtir efecto en el país. Arraigó, seguramente, en los trabajadores chinos, sobre todo en los jóvenes, despertando su exigencia respecto a los cuadros. E igualmente suscitó el deseo de una participación real en la ges-

tión del país, porque si era necesario trabajar en nombre de la política, también lo era que ésta no fuese una palabra carente de sentido. Las ideas no pueden surtir efecto movilizador si no cuando corresponden a una realidad vivida y están confirmadas por la práctica.

Sin el «movimiento de educación socialista» no habrían surgido en China esos millones de jóvenes entusiastas que, durante la revolución cultural, ostentaban el brazalete de «guardias rojos», integraban comités de «rebeldes revolucionarios», y trataban de «revisionistas», sin ningún respeto por sus funciones o sus méritos pasados, hasta a los dirigentes que ocupaban cargos muy altos. Pero esa explosión demostró con gran elocuencia que algunos cuadros comunistas no se habían conducido en el pasado de modo ejemplar y desinteresado, y que no gozaban de la confianza de las masas.

Los trabajos manuales y demás ritos y costumbres maoístas no eran más que paliativos que no alcanzaban a suprimir la contradicción fundamental entre la aspiración igualitaria y popular del régimen, por una parte, y la existencia de instituciones que conferían poderes ilimitados a una burocracia incontrolada, por otra.

Todos los dirigentes chinos sabían que la revolución cultural sería la

culminación del «movimiento de educación socialista», aunque pocos entre ellos hubieran podido prever qué forma y qué amplitud tomaría esta futura «crítica de la base». Sabemos hoy que durante una sesión informal del Comité central, que tuvo lugar en 1964, se adoptó el principio de una amplia discusión nacional e incluso se designó una comisión compuesta de cinco miembros y presidida por el alcalde de Pekín, Peng Cheng, para prepararla.

De común acuerdo, se decidió que las universidades serían campo de una primera prueba. Esto es comprensible, y no sólo porque los estudiantes chinos se hayan destacado desde comienzos de siglo en la palestra política.

Para los maoístas, la ética colectivista que propagaban en China representaba un concentrado teórico de las aspiraciones confusas de los «chinos pobres». Los oprimidos de ayer, las víctimas del antiguo régimen, eran por lo tanto los más aptos para asimilarla y conducirse virtuosamente. Los otros, beneficiarios del antiguo régimen y marcados por la cultura antigua, representaban un material humano menos propicio a la educación socialista. En principio, nadie estaba excluido o condenado de antemano, pero Mao mismo señalaba que cuando se trata de capas no proletarias, la «reeducación ideológica» es

un asunto a largo plazo, que hay que llevar a cabo paciente y minuciosamente. No hay que esperar que algunas lecciones, o algunas reuniones, puedan cambiar una ideología formada en el curso de toda una vida.

Hubiese sido lógico, en esas condiciones, que los antiguos proletarios ocupasen todos los cargos en los sectores vitales para la ideología. Pero en la práctica, la necesidad de desarrollar la educación en todos los grados obligó a los maoístas a confiar la responsabilidad de la enseñanza a intelectuales formados durante la época burguesa, y por lo tanto poco dotados para una conducta proletaria. Esperaban, es verdad, el rápido advenimiento de un relevo intelectual proletario surgido de hijos de obreros y campesinos, y favorecían por todos los medios sus estudios, pero el resultado se revelaba decepcionante: los estudiantes de origen burgués eran siempre los mejores en las universidades e institutos de segunda enseñanza. Esta situación pareció inaceptable a los comunistas. Sospechaban que los profesores, surgidos de la clase burguesa, favorecían a los alumnos del mismo origen, y se interrogaban sobre la naturaleza misma de esa enseñanza, más accesible a los hijos de los antiguos privilegiados que a los proletarios.

La reforma de la enseñanza, por lo tanto, estaba en el orden del día, y

para ubicar mejor la fuente del mal, los dirigentes estaban dispuestos a solicitar la participación de los estudiantes en el debate. Finalmente, en el mes de febrero de 1966, Peng Cheng y su comisión presentaron un informe sobre el tema de la revolución cultural. Este jamás fue publicado, e incluso no se sabe con certeza quiénes integraban esa comisión. Se supone que fueran Lou Tung Yi, director de propaganda del P.C.; Lo Jui Ching, jefe del Estado mayor del ejército, y el mariscal Ho Lung, ministro de juventud y deportes, porque todos, al igual que Peng Cheng, fueron destituidos posteriormente. En cambio, sabemos con exactitud que el quinto miembro de la comisión, Kang Cheng, miembro suplente del Buró político, planteó divergencias con sus colegas y consiguió la anulación de su informe. El 16 de mayo de 1966, el Comité central envió a todas las organizaciones del P.C. una circular que reflejaba los puntos de vista de Kang Cheng y condenaba los de los otros miembros de la comisión.

En cualquier partido político un miembro minoritario de una comisión sólo puede obtener la condena de la mayoría con ayuda de las instancias superiores o después de una discusión ante un forum más amplio. Ahora bien, durante el período de prueba de la fuerza de ambas tenden-

cias rivales no hubo ninguna sesión del Comité central; por lo tanto, es evidente que el aparato central, probablemente a petición de Mao Tse-tung, falló en favor de Kang Cheng. Esto no es una comprobación de detalle, ya que lo que estaba en juego era primordial para el futuro de la revolución cultural. Peng Cheng, dicen sus acusadores, quería que ésta fuese una nueva campaña de las Cien Flores estrechamente controlada por el Partido. Para Kang Cheng, en cambio, ésta debía permitir a los estudiantes proletarios expresar sus críticas de izquierda, contra todos aquellos, inclusive los comunistas, que impedían la difusión real del «pensamiento del presidente Mao». Para el primero, la revolución cultural no debía juzgar a las autoridades e instituciones universitarias; el segundo, por el contrario, las calificaba de reaccionarias y caducas desde el comienzo.

Al dar la razón a Kang Cheng, el aparato central —y por lo tanto Liu Shao Chi y Teng Hsiao Ping en primer lugar— aceptaba abrir el camino hacia una crítica radical en las universidades, y estaba dispuesto a sacrificar a cierto número de comunistas demasiado impopulares entre los estudiantes. Peng Cheng defendió con aspereza su punto de vista —lo que es comprensible— y, de creer en los afiches de los guardias rojos,

habría intentado incluso un golpe de estado, lo que parece sumamente dudoso. En todo caso, este primer episodio de la revolución cultural ha demostrado ya la violencia poco habitual y la pasión en las discusiones en la cumbre del Partido.

Visiblemente, todos los dirigentes chinos presentían que estaban entablado un proceso mucho más profundo y peligroso para el Partido de lo que habían sido sus campañas precedentes. Porque esta vez aceptaban, desde el comienzo, una participación real de la base en las discusiones.

La destitución de Peng Cheng fue conocida en Pekín desde el 17 de mayo de 1966. En las universidades, donde la agitación estaba latente desde hacía ya varias semanas, los estudiantes comprendieron de inmediato que debían hacer algo. Evidentemente, ya no se observaban las reglas de juego del Partido, puesto que de pronto era permitido manifestarse por las calles contra un hombre, miembro del Buró político y alcalde de la capital, que sin embargo no estaba acusado oficialmente ni denunciado en la prensa. En el mismo momento los periódicos se encarnizaban contra ciertos intelectuales que, con escritos alusivos, habrían manifestado una «oposición de derecha» a Mao Tse-tung, y esta campaña arrojaba sospechas sobre la moralidad y las intenciones de todos los educadores, si no

de todos los intelectuales. La división en la cumbre del Partido debió provocar seguramente —lo decimos sin pruebas formales —una actividad de los partidarios de diversas tendencias en los medios estudiantiles. Los hombres de Kan Cheng explicaban sin duda sus puntos de vista a quienes quisieran oírlos, e incitaban a la acción. El 25 de mayo de 1966, ocho estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Pekín colocaron su *ta-tsé-bao* (periódico escrito en gruesos caracteres en señal de cólera) para atacar en él al rector y proclamar sobre todo: «Ustedes quieren mantenerse firmes en sus puestos para sabotear la revolución cultural. Debemos decirles que una mantis no tiene más posibilidades de detener la rueda de una máquina que las hormigas de derribar un árbol gigante. ¡Sueñen despiertos! ¡Intelectuales revolucionarios, ha llegado la hora de la lucha!... ¡Quebrems todas las tutelas y barramos con resolución a todos los elementos desnaturalizados y malhechores, así como a todos los revisionistas contrarrevolucionarios de corte jruschoviano!». El aparato del Partido no pudo permanecer inactivo ante esta aparente rebelión de los estudiantes. Envió a las universidades «equipos de trabajo» encargados de hacer una especie de depuración y encabezar el movimiento estudiantil. Desde su llegada, esos equipos destuyeron a la mayoría de los responsa-

bles y organizaron singulares exámenes políticos para todos los miembros del Partido. Los comunistas eran encerrados en las aulas para estudiar sin descanso las obras del presidente Mao y no podían volver a sus casas sino con el permiso de los nuevos dueños del lugar. Todos estaban obligados a hacer su autocritica y era necesario que ésta fuese aceptada para que pudiesen alejarse de sus camaradas, prisioneros allí con los volúmenes del presidente Mao.

Se estableció en Pekín un extraño clima de inseguridad. Nadie sabía con exactitud lo que pasaba en las universidades, ni qué sentido tenía esa depuración, pero cada uno presentía que la alta dirigencia del Partido había decidido algo poco habitual, y que incluso los cambios más dolorosos estaban a la orden del día.

Más tarde, los guardias rojos, y después de ellos la prensa oficial, acusaron a Liu Shao Chi de haber creado deliberadamente esta atmósfera de «terror blanco», con el fin de «golpear a muchos para proteger a un puñado de malos dirigentes». Liu Shao Chi era sin duda el responsable del envío de los «equipos de trabajo» a las universidades; pero es probable que quisiera afirmar así la autoridad del centro y dirigir el arma de la depuración —que desde entonces pareció inevitable— hacia los niveles inferiores del Partido.

Mao se pronunció contra este método. Volvió a fines de julio de 1966 a Pekín, exigió el retiro inmediato de los «equipos de trabajo» y convocó a una sesión extraordinaria del Comité central. En algunos meses se habían superado dos etapas en la escalada de la revolución cultural. La primera había abierto una amplia discusión en los medios estudiantiles; la segunda terminaba con la supresión de los «equipos de trabajo»; único instrumento en manos del aparato central del P.C. para dirigir y controlar el debate comenzado.

La prensa china publicó toneladas de comentarios y muy pocos hechos concretos respecto a la XI sesión del Comité central, que fue decisiva para el desarrollo de la revolución cultural y duró casi dos semanas. Es fácil percibir que la jerarquía del P.C. fue transformada en el curso de esta reunión, porque ciertos dirigentes recibieron títulos muy importantes que antes no tenían, en tanto que otros fueron relegados a cargos secundarios. Pero incluso sobre este tema no se publicó ninguna resolución aclaratoria.

El presidente Mao —nos revela, sin embargo, la prensa china— abrió la sesión del 1.º de agosto de 1966 colgando en la sala del Comité Central su cartel manuscrito titulado: «¡Fuego al cuartel general!» En pocas palabras expresaba en él su admiración

por los jóvenes rebeldes que se distinguían en las universidades desde hacía cincuenta días, y su desaprobación por quienes habían intentado ahogar sus voces. Añadía que esa mala acción no debía al azar, sino que debía relacionarse con las desviaciones manifestadas en el curso de los años anteriores; todo eso probaba que un grupo de burgueses disfrazados de comunistas se había instalado en el corazón mismo del aparato central del Partido.

Los comentarios oficiales añaden, en estos tiempos, —con más de un año de retraso— que este afiche se dirigía sobre todo a Liu Shao Chi. Para Mao Tse-tung, ya estaba claro que era éste el candidato al papel de «Jruschov chino», futuro usurpador revisionista del poder en China: «Durante la larga lucha contra el más alto responsable —de los que seguían la vía capitalista— el presidente Mao descubrió la naturaleza ambiciosa de aquél, y se dio cuenta de que representaba el mal latente y el mayor peligro para nuestro Partido».

Pero si ya estaba convencido, ¿por qué no pidió al Comité central que eliminara inmediatamente a ese peligroso personaje? Porque, responde la prensa china, «según la línea revolucionaria del presidente Mao, para destruir el cuartel general de la burguesía hay que movilizar ampliamente a las masas y no tomar medidas purá-

mente de organización destituyendo responsables de arriba a abajo».

Pero esta explicación tardía resulta muy poco convincente. Cuando se desea movilizar a las masas contra alguien, se le indica generalmente de quién se trata y cuáles son sus crímenes. Ahora bien, Liu Shao Chi, aunque retrógrado, siguió siendo uno de los dirigentes más importantes del país y participó, al lado de Mao Tse-tung, en múltiples manifestaciones públicas de los «guardias rojos», en la Plaza de Tien An Menh que tuvieron lugar durante el otoño de 1966. ¿Cómo creer que las masas podían descubrir por sí solas la figura de un enemigo en la persona de un hombre que se mantenía entre los compañeros más cercanos del presidente Mao? ¿Cómo explicar además que ese adversario firmaba personalmente llamamientos del Comité central que invitaban al pueblo a la lucha contra «los responsables que seguían la vía capitalista», es decir, contra sí mismo y sus amigos? Agreguemos a esto que los mismos periódicos que pretenden que la suerte de Liu Shao Chi fue sellada durante la XI Sesión del Comité central escriben también que «los desviacionistas burgueses y los revisionistas se *desenmascararon* durante las grandes batallas de la revolución cultural», es decir, mucho tiempo antes de la fatídica reunión de agosto de 1966.

Estas incoherencias de la versión oficial nos hacen pensar que el debate en el Comité central fue menos personalizado y versó más sobre el problema fundamental: ¿Qué papel debe jugar el Partido en la revolución cultural y qué estructuras debe adoptar al terminar ésta? Sobre esta cuestión pugnan los dirigentes chinos desde hace ya muchos meses, y nos parece lógico que continuaran su discusión durante las dos semanas de sesión plenaria del Comité central.

Mao Tse-tung intervino en dos ocasiones, en mayo y en julio de 1966, en favor de la «izquierda» que preconizaba una amplia autonomía para los jóvenes rebeldes de la base. Incluso criticó al aparato central por sus desacertados intentos de obstaculizar la expresión crítica de sus futuros guardias rojos. Descaba pues que el movimiento en la base se ampliara y, en este aspecto, no tuvo probablemente dificultades en lograr la mayoría, sino la unanimidad de sus camaradas. Pero ¿cuál debía ser la actitud de los miembros del Partido ante ese movimiento? ¿Debían actuar colectivamente, luego de consultas previas, en las células o en las secciones? ¿Debían ejecutar las directivas de arriba que el centro del Partido seguiría suministrándole a medida que se desarrollasen los acontecimientos?

La respuesta de Mao a todas estas cuestiones era negativa. Pidió al centro del Partido que se mantuviese al margen e hizo nombrar un «Grupo central de la revolución cultural» presidido por un teórico, Chen Po Ta y compuesto de viejos comunistas que, exceptuando a Kang Chen, nunca trabajaron en el aparato central del P.C. pero aún se suponía que este grupo diera sólo orientaciones generales y no dirigiera una acción diaria de los guardias rojos. En cuanto a los militantes de la base, debían sumarse al movimiento por su cuenta, incorporándose al grupo de su elección ya que, según Mao, esta prueba era la mejor escuela política para ellos y el mejor medio de verificar su fervor revolucionario.

El Partido es un instrumento insustituible de la revolución —ha dicho Mao en mil ocasiones— y es con citas sobre este tema que comienza el famoso Librito rojo. En el curso de la revolución cultural, los manifestantes no han dejado de cantar: «La tierra es grande y los océanos profundos, pero el Partido es mayor que la tierra y más profundo que el océano». Mao Tse-tung jamás ha podido preconizar, por tanto, la destrucción del P.C. de China. No obstante, pidió a la XI Sesión del Comité central que su aparato, en el cual ya no confiaba, cesase virtualmente en sus funciones y se manifestase lo menos posi-

ble. Nada indica que haya propuesto una reforma de las estructuras del P.C. ni una amplia depuración en la base; por el contrario, se le atribuyen algunas indicaciones sobre la posibilidad de recuperar el 95% de los antiguos cuadros.

Es cierto que habría que tener la autoridad y la audacia de Mao para hacerle al Comité central, compuesto en su mayoría de hombres del aparato, una proposición que, para ellos, equivalía a un suicidio. En teoría, todos creían en la sabiduría de las masas proletarias y en sus discursos se encontrarán tantas citas como en los de Mao, sobre la necesidad de practicar la «línea de masas». Pero, en la práctica, tenían todas las razones para desconfiar de la minoría de jóvenes puristas, ya agrupados como guardias rojos, que excitaban la cólera popular contra ellos porque eran, necesariamente responsables de todas las anomalías del viejo sistema. Ahora bien, la multitud, impulsada por los jóvenes «fabiosos», está rara vez dispuesta a escuchar explicaciones sobre las razones profundas de ciertas decisiones tomadas y sobre las desviaciones inevitables entre lo absoluto doctrinal y las realizaciones diarias.

Hubo, pues, una cruda batalla en el Comité central y un día, cuando se publicaran los informes completos, podremos saber, con certeza, cuál era la posición de Liu Shao Chi, de Teng

Hsiao Ping y la del resto de los futuros destituidos durante esos debates. Supongo que en su fuero interno pujaba su confianza en el instinto político de Mao Tse-tung y su incertidumbre respecto a las soluciones radicales que preconizaba. Ningún dirigente de importancia fue cesanteado durante la sesión de agosto de 1966, aparte de los tres miembros de la Comisión Peng Cheng (bautizada por la prensa como «grupo de mayo del 66»).

En la resolución final, se introdujo además una cláusula que prohibía a la prensa atacar, por su nombre, a los miembros del Comité central. Eran visiblemente las precauciones finales antes que todos fuesen sometidos al veredicto de la base.

El aparato de un Partido de veinte millones de miembros y que detenta todos los cargos de responsabilidad en un inmenso país no puede, evidentemente, cesar por completo en sus funciones de un día para otro. Los vínculos que existen entre sus miembros son demasiado fuertes para romperse de repente, por orden del Comité central. Es más, nadie fue invitado a irse de vacaciones y esperar el curso de los acontecimientos, por el contrario, todos debían participar activamente para probar sus aptitudes revolucionarias. Por ello, me parece normal que las diferentes tendencias latentes dentro del grupo dirigente

chino se hayan manifestado a plenitud durante la revolución cultural, sin que tuviera, sin embargo, deseo alguno de complot contra Mao Tse-tung.

Además, la naturaleza fragmentaria del movimiento de la base favorecía semejantes intervenciones. Ningún grupo de guardias rojos fue formalmente designado como representante del «pensamiento del presidente Mao». Todos pujaban por poner en subasta sus proposiciones revolucionarias, algunas de las cuales eran tan visiblemente irreales que nadie podía aplicarlas. Basta recordar que, gracias a esta acción entusiasta de la base, en agosto de 1966, todas las plazas de Pekín fueron bautizadas «Oriente Rojo» y todas las grandes arterias, avenidas «del antimperialismo» y «del antirevisionismo». Al cabo de dos semanas, nadie sabía su dirección en Pekín y el «Grupo central de la Revolución cultural» se vio obligado a sugerir, discretamente, a los guardias rojos que restituyeran a las avenidas y plazas sus antiguos nombres.

Es más, los jóvenes militantes que llegaban a una fábrica para proponer la supresión inmediata de todas las primas y la equiparación de salarios, por mucho que invocaran las frases del presidente Mao sobre el igualitarismo, recibían como respuesta de los obreros, otras citas en que se reco-

nocía la utilidad de las primas colectivas o que pedían a los trabajadores arreglar por sí mismos sus asuntos. Su controversia se mantenía en el marco de la ortodoxia maoísta y un comunista podía apoyar a unos, o a otros, sin comprometerse y sin que le quedara nada por dentro.

En las administraciones se invitaba a la base a criticar a los antiguos responsables, aunque tenía también la orientación de reconocer quién de ellos era «bueno, relativamente bueno, malo o execrable». Se permitía tener opiniones diferentes, constituir grupos y colocar afiches defendiendo su punto de vista. A fuerza de discutir de esta forma, las divisiones se acentuaban por doquier, al punto que un chofer de taxi, en Shanghai, pudo decirle a un diplomático francés: «Aquí nadie está de acuerdo con nadie».

Durante todo este primer período del gran debate, que duró hasta fines de 1966, los altos dirigentes como Liu Shao Chi eran rara vez atacados por los guardias rojos y nunca por la prensa. Esta se limitaba, además, a ponderar globalmente la actividad de los jóvenes críticos, alentando de esta manera a la fracción más intransigente, pero nunca indicó hasta dónde debía llevarse la batalla.

En enero de 1967 todo cambió con la introducción de la revolución cultural en las empresas industriales. Sólo

entonces la prensa acusó a los «desviacionistas burgueses» de corromper a la clase obrera prometiéndole ganancias materiales y hasta distribuyendo primas a título retrospectivo, con el fin de dominar a los «rebeldes revolucionarios» y de impedir cambios en el personal dirigente y en los métodos de gestión. Este grito de indignación se vio acompañado de la publicación de artículos del presidente Mao contra el «economismo» y contra los estímulos materiales para los trabajadores.

Es difícil determinar si esas acusaciones eran fundadas y si, efectivamente, los antiguos responsables querían volver a gozar de popularidad ante los obreros, distribuyéndoles importantes sumas de dinero. Cabe suponer —sin que tengamos pruebas— que los propios obreros aprovecharon la libertad de elegir sus comités para reclamar igualmente algunas ventajas materiales. En ausencia de orientaciones precisas de arriba, los dirigentes locales tuvieron dificultades para decidir si debían oponerse a esas reivindicaciones de las masas o si, por el contrario, estaría más conforme al «pensamiento del presidente Mao» satisfacerlas.

El Comité central tuvo que hacer un llamado en nombre de Mao Tse-tung instando a los trabajadores de Shanghai a que se reanudara el trabajo y cesara el crimen del «economismo». Días más tarde se creó la Comuna de

Shanghai gracias a la acción conjunta de dieciséis comités «rebeldes revolucionarios», ayudados por cuadros del ejército y por algunos responsables del antiguo aparato del Partido. Era la victoria de la «triple alianza» que la prensa destacó inmediatamente y propuso como modelo de las nuevas instituciones.

Por paradoja, fue precisamente en ese momento en que la revolución cultural pareció entrar en su fase constructiva, que comenzaron los ataques apenas encubiertos contra el «Iruschov chino», Liu Shao Chi. Al parecer hubo una nueva prueba de fuerza en la cumbre, pues incluso el «Grupo central de la Revolución cultural» sufrió modificaciones. Tao Chou, uno de sus más eminentes miembros, encargado de la propaganda, fue eliminado de impreviso y sometido a críticas extremadamente violentas. Hoy algunos chinos nos explican, en privado, que Tao Chou había sido «infiltrado» en la dirección de la revolución cultural por los antiguos dueños del aparato del Partido y que, al «desenmascararlos», las masas habían quitado el último obstáculo que les impedía criticar abiertamente al «Iruschov chino» y a sus cómplices. Me inclino a creer que Liu Shao Chi fue víctima del engranaje inevitable desencadenado por la revolución cultural. Los diferentes responsables criticados, unos por muy indiferentes y alejados de las masas, y otros por co-

ruptores, habían sido nombrados en sus cargos por él. No había ya solidaridad de los comunistas de base que les protegiera y no podían defenderse más que acusando a sus superiores del aparato central. Cabe añadir que, aunque no hiciera nada, Liu Shao Chi, estaba forzosamente bajo la sospecha de haber aconsejado a unos distribuir dinero para ganarse a los obreros y a otros responder, ejemplarmente, a los guardias rojos demasiado exigentes. Porque, ¿quién podía manejar los hilos de todas esas malas acciones?

La «llamarada de cólera» de principios de 1967, contribuyó a cargar aún más la atmósfera interna de China. El enemigo revisionista parecía estar infiltrado en todas partes y las masas vigilantes no podían, en esas condiciones, tener confianza en nadie. Los interrogatorios de los cuadros por los guardias rojos tomaban formas cada vez más desagradables, pese a la orientación, mil veces repetida, del «Grupo central de la Revolución cultural» acerca de la necesidad de «curar la enfermedad en vez de matar al enfermo». Es más, a pesar de la abnegación de los cuadros del ejército, la situación administrativa se hacía cada vez más caótica. Los trenes no tenían horario, en las fábricas las discusiones ocupaban más tiempo que el trabajo productivo, en algunas ciudades había prácticamente una ausencia de poder.

Es entonces que la prensa china pública, a bombo y platillos, un estudio de Mao que data de 1929: «Acerca de la eliminación de las concepciones erróneas en el Partido».⁵ Este texto parecía haber sido escrito la víspera por lo bien que se ajustaba a las circunstancias de febrero de 1967 en China. Mao alertaba a sus camaradas contra el peligro del ultrademocratismo y del ultraigualitarismo y explicaba, de manera muy didáctica, que aún en una sociedad perfectamente fraternal, algunos tienen que dirigir y ocupar los cargos de responsabilidad, sin que se les ponga obstáculos. Recordaba finalmente: «Respecto a la crítica, algunos camaradas no prestan atención a lo que es importante, sin que se aferran sólo a lo insignificante. No comprenden que la crítica tiene como tarea principal poner en evidencia los errores políticos y las faltas de organización. En cuanto a los defectos personales, sino están vinculados a errores políticos o a faltas de organización, no es menester criticarlos muy severamente por temor a dejar a los camaradas desamparados. Por otra parte, si semejante crítica se desarrolla, la atención del Partido se concentrará solamente en cosas pequeñas y se olvidarán las tareas políticas: éste es un gran peligro».

Prevenidos solemnemente por su presidente, los guardias rojos y los «re-

beldes revolucionarios» aflojaron enseguida su influencia sobre los cuadros. Chou En Lai llegó hasta recriminarles sus excesos inútiles y recordó, en un discurso rimbombante, que la mayoría de los cuadros eran «buenos y dignos de reanudar sus funciones al servicio de la revolución». Por consiguiente, podía creerse que la fase crítica había terminado y que el problema de las personas dejaría de ser el centro de los debates. En realidad, la prensa china abrió fuego en ese preciso momento, esta vez sin equívocos, contra Liu Shao Chi.

Ni Mao, ni los demás dirigentes de la revolución cultural, han intentado explicar, en un texto teórico, cuáles eran las fuentes de la burocratización dentro del Partido comunista de China. Abordaban siempre ese problema por las ramas, denunciando la excesiva concentración de poderes en la cumbre del Partido y concluyendo de manera fatalista: (si este estado de cosas no cambia) «pasará algún tiempo, quizás algunos años o un decenio, antes que ocurra, inevitablemente, una restauración contrarrevolucionaria a escala nacional, antes que el Partido marxistaleninista se convierta en revisionista y que toda China cambie de color».

¿Qué habría que hacer para evitar esta aterradora perspectiva? El «Grupo

⁵ Ver «Pekín Informa», No. 6, febrero 6, 1967.

central de la Revolución cultural» dio finalmente su respuesta en la primavera de 1967, pero de nuevo indirectamente, mediante la crítica de un viejo libro de Liu Shao Chi: «Acerca del perfeccionamiento del comunista».

Escrita en plena guerra, en 1942, esta pequeña obra insiste mucho en la disciplina: «El comunista debe acatar todo lo que ha sido aprobado y fijado por la mayoría, por el nivel superior o por el Comité central. Debe acatar incluso lo que considera erróneo... Cuando la verdad está del lado de la minoría y la mayoría sostiene lo que es erróneo, la minoría debe, a pesar de todo, acatar la mayoría... Hay que someterse a la organización, a la mayoría, al nivel superior, de una manera absoluta e incondicional».

Estas frases producen hoy escándalo, desentonan en China, donde se ha dado la palabra a la base y donde la autoridad central está sujeta a la crítica. Es fácil, pues, servirse del libro de Liu Shao Chi para probar que se aprestaba a desempeñar el papel de Jruschov y predicaba a los militantes la obediencia para que no entorpecieran la realización de sus negros designios. ¿Acaso no reeditó en gran tirada, su propia obra en 1962? Pero éste es un proceso fácil porque la obra de Liu Shao Chi no resumía doctrina personal alguna. Es una especie de compendio de un cierto número de concepciones centralistas, que rigen a

todos los partidos comunistas.⁶ Fue escrita en Yenán, en una gruta cercana a la de Mao The-tung y, a todas luces, con su aprobación. Liu Shao Chi fue seleccionado evidentemente como víctima expiatoria de los pecados de organización, y no solamente del Partido comunista de China, sino de todos los partidos de tipo leninista.

A los malos principios de Liu Shao Chi se opone actualmente una frase de Mao Tse-tung: «La cuestión de haber quién tiene razón y quién no la tiene, no podría ser decidida por mayoría de votos, cuando se trata de los principios fundamentales del marxismo-leninismo». Esta es una bella máxima que aboga por la libertad y responsabilidad personal de cada comu-

⁶ En realidad los sinólogos que han tenido oportunidad de leer la primera edición del libro de Liu Shao Chi en el idioma original se han encontrado pasajes que prueban el escepticismo del autor respecto al centralismo democrático: «Democracia y centralismo son dos concepciones contradictorias. Pero esta contradicción en los términos, esta contradicción conceptual, refleja precisamente las contradicciones de la realidad objetiva. Esta se refleja en la estructura contradictoria del Partido. El sistema del centralismo democrático en el seno del Partido, refleja la contradicción entre éste y sus miembros, entre los niveles inferiores y superiores y viceversa».

Pero estos señalamientos, interpretados por el profesor Franz Schurmann como significativos de la inquietud de Liu Shao Chi respecto a la incompatibilidad entre la necesidad de una disciplina dentro del Partido y la necesidad de la iniciativa individual de todos los miembros, no aparecen en las ediciones corrientes del libro y, con mayor razón, no son jamás mencionadas por los críticos actuales de Pekín.

nista. Sin embargo, ¿cómo puede ésta traducirse en términos formales en los estatutos del Partido? No tenemos respuesta aún para esta pregunta clave, aunque se habla mucho actualmente de la convocatoria de un nuevo congreso del Partido comunista de China, que transformaría toda la organización del Partido, desde la base hasta la cumbre. La prensa señala ya que los miembros del Partido serán readmitidos en sus células en el transcurso de reuniones públicas, abiertas a todos los trabajadores, inclusive no comunistas. Esta no precisa aún en qué forma se constituirán las instancias superiores, ni qué garantías se introducirán en los estatutos para asegurar la democracia interna y para resguardar al Partido de los abusos del aparato central. La respuesta a estas preguntas será decisiva para el futuro de la Revolución China, y cualesquiera que sean las reservas que se puedan formular con respecto a las modalidades de ese debate crucial, hay que reconocer los méritos de Mao por haber suscitado por primera vez desde Lenin, el problema del Partido como instrumento al servicio del proletariado.

El Partido comunista de China no pretende presentarse como una formación nueva, original, nacida de la revolución cultural y radicalmente diferente del antiguo «Partido burocratizado».

Sus propagandistas preparan en estos tiempos una tesis, según la cual la «izquierda proletaria», bajo la égida de Mao, habría librado desde siempre una lucha contra los «burocratas revisionistas» de Liu Shao Chi. En estos últimos meses, se supone que la misma haya alcanzado una victoria definitiva y eliminado, de una vez por todas, a los enemigos introducidos en el seno mismo del Partido.

Los cambios estructurales no aparecen ya, como una ruptura con un cierto concepto del Partido, sino como una victoria anhelada desde hace tiempo y preparada cuidadosamente.

El inconveniente de esta versión es doble: primero, hace incomprensible toda la historia del comunismo chino; después presenta a Mao como jefe de una corriente y no como el líder del Partido comunista de China, que sin embargo, preside desde hace ya 33 años. Si los propagandistas de Pekín se conformasen con decirnos que Liu Shao-Chi interpretó mal la doctrina del Partido y le dio un matiz moderado, estaríamos quizás inclinados a creerlos, aunque la reputación del antiguo No. 2 del Partido, no permitió, en modo alguno, descubrir sus tendencias reformistas. Pero no es posible admitir que los dos principales dirigentes del Partido comunista de China hayan convivido en permanente estado de guerra y que hayan estado en desacuerdo en todo. Además al leer

las diferentes acusaciones que hay contra Liu Shao Chi, se advierte que sus «crímenes» de hoy, no son producto de su no ortodoxia durante el pasado, sino que es el cambio de la ortodoxia lo que ha hecho retrospectivamente criminales sus viejas acciones.

De este modo, se nos dice que, en 1946, Liu Shao Chi era partidario de la vía parlamentaria y del combate político y no de la lucha armada. Pero Mao Tse-tung reiteró a André Malraux, en 1965, que si Chiang Kai Shek no lo hubiese atacado, él no habría sido el primero en abrir las hostilidades.

Por otra parte, se recuerda con frecuencia un discurso de Liu Shao Chi dirigido a los capitalistas nacionales en Tientsin, en 1949. Los exhortaba a colaborar con el nuevo régimen y les prometía buenas remuneraciones, aun bajo el socialismo. «Como resultado de esta línea capitulacionista —concluye el Renmin Ribao— un buen número de empresas socialistas de China quedaron legalmente bajo el control de la burguesía. En el centro comercial de Shanghai, más de 170 capitalistas fueron designados en los cargos de directores o de subdirectores de 100 grandes compañías especializadas». Los hechos son indiscutibles, pero el mundo admiró en ese momento la política maoísta respecto a los capitalistas nacionales; pues és-

ta le permitió a la China posevolucionaria utilizar bien todas las capacidades.

Por último, se nos dice que el «Jruschov-chino» preconizaba una línea nefasta para los sindicalistas, porque para él «el trabajo de los sindicatos debía centrarse en la producción» y no en la política. Sin embargo, en todos los países comunistas los sindicatos son precisamente esa subadministración especializada en los problemas de emulación entre los obreros, para aumentar la producción. China introdujo la misma práctica en su territorio después de 1949, y hay que simular una gran ingenuidad para escandalizarse 18 años más tarde.

Los grandes partidos políticos no suelen hacer la autocrítica colectiva, sino que prefieren echar la responsabilidad de sus errores pasados sobre los hombros de algunos dirigentes. Sólo así logran conservar su aureola de sabiduría doctrinal que les permite pregonar su infalibilidad. Los comunistas chinos no han querido reconocer que su pasado estaba plagado de las mismas tentativas reformistas de que acusan ahora a sus adversarios «revisionistas», y que les parecen incompatibles con sus profesiones de fe igualitarias y revolucionarias.

Liu Shao Chi se identificaba más que cualquier otro dirigente con la vieja línea del Partido, porque estaba virtualmente encargado del aparato eje-

cutivo. Fue él también quien respaldó la Constitución de 1954 y desempeñó un papel determinante en la elaboración del cuadro institucional del país. Estaba pues señalado para convertirse en la viva ilustración de todo lo que el Partido considera erróneo, o incluso criminal, en su propia historia. Al invitar a las masas a criticar al «Jruschov chino», Mao busca menos liquidar a un rival político que inculcar a la nueva generación ciertas ideas que impedirán que China «cambie de color».

La revolución cultural no es un ballet bien dirigido por un coreógrafo que ha previsto todos los cuadros. Mao no temió hacer un llamado a la base, porque sabía que su doctrina estaba suficientemente implantada en China, para que nadie pudiese discutir ni el régimen ni el Partido como tales. Los acontecimientos le han dado la razón en este aspecto. Pero la avalancha de cambios desencadenada por la base, ha barrido con más instituciones de lo que cualquiera hubiera imaginado en 1966. La base no se conformó con examinar la calidad de los cuadros y hacer la selección entre los «buenos, regulares, malos y execrables». Una vez puesta en movimiento, se volvió necesariamente contra los métodos de gestión que, a todos los niveles de la sociedad, produjeron anomalías y abusos de autoridad. En las fábricas, ya no era cuestión de sustituir a los directores y a los secreta-

rios del Partido por mejores candidatos: sus funciones estaban desacreditadas como tales. Y un fenómeno análogo se producía en las universidades y en las administraciones, y sin duda, también en algunas comunas, aunque las informaciones sobre este tema sean bastante incompletas. «Las cosas no volverán jamás a ser lo que eran antes» —dicen los estudiantes de Pekín a los invitados extranjeros que visitaron China el verano pasado. Estos son, pues, los acontecimientos que pusieron a la orden del día los problemas de las instituciones y nadie parecía disponer de modelos de sustitución. El «Grupo central de la Revolución cultural» dio preferencias a la fórmula de la «triple alianza», con un tercio de los responsables elegidos directamente por la base y otro tercio seleccionado por ésta entre los viejos cuadros del Partido más experimentados en el manejo de los problemas. El resto debía ser aportado por los cuadros del ejército y no parece que con este último tercio haya habido dificultades.

Pero la multiplicidad de los comités de base y la ausencia de un núcleo unificador, investido formalmente por una autoridad central, han hecho extremadamente difícil la designación de nuevos responsables. El período constructivo de la Revolución cultural probó ser tan agitado como el anterior, e incluso sucedieron, durante el

verano pasado, sangrientos choques en Wuhan. Hasta el presente, sólo 7 provincias de 27 han podido elegir los «comités revolucionarios de la triple alianza», mientras los demás viven todavía en la provisionalidad en medio de discusiones.

Lo mismo ocurre en las municipalidades de las grandes ciudades, que son definitivas en Pekín, Shanghai y Tientsin, y provisionales en todos los demás lugares. A veces se nos ha anunciado la formación de un comité municipal revolucionario en tal o cual ciudad, para admitir, algunos días más tarde, que su autoridad no fue reconocida por la base y que la discusión había recommenzado con mayor intensidad. Porque, en principio, todos esos comités debían tomar por modelo a la Comuna de París, durante la cual, todos los responsables eran electos o revocados en cualquier momento. Además, los dirigentes chinos querían reducir al mínimo el personal administrativo permanente, y aconsejan la elección de trabajadores que deben permanecer en la producción.

En las fábricas, la batalla interna no es menos violenta. En casi todas partes, los comités de base que resurgieron durante la primera fase de la Revolución cultural siguen disputándose los cargos de responsabilidad, pese al reciente llamado del presidente Mao en persona, que considera que no hay

ninguna razón profunda para que exista una división en el seno de la clase obrera. Por el momento, algunas grandes empresas son administradas directamente por comités obreros surgidos de los «rebeldes revolucionarios», es decir, de la minoría más radical. Estos han logrado, nos explica la prensa, reunir la mayoría de los votos. Las primas de producción fueron reducidas al mínimo en esas empresas, y el salario de los permanentes, por otra parte poco numerosos, no sobrepasa jamás el promedio obrero.

Pero en la misma ciudad, a veces a pocos cientos de metros de estas «fábricas pilotos», se encuentran otras en las cuales todavía todo es provisional y no se ha elegido ninguna nueva forma de administración. Es verdad que los antiguos directores y secretarios del Partido han sido destituidos en casi todas partes, pero allí donde no se ha podido realizar un mínimo de unión, el ejército ha proporcionado administradores provisionales, llamados muy militarmente «camaradas delegados a la primera línea del combate por la producción». El «Grupo central de la Revolución cultural» no parece ejercer presión sobre los obreros para que elijan más rápidamente sus propios responsables y se conforma con repetir su consigna primordial: «Hacer la revolución e impulsar la producción». Los periódicos

explican a diario que la discusión es algo bueno, pero después de las horas de trabajo.

Chou En Lai admitió en un discurso en Wuhan, a fines de setiembre, que la producción industrial ha sufrido, a pesar de todo, por la Revolución cultural. Ha declarado que confía en la posibilidad de recuperar ese retraso cuando la situación se estabilice. Pero, paradójicamente, el abastecimiento de las ciudades sigue siendo excelente y los precios en las tiendas de viveres o de ropa para obreros bajaron durante el año 1967.

La buena cosecha explica en parte este milagro de la economía china. De creer en la prensa china, ésta habría sido excelente, pese a la sequía que asoló ciertas regiones. Pero a decir verdad, se sabe poco sobre la situación en los campos. En el mes de febrero de 1967 el Comité central dirigió un mensaje a los campesinos en el cual insistía sobre el hecho de que «los camaradas que han cometido errores deben desplegar todos sus esfuerzos en las labores de primavera para rehabilitarse con actos meritorios». Invitaba a una amplia discusión, pero indicaba igualmente que «está prohibido a los cuadros destituidos aprovecharse de esto para contratar y usar represalias». El llamado no dice nada respecto a las parcelas de tierra individuales, pero puesto que el espíritu que sopla actualmente en China

es comparable al de la época del Gran salto hacia adelante, algunos suponen que éstas serán, si no suprimidas, por lo menos seriamente disminuidas.

Las escuelas y las universidades han vuelto a abrirse luego de un año de receso por la «actividad revolucionaria». Pero todavía nada se ha determinado respecto a la reforma de la enseñanza. Los exámenes de fin de curso fueron abolidos por resultar demasiado favorables a los estudiantes de origen no proletario y muchos antiguos profesores burgueses no han regresado a sus aulas. La prensa publica siempre resoluciones y proposiciones de distintos grupos de alumnos que reclaman la reducción del tiempo de estudios para poder integrarse más rápido a la vida productiva. Pero tampoco ahí se ha decidido nada y todo sigue siendo provisional.

Esta falta de prisa de los maoístas por hacerse cargo de la situación se explica, sin duda, por el deseo de no repetir el error que cometieron en 1958, sin duda, cuando la formación de las comunas populares. Entonces, después de haber aprobado el estatuto de adoptar inmediatamente a todo el país la primera comuna, el Partido hizo esta nueva fórmula. Ahora bien, China es demasiado grande para prescribirse a tal uniformidad, de donde probablemente resulta el relativo fra-

⁷ Pekín Informas No. 9, febrero 27, 1967.

caso de las comunas. En el presente, Mao actúa con más circunspección, y espera ver los resultados prácticos de los diferentes comités revolucionarios, antes de generalizarlos.

Pero ésta no es la única razón. Para el mundo exterior, la pasividad relativa de la autoridad central no puede explicarse sino por debilidad. En nuestras sociedades, los gobernantes no se preocupan por la adhesión colectiva de los ciudadanos a una ideología; ni creen que ésta pueda proporcionar un cemento más consistente que una buena administración. Para los chinos, en cambio, el activismo de los innumerables guardias rojos y de los rebeldes revolucionarios, es un bien supremo porque, según ellos, las masas no asimilan bien la ideología —el pensamiento del presidente Mao— sino gracias a este movimiento. Por esto prefieren que ese «debate de millones de hombres» se perpetúe sin coerción alguna, antes que verles volver a sus ocupaciones rutinarias y someterse a una disciplina formal. Así, paradójicamente, en el momento mismo en que algunos extranjeros no vacilan en proclamar que «China no existe ya como unidad coherente», Mao y sus amigos afirman por el contrario: «La situación en China jamás ha sido tan excelente».

Es muy pronto para hacer el balance de la revolución cultural y solamen-

te el año próximo nos traerá una respuesta al problema crucial de las nuevas instituciones chinas, inclusive el del Partido comunista chino. Es evidente que los acontecimientos de este país están con frecuencia por el carácter particular de la civilización china, que ha incidido también sobre su comunismo, sus hombres y su sistema de valores. Pese a eso, sería un craso error concluir de ello: «los chinos no son como nosotros. . . tienen su comunismo particular». Porque más allá de las particularidades nacionales y los elementos históricos específicos de la situación china, China se enfrenta a un problema que surge del conjunto del movimiento comunista, tal como éste se desarrolló durante los decenios del stalinismo.

El sistema burocrático del poder, monolítico y estrictamente centralizado, tuvo su época en la URSS y en todos los demás lugares. Actualmente se conocen demasiado los entretelones de su funcionamiento, para que nadie pueda ser seducido por su pretendida eficiencia económica. Pero si esta fórmula política ha sido denunciada por todos, ofrece igualmente una sorprendente resistencia al cambio. La esperanza de que la elevación del nivel de vida abra, por sí misma, el camino a una reforma que sea a la vez democrática y proletaria, no parece de fácil realización. La Unión Soviética ha encontrado un exutorio a ese

problema recurriendo a mecanismos económicos parcialmente copiados del modelo occidental y, sobre todo, quiere dar al pueblo ruso un respiro, después de largos años de sufrimiento. Aunque los medios de producción estén allí nacionalizados, corre el riesgo, sin embargo, de reproducir otra forma de sociedad de consumo. Sus opciones en política internacional, el diálogo con los Estados Unidos, la irritación apenas velada respecto a «impaciencias revolucionarias» de algunos comunistas extranjeros, la cólera abierta contra la protesta china, todo eso, es el resultado de sus difíciles opciones internas.

China se rebeló más radicalmente contra la pobreza de un sistema de poder burocrático y centralizado. Trata de dar una respuesta contraria a la de los soviéticos. Rechaza las «leyes económicas» que justificarían durante un período todavía largo la profunda desigualdad entre los hombres y pondrían el proceso de acumulación en el centro de la vida social. No quiere aplazar para una fecha muy lejana la transformación de las relaciones en el sentido comunista.

Por todas estas razones, ha emprendido el único camino que le parecía posible: el regreso a una forma avanzada de la democracia proletaria, al poder de la base. Los medios que ha elegido para promover la politización total de las masas, para desarrollar

un proceso a la escala de 700 millones de hombres, son, sin duda, simplista y elementales, pero, ¿dónde y cuándo se ha visto una tentativa social tan ambiciosa y realizada en tan amplia escala?

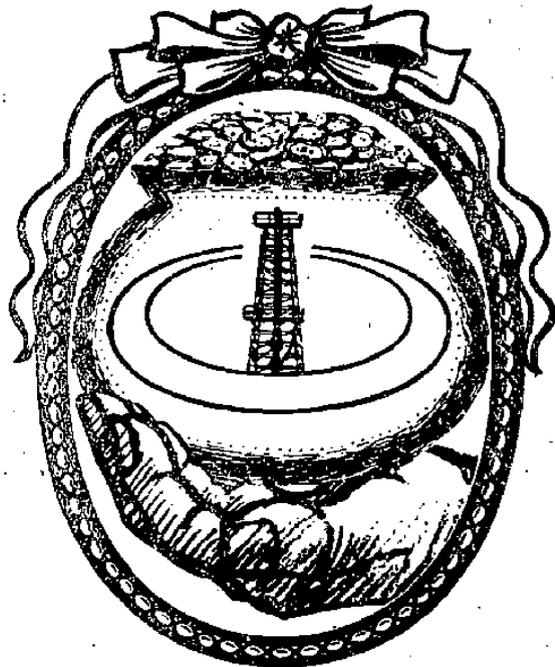
Es verdad que la respuesta china a la burocratización habría sido más convincente, si su análisis hubiera llegado hasta el fin en la denuncia de las raíces del mal. Es verdad que el valor universal de la revolución cultural sería más fácil de entender si los chinos hiciesen igualmente un esfuerzo crítico en el análisis de la situación mundial y si supiesen establecer relaciones de comprensión con otros movimientos revolucionarios. Es verdad que el punto más grave de la revolución cultural reside en ese culto a la personalidad que ha hecho del «librito rojo» un instrumento ambiguo: propugna la liberación de los espíritus por su contenido dialéctico y solicita la responsabilidad personal, pero, al mismo tiempo, desarrolla una fe religiosa en una verdad dada de una vez por todas, por un hombre que está por encima de la historia, Mao Tse Tung.

Todas las contradicciones internas de la revolución cultural inspiran inquietudes: no estamos frente a un simple acontecimiento que sólo implica promesas luminosas para el futuro. Pero la crítica no puede ser eficaz, sino cuando descansa en la com-

prensión de los problemas reales que están en juego. Ahora bien, nada sería más estéril que considerar una conmoción social tan profunda como la china, desde lo alto de nuestra muy sabia y muy advertida izquierda occidental que, a fuerza de tener respuesta para todo, prueba cada día más su parálisis y su impotencia. Su

indignación contra los excesos de los chinos es tal, que no se toma el trabajo de buscar el sentido profundo de la revolución cultural. Pero quiérase o no, China está escribiendo una nueva página, determinante quizás, de la historia del comunismo en nuestro siglo y esto concierne al futuro de todos.

Diciembre 20, 1967.



Cuba, el tercer mundo

Raúl Roa y el tratado de no proliferación de armas nucleares *

El pueblo cubano comparte las aspiraciones de la humanidad a una paz completa y perdurable y, por ello, ha contribuido y contribuye, en la medida de sus posibilidades, a denunciar y destruir los seculares diques que obstaculizan su advenimiento. La voz de Cuba es la de un pueblo pequeño, que lucha desde un siglo por afirmar su independencia y soberanía, y hoy está consagrado, con impar denuedo, en condiciones singularmente difíciles, a vencer el atraso legado por un largo vasallaje económico y político y a edificar una sociedad superior capaz de satisfacer todas sus necesidades materiales y espirituales a compás del ritmo de los tiempos.

Este año el pueblo cubano conmemora precisamente el centenario del inicio de sus guerras por la independencia nacional. En el arduo, extenso y accidentado trecho que media entre las luces inciertas del 10 de octubre de 1868 y los días que corren, el pueblo cubano pagó con ríos de sangre el precio de su absoluta y definitiva liberación. Esa dura y rica experiencia enseñó también a los cubanos que sólo la adhesión indolegable a los principios de independencia y soberanía y la disposición a defenderlos a cualquier costo garantizan la libertad y seguridad de las naciones.

Consecuente con esos criterios, la delegación de Cuba ha juzgado los problemas relacionados con la paz y el desarme, de manera invariable, en anteriores periodos de sesiones de la Asamblea General. Ha sostenido la opinión, fundada en hechos bien notorios, de que la política agresiva del imperialismo,

* Discurso pronunciado el 13 de mayo en la Asamblea General de las Naciones Unidas por el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Revolucionario de Cuba.

el norteamericano sobre todo, es la principal fuente de amenazas y riesgos a la paz y seguridad de las naciones.

Es harto sabido, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los monopolios norteamericanos se han lanzado a una desenfrenada carrera por la dominación universal en todos los órdenes. Sus capitales penetran en todos los países subdesarrollados, sustraen cuantiosas riquezas naturales, piratean la exigua existencia de técnicos, adquieren materias primas a precios cada vez más baratos, venden sus mercancías a precios cada vez más caros, explotan el trabajo de millones de hombres y les imponen un régimen de penuria, atraso, ignorancia y servidumbre; y, juntamente, frenan el desarrollo y usufructúan el trabajo y la riqueza acumulados de los países capitalistas avanzados, mediante una invasión metódica de inversiones en las líneas estratégicas de su economía, de estructuras empresariales de amplio radio de acción, de métodos de dirección centralizada y de alta tecnología científica.

No es menos sabido que, para cimentar la hegemonía de sus monopolios, el Gobierno de Washington ha diseminado sus bases militares por todo el planeta, ha organizado numerosas alianzas y pactos militares agresivos, fabrica millones de artefactos bélicos convencionales, produce y almacena bombas nucleares y sus vehículos portadores, crea nuevos medios de destrucción en masa de origen químico o biológico, como los empleados contra el pueblo vietnamita; equipa, entrena y dirige ejércitos mercenarios; amamanta regímenes lacayos y desencadena una estrategia global agresiva, que no reconoce fronteras, que no respeta ningún principio de derecho internacional, que no acata tratados, encaminada a reprimir los movimientos de liberación nacional y subyugar a los estados independientes.

La expresión más cruda de esa política es la criminal guerra de agresión que libran los imperialistas norteamericanos contra el pueblo vietnamita y los demás pueblos del sudeste asiático. Testimonios de sus torvos designios son también las continuas provocaciones a la República Popular Democrática de Corea, las amenazas a la Revolución Cubana, la intervención militar en la República Dominicana y la práctica desembozada de la subversión, la ingenuidad y el chantaje en todas las latitudes.

Esas realidades de la situación internacional confieren a la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial de los pueblos pequeños una importancia decisiva. En escala de las relaciones internacionales, el antagonismo primordial de nuestra época se expresa en la lucha entre el imperialismo y los pueblos de los países subdesarrollados. Es una pugna inconciliable, que

decidirá el porvenir del mundo. Para los pueblos, la victoria entrañará la conquista de su derecho al desarrollo pleno, a una vida libre de los grilletes del hambre, el atraso, la humillación y la incultura. Para el imperialismo se trata, más que de preservar sus privilegios, de sobrevivir a contrapelo de la condenación inexorable de la historia.

Ha sido parecer arraigado de mi Gobierno que para encarar la agresión imperialista los pueblos pequeños no tienen otra vía que resistir y luchar, y en lo que a nuestro país se refiere, sujeto a la continua amenaza de una potencia atómica, esta delegación reafirma que, como cuestión de principios e independientemente del hecho de que pudiera obtenerlas, Cuba jamás renunciará a su derecho inalienable a defenderse con toda clase de armas, cualquiera que sea su naturaleza y a despecho de las decisiones que sobre la materia adoptase éste o cualquier otro organismo internacional.

De ahí que la delegación cubana haya manifestado serias reservas ante todos los llamados temas de desarme o control de armamentos que examina esta Organización y ha puesto en entredicho, incluso, la procedencia de discutirlos aquí y en las actuales circunstancias internacionales. En concordancia con esa posición, Cuba no suscribió el Tratado de Moscú de 1963 sobre la prohibición parcial de las pruebas nucleares, ni el referente a la utilización pacífica del espacio ultraterrestre, ni el de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en América Latina.

La delegación cubana se ha abstenido igualmente de aprobar las numerosas resoluciones que, en conexión con estos temas, ha venido adoptando la Asamblea General durante los últimos años, entre ellas, todas las vinculadas con el problema de la no proliferación de las armas nucleares.

Ahora se ha sometido a nuestra consideración el proyecto de Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, presentado al Comité de Desarme de 17 Naciones por los representantes de la Unión Soviética y Estados Unidos. Este documento ha suscitado graves preocupaciones al Gobierno Revolucionario de Cuba, que se nos ha encomendado expresar, con toda precisión y claridad, en esta Asamblea.

No podemos compartir, en modo alguno, la opinión de los defensores del Tratado que le atribuyen un carácter positivo como herramienta para la consecución del desarme general y completo y para promover la confianza entre los estados y disminuir la tensión internacional.

Durante mucho tiempo, se ha perorado en esta Organización en torno a los peligros que se imputan a la difusión del armamento nuclear. Se ha acen-

tuado reiteradamente la urgencia de impedir que otros estados, más allá de los cinco actuales, lleguen a poseer o disponer de tales artefactos explosivos. Se ha insistido en presentar ese empeño restrictivo como parte importante del camino, que se asevera, conduciría al desarme universal.

La supuesta finalidad pacifista del texto que examinamos se nutre con dos premisas de muy difícil comprobación: la primera, que el riesgo principal de desencadenamiento de nuevas guerras reside en el armamento nuclear; la segunda, que la amenaza de un conflicto nuclear decide en las posibilidades de que los estados no poseedores de armas nucleares las adquieran, no así en aquellos estados que las almacenan desde hace años. En otras palabras, según los proponentes del Tratado, el peligro para los pueblos es el armamento nuclear, pero no el real, sino el hipotético y, según ellos, para conjurar aquella amenaza basta con prohibir el surgimiento de las armas nucleares en los países que aún no las poseen, a la vez que se admite la acumulación de fabulosos arsenales nucleares, ya existentes y capaces de destruir la civilización contemporánea e incluso la fabricación de nuevas armas por las potencias nucleares actuales.

Esa falaz concepción omite, consciente o inconscientemente, las guerras convencionales, únicas conocidas hasta ahora por la humanidad, y el desarrollo de las concepciones imperialistas sobre la «guerra local» y la «guerra especial», que se manifiestan en acciones brutales contra los pueblos del Tercer Mundo y en forma creciente, a partir de 1945. Se ha pretendido identificar la paz con la inexistencia de conflictos militares directos entre las grandes potencias nucleares. Pero, mientras tal enfrentamiento ha sido contenido por el llamado equilibrio del terror, en los hechos los imperialistas no vacilan en promover la guerra y la agresión en cualquier parte del mundo. Sería absurdo hablarles de paz a los pueblos del sudeste asiático víctima de la más cruel intervención extranjera, a los vietnamitas erguidos sobre oleadas de bombas de napalm y sustancias bacteriológicas; a los pueblos sometidos al colonialismo portugués, a los africanos acosados por el racismo y el *apartheid*, a los latinoamericanos que emprenden la ruta de su cabal emancipación, o al pueblo coreano bajo la perenne amenaza de una nueva guerra.

Las disposiciones de los artículos I y II del Tratado cierran toda perspectiva de acceso al arma nuclear para los estados que hasta el presente no lo han hecho, mientras no establecen, ni esos artículos ni cualquier otro del texto, confín alguno a la espiral armamentista —nuclear y convencio-

nal— de las potencias que ya poseen el arma atómica. Esas cláusulas no sólo no modifican la situación actual en cuanto a las existencias de artefactos de destrucción masiva ni reducen en lo más mínimo los peligros que aparejan en manos de un poder orgánicamente agresivo como Estados Unidos, sino que le permite continuar la producción de tales armas, ampliar sus arsenales, inventar nuevos sistemas de destrucción, transportarlos por todo el planeta, introducirlos en cualquier territorio bajo su control, refinar su tecnología y amenazar con su empleo a los pueblos más débiles, todo ello en ventajosas condiciones de monopolio, libre de temores acerca de eventuales nuevos competidores.

La resultante del Tratado sería acrecentar el desvalimiento de las potencias menores —si se quiere, consagrarlo jurídicamente, mediante contrato— al hacerlas renunciar al derecho a obtener armas que no tienen, a la par que, al sucribir el Tratado, se las obliga al hacer tácito reconocimiento a las potencias poseedoras y, por consiguiente, a la potencia imperialista más feroz del mundo, del derecho a retener las armas nucleares sin límite de tiempo. Los peligros inmanentes a los artefactos bélicos en sí no se reducen en absoluto por la simple razón de que tales aparatos no serán destruidos ni reducidos. Según el proyecto, podría proseguir libremente la introducción de armas nucleares en los centenares de bases militares que Estados Unidos tiene esparcidas por el mundo, continuaría el trasiego de armas del territorio norteamericano a sus instalaciones en el extranjero, permanecerían los aviones yanquis sobrevolando territorios pacíficos, día y noche, con sus cargas mortíferas, se sucederían otros accidentes como el de Palomares, o el más reciente de Groenlandia, sin que el más leve estremecimiento alterase la letra o el espíritu del Tratado.

Pero hay algo más todavía. Los imperialistas norteamericanos están fabricando armas nucleares de calibre pequeño, suministrándolas incluso a las unidades medianas —hasta el batallón—, para la realización de misiones tácticas en sus guerras de agresión convencionales. Al carecer de utilidad dichas armas en una guerra nuclear propiamente dicha, la intención del Gobierno de Estados Unidos de emplearlas en las guerras «locales» y «especiales» es evidente, y numerosas veces han declarado su disposición a usarlas en Viet Nam. Al no garantizar el Tratado a los estados no nucleares, signatarios o no, contra el empleo de las armas nucleares tácticas, deja manos libres al imperialismo norteamericano para su libérrimo uso

donde considere conveniente a la defensa de su régimen de agresión y explotación de los pueblos.

Este texto no guarda, en rigor, relación alguna con el desarme universal o, al menos, ninguna relación positiva. Lejos de conducir hacia ese objetivo, la firma del Tratado sería la mejor demostración de que un desarme universal, en las actuales condiciones, no es más que una quimera, cuando no una befa a los pueblos amenazados y oprimidos. En efecto, la aplicación del instrumento que venimos analizando dividirá al mundo en dos categorías de naciones —poseedoras y no poseedoras de armas nucleares— y cristalizará las presentes relaciones imperialistas de poder y la distancia que separa a las naciones poderosas de las débiles, a las desarrolladas de las subdesarrolladas. Y, todo ello, con el agravante del consentimiento mutuo y bajo contrato.

Una vez consagrado el monopolio de un puñado de grandes potencias sobre el arma nuclear ¿quién puede imaginar que el imperialismo renunciará más adelante al control de esos artefactos? ¿Qué elemento de presión podrían usar sobre el imperialismo los estados no nucleares tras haber consentido en acatar su menorvalía internacional y haber aceptado el menoscabo de su soberanía e independencia? ¿Cómo inducir a las grandes potencias imperialistas a que renuncien a la fabricación, posesión o empleo del arma nuclear, en el futuro, si ahora en un tratado formal en nada se le objeta y, por tanto, tácitamente se les reconoce el derecho a hacerlo a su albedrío y conveniencia?

En el último párrafo del preámbulo del Tratado se expresa el deseo «de facilitar el cese de la fabricación de armas nucleares, la liquidación de todas las reservas existentes de tales armas y la eliminación de las armas nucleares y de sus vectores en los arsenales nacionales en virtud de un tratado de desarme general y complejo bajo estricto y eficaz control internacional». O lo que es lo mismo, que las grandes potencias nucleares no pondrían fin a la carrera armamentista ni destruirían sus arsenales atómicos sino a través de un Tratado de desarme general y completo, es decir, en la fase última del proceso pacificador. El Artículo VI establece, asimismo, el compromiso de celebrar negociaciones «sobre medidas eficaces relativas al cese de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana» y, además, respecto al desarme nuclear y a un tratado de desarme general y completo, en cuanto a los cuales el compromiso de iniciar negociaciones no se asocia a ninguna fecha, próxima o distante. No deja de ser significativo el

plazo propuesto de veinticinco años para la vigencia inicial del Tratado. En menos de un cuarto de siglo la tecnología nuclear ha transitado desde la primera explosión atómica hasta los cohetes anticohetes, los cohetes de cabezas múltiples y los cohetes orbitales. Es fácil inferir, pues, el desarrollo que obtendrá durante los próximos veinticinco años:

Resulta evidente que el documento prevé el inicio de un período de tiempo, cuyo alcance no estará en manos del conjunto de la comunidad internacional pero sí al arbitrio de las grandes potencias, durante el cual estas últimas proseguirán, sin límites ni controles de tipo alguno, el desarrollo de su armamento nuclear y convencional, mientras la gran mayoría de los estados permanecerá en una fase inferior del progreso tecnológico —no sólo en el plano bélico, como veremos después— a la espera de la buena voluntad de los poderosos, y obviamente sujetos a una amenaza nuclear más grave que en el pasado. Salta a la vista que, mediante la adopción de este Tratado, no se destruye una sola bomba nuclear, no se reduce la posibilidad de nuevas invenciones en el campo de los explosivos o la balística, no se merma en un gramó de material fisionable la fabricación de armamentos, no se establece restricción a su trasiego por el mundo, no se coarta en ningún sentido la llamada proliferación vertical, o sea, la que están en condiciones de realizar los únicos estados hasta hoy capaces de producir explosiones nucleares. Sólo se ocupa el Tratado de impedir la proliferación horizontal, hacia aquellos estados sin capacidad actual para fabricar sus propias bombas, quienes renunciarían a esa expectativa a cambio de la promesa de las grandes potencias de discutir su desnuclearización en el marco de un desarme universal del armamento convencional, o sea, en trueque de nuevas y mayores concesiones de los estados más débiles y en la problemática coyuntura de que se hubiese «reducido la tirantez internacional» y «robustecido la confianza entre los estados» en grado tal, que las grandes potencias estuviesen dispuestas a consentir en imponerse el sacrificio que hoy demandan al resto de las naciones.

Se le exige a la mayoría de los pueblos que renuncien, aquí y ahora, a la posibilidad de poseer medios atómicos para su defensa, en momentos en que la tensión internacional crece y, justamente, la desconfianza entre los estados, pese a que esa situación tiene su origen en la política agresiva, belicista e irrespetuosa de los derechos de los más débiles que ejerce el gobierno imperialista de Estados Unidos, una de las principales potencias nucleares, coautora del proyecto de Tratado y beneficiaria de sus cláusulas.

Siendo la delegación norteamericana corresponsable del texto que comentamos y representante de un gobierno que ni siquiera enmascara sus intenciones de dominar al mundo y uncir a los estados y naciones débiles, éstos tienen pleno derecho a preguntar: ¿Qué se entiende por «disminución de la tirantez internacional»? ¿Cómo deben organizarse las relaciones internacionales para que, a juicio de los proponentes, se «robustezca la confianza entre los estados» y facilite la conclusión de un tratado de desarme universal?

Es innegable, a todas luces, que la aparición de este Tratado es consecuencia de la subversión del proceso racional que pudieron haber recorrido las negociaciones conducentes al desarme. La única forma de abordar el problema de la no proliferación, sin mengua de los derechos de ningún país, era haberlo planteado como parte de un conjunto de medidas a adoptar simultáneamente por todos los estados y bajo un sistema de control universal. Esas medidas tendrían que incluir, ante todo, la completa desnuclearización de las grandes potencias, la destrucción total de todas las armas nucleares existentes y de sus vectores, la liquidación completa de sus arsenales, la prohibición absoluta de fabricarlas en el futuro y el cese definitivo de sus pruebas. Sólo en ese marco es admisible demandar a los Estados no nucleares compromisos como los que propone, unilateralmente, el Tratado.

Al redactar este documento, se ha ignorado el mandato expreso que al respecto tenía el Comité de Ginebra. ¿Qué se ha hecho, inquirimos, del segundo principio de la Resolución 2028 (XX), según el cual «el Tratado debe establecer un equilibrio aceptable de responsabilidades y obligaciones mutuas para las potencias nucleares y las no nucleares»? ¿O del tercero, que preceptuaba: «El Tratado debe ser un paso hacia la consecución del desarme general y completo y, más particularmente, del desarme nuclear»?

El Tratado no instituye ninguna garantía efectiva para los estados no nucleares que pueden ser atacados o amenazados con armas nucleares por potencias que las poseen. Se ha pretendido subsanar esta falla esencial con un proyecto de resolución de Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido que sería aprobado por el Consejo de Seguridad. Pero ¿qué ofrece en puridad ese documento? El primer párrafo resolutivo reconoce que una agresión con armas nucleares, o una amenaza de tal, crearía una situación en la que la supuesta actuación del Consejo ya estaba prescrita por la Carta. El tercer párrafo reafirma el derecho inmanente a la legítima defensa, re-

conocido en el artículo 51 de la propia Carta, no aportando tampoco novedad alguna.

El párrafo segundo sí introduce un factor nuevo, tan original como farisaico. Según dicho párrafo, el Consejo «se felicita de la intención manifestada por ciertos estados de proporcionar o apoyar una asistencia inmediata, en conformidad con la Carta, a todo estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y fuere víctima de un acto u objeto de una amenaza de agresión en que se utilicen armas nucleares».

¿Qué significa este enunciado? ¿De dónde provendría esa amenaza nuclear, ya que habría que suponer que no fuese de los coautores? ¿No fue acaso el gobierno norteamericano, de cuya intención «se felicita» ahora el Consejo, el único que ha sido capaz de emplear hasta hoy tales armas, como aconteció en Hiroshima y Nagasaki? ¿No ha sido acaso el gobierno norteamericano, de cuya intención «se felicita» el Consejo, quien las ha diseminado en son agresivo por todo el mundo y quien amenazó con emplearlas contra Cuba y, recientemente, contra Viet Nam y Corea? El párrafo aludido establecería una «sombrita nuclear múltiple» que «ciertos estados» brindarían a «los estados no nucleares miembros del Tratado y parecer sugerir la conversión de la Organización de Naciones Unidas en una suerte de policía internacional, cuya creación no daría a los pueblos la menor seguridad y si sólidos motivos de preocupación.

Por otra parte, esa alegada «protección» no alcanzaría a aquellos estados no nucleares que no suscriban el Tratado. ¿Quiere esto decir que, a juicio del Consejo de Seguridad, podría concebirse el ataque con armas nucleares a un estado que no las posea, pero que haya cometido el «delito» de no rubricar tal o cual instrumento internacional? ¿En virtud de qué principio se vería privado de ser acreedor a recibir «una asistencia inmediata, en conformidad con la Carta», un estado pequeño, que fuese víctima de un ataque nuclear y no hubiese suscrito este Tratado? ¿Se intenta acaso dividir al mundo, también, entre estados que podrán ser o no víctimas de agresión con armas nucleares? ¿En qué situación quedarían aquellos estados sobre quienes se concentra la agresividad del imperialismo norteamericano, como la República Democrática de Viet Nam, la República Popular de Corea o Cuba?

Es indisputable que, al escindir el mundo en dos categorías de naciones, según tengan o no derecho a poseer artefactos nucleares y obligar a unas

a la renuncia de importantes prerrogativas no compensadas por concesiones recíprocas de las otras, el Tratado viola el principio de la igualdad soberana de los estados.

Contraviene igualmente la soberanía de los estados no nucleares signatarios la prohibición que se les impone en cuanto a la realización de explosiones nucleares con fines pacíficos y el sometimiento a las grandes potencias en todo lo referente a la utilización pacífica de la energía nuclear.

El artículo III contiene otra transgresión flagrante de los atributos soberanos de los estados no nucleares signatarios, al imponerles rígidos mecanismos de control para la aplicación de salvaguardias respecto al uso pacífico de la energía nuclear, al tiempo que se omite cualquier medida de control para las actividades, pacíficas o bélicas, de las potencias nucleares, además de gozar ésta de luz verde para intercambiar materiales, equipos o informaciones para fines militares o pacíficos. Es imprescindible subrayar que, por el párrafo 4 de este artículo, los estados no nucleares signatarios se obligan a aceptar, en un plazo imperativo, la concertación con el Organismo Internacional de Energía Atómica de acuerdos de salvaguardias para el control del desarrollo pacífico de la energía nuclear o su aprovechamiento, con la peculiaridad de que dicho compromiso se hace por anticipado y deberá ser, según el párrafo 1 del mismo Artículo, «de conformidad con el Estatuto de dicho organismo y su sistema de salvaguardias».

No es ocioso recordar que, según el Artículo III, párrafo 5, del Estatuto del mencionado organismo, tales salvaguardias pueden ser modificadas o ampliadas cuando aquel lo considere pertinente, y según el Artículo XX, párrafo 3, la Junta de Gobernadores podrá agregar como materiales sujetos a salvaguardias a aquellos que determine en su oportunidad. En cualquier caso, los acuerdos sobre salvaguardias entrarán en vigor a los 18 meses a partir de la fecha de iniciadas las negociaciones. Sin embargo, no se aclara cuál sería la situación al producirse discrepancias al respecto entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y el estado parte en cuestión.

El Artículo III dispone un control total sobre las actividades nucleares pacíficas que realicen los estados no poseedores de armas nucleares, sean parte o no del Tratado, al indicar que los procedimientos para las salvaguardias comprenderían, además de los materiales fisionables especiales, los materiales básicos y no solo los que son usados en una instalación nuclear principal, sino en cualquier parte fuera de ella. Se señala, asimismo, que

las salvaguardias se aplicarían a todos los materiales de ambas categorías y a todas las actividades nucleares con fines pacíficos que se llevasen a cabo en el territorio del estado afectado, bajo su jurisdicción, o que están bajo su control, en cualquier lugar.

Esta definición absoluta encierra todas las actividades nucleares pacíficas y todos los materiales nucleares de los estados no poseedores de estas armas, signatarios o no del Tratado, incluidas minas, yacimientos, depósitos de materias primas, laboratorios e instalaciones científicas del más variado orden a las que son aplicables, en la actualidad o en un futuro previsible, elementos nucleares. La amplitud de tales mecanismos de inspección y control extravasa los fines para los que se supone creados y abre una perspectiva de ingerencia ilimitada en esferas de actividad de la estricta competencia de cada estado, con flagrante menosprecio de su soberanía.

Cuba, que ha rechazado siempre cualquier intento de inspección y control internacional con merma de su soberanía, como lo hizo con firmeza durante la Crisis de Octubre, no suscribiría jamás un Tratado internacional que aceptara esos derechos unilaterales de inspección y control de un país por otro u otros y, en este caso, lo rechaza con mayor razón aún puesto que de tales salvaguardias, controles e inspecciones se exime, en situación moralmente insostenible de privilegio, a las potencias nucleares.

Debe quedar claramente puntualizado que, tenor del párrafo 2 de este artículo III, los países no nucleares que decidan, en uso de su soberanía, no ser parte del Tratado, resultan radicalmente excluidos de la posibilidad de recibir materias primas o equipos para la producción de materiales fisionables con fines pacíficos procedentes de cualquier estado signatario. Este mismo artículo III permite, en cambio, la obtención por una potencia nuclear de materiales básicos, materiales fisionables especiales, equipos o materiales especiales, equipos o materias particularmente destinados o preparados para la elaboración o producción de materiales fisionables especiales, en un estado no nuclear, sin someterse a las salvaguardias.

En pareja medida contradice el principio de la igualdad soberana, así como el de la voluntariedad de los tratados, la obligación establecida en el párrafo I del Artículo X, en virtud de la cual la parte que decida denunciarlo deberá circular una notificación explicativa de los acontecimientos extraordinarios que considere han comprometido sus intereses supremos y fundamentado su denuncia. Esta exigencia constituye una novedad en la práctica del Derecho Internacional y una coacción al ejercicio de la soberanía

de los estados al forzarlos a explicar sus decisiones. El hecho de que esa notificación sea transmitida también al Consejo de Seguridad parece insinuar que éste podría cuestionar la voluntad soberana del estado afectado y hacerlo resignar. La dependencia de los estados no nucleares a las grandes potencias resalta, finalmente, en el poder de veto que ésta se atribuyen a la hora de aprobar cualquier modificación del Tratado.

Un aspecto esencial del Tratado es el referente a las regulaciones que, según deriva del texto, serán establecidas a la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. En primer lugar, postula una arbitraria e inadmisibile discriminación contra aquellos estados no nucleares que no sean partes en el Tratado, a quienes se les niega todo derecho a la investigación, producción y empleo de la energía nuclear con fines pacíficos, incluido el acceso a la información científica y tecnológica correspondiente. Esta decisión, a más de ilegítima en si misma, constituye una grosera amenaza al desarrollo de esos estados y un inocultable intento de extorsión para hacerlos adherirse a este instrumento. Ningún principio ético, jurídico o político autoriza a disponer a capricho del destino de otros pueblos ni a manejar, como propiedad privada, recursos que pertenecen a la naturaleza y son, en última instancia, patrimonio de la humanidad. Es de todo punto inmoral instituir mecanismos coactivos para obligar a los estados pequeños a aceptar este instrumento que, sin embargo, se proclama concebido en beneficio de todos.

Si bien los estados no nucleares que sean partes en el Tratado tendrán la posibilidad de recibir asistencia internacional para el empleo pacífico de la energía nuclear, será dentro de las limitaciones dimanantes del rígido sistema de salvaguardias violatorias de su soberanía y de las condiciones que podrán imponer al mercado atómico las grandes potencias, que se auto-otorgan, por medio de este documento, el derecho a un control hegemónico. Se prohíbe también a estos estados la fabricación, posesión o uso de artefactos nucleares explosivos con fines pacíficos, cuya manipulación quedará en manos de las potencias nucleares, las que venderán al resto del mundo, al costo «más bajo posible», los servicios para ejecutar aquellas explosiones.

Es sintomática la vaguedad del artículo V. Por un lado, soslaya todo compromiso para la regulación de precios y, por el otro, alude a un organismo internacional que se crearía para el aprovechamiento de las explosiones pacíficas, de cual se adelanta «que contará con una representación adecuada de los estados no poseedores de armas nucleares», pero sin definir sobre

qué bases se establecerá esa «representación adecuada» y cuales serían las prerrogativas de las potencias nucleares en ese organismo.

La delegación cubana considera indispensable analizar las onerosas incidencias que tendría el Tratado en los países del Tercer Mundo. Nos referimos a los pueblos subdesarrollados de Asia, Africa y América Latina, encadenados durante siglos a la dominación colonial, acorralados aún en niveles de vida, en concepciones y métodos que los países industrializados dejaron atrás hace muchas generaciones y que se empeñan hoy, con heroica obstinación, en dar el salto político, económico, técnico, científico y cultural que les permita también entrar aceleradamente en la era, ya en curso, de las computadoras electrónicas, la energía atómica, la investigación espacial y las innovaciones constantes.

En un discurso pronunciado el 13 de marzo retropróximo, el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba, Comandante Fidel Castro, diseñó, con cifras irrefutables, la trágica situación y las oscuras perspectivas del mundo subdesarrollado. En 1960, el conjunto de los países subdesarrollados alcanzó un producto bruto global de 159,520 millones de dólares para una población de 1,294 millones de personas. En esa fecha, la producción norteamericana fue de 446,100 millones de dólares, con una población de 180 millones de habitantes y la del conjunto de los países capitalistas desarrollados fue de 927,893 millones de dólares para una población de 643 millones de personas. Esto significa, en suma, que todo el mundo subdesarrollado produjo en 1960 la tercera parte de lo que produjo Estados Unidos y menos de la mitad de lo que produjo Europa.

Se calcula que en 1975 todo el mundo subdesarrollado producirá 301,000 millones de dólares, o sea, menos de lo que produjo Estados Unidos en 1960, con una población que llegará a la cifra de 1,853 millones de habitantes. Para esos habitantes, los países subdesarrollados producirán catorce veces menos que los países industrializados, mientras la proporción de 1960 era de doce a uno.

El ingreso *per cápita* disponible en los países subdesarrollados era, en 1960, de 70 a 85 dólares, 22 veces menos que el de Estados Unidos. En 1975, será de 90 a 110 dólares, 25 veces menos.

El déficit en la balanza de pagos del comercio de los países subdesarrollados con los países desarrollados fue en 1960 de 4,640 millones; en 1970, será de 10,500 millones y en 1975, de 18,900 millones.

A esta dramática desproporción hay que agregar la situación de empobrecimiento crónico de esos países, como consecuencia del saqueo de sus riquezas por los monopolios extranjeros, las sumas de capital de inversión que emigran constantemente al exterior por concepto de utilidades y el deterioro creciente de los precios de su intercambio comercial. Para 1975, se calcula que el té haya reducido su precio en 6%, la lana 6%, el algodón 6%, el cacao 9%, las pieles y el cuero 9%, el yute 14%, el caucho 32%.

Una idea muy clara de las posibilidades de cooperación entre los países desarrollados y subdesarrollados la muestra la situación del comercio exterior elemento clave en la dinámica económica del Tercera Mundo. La participación de los países subdesarrollados en el total de las exportaciones mundiales cayó del 27% en 1953, al 19.3% en 1966. En 1965, la tasa anual media de incremento total de las exportaciones mundiales era de 7.8%, pero los países subdesarrollados aumentaron sus exportaciones, excluido el petróleo, a un ritmo del 4% solamente. En cuanto al valor de las exportaciones de manufacturas, de 1953-54 a 1965-66, las procedentes de los países capitalistas desarrollados aumentaron en 65,000 millones de dólares, las de los países socialistas en 10,000 millones y las de los países subdesarrollados en 3,000 millones. En 1965, los países atrasados podían comprar, por un volumen determinado de sus exportaciones tradicionales, una décima parte menos de importaciones que en 1906. La pérdida anual de poder adquisitivo de estos países es de unos 2,500 millones de dólares. Su deuda pública externa creció de 10,000 millones de dólares en 1965, a 40,000 millones de dólares en 1966. El servicio de la deuda que era, en promedio, de 500 millones anuales en 1955, subió hasta 4,000 millones. Por otra parte, los precios medios de los productos básicos exportados por los países subdesarrollados han disminuido, desde 1958, en un 7%, mientras los exportados por los países desarrollados han aumentado en un 10%.

El reciente y ruidoso fiasco de la Segunda Conferencia de Comercio y Desarrollo, efectuada en Nueva Delhi, es indicio inequívoco de que, dentro de la actual estructura del mundo, no hay razones para esperar una alteración en estas tendencias en los próximos años.

Un factor decisivo es el alto índice de crecimiento de la población en el Tercer Mundo. Según informaciones del pasado 10 de marzo de la Oficina Demográfica de Estados, dentro de 32 años la población de América Latina se habrá incrementado en un 157%. E indicaba en otra parte la misma publicación: «Cada día hay más de 190,000 nuevas bocas que alimentar,

señala el grupo investigador; sin embargo, no se produce ni la tercera parte de los mil millones de calorías adicionales que requieren para proporcionar a esa masa humana siquiera un régimen de hambres».

Es harto conocido que la población latinoamericana crece a un ritmo del 3.2% anual. ¿Y cuál es, por ejemplo, la situación alimenticia de sus pobladores en esos países básicamente productores y exportadores de bienes primarios de origen agrícola? Citemos el «Anuario de las Naciones Unidas» de 1967: «Tanto en Africa como en América Latina, donde no se registró incremento alguno en la producción de alimentos desde 1965, la producción de alimentos disminuyó en 1966. El nivel perdido no puede recuperarse fácilmente, porque requeriría en 1967 un incremento del 7% para igualar el nivel por persona de 1964». Un reciente informe de la CEPAL consigna resultados sobremanera insatisfactorios para el conjunto de la economía latinoamericana en 1967.

La monstruosa solución concebida por los imperialistas al vertiginoso crecimiento demográfico del mundo subdesarrollado no es ya siquiera el control forzoso de la natalidad por los medios tradicionales: llegan a propugnar y proponer la esterilización compulsoria de la especie humana, el genocidio mismo de los gérmenes latentes de la perpetuación de la vida. «No hace mucho —puntualizaba el Primer Ministro de Cuba, en el referido discurso— el Secretario de Estado de Estados Unidos hablaba alarmado de que si la ciencia y la técnica no encontraban una solución a este problema, el mundo estaría expuesto a un estallido termonuclear. Están tan asustados ante estas realidades insolubles, que ven ya bombas termonucleares estallando por todas partes. Y parece que esta bomba que se gesta sí parece que se va a seguir gestando y no puede ser sometida a acuerdo ni controles de ninguna clase».

El drama pavoroso del Tercer Mundo no podrá resolverse sino mediante una prodigiosa empresa de transformación revolucionaria de sus estructuras económicas y sociales, que le permita acortar la distancia; siempre creciente, que lo separa de los países desarrollados. Ello supone elegir el camino revolucionario, alcanzar un ritmo acelerado en la producción, realizar cuantiosas inversiones, lograr un grado de equipamiento incomparablemente superior al actual y avanzar con rapidez en el dominio de la técnica y la ciencia. Espina dorsal de tamaña proeza será el desarrollo industrial y, para impulsarlo, se requieren varios ingredientes, entre ellos la energía, sostén principal de toda industria moderna.

Veamos qué dificultades arrostran los países subdesarrollados en este terreno. Es conocido que hay un problema muy serio en cuanto a las reservas energéticas existentes en el mundo. Estudios recientes, realizados por la Conferencia Mundial de la Energía, pronostican que las reservas calculables de combustible fósil económicamente recuperable se habrán agotado de aquí a 70 años. Por otra parte, la energía hidráulica, actualmente una parte pequeña del consumo mundial, será inferior al 3% del consumo probable dentro de 30 años.

Un hecho más alarmante aún lo constituye la información de que las regiones subdesarrolladas del mundo son también las que poseen las más bajas reservas por habitante de energía convencional. No alcanzan el equivalente de 400 toneladas de carbón, mientras que las reservas europeas representan 1,400, las de América del Norte 8,000 y las de la Unión Soviética 25,000 toneladas *per cápita*. Se ha calculado que si aumentase el índice de consumo energético en los países del Tercer Mundo con vistas a llevarlos a un estado de desarrollo correspondiente al de los países avanzados —lo que supondría un consumo anual de energía de 3 toneladas *per cápita*, haciendo abstracción del elevado ritmo de crecimiento de la población en estas regiones— la totalidad de las reservas se agotarían en menos de 40 años en América Latina, en menos de 65 años en el Medio Oriente, en menos de 30 años en el Sur y el Oriente de Asia y en menos de 133 años en África. Estos datos demuestran, elocuentemente, que los países subdesarrollados deberán buscar la explotación de fuentes energéticas no convencionales, en un lapso inmediato, si quieren emprender el camino de la industrialización y el crecimiento.

En su informe «Perspectivas de la Energía Nucleoeléctrica y Problemas que plantea en las Regiones en Vías de Desarrollo», presentado el 11 de octubre de 1962 a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Aplicación de las Ciencias y la Tecnología en beneficio de las regiones menos desarrolladas, la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica señalaba lo siguiente:

«... 3. El principal motivo del interés que despierta la energía nuclear reside en el hecho de que se ha demostrado técnicamente la posibilidad de utilizarla como nueva fuente de energía eléctrica. En la mayor parte de los países insuficientemente desarrollados el consumo de electricidad ha aumentado considerablemente y con más rapidez que el consumo total de energía. El mercado que esos países puede ofrecer a la energía nucleoelectrica está adquiriendo, pues, una gran amplitud.

4. Además, el carbón, el petróleo y el gas natural se utilizan cada vez más como materias primas de importantes industrias en rápida expansión, especialmente de la industria petroquímica y de la metalúrgica. En consecuencia, algunos países desearían reservar parte de sus recursos en carbón, petróleo o gas natural para esos fines y utilizar la energía nuclear para la producción de electricidad.

5. Por último, la vida económica de algunos países depende de la importación de carbón o petróleo. Para tales países el hecho de añadir el uranio a las fuentes tradicionales de energía supone la posibilidad de elegir entre un mayor número de proveedores de combustible destinado a la producción de energía eléctrica y, por tanto, disminuye su dependencia respecto a dichos proveedores.

Desde este punto de vista, la energía nucleoelectrica es interesante en las regiones relativamente pobres en combustibles fósiles. Por ejemplo, en el sudeste de Asia (excluida China), los recursos por habitantes en combustibles fósiles son 1/10 de los de Europa Occidental y 1/60 de los de Norte América.

La situación parece mucho más inquietante si se analiza el desnivel existente en la actualidad entre los países subdesarrollados y los desarrollados en cuanto a las fuentes de energía convencionales. Según la CEPAL y otras informaciones estadísticas de Naciones Unidas, el consumo de energía comercial en el mundo, en términos de petróleo equivalente, era en 1959 de 2,748 millones de toneladas, desglosadas así: 2,313 millones correspondientes a los países desarrollados, 352 a los países subdesarrollados de África y Asia y 83 a América Latina; el consumo por habitante, en kilogramos, se dividía de este modo: América Latina 422, Europa Occidental 1,717, Europa Oriental 1,930, Estados Unidos 5,242, otros países desarrollados 1,620, países subdesarrollados de África y Asia, 199. Es decir, que mientras los países industrializados consumían el 84.2% de la energía comercial global, los países del Tercer Mundo —que representan las dos terceras partes de la población mundial y que necesitan con urgencia impulsar el crecimiento económico y elevar sus condiciones de vida— utilizaban solamente el 15.8% del total. En el caso de América Latina en conjunto, su consumo de energía comercial representaba en esa fecha el 3% del consumo mundial y el habitante medio latinoamericano sólo recibía el 45% del promedio *per cápita* mundial. Es interesante señalar, como prueba adicional del atraso energético del conjunto del Tercer Mundo, el alto consumo relativo de combustibles no comerciales, que en 1955 era, respecto al consumo total de energía, superior al 40% en los

países subdesarrollados, mientras para Europa oscilaba entre el 5 y el 10% y era del 3% en Estados Unidos.

Es patente que entre las fuerzas energéticas convencionales la electricidad ocupa una posición de primera categoría. En 1959, la producción de electricidad en el mundo era en miles de millones de kilowat-hora, de 2,081, de los cuales 1,915 pertenecían a los países industrializados y 166 a los del Tercer Mundo; la producción *per cápita* por regiones era así: América Latina 318; Europa Occidental 1,554, Europa Oriental 1,192, Estados Unidos, 4,489, otros países desarrollados 1,836 África y Asia 60. Adviértase que mientras los países industrializados originaban el 92% de la producción mundial de energía eléctrica, a la América Latina correspondía el 3% y a los países afroasiáticos el 5%. Apuntemos que durante el período 1949-1959, el promedio mundial de la tasa de aumento de la producción de energía eléctrica por habitante era de 8.1%, mientras la de América Latina era 6.4%, la más baja entre todas las regiones del mundo.

En cuanto al coeficiente de electrificación —relación entre la generación eléctrica y el total de energía comercial consumida— creció en el mismo decenio antes mencionado a un ritmo anual del 6% en todo el mundo, mientras que en América Latina sólo lo hacía en un 3% y permanecía estacionario en el resto de los países subdesarrollados.

La desproporción entre los niveles energéticos de los países industrializados y los subdesarrollados se muestra en toda su abismal hondura si se piensa que los últimos están obligados a realizar profundas transformaciones en su estructura económica, que les permita acelerar su crecimiento industrial y satisfacer las necesidades de todo tipo que tienen sus pobladores. No se olvide que en el Tercer Mundo habita la mayor parte de la población mundial y que allí crece con ritmo crecientemente superior al de las otras regiones.

El desarrollo de la industria requiere, indefectiblemente, el incremento del consumo de energía y calor y, sobre todo, de energía eléctrica. Nada podría ilustrar mejor el aserto que el siguiente ejemplo: un aumento del 1% de la producción industrial demanda el aumento de la producción de energía primaria de 0.7 a 0.8% y de la producción de energía eléctrica de 1.1 a 1.2%. Es sabido, por lo demás, que una de las ventajas más importantes del empleo de la energía nuclear como fuente para la producción de energía eléctrica es el bajo costo y la alta productividad del combustible empleado. Se ha comprobado que, para la producción de electricidad, una tonelada de uranio equi-

vale, aproximadamente, a 11,000 toneladas de carbón. Se calcula también que para 1970 la energía nuclear se encontrará en igualdad de condiciones respecto a la energía clásica, desde el punto de vista de la utilidad económica de las centrales productoras. Según estadísticas de Naciones Unidas, la energía producida en centrales nucleares representará, en 1970-1975, alrededor del 11% del total de la potencia instalada y en 1975-1980 será cerca del 17% del total. En cuanto a Europa Occidental, la participación de las centrales nucleares en la producción total de electricidad crecerá del 5.8% en 1970, al 30% en 1980 y al 41% en 1985.

Aparte de su empleo para la producción de electricidad, la energía nuclear tiene un uso muy valioso en otros campos, tales como la medicina, la agricultura, el transporte y el aprovechamiento industrial o científico de los llamados subproductos de las reacciones nucleares. Como es presumible, esos campos y otros nuevos se irán dilatando incesantemente en la medida que avancen la ciencia y la tecnología nucleares. Pero todas esas actividades se verán constreñidas en los países subdesarrollados, ya que, debido a su tremendo atraso tecnológico, tendrán que depender, en gran medida, de las potencias nucleares suministradoras de esos servicios; a más de estar dichas actividades sometidas a un férreo sistema de inspección y control internacional.

Otro aspecto relevante lo constituyen los artefactos nucleares explosivos para uso pacífico. Están vedados también para los estados no nucleares, aún cuando suscriban el tratado, y deberán depender de la venta de los servicios de las potencias nucleares en cuanto a la utilización de tales aparatos. Aunque también en ese sector son previsibles descubrimientos de empleos ulteriores valiosos, hasta el presente existen dos actividades en que el uso pacífico de artefactos nucleares explosivos tiene una utilidad comprobada: la realización de grandes obras de ingeniería civil y la explotación de recursos del subsuelo, ambas esenciales para los países atrasados. El monopolio de las explosiones pacíficas puede constituir un negocio de dimensiones incalculables.

Cabe afirmar, en suma, que en un futuro no lejano la energía nuclear será la principal fuente de energía en el planeta. Sin embargo, ¿cuál será entonces la situación de los países subdesarrollados que sufren hoy de un agudo déficit energético? ¿Qué perspectiva tendrán esos países de alcanzar los niveles de vida de las naciones industrializadas si a aquel déficit crónico se agregará ahora el monopolio de las nuevas fuentes de energía? ¿Cuál será

la naturaleza de las relaciones entre los países subdesarrollados y las grandes potencias industrializadas cuando éstas tengan en sus manos el dominio del suministro de la energía nuclear? ¿Quién sería tan cándido, a estas alturas, como para esperar, en el comercio nuclear, una actitud más favorable, un más desinteresado espíritu de cooperación que el vigente en las relaciones de intercambio entre países pobres y ricos?

La perspectiva no puede ser más sombría para los pueblos del Tercer Mundo. Se verían forzados a depender perpetuamente de las potencias suministradoras de energía nuclear o estarían obligados a renunciar al uso de tales recursos energéticos. O lo que es lo mismo, deberían aceptar la sujeción permanente a los intereses de las grandes potencias o renunciar para siempre a toda posibilidad de desarrollo. Esta es la disyuntiva dramática que ofrece, en las actuales circunstancias, el Tratado propuesto. La única alternativa digna para los países situados ante tal dilema sería la de rechazarlo y emprender por sus propios medios el desarrollo pacífico de la energía nuclear, que para la mayor parte de ellos sería imposible al nivel actual de su progreso tecnológico y científico.

Aunque sus intereses más vitales serán afectados seriamente por este Tratado, no le es dable tampoco a Cuba impedir su aprobación, que como es ya del dominio público será otorgada a regañadientes por muchos, con sordo desagrado por otros y con tácita inconformidad por algunos. Huelga advertir que los pueblos cuya soberanía, dignidad y desarrollo sean comprometidos por el servilismo o la inconsciencia de sus gobiernos, les pedirán cuenta a los responsables, aplicándoles las sanciones pertinentes. No se juega en balde con el destino de la humanidad.

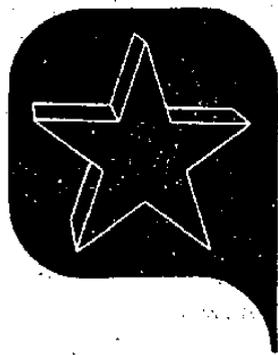
Sabemos que muchos gobiernos suscribirán este Tratado sólo por falta de valor y en virtud de las cláusulas extorsionistas que contiene, acorde con las cuales el país que no lo firme corre el riesgo tanto de no recibir ninguna cooperación en el desarrollo tecnológico para el uso pacífico de la energía nuclear, como una falta absoluta de protección en caso de ser atacado un día con armas nucleares por un país imperialista agresor.

Cuba no suscribe este Tratado, además de por las razones ya expuestas, porque rechaza, como una cuestión de elemental principio, cualquier tipo de presión o extorsión en sus actos de política internacional.

El curso de los acontecimientos puede invalidar mañana lo que ahora se firme: la Cuba que emergió victoriosamente del coloniaje, la Cuba socialista y

comunista, cree, por encima de todo, en la fuerza incontrastable de los pueblos y en el poder invencible de los principios revolucionarios. Estos principios alimentan la decisión y el optimismo del pueblo cubano para enfrentar y vencer todas las dificultades que surjan en su camino, y le infunden la convicción de que la situación arbitraria, discriminatoria, injusta y ominosa que creará el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares —incubadora de un poder mundial engendrado por el monopolio nuclear— será traspuesta algún día por los pueblos del mundo que aspiran no a una falsa paz, donde sólo los poderosos puedan gozar de ella, sino a una paz verdadera, fundada en la igualdad de las naciones y en el derecho de todos los pueblos al respeto universal, al progreso social y tecnológico y a la justicia en el disfrute de los bienes que sociedades de trabajadores sean capaces de crear.

¡PATRIA O MUERTE! ¡VENCEREMOS!



**INDEPENDENCIA O MUERTE
LIBERTAD O MUERTE
PATRIA O MUERTE**

Antonio Guiteras

Septembrismo

No creo oportuno comenzar dando, como en la mayor parte de los casos, una síntesis de mi actuación revolucionaria, porque los actos realizados contra una tiranía están en razón directa del amor con que se defienden las ideas y las persecuciones y sufrimientos pertenecen a la eficacia del aparato represivo de esta tiranía, no teniendo nada que ver con la misma.

En la larga lucha contra el machadato, soberbia floración de una planta sembrada hacia treinta años, se aceptó casi universalmente la doctrina: *Todos para destruir; para construir, unos cuantos*. Terrible doctrina que es básica de muchos de nuestros males. Pero entre la pléyade de conspiradores, se formaban distintos núcleos al conjuro de similitud de ideas o de intereses, pero no lo suficientemente, separados uno de otros, para cobrar fuerzas bastantes a afrontar solos la labor de una insurrección o posteriormente una obra de gobierno.

Para eso hubiera sido necesaria una labor de propaganda y conspiración que los hubiera alejado de los otros núcleos, de este modo debilitando —aparentemente— el frente de la oposición. Digo aparentemente porque si bien

es verdad que hubiera debilitado el frente antimachadista, hubiera creado y fortalecido; sin embargo, un frente revolucionario en la gran acepción de la palabra.

La tragedia que debía desarrollarse al caer la tiranía machadista y dar comienzo por tanto a la obra constructiva, empezó al iniciarse las negociaciones dirigidas por Summer Welles y la subsiguiente formación de lo que se llamó la «Mesa Redonda». Los antingerecistas, que no aceptamos la intervención de Washington en nuestros asuntos interiores, nos aislamos comtraicionado por sus más fieles servidores, la alta oficialidad del Ejército (la subalterna conspiraba aparte y no pudo producir su golpe), formamos la oposición al gobierno «mediatizado» de Céspedes.

El cuartelazo del 4 de septiembre, dado por las clases y alistados del Ejército y la Marina, con el fin de hacer una amplia depuración interior y obtener algunas reivindicaciones de carácter moral y material, puso fin al caos creado en ese organismo por las facciones que luchaban por una depuración completa y las que trataban de evitarla a toda costa.

Pero el gobierno de Céspedes, impopular y débil por la mediocridad que caracteriza a todo gobierno de concentración, cayó también arrastrado por la enorme ola.

Los elementos civiles que colaboraron en este movimiento y los que acudieron después, responsabilizándose con el mismo, fuimos los de la oposición antingerecista, que habiendo adoptado en principio el programa del D.E.U.¹ pretendimos ponerlo en práctica.

Cuando la forma colegiada espantó demasiado a los buenos burgueses, Grau fue proclamado Presidente por el mismo grupo que se había reunido para formar la pentarquía y que se había constituido en lo que se llamó «*La junta revolucionaria de Columbia*».

Tuve entonces el honor de ser llamado a colaborar con el gobierno de Grau desde una Secretaría tan importante como la de Gobernación; y esto fue sugerido, según tengo entendido, por el compañero Irisarri, que a pesar de no haber tenido relaciones conmigo, conocía mi historia revolucionaria contra Machado y contra el gobierno «mediacionista». La idea fue acogida con agrado por muchos de los miembros del D.E.U. y otros revolucionarios,

¹ Directorio Estudiantil Universitario. (N. de R.).

entre los cuales estaba Sergio Carbó, que no dudo hizo todo lo que pudo, por traerme a colaborar con el Gobierno Revolucionario, pues manteníamos relaciones durante la época de la lucha antimachadista y antingerencista.

A éstos que desde lejos me llamaron, les estoy personalmente agradecidos porque me dieron la oportunidad de hacer desde un alto puesto todo lo que podía por la revolución. Pero no dudo que fue la apreciación de lo que creyeron podía hacer por Cuba, el móvil fundamental de esa determinación.

Nuestra labor desde el gobierno, luchando contra los sectores mediacionistas, era ardua; pero más arduo aún era nuestro esfuerzo gigantesco para convertir el Golpe del 4 de septiembre en una revolución antingerencista y, sobre todo, determinar dónde llevar el antingerencismo.

Nuestro programa no podía detenerse simple y llanamente en el principio de la *no intervención*. Tenía que ir forzosamente hasta la raíz de nuestros males, *el antimperialismo económico*, el que hizo retroceder a muchos antingerencistas, dividiéndose nuestras filas.

Ante los decretos que, como enorme martillazos, iban rompiendo lentamente esa máquina gigantesca que ahoga al pueblo de Cuba, como a tantos otros de la América Latina, aparecían en escena para combatirnos todos sus servidores nativos y extranjeros, y su formidable clamor espurio nos restaba uno a uno nuestros colaboradores, que eligiendo las exclamaciones derrotistas *«de este modo no nos reconocerán nunca los americanos»*, *«estas medidas alejan el reconocimiento»*; o las más terribles aún: *«los americanos desembarcarán, «cerrarán sus puertas a nuestro azúcar»*, etc., nos abandonaban.

Yo tengo la satisfacción de haber llevado a la firma del Presidente Grau los decretos que atacaban más duro al imperialismo yanqui; los vi retroceder, porque acudían a mí —Carbó, Lucilo de la Peña, Batista y otros— para convencerme de la necesidad de disminuir el ataque, de variar nuestra conducta.

Pero esa labor, conjuntamente a la beligerancia reconocida al proletariado, no obstante la actuación aislada de algunos miembros del Ejército, era para nosotros toda la Revolución. Un estudio somero de la situación político-económica de Cuba, nos había llevado a la conclusión de que un movimiento que no fuese antimperialista en Cuba, no era revolución, pues sus intereses eran incompatibles.

Existía el peligro de perder el Poder, abandonados en el camino por los que parecían más identificados con nosotros, pero el Poder, imposibilitados de hacer la Revolución, no significaba nada para nosotros. Su único objetivo en nuestras manos era la de instrumento para hacer la revolución. Por eso no nos arredramos ante la posibilidad de perderlo.

Y aquí quiero que quede establecido de un modo claro, que Grau no abandonó inesperadamente su cargo, por su propia voluntad; previas juntas de Jefes de Distritos Militares en Columbia, sucesivas entrevistas, habían decidido el golpe a la Revolución. Grau cayó impulsado por los místicos del reconocimiento, con Batista a la cabeza, que habían retrocedido aterrados ante la verdadera revolución que por primera vez veían en todas sus luces. Fracasamos porque una revolución sólo puede llevarse adelante cuando está mantenida por un grupo de hombres identificados ideológicamente, poderoso por su unión inquebrantable, aunados por los mismos principios y no por la doctrina de *«todos para destruir»*.

Si Carbó lee estas líneas comprenderá por qué estamos separados, y sabrá que, a pesar del abismo infranqueable, también le devuelvo un saludo cordial.

A pesar del quebranto, el gesto del Gobierno de Grau no ha sido estéril. Esa actitud fortaleció al espíritu de las clases y alistados del Ejército y la Marina, que vieron en este movimiento una consagración gloriosa de su grito de rebelión del 4 de septiembre, espíritu cuyo clamor no puede ser rectilíneo; mostró un mundo de posibilidades al pueblo de Cuba, que ya había bebido con ansia los escritos de nuestros intelectuales, que le mostraban la senda de la revolución verdadera. Esa posición erguida mostró a los revolucionarios el camino. Esa fase de nuestra Historia es la génesis de la revolución que se prepara, que no constituirá un movimiento político con más o menos disparos de cañón, sino una profunda transformación de nuestra estructura económico-político-social. Y sépalo el señor Carbó, espero confiado el momento oportuno para nuestra liberación absoluta: que es la que responde al clamor de las masas que todo lo sufren, que todo lo padecen.

EL EJERCITO PERSIGUE A LOS GRUPOS DE ALZADOS, EN LA PROVINCIA DE ORIENTE

Un grupo asaltó el cuartel de San Luis, matando a dos soldados y al Jefe de Policía, llevándose armas y caballos. Fueron perseguidos, causándoles 4 bajas. Otra sustracción de armas.

En las primeras horas de la noche de ayer, se facilitó en Palacio a los repórters de los diarios habaneros y a los representantes de la prensa extranjera, la siguiente nota explicativa de lo ocurrido en la mañana anterior, en San Luis y en Victoria de las Tunas, Oriente:

«Al amanecer de hoy, mientras los soldados, ocupados en las caballerizas en la limpieza de los caballos, se hallaban sin sus armas, el pequeño cuartel de la Guardia Rural de San Luis, Oriente, fue sorprendido por un grupo de unos cuarenta hombres armados, quienes dieron muerte a dos soldados y se apoderaron de varios caballos y de algunas armas.

Noticioso del hecho, el teniente Rodríguez, de Palma Soriano, al frente de algunos números, salió en el acto para San Luis, obligando a los asaltantes a abandonar el pueblo, no sin antes hacerles dos muertos. Los fugitivos, en su huida, dieron muerte al Jefe de la Policía Municipal de San Luis, que tenían prisionero.

El capitán Larrubia, con algunas fuerzas de Santiago de Cuba, salió inmediatamente a batir la partida; la cual se fraccionó en tres grupos para eludir mejor la persecución de la fuerza pública. El grupo mayor, de unos veinte hombres, que se dirigió rumbo a Majaguabo, fue alcanzado y batido por un pelotón de la Guardia Rural al mando del sargento Morejón, que lo dispersó; le mató cuatro hombres, le hizo un prisionero herido, le quitó los caballos de que se habían apoderado en San Luis y varias armas.

Los dispersos están estrechamente perseguidos por las fuerzas de la Guardia Rural, que se han dividido en grupos de dos o tres hombres para hacer más eficaz la búsqueda de los que huyen.

En Victoria de las Tunas un pequeño grupo de hombres forzó anoche la puerta del Juzgado Municipal, y llevó varias armas viejas, revólveres y machetes, que estaban en depósito como piezas de convicción. El capitán Somarrón, con noticias de que el citado grupo se hallaba en una finca a una legua de la ciudad, se trasladó con toda rapidez a dicho lugar con cuatro soldados, sorprendiendo a los allí reunidos, matándoles un hombre, quitándoles las armas y dispersándolos. Parejas de la Guardia Rural persiguen sin descanso a los que lograron escapar.

En el resto de la República reina absoluta tranquilidad.

Las comunicaciones telegráficas y telefónicas con San Luis quedaron restablecidas después de una corta interrupción».

(Diario de la Marina, Domingo, 30 de abril de 1953).

Joven Cuba

EL SENTIDO DEL PROGRAMA

Un programa de acción es —o debe ser— enunciado de posibilidades que irradian de la realidad, proyección sobre el futuro de fuerzas actuales, hipótesis de un proceso vital. Por eso, supone análisis tanto como significa síntesis. De aquí que para ayudar a comprender una exposición tendencial, sea oportuno referir —siquiera en esquema— las consideraciones fundamentales que presidieron su formulación.

Ahora bien; si la acción se encamina a procurar una nueva estructuración nacional, la referencia se reduce —se extiende— a la interpretación de conjunto de las circunstancias que nutren el presente sociopolítico de un lado, y a la indicación del grado de transformación perseguido con las medidas programáticas, de otro. El juicio estará ayudado entonces adecuadamente para aquilatar la eficiencia del programa.

LOS SUPUESTOS

Cuba reúne los elementos indispensables para integrar una nación, pero no es aún *NACION*. Ciertamente, las realidades geográficas le dan *unidad física*; la ausencia de impedimentos formales a las relaciones espontáneas e indistintas entre sus habitantes deriva en *unidad demótica*; la uniforme regulación ordenancista le produce *unidad policial*. Desde la «colonización», Cuba posee *unidad* en sus *tradiciones*, y el destino sustancialmente común vivido por toda sus regiones afirma su *unidad histórica*. Y tales *unidades* han sido intensas, suficientemente para determinar cierta analogía psicológica en la población que, —no obstante su heterogénea oriundez— permite hablar de un «carácter cubano».

Y sin embargo, Cuba no es Nación *aún*, porque carece de aquella *unidad funcional* en su economía, necesaria para presentarse como un *todo* capaz de bastarse a sí misma. En una palabra, Cuba permanece en *estado colonial*. Supeditada al capital extranjero, la estructura económica cubana es un aparato que no sirve a necesidades colectivas de dentro, sino a rendimientos calculados por y para los de fuera.

Pues, la coordinación de las fuerzas productivas cubanas se ofrece como la primera trinchera a conquistar, desde que en el espíritu colectivo surge in-

tenso y preciso el apetito de gozar autonomía nacional, y el ambiente físico-social brinda los materiales adecuados para elaborar el andamiaje económico que ha de sustentar aquella autonomía. Pero la curva del ritmo mundial indica que la coordinación no es factible con vistas a la permanencia, si no se da graduación actual a los factores de la producción, y —por tanto— si no se asigna al *trabajo* el prevalente significado que la moderna economía le atribuye. De ahí la idea polar de nuestra orientación: *para que la ordenación orgánica de Cuba en Nación alcance estabilidad, precisa que el Estado cubano se estructure conforme a los postulados del Socialismo*. Mientras, Cuba estará abierta a la voracidad del imperialismo financiero.

Ahora, que la dura cuestión desprendida inmediatamente del postulado es esta: ¿Cómo se obtiene la integral estructuración socialista del Estado? ¿Es posible pasar del «colonialismo» al nuevo molde con la rapidez con que opera una mutación en el teatro? La sinceridad obliga a declarar que el cambio no es fácil; en ningún caso, podría ser repentino. Porque las transformaciones de los pueblos están limitadas por realidades históricoeconómicas de una parte, y realidades espirituales de otra; las transformaciones sociales requieren posibilidades de conciencia —subjetivas—, tanto como posibilidades ambientales —objetivas—. Mientras el único juez de los valores de la vida sea el intelecto humano, de nada valdrá que las circunstancias de ambiente propicien una trasmutación, si el espíritu social por su impreparación cultural es incapaz de comprender y desea el cambio; y, del mismo modo la idea reformadora significará mera utopía individual o hipnosis colectiva, si la falta de medios materiales imposibilita su realización, puesto que la eficacia activa del pensamiento necesita instrumental a propósito para revelarse.

Ningún argumento derivará de esto el derechismo contra nuestra tesis. Tenemos en cuenta la doble categoría de los factores condicionales del progreso, y no demandamos ni esperamos de la realidad más que lo que ella encierra ya de maduro en su centro. El Estado socialista no es una construcción caprichosamente imaginada; es una deducción racional basada en las leyes de la dinámica social. A él se llegará a través de los ciclos más o menos breves en que se descompone el proceso historial.

Tampoco nos afectarán las críticas del extremismo fundada en la insuficiencia del Programa. Al Estado socialista nos acercaremos por sucesivas etapas preparatorias. Fijada la gran meta a la que dirigimos la marcha, nuestro programa debe interpretarse como el trazado de la primera etapa. Pensado con

reflexión, calculado con método, no quita ello para que se acojan las modificaciones que el replanteo exige. Perseguimos el acierto histórico, no el forzamiento antihistórico.

LOS OBJETIVOS

La fase prenatal está tocando a su fin. El corto —pero intenso— esfuerzo desplegado del 4 de septiembre (1933) al 15 de enero (1934), es la más elocuente prueba de que la época nueva llama a la puerta. Lo que va a ocurrir es inevitable. En el alma colectiva, la representación de la autodeterminación de Cuba se ha formado, atrayendo y absorbiendo enormes cantidades de energía psíquica con propensión a la «descarga» realizadora; en tanto, los adelantos demográficos y técnicos experimentados por el país ponen al alcance de la mano medios apropiados para una lograda realización. Sólo el revestimiento externo de intereses extranjerizos cohibe ya el libre juego de la nacionalidad cubana que —como el cisne al instante de nacer— no necesita otra audacia que moverse para ver rodar hecho pedazos el cascarón opresor.

Pues no hay obstáculos exteriores al desenvolvimiento de Cuba-Nación, fuera del financierismo internacional. Más, es tan poderoso su influjo y tan nociva su acción, que habrá de estarse siempre alerta para prevenir sus ataques. Es lo que quiere expresar esa «profesión de fe» antimperialista que encabeza el Programa.

Por lo demás, las medidas políticas persiguen, en lo exterior, obtener sin exagerados dispendios el respeto y la consideración igualitaria a que es acreedora toda entidad nacional por el hecho de ser copartícipe y colaboradora de la cultura y de la producción universal. Y en lo interior, intentan vincular la dirección del Estado en las fuerzas nacionales de la economía, de manera que la obra de gobierno se comprende como prolongación y complemento de la obra de producción.

De otra parte, es conforme a la naturaleza de las cosas que el ordenamiento de la vida con sentido social lleve consigo la derogación de todo el régimen civil levantado sobre principios individualistas, y la articulación de otro que refleje preocupaciones colectivas, siguiendo la línea marcada en las medidas jurídicas; si bien éstas serán conjugadas con las *sociales, educacionales y sanitarias* al objeto de sistematizar un todo armónico que procure al mayor número las ventajas y el bienestar que anteriormente eran —son hoy— ex-

clusivo patrimonio de unos pocos. A la libertad de los más no se arriba si no a expensas del libertinaje de los menos.

Y aunque no sea resolver definitiva y totalmente la «cuestión magna» de la época, es bastante alejarse del coloniaje económico consolidar una estructura que permita: servir primordialmente las exigencias vitales de los productores; subordinar el sistema inmobiliario a conveniencias nacionales, facilitando la implantación futura de formas socializadas; combatir y extirpar las monstruosas superfetaciones del *capitalismo* tanto en la industria y el comercio, como en el crédito, y estimular y propalar fórmulas contrapuestas de alto significado colectivo; y, en fin, elevar el trabajo a rango preponderante en la energética nacional y desterrar el inicuo prejuicio que lo posterga a la máquina, cuyo desgaste preocupa al capitalista más que el agotamiento físico y la consunción de los trabajadores...

Si esos objetivos son alcanzables con las reformas propuestas en el Programa, será Cuba «el Estrado de humana dignidad» en que noble y fácilmente se ascienda a modos superiores —ulteriores— de cultura.

Programa

ANTIMPERIALISMO

«Se suscribe como esencial al credo antimperialista, a cuya luz se desenvolverá una política exterior e interior genuinamente cubana. Y puesto que la libertad de Cuba debe significar la independencia integral de su economía, la estructura nacional vendrá determinada por las fuerzas de la producción en cuyas manos se concentre la soberanía de manera que el poder político sea reflejo fiel del poder económico.

En su virtud, cualquiera que sea la forma que en definitiva adopte el Gobierno, se implantarán las siguientes reformas:

REFORMA POLITICA

POLÍTICA EXTERIOR

Se reafirmará la personalidad de Cuba, mediante:

A / La sustitución de la actual diplomacia cortesana por una diplomacia de interés cultural.

B / La reducción del servicio diplomático a cifras concordantes con nuestra capacidad económica.

C / La ordenación del servicio consular sobre base técnico utilitaria.

D / Denuncia de todo tratado o convenio interno que perjudique a la nación.

E / Repudiación de toda deuda exterior ilegítima, y moratoria integral para la amortización del principal e intereses de las que se consideran legítimas.

F / Convocación inmediata del «Parlamento de América», integrado por los representantes de las Asociaciones de productores, Sindicatos de empleados y trabajadores y Colegios de profesionales de todos los países de América.

POLITICA INTERIOR

A / Representación de las fuerzas productoras en el Gobierno, tanto nacional como municipal. El régimen municipal se reemplazará por Consejos locales, integrados por representantes de las tres grandes fuerzas sociales, o sean, la riqueza, la intelectualidad y el trabajo.

B / Descentralización administrativa.

C / El voto electoral será ejercitado por todo ciudadano mayor de 18 años.

La mujer gozará de los mismos derechos electorales activos y pasivos que el hombre. La base para toda elección o cargos representativos descansará sobre el número de electores y no sobre el de habitantes. Se reconocerán todos los partidos de tendencias nuevas.

D / Implantación de los postulados de la revolución a medida de su triunfo en las localidades, de acuerdo con las características de las mismas.

E / Derogación inmediata de todas las leyes y todos los decretos, resoluciones y disposiciones que pugnen con los principios básicos de este programa.

F / Promulgación inmediata de amnistía para todos los casos judiciales resueltos o pendientes, motivados por cuestiones políticosociales u obreras.

G / Reorganización de las fuerzas militares y navales.

H / Inventario jurado de lo que cada funcionario pública posea, al comenzar el servicio a su cargo.

REFORMA JURIDICA

La renovación de la estructura jurídica de Cuba se logrará mediante:

- A / Organización del poder judicial con funcionarios capaces de comprender y viabilizar la transformación cubana, e implantación del Jurado. Creación de tribunales de justicia penal revolucionaria para sancionar todos los actos delictuosos realizados al amparo del poder público. Las penas impuestas por los actuales Tribunales de sanciones se cumplirán inmediatamente, sin perjuicio de que los casos absueltos por éstos sean revisados ante los nuevos tribunales.
- B / Reforma de los sistemas procesales y penitenciarios; la legislación civil, en general, se modernizará dándole carácter social.
- C / Creación de tribunales de menores y de familia.
- D / Nacionalización de los registros concernientes a actos del estado civil de las personas, actualmente en poder de la Iglesia católica.
- E / Creación de los Jurados de inscripción y registros.
- F / Autorización a todo particular para comparecer en su propia defensa ante todo tribunal, sin necesidad de asistencia de abogado, procurador y mandatario. Se creará una Dirección de defensa pública que asegure al ciudadano sin recursos o de recursos insuficientes la asistencia legal, tanto en la fase de consulta, como en las de mediación, arbitraje y litigio.

REFORMA SOCIAL

En lo social se implantarán las siguientes medidas:

- A / Declaración de la igualdad civil, económica y política de la mujer.
- B / Creación de planteles para la educación y corrección de niños anormales y delincuentes.
- C / Abaratamiento sistemático de la vida.
- D / Abolición de los monopolios, comenzando por los de artículos de primera necesidad, y establecimiento de sanciones penales para los infractores.
- E / Reforma tributaria integral de tendencia social, haciendo que el peso del sistema impositivo recaiga sobre las clases acomodadas.

F / Supresión de la herencia colateral. A falta de herederos consanguíneos ascendentes y descendentes, heredará el Estado, sin perjuicio del usufructo vitalicio del cónyuge viudo si lo hubiere. El Estado destinará los bienes heredados a asistencia social.

G / Aplicación efectiva de sanciones contra los adulteradores de artículos comestibles y medicinales.

H / Ampliación de los servicios de sanidad a los menesterosos y no pudientes.

I / Reforma de la vivienda del trabajador y del gaujiro.

J / Investigación sobre los bienes del Clero; recuperación por el Estado de los que posea indebidamente y expropiación de los que fueron de interés público. Nacionalización de los cementerios y de los inmuebles afectos al culto.

K / Divulgación de la cultura en las masas.

L / Confiscación de todos los bienes adquiridos con motivo del desempeño de funciones públicas por medios ilícitos durante las administraciones pasadas e inhabilitación de todo hombre público maculado.

M / Reglamentación restrictiva de la profesión clerical.

N / Creación y organización inmediata del Instituto de reformas sociales y del agregado obrero y agrícola en el cuerpo diplomático.

REFORMA ECONOMICA, FINANCIERA Y FISCAL

Bajo el principio de que la propiedad no es un derecho absoluto, sino una función social, se imprimirá una orientación francamente nacional a la economía, y se aprovecharán todas las oportunidades que faciliten o permitan realizar la socialización de los medios de producción. A tal efecto se implantarán las siguientes medidas:

TIERRA

A / Reafirmación de la nacionalización del litoral de la República. No podrá restringirse ni limitarse el uso público de las costas, playas, bahías y puertos, sino por causa de la defensa nacional, policía o higiene. Las concesiones actualmente otorgadas o que se otorguen a particulares o em-

presas, serán nulas en cuanto limiten el uso público de dichos lugares, y las obras realizadas al amparo de aquellas se entenderán en todo caso, afectas a la servidumbre de paso, auxilio y salvamento de bañistas, pescadores, navegantes y otros usuarios circunstanciales.

B/ Municipalización de los bateyes y caminos o vías de acceso a los mismos.

C/ Nacionalización de las riquezas del subsuelo. Las concesiones otorgadas hasta el día se presentarán a revisión, bajo pena de caducidad, durante el término de un año. Ninguna concesión podrá otorgarse a perpetuidad y las actualmente otorgadas a perpetuidad o sin término, caducarán a los treinta años de la vigencia de la ley. Las empresas que las exploten deberán constituirse con arreglo a las leyes de Cuba y con renuncia a toda jurisdicción extranjera, y en ellas no podrán ser partícipes o tener intereses los Gobiernos o Estados extranjeros, bajo pena de caducidad. Las concesiones se extinguirán, además, por no iniciarse la explotación en forma dentro de los tres años siguientes al otorgamiento, por interrupción de los trabajos durante dos años. En todo caso, quedará sobreentendido el derecho del Estado a expropiación por utilidad social y a la administración oficial por razón de orden público o interés colectivo. Toda concesión atribuirá al Estado participación en los productos de la explotación. El Estado podrá declarar de «Reserva nacional» cualquier sustancia mineral o zona minera, cuya explotación no podrá concederse a particulares ni a empresas.

D/ Implantación de la Reforma agraria en los siguientes principios: caducidad de todo gravamen perpetuo impuesto sobre fincas rústicas al cumplirse los treinta años de su constitución. Regulación de los arrendamientos de fincas rústicas y del derecho del arrendatario a adquirir las tierras que trabaje. Prohibición de nuevas adquisiciones de tierras rústicas a todo poseedor del máximo que fije la ley. Prohibición de nuevas adquisiciones de tierras rústicas: a las sociedades anónimas y corporaciones extranjeras, a los particulares extranjeros no residentes en Cuba y a las empresas industriales en cuanto excedan de las necesarias para la instalación de sus edificios, fábricas, almacenes, depósitos y bateyes de trabajo. Prohibición de enajenar las tierras concedidas por el Estado conforme a las leyes agrarias. Expropiación de las tierras cultivables en poder de latifundistas, cuando las mantengan inexploradas. Expropiación

de las tierras cultivables que lleven dadas en arrendamiento más de veinte años. Expropiación de los latifundios cuando proceda declaración de interés público o necesidad social. Revisión de todos los expedientes de deslindes y demoliciones de las haciendas comuneras, iniciados con posterioridad al año 1902. Las leyes agrarias tendrán efecto retroactivo.

E/ Creación del «Instituto agrario» con jurisdicción para: reivindicar, adquirir y expropiar tierras para el Estado; concederlas para su explotación en las condiciones que la ley señale; aprobar la contratación que verse sobre fincas sujetas a las previsiones de las leyes agrarias; formar el Catastro nacional; y, en general, reglamentar la ejecución de las leyes agrarias y resolver fallar los conflictos que su ejecución suscite.

F/ Concesión de las tierras pertenecientes al Estado, al campesinado pobre, y medio, ensayando las formas colectivas de explotación siempre que las condiciones lo permitan.

G/ Instalación de seis grandes «Granjas agrícolas», una en cada provincia, que sirvan a la vez, de centro de producción y reeducación de delincuentes. Para estas atenciones se usarán preferentemente las propiedades adquiridas en virtud de lo dispuesto en el párrafo «L» del epígrafe «Reforma social».

H/ Socialización de la producción de las fincas del Estado mediante un sistema de planificación.

I/ Creación de las cooperativas de agricultores y protección preferente a los mismos.

J/ Institución del crédito agrícola.

INDUSTRIA

A/ Nacionalización o municipalización de los servicios públicos.

B/ Estimulación de la pequeña industria y fomento de otras nuevas.

C/ Intervención de las industrias básicas si las circunstancias llegaren a demandarlo.

D/ Protección a las industrias que den participación a los trabajadores en los beneficios o en la dirección.

E/ Declaración de ilicitud de funcionamiento de industrias que no aseguren la adecuada subsistencia de los trabajadores, bajo pena de confiscación. Y nacionalización de aquéllas cuyos proveedores aleguen imposibilidad de cumplimiento de las leyes que les conciernen.

F/ Creación de formas cooperativas de producción.

G/ Como regla general, se impedirá la concentración de la industria; cuando sea impuesta por razones de técnica económica, se socializará, y si no fuere posible se intervendrá por el Estado y reglamentará adecuadamente.

COMERCIO

A/ Creación de la Marina Mercante.

B/ Supresión de la importación por subpuestos y creación de cuatro grandes puertos francos, dos al norte y dos al sur de la República.

C/ Intervención y regulación de la importación y de la exportación por causas de interés general, cuando las circunstancias lo demanden.

D/ Declaración de libertad de comercio en los bateyes.

E/ Creación de economatos o cooperativas de consumo en los centros de industrias rurales, fiscalizados por la Secretaría del trabajo y por los sindicatos de trabajadores.

F/ Prohibición de exportación de toda materia prima cuando pueda ser transformada o elaborada en Cuba.

G/ Atención especial al comercio exterior, efectuando los convenios necesarios para el debido intercambio de los productos.

TRABAJO

A/ Regulación de la inmigración.

B/ Elevación de la condición de vida del trabajador.

C/ Reconocimiento de los derechos del trabajo, y protección a sus organizaciones defensivas.

D/ Sindicalización forzosa de los empleados y trabajadores públicos y privados por ramas de la profesión o industrias, rigiéndose por las normas o reglamentos que ellos mismos se dicten, de acuerdo con la carta del trabajo, legislada por el Tratado de Versalles.

E/ Creación y organización inmediata del «Consejo nacional» y «Consejos municipales» del trabajo para solucionar, en armonía con la justicia social, los conflictos entre el capital y el trabajo.

F/ Redacción y promulgación del «Código del trabajo» que regulará, entre otras cosas, la estructuración sindical del trabajo, la jornada máxima diurna y nocturna, la jornada física, la jornada en labores nocivas a la salud, el jornal mínimo, el trabajo extraordinario, el trabajo de la mujer y del menor de edad, lo relativo a indemnizaciones por accidentes, vacaciones y descanso, condiciones de los lugares de vivienda y trabajo, el seguro social, la jubilaciones, pensiones y retiros, tanto de empleados como de trabajadores y, en general, todo cuanto tienda a asegurar condiciones humanas en el trabajo.

G/ Intervención de la Secretaría del trabajo para controlar el trabajo en las dependencias del Estado, la Provincia y el Municipio.

H/ Ninguna reforma social que interese a los empleados y trabajadores podrá implantarse sin consulta a sus sindicatos, a cuyo efecto se les fijará un plazo para emitirla.

CREDITO Y CAPITAL

A/ Creación de la Banca nacional bajo el control del Estado y promulgación de una legislación bancaria adecuada.

B/ Creación del Instituto hipotecario para defensa de la pequeña propiedad, principalmente rural, y para rescate, de las fincas e industrias de interés nacional sometidas a la acción absorbente del capital financiero.

C/ Creación de Bancos agrícolas refaccionarios y de préstamos en general.

D/ Estimulación de las formas mutualistas y cooperativas de crédito.

E/ Creación del sistema monetario sobre base nacional y desenvolvimiento y aplicación de los principios de la Ley arteaga.

F/Regulación de las emigraciones y exportación de capitales, y provisiones para retener y acrecer las reservas oro.

G/Regulación del interés y legislación contra la usura.

H/Absorción con impuestos de los rendimientos desmedidos y del crecimiento exagerado del capital.

TRIBUTACION

A/Revisión íntegra del actual sistema tributario siguiendo la directriz señalada en el párrafo «E» del epígrafe «REFORMA SOCIAL».

B/Implantación generalizadas del impuesto progresivo sobre las rentas.

C/Impuesto especial de escala progresiva sobre bienes rústico inexplorados.

D/Impuesto especial de escala progresiva sobre los solares yermos en poblaciones de más de veinticinco mil habitantes.

E/Impuesto progresivo sobre el valor de las herencias, con límite máximo de 50%.

F/Participación del Estado mediante impuesto progresivo en el incremento no ganado del valor de los bienes inmuebles (Plusvalía).

G/Creación del departamento autónomo de recaudación de ventas públicas.

REFORMA EDUCACIONAL

La escuela pública debe ser un instrumento en manos del Estado para formar hombres, por lo tanto, la enseñanza debe socializarse debiendo el Estado supervisar e intervenir la enseñanza privada, laica y religiosa, mientras no se implante integralmente la escuela única. Al acometer esta reforma se dictará las siguientes medidas:

A/El presupuesto del Estado destinado a la educación bajo ningún concepto debe ser inferior al que dedique a ninguna otra atención.

B/Intensificación de la lucha contra el analfabetismo, creando nuevas aulas diurnas y nocturnas.

C/Manutención por el Estado del niño pobre durante el período de su instrucción.

D/Reorganización de las Escuelas normales.

E/Reorganización de la segunda enseñanza y aumentos de Institutos de acuerdo con las necesidades de la población.

F/Estudio y resolución del problema de la Escuela rural.

G/Estímulo a la creación de ciudades escolares, residencias estudiantiles y lugares de recreo en los centros principales de población.

H/Depuración del magisterio.

I/Reorganización del Consejo nacional de educación y de la Inspección escolar.

J/Mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los trabajadores de la enseñanza; fijación de su sueldo en relación a su antigüedad; pagos simultáneos a todos los maestros de la nación; pago regular de jubilaciones y pensiones.

K/Organización del seguro de vida y desempleo para los trabajadores de la enseñanza.

L/El Estado pagará y distribuirá gratuitamente un número de matrículas universitarias no inferior a la cuarta parte de la matrícula general de la Universidad entre los hijos de trabajadores y guajiros pobres que seleccionen los sindicatos respectivos.

Las matrículas gratuitas autorizarán preferentemente estudios de ingeniería, agronomía y otros similares. Las viviendas y los transportes de los estudiantes pobres serán proporcionados por el Estado.

M/Se facilitará la cultura universitaria a la población trabajadora y se instituirán becas para perfeccionamiento y ampliación de conocimientos técnicos, industriales, comerciales y agrícolas y, en general, profesionales, incluso el periodismo.

REFORMA SANITARIA

La nueva estructuración de la sanidad pública se alcanzará mediante:

A/Consejo nacional de sanidad de técnicos en cuestiones de Salud pública, para controlar la legislación sanitaria del país.

B/ Junta técnica-revisionista para fiscalizar la actuación del departamento y el cumplimiento de las leyes sanitarias.

C/ Secretaría de sanidad organizada en tres direcciones. Higiene pública que absorberá las funciones de la actual Dirección de sanidad. Salud pública que tendrá el control de lo relacionado con las enfermedades epidémicas y endémicas y otras de alta mortalidad, higiene sexual, eugenesia, etc. Asistencia pública que tendrá el control de las organizaciones de carácter médicosanitario, de las mutualidades sanitarias y de las profesiones respectivas.

D/ Reforma de la legislación sanitaria.

E/ Creación de la carrera sanitaria y regulación de las profesiones de ese carácter.

F/ Legislación sobre mutualidades sanitarias, sobre farmacias, sobre alimentación, drogas y productos biológicos.

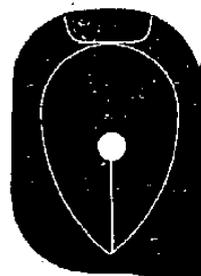
G/ Legislación sexual.

H/ Mejoramiento de hospitales públicos, reformatorios y asilos.

I/ Intensificación de la lucha sanitaria contra las enfermedades de mayor mortalidad en Cuba: fiebre tifoidea, tuberculosis, avariosis, etc.

J/ Organización científica de los servicios sanitarios de higiene social de la secretaría del Trabajo.

Comité Central
«JOVEN CUBA»



LOS AUTORES

SHAKUNTALA
DE MIRANDA

Investigadora asistente en Sociología de la Universidad de Essex.

IOAN DAVIES

Profesor en Sociología de la Universidad de Essex.

CARLOS ROMEO

Economista chileno residente en Cuba.

ANIBAL QUIJANO

Sociólogo peruano. Fue profesor de la Universidad nacional mayor de San Marcos. Asesor en Sociología de la CEPAL. Participó en el Seminario sobre tiempo libre y recreación celebrado en La Habana en 1967. Actualmente reside en Chile.

FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO

Profesor asistente de Sociología en la Universidad de Sao Pablo y miembro del Instituto latinoamericano de planificación económica y social (ILPES). Autor de *El jefe de empresas y el desarrollo económico* (1964). Actualmente ejerce como profesor asociado en la Universidad de Paris-Nanterre.

K. S. KAROL

Periodista y escritor polaco. Vivió, como emigrado en la URSS hasta 1946. Regresó a Polonia en ese año y posteriormente se trasladó a París, donde reside actualmente. En 1965 realizó un intenso recorrido por la República Popular China, donde se entrevistó, entre otros, con el primer ministro, Chou-En-Lai. Después de este viaje publicó, en 1966, el libro *China, el otro comunismo*, editado en español en 1967 por Ed. Siglo XXI, S. A., México.

quaderni piacentini

Redazione:

PIACENZA, VIA POGGIALI 41,
ITALIA

tricontinental

Organo teórico
del Secretariado Ejecutivo
de la Organización de
Solidaridad de los Pueblos
de Asia, Africa
y América Latina

PROBLEMI DEL SOCIALISMO

Direttore
Lelio Basso
Vice Direttore
Antonio Lettieri

Rivista mensile marxista che tratta:

- analisi economica del capitalismo in Europa occidentale.
- problemi della lotta antimperialista nei paesi capitalisti avanzati e nel Terzo mondo.
- questioni di teoria marxista.

abbonamento annuo per l'estero 8.00

Redazione Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

new left review

Published from London every two months since 1960. Our main aim is to increase awareness of the necessity and reality of the struggle against capitalism and imperialism wherever they exist.

Subscriptions 5.50 per year or "2 from
New Left Review, 7 Carlisle Street, London W.1.

HORA CERO

TESTIMONIOS
REVOLUCIONARIOS
DE AMÉRICA
LATINA

EDITORES:

JULIAN MEZA
y DIANA RIVERA

APARTADO POSTAL M-7145
MEXICO, 1, D. F. - MEXICO



Ruedo ibérico

REDACTORES JEFE

RAMÓN BULNES

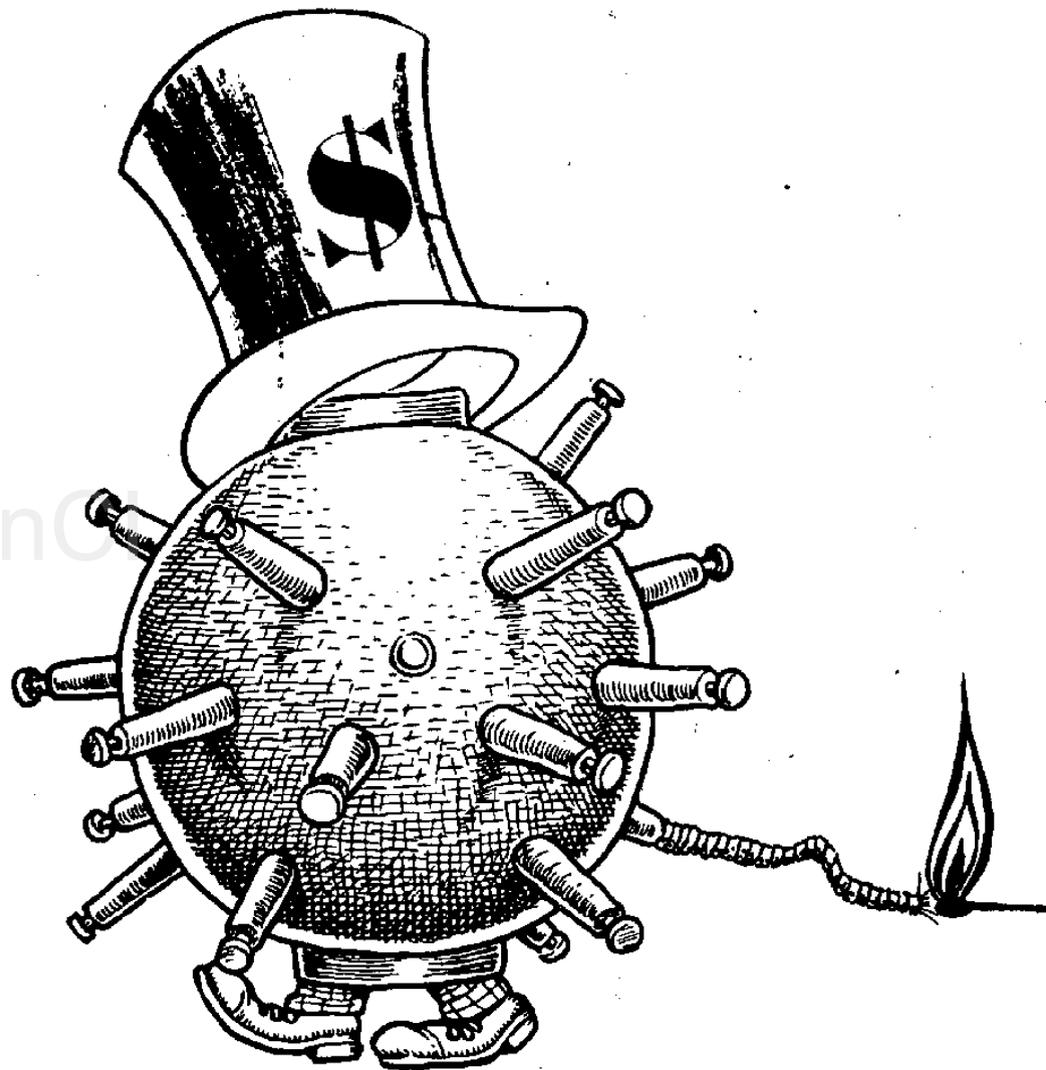
JOSÉ MARTÍNEZ

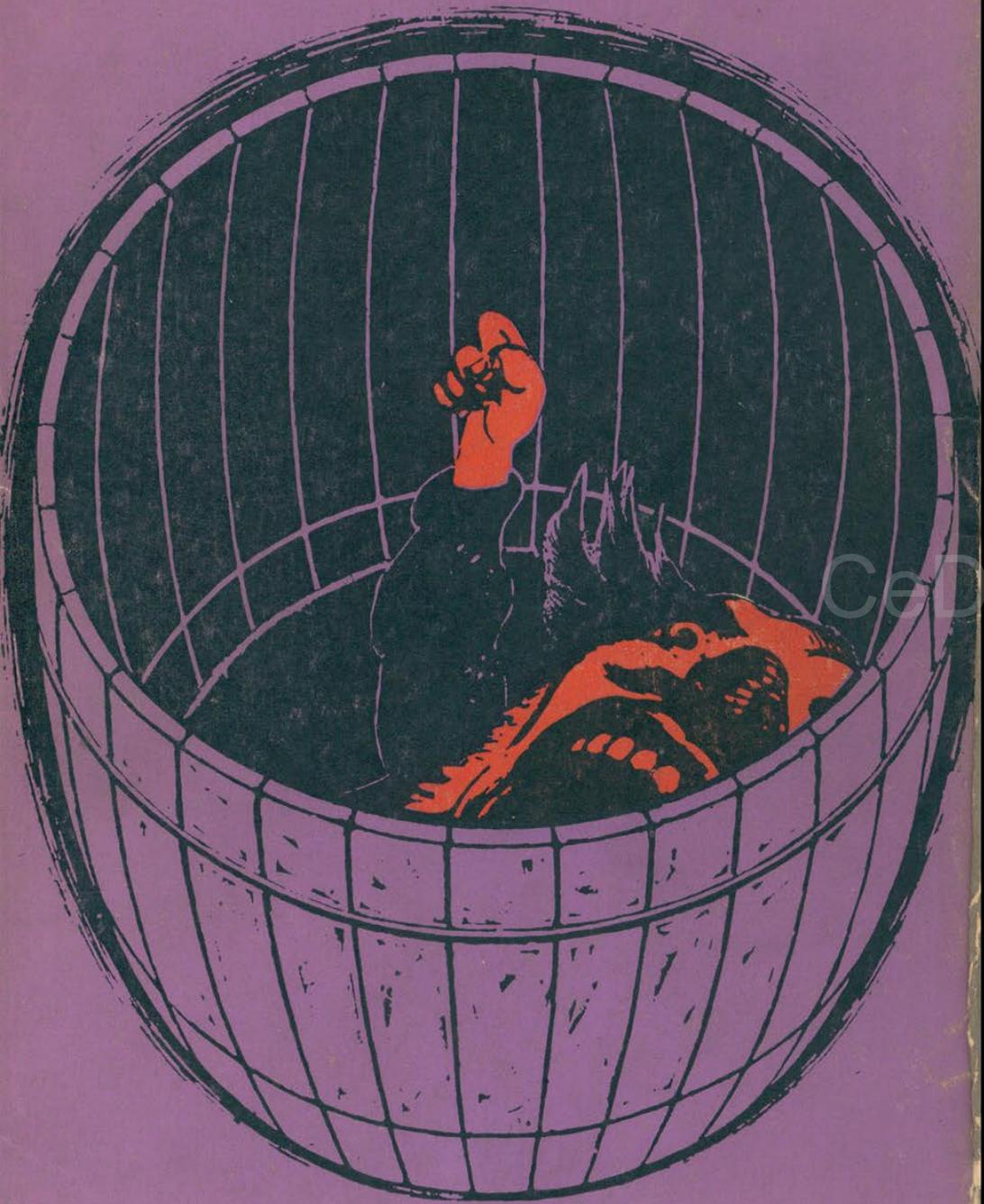
JORGE SAMPRÚN

DIRECTEUR GERANT DE LA PUBLICATION:

FRANÇOIS MASPERO

5, rue Aubriot, Paris 4. C.C.P. Paris 16.586-34





CeDInCl